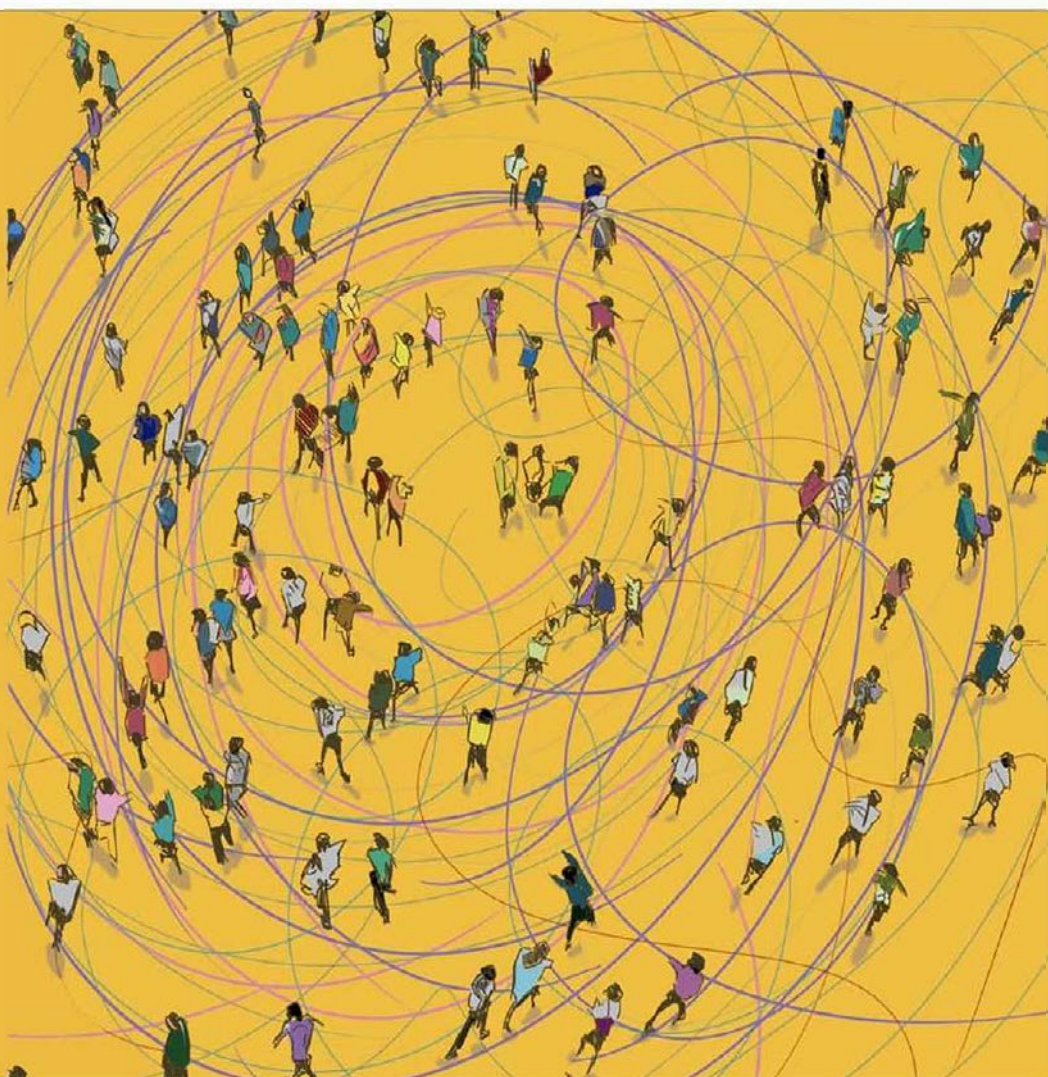


KONRAD
ADENAUER
STIFTUNG



CIUDADANÍA ORGANIZADA EN LA DEMOCRACIA BOLIVIANA

Ciudadanía organizada en
la democracia boliviana



Ciudadanía organizada
en la democracia boliviana

Ciudadanía organizada en la democracia boliviana



© 2023 Konrad Adenauer Stiftung e.V.

Prólogo

Dra. Christina Stolte

Representante en Bolivia

Fundación Konrad Adenauer (KAS)

Lic. María Ruth Torrez Moreira

Coordinadora de Proyectos

Oficina Bolivia

Autores

Huáscar Salazar Lohman

Roger Córtez Hurtado

Lupe Cajías

Gabriela Canedo Vásquez

Daniel E. Moreno Morales

Diego Aguilera de Urioste

Franz Flores Castro

Tikita Wara

Alejandro Carvajal Guzmán

Rocío Estremadoiro Rioja

Diseño de Portada

Erich Conzelmann

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Klingelhöferstraße 23

10785 Berlin

Tel: +49 30 26996-0

Fax: +49 30 26996-3217

E-Mail: zentrale@kas.de

Depósito Legal

4-1-

ISBN

978-99

Impresión - Plural editores

c. Jacinto Benavente N° 2255

Teléfono: 2411018 / Casilla Postal 5097

La Paz, Bolivia

e-mail: plural@plural.bo / www.plural.bo

Coordinación Académica

María Teresa Zegada Claire

Edición y Corrección

María Teresa Zegada

Erika Brockmann Quiroga

Comité Editorial

María Teresa Zegada Claire

Erika Brockman Quiroga

María Ruth Torrez Moreira

David Durán Ibañez

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Fundación Konrad Adenauer (KAS), Oficina Bolivia

Av. Sánchez Bustamente N° 509

(entre calles 11 y 12 de Calacoto) / La Paz-Bolivia

info.bolivia@kas.de / Teléfonos: (+591-2) 2125577 y (+591-2) 2775254

<http://www.kas.de/es/web/bolivien/home>

Esta publicación se distribuye sin fines de lucro, en el marco de la cooperación internacional de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Los textos que se publican a continuación son de exclusiva responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente el pensamiento de los editores o de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido con la inclusión de la fuente.



Índice

Prólogo	11
Sociedad civil y democracia: una relación imprescindible	
<i>María Teresa Zegada Claure</i>	15
1. Organizaciones sociales, movimientos históricos y democracia	17
2. Activismo ciudadano en el siglo XXI	21
Bibliografía	26
De las luchas al poder Campesinos, Bartolinas e Interculturales en el siglo XXI	
<i>Huáscar Salazar Lobman</i>	27
Resumen	27
1. Introducción	28
2. El surgimiento de las <i>Trillizas</i>	32
2.1. La CSUTCB como apuesta de autonomía frente al Estado	32
2.2. La importancia de una organización campesina de mujeres	35
2.3. La “Colonización” popular y su proceso organizativo	36
3. De la lucha al poder: la transición de las <i>Trillizas</i>	38
3.1. Las <i>Trillizas</i> ¿en el poder o para el poder?	41
4. CSUTCB, Bartolinas e interculturales “en” el Estado	44
4.1. Organizaciones al servicio del poder	46
5. Nuevo contexto político nacional y búsquedas de renovación	49
6. Conclusiones	51
Bibliografía	52

Cocaleros, globalización y luchas democráticas en Bolivia	
<i>Roger Cortéz Hurtado</i>	57
Resumen	57
1. Introducción	57
2. Orígenes	58
3. Campesinos, colonizadores, cocaleros.....	61
4. Particularidades nacionales y regionales.....	63
5. Colonización y producción de coca y cocaína en el trópico de Cochabamba	64
6. Modelo económico, intervención extranjera y cultivo de coca.....	67
7. Construcción y asentamiento de la hegemonía cocalera.....	68
8. Del repliegue a la marginalización	72
Bibliografía	74
La COB y los años de la decadencia en el siglo XXI	
<i>Lupe Cajías</i>	77
Resumen	77
1. Introducción	78
2. Las primeras etapas de la COB	78
3. Escenarios y Personajes.....	80
4. El 21060 y la pérdida de la centralidad minera	84
5. La COB y la CSTUCB.....	85
6. Cocaleros, ¿herederos de la centralidad minera?	88
7. El XII Congreso de la COB, el inicio del fin	91
8. La COB y la relación con el MAS.....	94
9. Conclusiones	99
Bibliografía	101
CIDOB y CONAMAQ en la Bolivia Plurinacional	
<i>Gabriela Canedo Vásquez</i>	103
Resumen	103
1. Introducción	104
2. Antecedentes	106
3. La Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia	107
3.1. Surgimiento de la CIDOB. Territorio y mandato desde abajo	109
3.2. Hitos de la CIDOB en el siglo XXI.....	110
4. Tres décadas, once marchas	111
5. La Asamblea Constituyente, momento lúcido del movimiento indígena.....	111
6. Marcha por el TIPNIS cúspide de la articulación, e inicio de la crisis..	113

7. Autonomías indígenas, hitos más locales	114
7.1. La CIDOB en la actualidad	115
7.2. Tejiendo articulaciones.....	116
8. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu.....	118
9. Hitos del CONAMAQ en el siglo XXI	121
9.1. Hitos el nacimiento del CONAMAQ y el pacto con Banzer	121
9.2. La titulación de TCOs y la Asamblea Constituyente	122
9.3. El TIPNIS y la defensa del territorio. Un momento de quiebre	123
10. Fragmentación en CONAMAQ	124
11. Epílogo	125
Bibliografía	127

Las organizaciones barriales en Bolivia. La acción colectiva urbana
entre la desconfianza y el miedo

<i>Daniel E. Moreno Morales</i>	131
Resumen	131
1. Introducción	131
2. Las organizaciones barriales y vecinales en Bolivia: Una breve caracterización.....	132
3. Las organizaciones sociales barriales bolivianas en la producción académica	135
4. Participación en organizaciones locales.....	137
5. Participación en organizaciones locales en las áreas urbanas.....	140
6. Organizaciones barriales y (des)confianza interpersonal	142
7. La organización barrial como respuesta al miedo	143
8. Organizaciones barriales en tiempos del MAS	145
9. Conclusiones	148
Bibliografía	150

El Comité Cívico Pro Santa Cruz en su Momento Histórico:
Capital Simbólico y Rol Contestario

<i>Diego Aguilera de Urioste</i>	153
Resumen	153
1. El Comité Cívico Pro Santa Cruz: Introducción necesaria	153
2. Antecedentes, fundación e hitos de una historia de luchas regionales	155
2.1. Luchas Cívicas del 11% y Capital Simbólico	159
3. Estructura, Naturaleza y Composición del Comité	161
4. El Comité, incidencia política y acción colectiva durante el S. XXI	164
4.1. Revigorización del Comité, Primer Cabildo y Visión País	166

4.2. Del Segundo Cabildo al Cabildo del Millón: Elección de Prefectos y Autonomías.....	167
4.3. Crisis poselectoral del 2019 y cambio de actores políticos.....	171
4.4. 2022: Paro de los 36 días y Cabildo del 13 de noviembre.....	175
5. Presente y futuro del Comité: Desafíos en un contexto adverso ...	177
6. Conclusiones: a modo de cierre.....	179
Bibliografía	181
Anexo 1	182
Anexo 2	183
La región que grita el Estado que no oye Potosí y el Comité Cívico potosinista	
<i>Franz Flores Castro</i>	185
Resumen	185
1. Clivaje territorial y regionalismo.....	185
2. COMCIPO, algunos antecedentes históricos	187
3. Potosí en el periodo neoliberal	190
4. COMCIPO en el proceso de cambio	192
5. 2010 el año del cambio en COMCIPO.....	193
6. COMCIPO y la caída del gobierno de Morales.....	195
7. Conclusiones	204
Bibliografía	206
Redes sociales como un nuevo escenario de la democracia en Bolivia	
<i>T'ikita Wara</i>	209
Resumen	209
1. Introducción.....	209
2. Mundo al revés, la iniciativa bloguera	213
3. Movimientos ciudadanos en resguardo del medio ambiente y los derechos humanos; Ríos de Pie.....	215
4. Crisis política del 2019 e iniciativas digitales de crítica; Colegio Abierto de Filosofía	218
5. Conclusiones	221
Bibliografía	224
Jóvenes en Red - Caracterización de su accionar político	
<i>Alejandro Carvajal</i>	225
Resumen	225
1. Introducción.....	225
2. El contexto de la democracia participativa	226
3. Los jóvenes y su participación política	230

4. La caracterización del trabajo en Red.....	232
5. Redes de jóvenes identificadas	233
5.1. Objetivos de las redes	233
5.2. Acciones de las Redes	234
6. ¿Quiénes son los jóvenes de las redes?	244
7. La interconectividad de los jóvenes y las redes	246
8. El rol de la cooperación	247
9. Conclusiones	248
Bibliografía	250
Movimientos ambientalistas del Siglo XXI en Bolivia	
<i>Rocío Estremadoiro Rioja</i>	253
Resumen	253
1. Introducción.....	253
2. Hitos históricos importantes.....	254
2.1. La crisis política de inicios de siglo.....	254
2.2. La Asamblea Constituyente y la nueva Constitución	
Política del Estado.....	256
2.3. Entre la retórica y la praxis.....	257
2.4. El desgaste del sistema	258
3. Movimientos ambientalistas urbanos.....	260
3.1. El surgimiento de nuevos movimientos ciudadanos urbanos.....	260
3.2. Los árboles y áreas verdes en la agenda pública y mediática.....	261
3.3. Las bicicletas toman las ciudades	266
3.4. Organizaciones protectoras de animales.....	267
3.5. Logros y limitaciones de los movimientos	
ambientalistas urbanos	269
4. Movimientos ambientalistas indígenas y la defensa	
de áreas protegidas	271
4.1. La defensa del TIPNIS	271
4.2. Los intentos de construcción de represas hidroeléctricas	
Chepete-El Bala y Rositas.....	273
4.3. La defensa de Tariquía.....	275
4.4. Otros casos de incidencia ambientalista indígena.....	277
4.5. Logros y limitaciones de los movimientos	
indígenas ambientalistas	278
5. Conclusiones tentativas.....	279
Bibliografía	281

Prólogo

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) constituye la base de su trabajo en torno a la democracia. En nuestras más de cien oficinas alrededor del mundo hemos no solamente apoyado a fortalecer las instituciones y procedimientos democráticos de los respectivos países, pero siempre hemos trabajado estrechamente con la sociedad civil. Es vital comprender que para la KAS la relación con las organizaciones de la sociedad civil es un elemento fundamental para lograr un sistema democrático saludable, por cuanto analizarlas nos permite renovar constantemente la conexión de nuestro trabajo con la misión de fortalecer la democracia a través de la comprensión de los hitos históricos con la actualidad.

En Bolivia nos encontramos desarrollando actividades hace más de 55 años, trayecto durante el cual hemos atestiguado distintos procesos y momentos que han marcado la personalidad de la democracia boliviana. Dentro de las actividades que caracterizan nuestro apoyo, encontramos el análisis sobre la coyuntura nacional, estudios que analizan la calidad de la democracia en Bolivia, así como un recuento de los procesos que marcan la democracia nacional desde su recuperación en 1982. El apoyo al Parlamento, en el pasado, y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la actualidad, al igual que el trabajo con los legislativos subnacionales son acciones que han aportado al fortalecimiento de las instituciones que representan los intereses de la ciudadanía. Además de este apoyo directo a las instituciones, la KAS Bolivia ha creado espacios de formación y análisis, dirigidos a la otra mitad del que hacer democrático: las y los ciudadanos.

Creemos firmemente que el trabajo con jóvenes y con instancias no estatales es, también, trabajar en pro de una democracia saludable. Como se menciona líneas antes, un elemento fundamental para lograr la democracia saludable es contar con

una ciudadanía participativa. En el tiempo que la Fundación viene trabajando en Bolivia, se ha identificado que las organizaciones civiles constituyen un elemento tan vital, para la dinámica democrática, que es imposible entender el país sin detenerse a mirar y estudiar a la sociedad boliviana y su relación con el poder político.

Esta motivación, que con el paso del tiempo se convirtió en una necesidad, de comprender la relación tan única entre la ciudadanía boliviana con el Estado, ha motivado la realización de la presente publicación. Bolivia es un país con alto nivel asociativo entre sus ciudadanos. Como se podrá observar en uno de los capítulos de este libro, la asociatividad se ha convertido en un mecanismo que fortalece al ciudadano en su interacción con los distintos niveles del Estado. Llama nuestra atención la relevancia que tomaron algunas instancias como la Central Obrera Boliviana, en procesos que determinaron la recuperación de la democracia en Bolivia, y como en tiempos más recientes, organizaciones de corte agrario por un lado y de representación de demandas más urbanas por el otro, han moldeado los procesos democráticos desde las calles y no desde las instancias formalmente establecidas por el paraguas normativo e institucional.

La presente publicación enfoca el análisis de las organizaciones civiles bolivianas durante el siglo XXI, es decir desde el año 2000 hasta el año 2022. En cada uno de los capítulos se hace un recuento breve de la historia de cada objeto de estudio. Para comprender sus formas y formatos presentes es necesario remontar al lector al origen de cada uno de los elementos estudiados, pues son los momentos iniciales los que dotaron de personalidad a cada organización estudiada.

Por cuestiones de afinidad sectorial entre las organizaciones estudiadas el contenido se divide en tres grandes grupos. La primera parte, compuesta por cuatro capítulos, analiza a organizaciones marcadas por su relación más próxima con el gobierno del Movimiento Al Socialismo, resaltando los momentos que habrían marcado su acercamiento, permanencia y/o distanciamiento con el partido de gobierno y con el Estado. La segunda parte, analiza a organizaciones más locales y departamentales. Tomando como casos de estudio a Santa Cruz y Potosí, esta sección es un espacio donde resalta el rol más contestatario frente a la estructura estatal, caracterizando la participación ciudadana a través de instituciones civiles que han logrado establecerse como núcleos de convocatoria ciudadana que incluso llega a sobrepasar las diferencias partidarias pero que refleja la capacidad de espacios no gubernamentales para la movilización ciudadana. Finalmente el tercer grupo de organización civil analizada es probablemente el espacio más heterogéneo puesto que engloba a formas de participación ligadas al que hacer más ciudadano. Por un lado hay formas de participación de denuncia a la acción y/u omisión del Estado, mientras que por otro se encuentra a un grupo que busca

más bien integrarse al parámetro institucional marcado por el Estado y por otras organizaciones no estatales. En esta parte se encuentra un análisis del espacio virtual como nueva plataforma de participación ciudadana; asimismo, están las organizaciones de jóvenes caracterizadas por su relación con espacios de formación dotados por la cooperación internacional en Bolivia así como algunas instituciones estatales que agrupan a jóvenes. La publicación cierra con la presentación de plataformas ciudadanas ligadas al que hacer medioambiental. Este último capítulo además de hacer una reseña del movimiento ambientalista en Bolivia, permite ver el entramado estructural de las plataformas ciudadanas, que de cierto modo responden a necesidades coyunturales y logran traspasar barreras temporales, pero sin consolidar una forma única de organización interna.

A nombre de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia, agradezco a cada uno de los autores y autoras que aportaron al cumplimiento de este objetivo. Expreso mi agradecimiento también a la Dra. María Teresa Zegada y Erika Brockmann, quienes junto a nuestra coordinadora de proyectos María Ruth Torrez, lograron dotar de una base temática al libro y agrupar a un extraordinario equipo de escritores.

Espero que esta publicación, al igual que el resto del trabajo que realiza la Fundación Konrad Adenauer, aporte al fortalecimiento de los actores democráticos en Bolivia.

La Paz, 26 de Octubre de 2023

Sociedad civil y democracia: una relación imprescindible

*María Teresa Zegada Claure*¹

Es imposible comprender a cabalidad la democracia y la política boliviana si se prescinde del análisis de los actores principales de la sociedad civil. Existen varios ejemplos contundentes en la historia, cuando las organizaciones sociales irrumpieron abiertamente en el campo político y producto de esta acción lograron modificar su curso. Es el caso de la revolución de 1952, que no hubiera ocurrido sin la presencia de obreros, campesinos y clases medias populares urbanas movilizadas; lo propio se puede afirmar de la lucha contra las dictaduras y la recuperación de la democracia en el intenso proceso abierto entre 1978 y 1982; o del ciclo de protestas de inicios de siglo con la Guerra del Agua y la Guerra del Gas, que culminaron con la destitución del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. De igual manera, desarrollándose casi al mismo tiempo, se podrían mencionar a las movilizaciones cívicas en Santa Cruz –como el Cabildo del Millón realizado el 2005–, que abrieron paso a la aprobación constitucional de las autonomías. Finalmente, también en ese sentido se enmarca el estallido social ciudadano de 2019, como reacción a las irregularidades denunciadas durante el

1 Socióloga con Maestría en Ciencia Política (Centro de Estudios Superiores y Universitarios (CESU-UMSS), Doctora en Procesos Sociales y Políticos en América Latina (PROSPAL) Universidad de Arte y Ciencias Sociales U-ARCIS, Chile. Investigadora miembro del Directorio del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSS, de la Carrera de Comunicación de la UCB, fue investigadora de CLACSO (programa de becas), investigadora asociada al Programa ALICE-CES Centro de Estudios Sociales, Programa coordinado por Boaventura De Souza, Universidad de Coimbra sobre “Democracia intercultural”, coordinadora del área de Reflexión, Centro Cuarto Intermedio, Cochabamba, consultora del Tribunal Supremo Electoral sobre temas de partidos políticos, ex investigadora del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), PNUD, Idea Internacional entre otras instituciones.

proceso electoral de ese año que desembocaron en la anulación de dichos comicios y culminaron con la renuncia del expresidente Morales y la convocatoria a una nueva elección para el 2020.

En consecuencia, el proceso de construcción de la democracia como régimen político, no puede analizarse solamente focalizando la atención en la institucionalidad del sistema, vale decir, los aparatos del Estado, la gestión pública, los partidos políticos y los momentos electorales, que sin duda son su andamiaje fundamental; sino también es preciso incorporar en el análisis la presencia, acción y desempeño de la sociedad civil y sus principales actores que, de manera recurrente, inciden en el decurso del orden democrático y son quienes le otorgan legitimidad y sostenibilidad al sistema.

Este libro, por tanto, se enfoca en analizar la contraparte de la democracia institucional, vale decir, el espacio social que la sostiene y afecta de manera relevante en las condiciones de legitimación o deslegitimación del sistema político, y al mismo tiempo revela que la democracia requiere de la construcción concurrente de una ciudadanía activa comprometida con el proceso.

Así, la construcción institucional de la democracia en la década de los ochenta y noventa, además de establecer las bases institucionales del régimen a partir de una serie de reformas políticas, significó también el desafío de construir una ciudadanía electoral activa, capaz de sostener y dotar de estabilidad al sistema y ejercer sus derechos en sintonía con los intereses particulares corporativos, territoriales o étnico culturales que persisten en la compleja trama social boliviana caracterizada por la heterogeneidad y diversidad. De la misma manera, en pleno siglo XXI, ha irrumpido una ciudadanía de nuevo signo marcada por activismo social y el uso intensivo de tecnologías digitales, generando nuevos escenarios de interacción y opinión pública.

1. Organizaciones sociales, movimientos históricos y democracia

Por definición un movimiento, a diferencia de una organización social como un sindicato, un comité cívico o una organización vecinal, no tiene presencia permanente en el campo político, sino que se articula y e irrumpe en determinadas condiciones generando un gran impacto social, pero luego –consiga o no sus objetivos– se desarticula para retornar a sus habituales formas organizativas. Por tanto, un movimiento social es de permanencia temporal. En segundo lugar, mediante sus movilizaciones, los movimientos sociales son capaces de agregar

a diversos actores detrás de un objetivo compartido, por ejemplo, la conquista o defensa de la democracia, el rechazo a un gobierno de turno o a ciertas políticas estructurales que afectan al conjunto de la sociedad. Finalmente, un movimiento social es autónomo respecto del poder constituido, es por su naturaleza contra hegemónico,² por ello es un contrasentido hablar de *un gobierno de los movimientos sociales*.

En otras palabras, una acción colectiva puede convertirse en movimiento social en determinadas circunstancias buscando modificar el sistema. Luis Tapia añade que un movimiento social si bien surge de la conformación de un núcleo inicial, en su discurrir tiene la capacidad de politizar otros espacios grupos sociales, interpellando mediante su discurso, acción y recursos simbólicos, de manera que logra trascender los marcos particulares y limitados de su propia organización, lo define como “un tipo de acción colectiva que hace crítica a una de las estructuras sociales, se convierte en movimiento cuando empieza a actuar más allá de su núcleo corporativo en el seno de la sociedad civil, es decir, cuando va más allá del Estado y más allá de la sociedad civil” (Tapia 2008, 14-15).

Un elemento que no hay que perder de vista es el efecto de acción histórica que producen los movimientos sociales (Touraine 1995); es decir, su incidencia transformadora del orden modificando el espacio legítimo de reproducción de la política, que implica el rediseño del modelo económico, social y cultural del Estado. De ahí que, en varios momentos de la historia boliviana, la central obrera, los sindicatos campesinos, los pueblos indígenas, así como otros actores como los territoriales urbanos, se han convertido en movimientos sociales, pues han trascendido sus demandas particulares y han producido importantes cambios en la estatalidad boliviana.

Si bien en el contenido de la presente publicación se utiliza de manera indiferenciada los conceptos de actor, sujeto o movimiento social para referirse a los objetos de estudio, vimos pertinente incorporar esta digresión conceptual para comprender los alcances y el impacto de sus actuaciones en distintos momentos de la historia.

Así, los movimientos sociales *tradicionales* o preexistentes que marcaron los escenarios más importantes de transformación durante el siglo XX, como la Central Obrera Boliviana, los sindicatos campesinos e indígenas, o también el comiteísmo

2 Esta definición es una síntesis del pensamiento de los autores clásicos sobre el tema. Cfr. Tarrow en Cerva 2020, Mc Adam, Mc Carthy, Tarrow, Tilly, Melluci, Touraine y muchos otros en Mc Adam et. al. 1999.

cívico y las organizaciones vecinales, en este momento limitan su horizonte a acciones básicamente de intereses corporativos, regionales o locales.

Una breve mirada a los datos sobre conflictividad social en Bolivia³ revela la presencia de los actores más importantes, sus repertorios de movilización y demandas en las últimas décadas. Así, los principales actores después de la recuperación de la democracia fueron los obreros, campesinos y el sector del empleo público, sobre todo trabajadores en salud y el magisterio, y en menor medida los actores vecinales y territoriales; sin embargo, la intensidad de las movilizaciones ha variado en las últimas décadas. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana que reza intensa durante los primeros gobiernos democráticos, vale decir de los presidentes Siles Zuazo y Paz Estensoro, hacia fines del siglo XX descendió y prácticamente cayó en picada durante los sucesivos gobiernos del MAS. Del mismo modo, el actor que generó mayor cantidad de conflictos en el sector asalariado fue el de empleados del sector público en los ochenta y noventa, su actividad descendió también a inicios de siglo y en las últimas dos décadas. En cambio, de manera inversa, la actividad de los gremialistas, los cívicos y los vecinos se incrementó en relación con la fase inicial de la democracia. Finalmente, los campesinos e indígenas que se habían movilizado durante la denominada *democracia pactada*, continuaron actuando en las últimas décadas con demandas distintas.

Las explicaciones sobre estas variaciones son diversas, y dependen de cada sector. Por ejemplo, en el caso de la COB, esta pierde intempestivamente su tradicional potencia debido a las políticas de relocalización minera de mediados de los ochenta, pero su caída es más llamativa durante los gobiernos del MAS y esto se debe en gran medida, a que las dirigencias fueron cooptadas por el poder político, neutralizando su capacidad de confrontación y protesta. Los gremialistas y cívicos en cambio, incrementan sus protestas en los últimos años porque no comulgan con las políticas del actual gobierno y ejercen resistencia en defensa de sus intereses corporativos o territoriales.

En el caso de los campesinos e indígenas, sus movilizaciones se sostienen, e incluso incrementan en las últimas décadas, pues una vez que llega Evo Morales al gobierno exigen mayor participación en las decisiones públicas y espacios de poder para sus organizaciones, y también porque se produce una gran cantidad de movilizaciones en apoyo al gobierno y al proceso de cambio.

3 CERES Observatorio de conflictos CERES, 1971-2020 (Cochabamba, CERES), y María Teresa Zegada et. al, *Acción colectiva y democracia, mutaciones en la conflictividad social en Bolivia*. (Cochabamba: CERES, 2016).

En el caso de las organizaciones vecinales y barriales, las acciones de protesta se incrementaron en casi tres veces entre fines del siglo pasado y las primeras décadas del siglo XXI; esto se debe, sobre todo a la descentralización administrativa con la Ley de Participación Popular primero, y con la autonomía municipal y departamental después, de manera que se multiplican los escenarios de conflicto. En este caso concreto, las protestas fueron motivadas por intereses territoriales, barriales y vecinales y no se dirigen al gobierno central, sino en general, a las autoridades locales. Finalmente, el incremento de las protestas en los actores cívicos, en particular de Santa Cruz y Potosí, se debe a la desatención persistente del gobierno del MAS a sus demandas históricas, por lo que pasan a ser actores abiertamente contestatarios al gobierno.

Ahora bien, el protagonismo de los actores sociales no siempre está ligado a la cantidad de conflictos generados, sino también a su presencia simbólica y fáctica en el campo político y su capacidad de incidir en la realidad. En ese sentido, esta breve contextualización de la conflictividad social en Bolivia, y la identificación de los actores históricos gravitantes, nos ayuda a trazar un mapa de la trayectoria de la sociedad civil actual, y su relación actual con el sistema político y la democracia.

A partir de estas reflexiones, una primera sección del texto está orientada a analizar las trayectorias y situación de los principales actores sociales –en ocasiones constituidos en movimientos– en Bolivia, como la Central Obrera y los pueblos indígenas y campesinos, que han confluído en varios momentos cuestionando el orden social y político, y las características restrictivas del sistema democrático representativo, del que paradójicamente luego pasan a formar parte, mediante su acceso al poder de manera directa o indirecta.

En ese marco, el texto de *Huáscar Salazar* reflexiona sobre el devenir histórico de las organizaciones campesinas denominadas *Trillizas* –CSUTCB, Bartolinas e Interculturales– cuyas direcciones hoy se encuentran subordinadas al gobierno del MAS y articuladas a la dinámica estatal, pero que inicialmente surgieron como contestatarias al poder, nos referimos a las últimas décadas del siglo XX. El autor plantea una interesante binariedad entre el arriba y el abajo, y la necesaria diferenciación entre la dinámica de las dirigencias y de las bases de estas organizaciones que están en procura de recuperar su autonomía organizacional y restablecer sus horizontes de lucha.

Por su parte, las organizaciones indígenas CONAMAQ y CIDOB que articulan al movimiento indígena de Tierras Altas y Tierras Bajas del país, son estudiadas por *Gabriela Canedo* quien realiza un recorrido desde su emergencia en los

ochenta y noventa del siglo pasado hasta el presente. Afirma que su activación fue una respuesta a la histórica situación de exclusión y desatención por parte del Estado a sus demandas primigenias de tierra y territorio y de respeto a sus derechos comunitarios desde la colonia. La autora da cuenta de las similitudes y diferencias entre ambas y de la lucha sostenida por incorporar sus reivindicaciones en la nueva Constitución. Si bien lograron cambiar el rostro del Estado hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad, paradójicamente al cabo de 16 años de gobierno “indígena” del MAS, estas organizaciones se encuentran hoy debilitadas, divididas y marginadas del poder político. Sin embargo, al mismo tiempo revela que se estarían produciendo procesos evidentes, aunque todavía aislados, de rearticulación a nivel local.

Ambos artículos, aunque de diferentes maneras, dan cuenta de la intrincada relación de las organizaciones campesinas con el poder político, marcado por el discurso oficialista de *gobierno de los movimientos sociales*, en el marco de la hegemonía electoral del Movimiento al Socialismo.

Finalmente, en este bloque temático referido a los movimientos sociales tradicionales, *Lupe Cajías* muestra la pérdida de centralidad de una Central Obrera Boliviana que jugó un papel heroico durante medio siglo de historia y que hoy se encuentra en estado de decadencia debido a las tensiones internas, la pérdida de cohesión y significado político, en un entorno político y económico adverso, marcado por la subordinación a las organizaciones sociales por parte del gobierno.

En una segunda sección de la publicación, se incorpora a las organizaciones vecinales y cívicas, que han mantenido su peso gravitante en la sociedad, ya sea con demandas concretas referidas a sus entornos urbanos o de desarrollo regional, y en su caso, cuestionando las aristas del Estado centralista y concentrador.

Para analizar a las organizaciones vecinales, *Daniel Moreno* hace un recorrido por los escenarios nacionales de participación y movilización en un país cada vez más urbano. Destaca la predisposición de los bolivianos al asociativismo y a la auto organización para encarar los problemas de sus entornos inmediatos, y analiza los efectos de la migración campo-ciudad, subrayando el hecho de que el traslado a las urbes de poblaciones indígenas no ha significado la pérdida de la impronta étnica, sino más bien, han adoptado formas creativas de reinventar la etnicidad en los entornos urbanos.

En relación con los movimientos cívicos departamentales, en el libro se abordan dos casos relevantes a nivel nacional: el Comité Pro Santa Cruz y el Comité Cívico de Potosí. En el primer caso, *Diego Aguilera* muestra cómo una institución elegida

por 200 personas (instituciones) cobra tanta relevancia y ha logrado recoger a lo largo de su historia el imaginario regionalista cruceño que, adquiere cada vez más potencia, debido a su vinculación con el poder económico y demográfico actual. Si bien es una institución cívica de intereses regionales, ha logrado agendar temas de impacto nacional como la demanda de las autonomías o recientemente la necesidad de actualización del censo nacional, denotando su peso contra hegemónico respecto al gobierno del MAS. No obstante, el autor también da cuenta de los límites de la frontera regional en que se circunscribe.

Por su parte *Franz Flores* analiza el caso del Comité Cívico de Potosí partiendo del clivaje centro/periferia, y contrasta el esplendor histórico de ese departamento en la época de la minería en la época colonial y republicana, con la situación de “periferia pasiva” en que se encuentran ahora, sumida en la pobreza y confrontada con el actual gobierno. A diferencia de Santa Cruz, no es la élite “económica moderna y empoderada” la que ocupa la dirigencia del movimiento cívico, sino los propios mineros y ahora dirigentes aislados del poder, bajo un sentimiento de despojo profundamente arraigado en la sociedad de que “todo lo dieron y nada recibieron a cambio”.

Un tema recurrente en los actores sociales históricos, abordados en esta parte, es la opción por auto-representación en el campo político, frente a la virtual ausencia de una mediación partidaria efectiva.

2. Activismo ciudadano en el siglo XXI

Un elemento constitutivo del mapa sociológico boliviano del siglo XXI, en concurrencia con la globalización económica, social y fundamentalmente tecnológica, es la aparición de nuevos escenarios de disputa social y política, acompañados de agendas, formas de expresión e interacción, y junto a ellos, la emergencia de nuevos actores conectados, en muchos casos, a preocupaciones compartidas con otras sociedades del mundo; nos referimos a problemas medio ambientales, demandas de respeto a los derechos de género y generacionales, respeto a la vida y a la diversidad social y cultural, o a la búsqueda de nuevas oportunidades laborales para los jóvenes, entre muchos otros temas compartidos. Estas preocupaciones generan sinergias y trascienden las fronteras nacionales.

¿Quiénes son estos nuevos sujetos y cómo emergen? ¿Cuál es su potencial y alcance? ¿Contribuyen al fortalecimiento de la democracia o, por el contrario, constituyen una amenaza?

Para abordar el análisis de estas nuevas formas de acción colectiva es preciso recurrir a algunos elementos conceptuales que están siendo discutidos en distintos lugares por las ciencias sociales dando cuenta de este nuevo fenómeno.

En ese sentido, el sociólogo chileno Manuel Antonio Garretón señala que los factores estructurales que incidieron en la aparición y desarrollo de estos nuevos actores fueron básicamente dos: la globalización (económica, tecnología y cultural), y los cambios en la matriz socio-política. En el primer caso, significó una explosión de identidades adscriptivas basadas en aspectos que afectan a la población del planeta, como demandas de respeto a los derechos de género, generacional, ambiental, religiosa, étnica y bioéticas entre las principales. El segundo factor se refiere a los quiebres generados por la globalización como la desinstitucionalización y la falta de correspondencia entre economía, política, cultura y sociedad (Garretón 2001, 19-21). En consecuencia, a diferencia del siglo XX, los nuevos actores “pasan a definirse menos en torno a un proyecto o movimiento social central y más en torno a diversos ejes constituidos por procesos de democratización política y social, reestructuración económica y afirmación de identidades y modelos de modernidad” (Garretón 2001, 41). Con ello se refiere a que su presencia está movilizadora por temas referidos a la vida cotidiana, a las aspiraciones, a la necesidad de reconocimiento, al respeto a los derechos de diversa generación, entre otros.

En una línea parecida, Calderón y Castells (2022) advierten en un reciente libro, que “las sociedades enfrentan conflictos cada vez más fragmentados, los nuevos espacios públicos vinculados con sistemas de comunicación en los cuales se representan de manera contradictoria dichos conflictos”. Por su parte, continúan, “los conflictos tienden a desplazarse crecientemente hacia las redes de información y comunicación con efectos multiplicadores en los nuevos escenarios de poder” (Calderón-Castells 2022, 244).

Si bien existe una gran polémica respecto a los aspectos negativos y positivos del efecto del activismo en redes sociales en relación con la democracia por la proliferación de cuentas falsas, bots, la manipulación de datos por la vía de algoritmos, las burbujas digitales, la violación de la privacidad, entre muchos otros; también son escenarios de concientización colectiva, debate, interacción, auto convocatoria y otras acciones que favorecen al desarrollo y fortalecimiento de las democracias desde la acción ciudadana.

De hecho, coincidimos con los autores que afirman que se trata de nuevas respuestas a las necesidades de participación, sobre todo de los jóvenes, esta vez en escenarios policéntricos. Otro elemento novedoso en esta nueva realidad virtual es la influencia determinante de las emociones y sentimientos como dispositivos

de movilización. Nos referimos al miedo, la indignación, la solidaridad, la rabia, la ansiedad, entre otros, que explotan en las redes sociales mediante diferentes estrategias comunicacionales fuertemente marcadas por la denominada tecnosciabilidad (Castells 2022, 131).

Estos sentimientos permiten generar interacciones y vínculos que trascienden la segmentación social marcada por diferencias por género, generacionales, o nacionales. El autor continúa, “la empatía en el proceso de comunicación está determinada por experiencias similares a las que motivaron el estallido emocional original” (Castells 2012, 30-31), y que el big bang del movimiento social empieza con la transformación de emoción en acción. En la misma línea, Isidoro Cheresky (2018), constata que la demanda de derechos ha sensibilizado a las sociedades y ha expandido la significación del espacio público, fragmentando la conflictividad.

Estos nuevos movimientos, concluye Almeida (2020), se pueden asemejar a los clásicos del siglo pasado, al menos en tres dimensiones: Son formas cotidianas de resistencia, es decir “actos de disenso e incumplimiento que llevan a cabo los individuos o los grupos pequeños contra las fuentes cercanas de injusticia”. Se mueven a un nivel micro, “pequeños actos de resistencia por parte de grupos pequeños en condiciones de extrema opresión”. Y, finalmente, son movimientos locales de base, en otras palabras “luchan a nivel local o regional por objetivos limitados y específicos (como la contaminación local o la sindicalización de una fábrica), y suelen contar con una provisión restringida de recursos organizacionales internos” (Almeida 2020, 51-55 y 64).

Por otra parte, estas expresiones han dado un giro hacia formas creativas de organización y visibilización. En ese sentido, comparten características organizativas muy particulares como la autoorganización, la ausencia de un liderazgo visible, la horizontalidad en la toma de decisiones, el espontaneísmo, la agregación progresiva –a veces veloz–, o la desagregación también instantánea, una vez culminado un conflicto.

Otra característica de estos tipos de activismos fuertemente mediados por el uso de redes sociales es la *interseccionalidad*; es decir, la capacidad de actuar o participar en más de un grupo a la vez con distinto contenido, y al mismo tiempo, se basan en la individuación de la participación, es decir en la adhesión personal a una causa determinada. La identidad colectiva es “la definición compartida de un grupo, que deriva de la solidaridad, las experiencias y los intereses comunes de sus miembros” (Players 2018, 131). Otro factor importante es que las redes sociales y el internet al mismo tiempo que generan un impacto externo permiten transformar la propia experiencia del activista (Players 2018).

En relación con la democracia, constituye una forma participativa que conduce a constituir ciudadanos activos. Según un estudio de Isin (2009), de las redes emerge un ciudadano capaz de actuar para cambiar las formas, orientaciones, estrategias, recurriendo al uso de tecnologías (Isin 2009). En el mismo sentido Isidoro Cheresky las denomina *movilizaciones cívicas de signo variado* (Cheresky 2019, 145), pues tienen tendencia a la auto expresión, habla de “una presencia cívica multiforme que alcanza por momentos una auto representación y en ocasiones una representación cristalizada pero efímera, inmediata, y de acción directa, paralela a la representación social y política formal” (Cheresky 2019, 146-147), por lo que se podría vislumbrar la gravitación de una nueva ciudadanía en el siglo XXI bajo el signo de un activismo que no busca la toma del poder, sino se expresa en el espacio público reclamando una suerte de “derecho a tener derechos”.

En la presente compilación dedicamos la última sección del libro a analizar la emergencia del activismo en la era digital en Bolivia, mediante el estudio de casos que involucran fundamentalmente a jóvenes que utilizan la tecnología digital, aunque por cierto no agotan la reflexión sobre el tema.

El ensayo de *Tikita Wara* (Valeria Fuentes) hace un recorrido desde la aparición de las primeras publicaciones y grupos en Bolivia con este tipo de contenidos en el siglo XXI, y establece los hitos centrales en los cuales se activaron, así como las problemáticas y mensajes que generaron dichos grupos. El estudio se repara en aquellos que llaman a la acción, a la crítica o constituyen provocaciones simbólicas, reflexión y producción de sentido; asimismo, se establecen algunas de sus características y alcances en coincidencia con formas y tendencias del activismo global, por lo que se enfatiza en la creación de identidades colectivas que trascienden fronteras activadas por un elemento comunicacional potente como es el hashtag.

Alejandro Carvajal, por su parte, realiza un estudio minucioso del activismo propiciado por los jóvenes con fines comunicacionales y laborales con base en estudios de caso. Analiza las redes generadas para la formación e intercomunicación de quienes buscan un futuro mejor, una formación profesional adecuada y capacitación para la búsqueda de empleos. Identifica que muchos de estos grupos están vinculados o coordinan con organismos internacionales o instituciones. También remarca que el elemento de cohesión de dichos jóvenes es la construcción de una agenda común en el marco de la diversidad, al mismo tiempo que ponen en evidencia su rechazo a participar en política para evitar la división en grupos polarizados como ocurre en el contexto nacional. Estos grupos, afirma el autor, constituyen un interesante reducto para la defensa de la democracia, la cultura de paz y el desarrollo sostenible.

Finalmente, la autora **Rocío Estremadoiro** escribe un artículo sobre los movimientos ambientalistas, aportando con un estudio de caso muy detallado y concreto, constituido por quienes se unen, en unos casos para defender las áreas protegidas en los territorios indígenas contra el agronegocio y la devastación propiciada por el desarrollismo y el extractivismo; y por otra parte, analiza el caso de los movimientos ambientales urbanos (eventualmente conectados con los anteriores), que buscan proteger las áreas verdes y los árboles en la ciudad. Muy cerca de ellos están los activismos generados por los ciclistas, animalistas y defensores de la vida. En este caso, a diferencia de lo que se puede ver en el anterior ensayo, los activistas no se quedan interactuando en el mundo de las redes, sino que además se autoconvocan para salir a las calles, expresar sus protestas e incentivar reacciones ciudadanas.

En general, en este momento la realidad social y política boliviana está fuertemente marcada por la persistencia de miradas polarizantes y dicotómicas que también se percibe en el análisis de los actores hoy gravitantes en el sistema social; no obstante un análisis más minucioso de los mismos nos acerca a un horizonte más esperanzador, tanto por sus trayectorias históricas como por la irrupción de formas renovadas de expresión y participación en los marcos de la búsqueda del libre pensamiento, la autonomía y la generación de solidaridades –totales o parciales– en democracia.

En definitiva, el presente libro cuenta con textos analíticos, actualizados y necesarios para el debate sobre la democracia en Bolivia, elaborados por un valioso equipo multidisciplinario de investigadores a quienes agradecemos de manera especial el haber aceptado el desafío de construir una mirada renovada de la acción colectiva, en el marco de la perseverante e irrenunciable tarea de fortalecer la democracia.

Bibliografía

Almeida, Paul

2020 *Movimientos sociales. La estructura de la acción colectiva*. Argentina: CLASCO.

Castells, Manuel

2012 *Redes de indignación y esperanza, Los movimientos sociales en la era del internet*. Madrid, España: Editorial Alianza.

Castells, Calderón

2022 *La nueva América*. Chile: FCE.

Cerva Cerna, Daniela

2020 Activismo feminista en las universidades mexicanas: la impronta política de las colectivas de estudiantes ante la violencia contra las mujeres. *Revista de la educación superior*, 49 (194), 137-157.

- Cheresky, Isidoro
2019 *Soberanía ciudadana y presidentes en busca de hegemonía*. Buenos Aires: Ed. Prometeo.
- Garretón, Manuel
2001 *Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina*. Chile: Naciones Unidas.
- Isin, Engin
2009 "Citizenship in flux. The figure of the activist citizen". England: Vol 29. Pallgrave. McMillan.
- Mc Adam, Doug et. al.
1999 *Movimientos sociales: perspectivas comparadas, oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid: Istmo.
- Melucci
1999 *Acción colectiva, democracia y vida cotidiana*. México: El Colegio de México.
- Players, Geoffrey
2018 *Movimientos sociales en el siglo XXI*. Argentina: CLACSO.
- Tapia, Luis
2008 *La Política Salvaje*. La Paz: Clacso/Muela del Diablo/Comuna.
2020 *Aporte al debate sobre Movimientos Sociales en Latinoamérica*. Ecuador: Punto y línea.
- Toret, Javier
2013 *Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la política distribuida*. Informe de investigación 1.0, Universidad oberta de Catalunya.
- Touraine, Alain
1995 *La producción de la sociedad*. México: UNAM.

De las luchas al poder Campesinos, Bartolinas e Interculturales en el siglo XXI

Huáscar Salazar Lobman¹

Resumen

El presente artículo revisa la historia de tres de las cinco organizaciones que formaron el Pacto de Unidad, que respaldó la candidatura de Evo Morales en 2005 y otorgó la base social sobre la cual se respaldaría el denominado Proceso de Cambio, que impulsaría la formación del Estado Plurinacional. Durante las líneas de este texto se explora el proceso por el cual las Trillizas, alcanzan espacios de poder en el aparato estatal donde logran formar profundos vínculos.

La integración, de las organizaciones analizadas, se convierte también en un cambio de las funciones que históricamente habían desarrollado, pues las organizaciones sociales funcionan ahora como un medio de control partidario vertical hacia sus bases, muy diferente de las funciones, objetivos y propósitos que cada organización social había tenido en su inicio.

Palabras clave

Trillizas, CONAMAC, CSUTCB, Bartolinas, gobierno del MAS, clientelismo, corrupción.

1 Economista boliviano, maestro en ciencias sociales y actualmente realiza sus estudios doctorales en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Las cuestiones de estudio por las cuales se interesa tienen que ver con temas rurales bolivianos –principalmente andinos– enfocados desde los sujetos sociales. Agradezco el apoyo brindado por mi colega, Mónica Rocha Medina, en el proceso de elaboración de este artículo.

1. Introducción

Durante el primer lustro del siglo XXI, Bolivia experimentó un “momento disolutivo”; es decir –subvirtiéndola idea de un “momento constitutivo” como lo había pensado René Zavaleta Mercado (1986)–, en los primeros años de este siglo, las luchas sociales que se extendieron por todo el territorio nacional impugnaron la síntesis social que fue resultado del proyecto político-económico neoliberal y de sus distintas determinaciones, proyecto que hasta ese entonces se presentaba como hegemónico e incuestionable. En ese momento, la emergencia de nuevas formas de movilización social comenzó a diluir las bases materiales y simbólicas sobre las cuales se sostenía este orden.

Desde la Guerra del Agua a principios del año 2000 hasta la victoria electoral de Evo Morales en diciembre de 2005, Bolivia experimentó una serie ininterrumpida de conflictos sociales que sacudieron el país. Uno de los más destacados fue la Guerra del Gas en septiembre y octubre de 2003, que culminó con más de setenta muertos, cientos de heridos y la caída del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, este y otros conflictos similares evidenciaron una serie de problemas y clivajes estructurales en la síntesis social boliviana, así como la violencia sistemática ejercida por un Estado neoliberal con marcados rasgos coloniales.

Una dimensión significativa de este proceso de efervescencia social radica en las *formas* que este conjunto de luchas adquirió en ese entonces. Contrariamente a lo que se entiende como un “proceso revolucionario” clásico, donde existe un propósito claro respecto a la toma del poder estatal bajo la dirección de algún tipo de vanguardia, estas luchas tuvieron un carácter descentralizado y diverso, que no se proponían la toma del poder, sino modificar el *estado* de aquellas cosas que sostienen y reproducen un orden social neoliberal.

El despliegue de estas luchas se caracterizó por abordar reivindicaciones al margen de estructuras y normativas institucionales estatales restrictivas. Además, se impulsaron luchas sociales desde organizaciones autónomas que promovían agendas propias enfocadas en la transformación material y simbólica, aunque lo hacían buscando alianzas que fortalecieran su capacidad de interpelación.

En este período, también se experimentaron o profundizaron diversas capacidades organizativas desde abajo, lo que implicaba adoptar enfoques colectivos para la toma de decisiones, principalmente mediante la forma asamblearia (Gutiérrez 2009). Estas características resaltan la singularidad de las luchas sociales de aquel tiempo en cuanto a su enfoque, organización y objetivos, diferenciándose de los procesos revolucionarios convencionales y sus formas de articulación.

En este escenario de luchas, no todos los sujetos sociales tuvieron el mismo peso y, a diferencia de lo que pasó en otros momentos históricos trascendentales, como la Revolución Nacional de 1952 –que tuvo en primera instancia una impronta obrera estadocéntrica–² lo que pasó entre 2000 y 2005 tuvo como protagonistas a organizaciones sociales del campo boliviano, cuyo apoyo fue determinante no solo para sus propias luchas, sino para aquellas que se situaron en ámbitos urbanos, como la Guerra del Agua o la Guerra del Gas.

Indígenas, originarios, campesinos y colonizadores –actualmente reconocidos como interculturales– fueron los tres grandes conglomerados de sujetos rurales que participaron activamente de las luchas de aquellos años. Cada uno con sus particularidades y desde una amplia variedad de actores concretos, desplegaron sus propias agendas reivindicativas y, en muchos momentos, confluyeron en luchas coordinadas que, desde sus propias formas organizativas, trastocaron la vida social del país.

Las principales organizaciones matrices en aquel entonces eran la *Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia* (CSUTCB) –con su filial femenina, la *Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”* (FNMCB-BS)–, la *Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia* (CIDOB), el *Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu* (CONAMAQ) y la *Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia* (CSCB). Tan importantes fueron estas organizaciones que, en su momento, se asociaron en lo que se denominó el Pacto de Unidad y desde ahí asumieron un rol de intelectual orgánico en la búsqueda de una transformación del país a través de un proceso constituyente (Tapia 2011). La misma Central Obrera Boliviana (COB), otrora el núcleo de confluencia de propuestas de transformación social, en aquel entonces quedó relegada a un segundo plano de la discusión política.

La llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al gobierno en enero de 2006 cambiaría la dinámica de relacionamiento de estas organizaciones con el Estado. De ser contestatarias y opositoras, la mayoría de ellas pasó a *ser parte de*. En ese momento se hablaba del *gobierno de las organizaciones sociales*. Todas estas organizaciones, de una u otra manera, habían logrado insertar representantes en alguna institución del Estado (como diputados, senadores, ministros, etc.) a través de esta

2 Si bien desde las narrativas oficiales siempre se ha dado mayor peso a la función que tuvo el movimiento obrero en la Revolución Nacional, la investigadora Laura Gotkowitz (2011) ha demostrado el papel fundamental que tuvieron las luchas campesinas e indígenas que se fueron gestando durante décadas para el debilitamiento del Estado oligárquico, lo que allanó el camino al proceso revolucionario de 1952.

alianza partidaria. Ello generaría una tensión novedosa, que hasta ese momento no habían tenido que enfrentar: sostener los horizontes de lucha o apuntalar la gestión del nuevo gobierno.

Con el paso del tiempo, apuntalar la gestión del nuevo gobierno se convirtió en la prioridad. Ello quedó en evidencia en la manera en que el proceso constituyente fue cerrado, cuando la propuesta inicial de nueva Constitución, resultado de la misma Asamblea Constituyente, fue negociada a puertas cerradas entre el gobierno y los partidos tradicionales, sin mediar la participación de las organizaciones sociales, mismas que habían sido las que impulsaron la reforma del Estado. Esta negociación derivó en la modificación de más de cien artículos de la propuesta inicial, lo que modificó sustancialmente el sentido de esta (Garcés 2010; Börth 2009).

En los años posteriores esta dinámica se evidenció todavía más, en casos como el de la lucha por el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécore (TIPNIS). Los indígenas, principalmente agrupados en torno a la CIDOB y en menor medida al CONAMAQ, se opusieron a la construcción de una carretera en ese territorio. Sin embargo, enfrentaron represión por parte del gobierno, que contaba con el respaldo de otras organizaciones sociales, incluyendo aquellas de orientación campesina como la CSUTCB, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originas de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIQB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB).

Más allá de las tensiones y contradicciones que surgirían durante más de una década, estas tres organizaciones –que también aglutinan a las seis federaciones cocaleras del trópico cochabambino³ se convirtieron en puntal del gobierno del MAS, como estructuras que le aportaron una gran base social. Estas organizaciones –o por lo menos en sus niveles supracomunitarios– asumieron el proyecto político del MAS, mientras que las organizaciones de corte Indígena, como la CIDOB o el CONAMAQ, serán subordinados al gobierno a través de procesos y mecanismo violentos (Salazar 2015).

La CSUTCB, la CNMCIQB-BS y la CSCIB permanecerán cercanas al gobierno en distintas circunstancias: 1) apoyando su política general, incluso cuando la misma

3 Cuatro de las seis federaciones están afiliadas a la Confederación de Comunidades Interculturales, mientras que las otras dos pertenecen a la CSUTCB. No obstante, el actuar de estas federaciones ha mantenido un carácter autónomo y se considera que su afiliación a dichas confederaciones responde a una estrategia orientada a ejercer influencia sobre ellas. Por esta razón, en el presente libro se analiza el caso de las organizaciones cocaleras en un capítulo separado, destacando su particularidad y diferenciándolas de otras agrupaciones dentro del panorama de movilización social en Bolivia.

contradice muchas de las reivindicaciones que estas organizaciones impulsaron previamente, 2) respaldando al gobierno en varios momentos en los que su credibilidad fue cuestionada y 3) actuando como organizaciones paraestatales, enfrentando a otras organizaciones sociales que tenían agendas contrarias a la impulsada por el gobierno o a los intereses que este resguardaba.

Esta situación se hizo mucho más evidente desde 2010, cuando la nueva Constitución Política del Estado entró en vigor, y se mantendría invariable hasta la caída de Evo Morales, en medio de los conflictos poselectorales de 2019. La postura de estas organizaciones durante el año que duró el gobierno de Jeanine Añez será de un apoyo mucho más confuso al MAS y que se acentuará durante el gobierno de Luis Arce Catacora, debido a las disputas al interior de este partido.

El propósito de este trabajo es hacer una caracterización del devenir de estas tres organizaciones durante el siglo XXI. Sus similitudes, en términos de su vinculación con el Estado durante este periodo de tiempo, las hace factibles visualizarlas en conjunto. Tanto es así que, luego del conflicto del TIPNIS, el antropólogo jesuita, Xavier Albó (2011), las denominó las *Trillizas*, en contraposición a las *Mellizas* (CIDOB y CONAMAQ) en el marco del quiebre que en los tiempos de la Marcha por el TIPNIS sufrió el Pacto de Unidad.

Las Trillizas, finalmente representan un sindicalismo muy potente, que fue capaz de recomponer las condiciones del antagonismo social en Bolivia a partir de portentosas luchas a inicios de siglo, pero lo llamativo fue la manera en que rápidamente quedaron inscritas “por arriba” a una lógica estadocéntrica que las anuló y las subordinó al gobierno de turno, renunciando para ello a un conjunto de reivindicaciones históricas.

El texto se ordena de la siguiente manera. En el siguiente apartado se sitúa históricamente a las tres organizaciones, entendiendo que el surgimiento de cada una de ellas –entre los años 70 y 80 del siglo pasado– corresponde a un contexto en el que, luego de la Revolución Nacional y de los gobiernos de facto, se abrió un proceso de democratización que otorgó, no sin disputas y contradicciones, un buen espacio de autonomía para la consolidación de procesos organizativos. Posteriormente, en el tercer apartado, se presenta una explicación sobre la manera en que estas tres organizaciones pasaron de un proceso de lucha extendida entre los años 2000 y 2005 a una tendencial articulación al gobierno dirigido por Evo Morales durante los años 2006 y 2010. En el cuarto apartado se explica la consolidación de este vínculo durante la segunda década del presente siglo y se remarcan algunos hitos representativos de esta articulación. En el último apartado, se caracteriza la relación entre las Trillizas y el nuevo gobierno del MAS, así como

algunas grietas que dan cuenta de contradicciones que surgen al interior de estas organizaciones y que pugnan por recuperar mayor autonomía.

2. El surgimiento de las *Trillizas*

Una lectura a contrapelo de la historia popular boliviana no puede estar dissociada de la historia por la disputa territorial. Desde la colonia, los distintos tipos de lucha que los sectores subalternos han llevado adelante han estado íntimamente vinculadas al resguardo o a la recuperación de la capacidad de uso de la tierra, o de lo que más recientemente se denomina *territorio*.

La historia republicana de Bolivia ha estado marcada por la problemática de la propiedad de la tierra. En 1825, el mismo año de la fundación del país, Simón Bolívar decretó la “liquidación” de las tierras de comunidad. Aunque esta medida no se llevó a cabo en ese momento, se convirtió en un anhelo persistente que influiría en los objetivos de las élites políticas y económicas del país. En 1874, durante el gobierno de Tomás Frías, se promulgó la Ley de Exvinculación de Tierras, la cual materializó de manera agresiva dicho anhelo. Cabe destacar que esta medida se implementó años después del intento fracasado de Mariano Melgarejo por promulgar una ley similar (Condarco 1983; Ovando 1981; Mendieta 2010).

Esta tendencia de expropiación de las tierras comunitarias se sostuvo hasta bien entrado el siglo XX y fue una práctica común, apoyada por las distintas corrientes políticas que gobernaron el Estado oligárquico. La Ley de Exvinculación significó que entre 1880 y 1930 las comunidades pasaran de detentar la mitad de la tierra cultivable en Bolivia a menos de un tercio del total de esta. En términos absolutos las comunidades disminuyeron de 11.000 a 3.783 (Albó 1986). Esta dinámica agraria se mantendría en el occidente del país hasta 1953, año de la Reforma Agraria.

Si bien algunos sindicatos agrarios vieron la luz años antes a la Revolución Nacional y a la consecuente Reforma Agraria, fue el contexto posrevolucionario el que abrió las puertas a procesos organizativos mucho más amplios –aunque no exentos de contradicciones– en las zonas agrarias de los andes bolivianos y en las regiones de colonización de las tierras bajas. Este es el contexto que, con el tiempo, dará lugar a las organizaciones campesinas y a la de los colonizadores/interculturales.

2.1. La CSUTCB como apuesta de autonomía frente al Estado

En el año 1936, en la localidad de Ucucreña, en el Valle Alto del departamento de Cochabamba, se creó el Sindicato Agrario de Huasacalle, el primer sindicato

de este tipo en el país. Ello sucedió en el marco de un incremento de la presión indígena por la recuperación de tierras a través de una potente red de *caciques apoderados*, que habrían de articular una lucha por la recuperación de la tierra en Cochabamba y que tendría implicaciones a nivel nacional, estos caciques “instiguieron sin mayores aspavientos elementos vitales de su propio Estado *dentro del Estado*” (Gotkowitz 2011, 142).

A su vez, la instauración del decreto de sindicalización obligatoria durante el gobierno de David Toro sería la base legal para este proceso organizativo, aunque adquiriría una lógica propia, retomando el discurso modernizador estatal y de los partidos de izquierda, pero que, en el fondo, recuperaba las formas tradicionales organizativas de las comunidades indígenas-campesinas de los andes bolivianos (García, Chávez, y Costas 2005).

En los siguientes años, hasta la insurrección de 1952, el sindicalismo campesino empezó a crecer y confluyó en un gran cause de movilización rural que marcará la dinámica política de los años cuarenta del siglo pasado boliviano y que debilitará los pilares del poder del Estado oligárquico de aquel entonces. Distintos levantamientos en Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Oruro y Potosí –siendo uno de los más emblemáticos el levantamiento de Ayopaya en 1947–, cuestionarán el régimen de hacienda y pugnarán por la recuperación de las tierras (Gotkowitz 2011; García, Chávez, y Costas 2005).

Después de la Revolución Nacional, la presión campesina obligó al nuevo gobierno a implementar la Reforma Agraria de 1953. Esta reforma tuvo un gran impacto en la estructura agraria del país, eliminando el régimen de hacienda en el occidente de Bolivia y estableciendo el régimen de propiedad individual campesino. Sin embargo, esta reforma no tuvo el mismo efecto en el oriente boliviano, donde el gran latifundio se mantuvo intacto.

Con el tiempo se consolidó una nueva etapa en la que el Estado y las comunidades agrarias establecieron una serie de pactos, lo que también permitió al gobierno revolucionario limitar la capacidad de acción del movimiento campesino. Silvia Rivera explica que el movimiento campesino fue pasando de una *subordinación activa* –cuando negociaba los términos de su incorporación al proceso político revolucionario–, a una *subordinación pasiva*, cuando finalmente las cúpulas dirigenciales pasaron a responder directamente al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (Rivera 1986).

Esta subordinación pasiva fue la base que posteriormente permitiría que, en 1964 y también en Ucureña, se firme el “Pacto de Unidad Paz-Barrientos”, que no era

otra cosa que el inicio de lo que más tarde se denominaría *Pacto militar-campesino*, una de las facetas más oscuras del movimiento agrario boliviano. En el marco de este pacto y a partir del direccionamiento militar del mismo, se creó la *Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia*, organización paraestatal que tenía el propósito de corporativizar y controlar el sindicalismo campesino, y de convertirlo en una fuerza anti-obrerista y anti-popular.

También en los años 70 surgieron distintas expresiones de resistencia al interior del movimiento campesino. El Bloque Independiente Campesino sería una de las expresiones más evidentes, que además lograría articularse a la Central Obrera Boliviana (COB). Otro fenómeno importante fue el surgimiento del movimiento indianista y katarista en la región del altiplano paceño, que poco a poco fue gestando un conjunto de reivindicaciones sobre la importancia de la autonomía del movimiento campesino, aludiendo para ello a sus raíces históricas. Con todo, si bien el Pacto Militar-Campesino se debilitó en 1974, luego de la Masacre de Tolata y Epizana, este no se diluiría hasta la caída de Hugo Banzer Suárez, en 1978 (Soto 1994; García, Chávez, y Costas 2005).

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos se fundó un año después, en 1979, en el marco de un congreso de unidad campesina que fue convocado por la COB y que enterró de manera definitiva cualquier acercamiento al ejército. Los principios sobre los cuales se fundó la CSUTCB fueron la autonomía ideológica y organizativa del movimiento campesino, y la independencia sindical. Desde esta posición política, la CSUTCB mantuvo una férrea oposición a los siguientes golpes de Estado –el de Natusch Busch (1979) y el de García Meza (1980)– a lado del movimiento obrero.

En 1982, ya restaurada la democracia, la CSUTCB llevó a cabo su II Congreso Nacional, en el que se trazaría la *Tesis Política* de esta organización. Sin embargo, en esta tesis quedarán reflejados dos horizontes claramente contradictorios. Por un lado, emergerá una tendencia que demandará la *inclusión* de los pueblos indígenas y campesinos a la estructura estatal a partir de la noción de pluri-multi culturalidad. El otro horizonte quedará reflejado en una posición política *autodeterminista*, reivindicando la autodeterminación de las naciones aymaras y quechuas a partir de formas propias de autorregulación y organización política (Patzi 2007). Una de las máximas expresiones de este segundo horizonte quedaría plasmado en la experiencia del Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK), a la cabeza de Felipe Quispe. En cambio, la experiencia inclusionista, con muchas derivas partidarias, tuvo como uno de sus máximos representantes a Víctor Hugo Cárdenas, quien fue vicepresidente en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, durante el periodo neoliberal.

A pesar de que la CSUTCB mantuvo una postura de oposición frente a los gobiernos neoliberales y sus medidas económicas, el debilitamiento de la Central Obrera Boliviana, a fines de los años 80, tuvo consecuencias negativas para la capacidad de respuesta del movimiento sindical campesino durante la década de los 90, cuando se implementaron las reformas neoliberales de segunda generación. A pesar de ello, al ser la CSUTCB un movimiento menos dependiente de la esfera económica estatal, logró mantener sus bases organizativas y perspectivas políticas, lo que sería fundamental para las luchas que se iniciaron en el siglo XXI.

2.2. La importancia de una organización campesina de mujeres

La historia de lo que hoy es la la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originas de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIQB-BS) está íntimamente ligada a la historia de la CSUTCB. En realidad, desde la narrativa predominante, las iniciativas de dar forma a una organización de mujeres son retratadas recién desde finales de los años 70,⁴ y su posibilidad de existencia gira en torno a la fundación de la CSUTCB. Es por este motivo que, para los fines de este artículo, se asume que la historia precedente de esta organización confluye con la del movimiento campesino en general.⁵

Tras el I Congreso Nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, se evidenció la necesidad de promover un proceso organizativo específico para las mujeres campesinas. Durante el golpe de Estado de Natusch Busch en 1979, todo el sindicalismo campesino se movilizó para oponer resistencia, y en ese momento las mujeres jugaron un papel fundamental intercambiando turnos de bloqueos con los varones. Esta participación activa de las mujeres fue el preludio de un proceso organizativo propio que también fue promovido por las dirigencias masculinas de la CSUTCB (García, Chávez, y Costas 2005; Jáuregui 2019).

Luego de que en 1979 se conformó un comité *ad hoc* entre la CSUTCB y mujeres campesinas que provenían de las luchas señaladas, se convocó al Primer Congreso

4 Entre 1977 a 1979 hubo congresos donde las mujeres manifestaron su interés por organizarse, como en el congreso campesino de La Paz en 1977; también estuvieron los Congresos de los Clubes de Madres de 1978 y 1979 y en 1979 se organiza el Primer Sindicato Comunal Femenino en La Paz (Sánchez 2015).

5 Es importante anotar acá que, si bien se asume este punto de partida en la lectura histórica de la organización de mujeres campesinas, también se reconoce que, en realidad, en esta narrativa histórica se omiten los procesos políticos y organizativos de las mujeres campesinas que están ligados a la reproducción de la vida. Sin embargo, la investigación detallada de estos procesos invisibilizados rebasa el objeto de este trabajo, ya que ello implicaría una o varias investigaciones interdisciplinarias de largo aliento.

Nacional de Mujeres Campesinas ante “la necesidad (de poder) contar con la participación activa de la mujer en todos los planos de la vida político-sindical, aunque este anhelo fue y aún es muy difícil de plasmar en la realidad de los hechos organizativos, dada la persistente actitud machista de algunos sectores tradicionalistas de dirigentes campesinos” (Citado en García, Chávez, y Costas 2005, 504).

Este congreso se llevó a cabo entre los días 10 y 12 de enero de 1980, con la participación de mil ciento veintiocho delegadas de todos los departamentos del país. El resultado fue la fundación de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMCB-BS). Una organización que en ese entonces emerge supeditada a la CSUTCB, con el carácter de afiliada.⁶

El problema es que si bien la fundación de la FNMCB-BS marca un hito simbólico de gran importancia, ya que fue la primera organización de mujeres campesinas en América Latina, también es cierto que su surgimiento quedó condicionado a la estructura de poder campesino, que seguía siendo controlado por varones de la CSUTCB:⁷ “El intercambio político entre las Bartolinas y la Confederación consistió en la negociación de recursos de movilización a cambio de participación política, aunque sin trastocar las relaciones de poder preexistentes” (Jáuregui 2019, 38). Hasta mediados de los años 2000 era una organización con un organigrama formal que se desenvolvía a la sombra de la estructura sindical de la CSUTCB (García, Chávez, y Costas 2005).

2.3. La “Colonización” popular y su proceso organizativo

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) es resultado de un devenir histórico cualitativamente distinto al de las organizaciones campesinas. En principio se puede entender que su surgimiento tiene que ver fundamentalmente con un horizonte estatal modernizador del campo boliviano, así como un mecanismo de reubicación de población campesina que no

6 En el proceso de surgimiento hubo tres tendencias que pueden sintetizarse de la siguiente manera: 1) la no necesidad de una organización de mujeres puesto que ya existía una organización campesina mixta, 2) la necesidad de una organización de mujeres que sea totalmente independiente y que debería haber asumido el rol de “confederación”, y 3) una organización de mujeres con el rango de “federación”, dependiente de la CSUTCB (Jáuregui 2019).

7 Desde el Tercer Congreso de la FNMCB-BS y durante varios años, la dirigente Sabina Choquetijlla, que provenía de la línea política de los Ayllus Rojos, puso sobre la mesa de discusión la necesidad de independencia de la organización de mujeres campesinas y la necesidad de que esta se convierta en una “confederación”. Sin embargo, ganaría la postura que pugnaba por una organización subordinada a la CSUTCB, la cual fue apoyada por partidos políticos y por varias ONG (García, Chávez, y Costas 2005; Arce 2022).

había logrado beneficiarse en el proceso de Reforma Agraria. A este proceso de migración productiva hacia tierras que se consideraban pasibles de explotación, el Estado boliviano nombró como “política de colonización”. Es por este motivo que, en realidad, el nombre original de esta organización fue Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB).

Aunque la *Marcha hacia el oriente* era un objetivo contemplado en el famoso Plan Bohan⁸, planteado en la década de 1940, este proceso no se puso en marcha hasta después de la Revolución Nacional. En ese momento, este horizonte estatal se alineó con el proceso de Reforma Agraria y, a través de un conjunto de normativas, el recién creado Ministerio de Agricultura, Ganadería y Colonización inició un proceso de dotación de propiedades a campesinos sin tierra. El sistema de colonización incluyó dos modalidades: la *colonización dirigida*, que era planificada y contaba con mayores recursos de infraestructura, capacitación y capital de trabajo; y la *colonización espontánea*, que era realizada por voluntad propia y con medios propios de los interesados. Al principio, esta colonización se llevó a cabo en tierras bajas de los departamentos de La Paz (Alto Beni), Cochabamba (Chapare) y Santa Cruz (Yapacaní), y luego se extendió a otras regiones del país.

La gran mayoría de los denominados “colonos” se encontrarían, sin embargo, en situaciones poco esperadas. No solo porque en la mayoría de los casos el Estado se desentendería de los apoyos económicos prometidos, sino también porque se enfrentaron a un clima, enfermedades y tipos de producción con los que nunca habían lidiado en tierras altas. De esta manera, pronto se fueron acumulando una serie de reivindicaciones frente al Estado, lo que resultaría en distintos procesos organizativos de los colonizadores (García, Chávez, y Costas 2005).

Aprovechando algunas concesiones democráticas durante el gobierno militar de Juan José Torres, en 1970 se creó la Confederación Nacional de Colonizadores, en el marco de la Primera Conferencia de Colonizadores, lo que derivaría en un congreso nacional un año después. Sin embargo, el siguiente congreso de esta organización se realizaría recién en 1978, luego de la dictadura de Hugo Banzer Suárez. En ese momento se conoció que las múltiples federaciones y sindicatos de colonizadores que buscaron concretar sus reivindicaciones fueron duramente reprimidos por el gobierno de facto. Este hecho marcaría la postura política de

8 El Plan Bohan fue producto de un acuerdo del gobierno boliviano con el gobierno de Estados Unidos en 1942. Una comisión presidida por Mervin Bohan llegó de Estados Unidos a Bolivia para elaborar un plan de desarrollo. El plan sostuvo la necesidad de desarrollar el mercado interno a partir de la diversificación de la producción, la construcción de carreteras y el fomento de la agroindustria en la región oriental del país. El plan recién fue impulsado por el gobierno de la Revolución Nacional con excedentes mineros (Morales 1999).

esta organización, que se acercaría a la CSUTCB como afiliada de la COB. Además, en su interior se fueron consolidando cada vez más cuatro federaciones cocaleras, lo que le dio a esta confederación un carácter más contestatario.

En la década de los 90, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) incrementó su influencia debido al aumento de áreas de colonización en el país. De la misma manera, se mantendría unida a las organizaciones rurales matrices y a la COB, oponiendo resistencia a las principales medidas neoliberales que se implementaron en esos años. En ese tiempo también sucedió que la CSCB, junto a la CSUTCB y a la CIDOB, organizaron el I Congreso de Tierra y Territorio e Instrumento Político, en donde se darían las bases para la construcción de una propuesta política electoral, lo que años más tarde derivaría en el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) (García, Chávez, y Costas 2005).

Es importante tomar en cuenta, entonces, que la CSCB se fue constituyendo como una extensión orgánica de los procesos organizativos que se habían acumulado en la región andina del país. A diferencia de la CIDOB, que operaba en las tierras bajas desde una lógica propia de los pueblos indígenas que habitan en esa región, la CSCB se nutría de la matriz cultural y política proveniente del sindicalismo agrario y minero, lo que implicaba una lógica distinta de ocupación del territorio y de vinculación con el Estado, lo que años más tarde se reflejará en contradicciones profundas entre ambos sectores sociales.

3. De la lucha al poder: la transición de las *Trillizas*

La primera década del siglo XXI abrió y cerró uno de los procesos políticos más agitados de la historia reciente del país. La Guerra del Agua daría pie, si pensamos desde Zavaleta (1986), a un *momento de disponibilidad* en el que los sectores populares del país cuestionaron el orden dominante neoliberal y las creencias colectivas que lo sostenían, y se predispusieron a imaginar nuevas síntesis sociales que incorporasen sus propias reivindicaciones históricas. Sin embargo, diez años más tarde, cuando entraba en vigor la nueva carta magna, se pondría en evidencia “el desarrollo contradictorio de los factores, o sea, como si los hombres se propusieran algo y los hechos los llevaran indefectiblemente a otro lugar” (Zavaleta 1986, 152).

En ese proceso cayeron dos presidentes considerados del *establishment* neoliberal y un representante de las organizaciones sociales –por primera vez en la historia del país– llegó a la presidencia; además, se impulsó una Asamblea Constituyente que tuvo el propósito de transformar radicalmente los principales rasgos de la

dominación boliviana. Sin embargo, por más que el remezón fue tan significativo, llama la atención lo poco que el resultado se correspondió con el conjunto de aspiraciones sociales que años atrás habían prefigurado muchas de las organizaciones sociales del país, entre ellas –y de manera fundamental– la CSUTCB, la FNMCB-BS y la CSCB.

Las Trillizas tuvieron un rol fundamental en las luchas que se habrían de desplegar entre 2000 y 2005. Fueron las que sostuvieron la mayor parte de las movilizaciones en el campo boliviano y muchas de ellas incluso llegarían a las ciudades, como sucedió en la Guerra del Agua, cuando cocaleros y campesinos de distintas regiones del departamento de Cochabamba se unieron a la movilización urbana; o también aquellas que acompañarían desde la región altiplánica, con su propia agenda, pero que, modificaron sustancialmente la correlación de fuerzas a favor de los sectores en lucha.

Las movilizaciones impulsadas desde distintas regiones del campo boliviano se hicieron presentes de manera reiterada durante los años venideros. A finales de 2000 y a mediados de 2001, se presentaron grandes levantamientos aymaras en la región altiplánica, organizados por la CSUTCB a la cabeza de Felipe Quispe. Así también, a finales de 2001 y durante el primer trimestre del 2002, en coordinación con la CSUTCB, pero protagonizada por cocaleros y colonizadores, se suscitó la Guerra de la Coca.⁹ Y durante el año 2003, tanto en febrero como en octubre, la movilización de las CSCB, la CSUTCB, la FNMCB-BS, la de otras organizaciones de tierras bajas y la de la urbe alteña, terminarían con un conjunto de políticas de corte neoliberal, que estaban siendo impulsadas en aquellos años, y con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los horizontes que movilizaron en aquellos años a las Trillizas? En general, las tres organizaciones han tenido como eje vertebrador de sus reivindicaciones el tema del acceso a la tierra, sin embargo, hay algunas diferencias significativas en el modo de concebir esta problemática. La CSUTCB, desde su fundación ha oscilado entre dos ejes reivindicativos, por un lado, aquellos que provienen de un corte mucho más “campesinista” y que tienen que ver con la propiedad individual de la tierra y, en especial, con los recursos necesarios para impulsar procesos productivos mucho más modernos. Por el otro lado, estaban las reivindicaciones “comunitarias” –que se presentaron principalmente bajo un

9 Se denomina “Guerra de la Coca” a las movilizaciones cocaleras que desde enero de 2002 buscaron poner freno a una serie de intervenciones violentas que la política antidroga gubernamental venía impulsando en la región del trópico cochabambino. Así, también, se buscaba frenar el desafuero de Evo Morales Ayma, como diputado nacional (Gutiérrez 2009).

esquema identitario– y que tienen que ver con la recuperación de prerrogativas políticas o de autogobierno sobre espacios territoriales, esta última postura se presentó con mayor fuerza en el área de influencia del campesinado aymara (García, Chávez, y Costas 2005).

En 2001, la CSUTCB planteó un pliego petitorio amplio que se habría de fusionar con las reivindicaciones de otros sectores sociales en el denominado “pacto intersindical”. En este pacto se condensaban un conjunto de temáticas que abordaban ambos ejes reivindicativos, siendo uno de los más importantes el relativo al “saneamiento interno”¹⁰. Sin embargo, la CSUTCB también tuvo la capacidad de liderar reivindicaciones mucho más amplias, que incluían a sectores urbanos, reemplazando el lugar que otrora había ocupado la Central Obrera Boliviana, como sucedió con la problemática del agua o con la denominada “Agenda de Octubre” –gestada en el marco de la Guerra del Gas en 2003– que incorporaba como elementos centrales la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente (Uc 2019; Gutiérrez 2009).

Por su parte, la agenda reivindicativa de las “Bartolinas” estuvo constreñida al accionar de la CSUTCB, pero tuvieron un rol fundamental en la movilización, toma de calles y bloqueos. Además, la gramática de poder de la FNMCB-BS recogió “parte importante del lenguaje político sindical campesino, pero ampliado a una crítica de doble nivel de ‘geografías desiguales’: una que ejerce la estructura colonial del Estado republicano y neoliberal que como campesinas indígenas han padecido, y otra que atraviesan como mujeres al interior de la propia dinámica campesina” (Uc 2019, 251).

Por otra parte, la CSCB se presentó con una agenda mucho más heterogénea, que, si bien partía también de la necesidad de acceso y titulación de tierras, así como la demanda de financiamiento para los procesos de titulación interna y para impulsar nuevos procesos productivos en las tierras “vírgenes”, otro conjunto de reivindicaciones de este sector tenía que ver con la despenalización de la producción de la hoja de coca. En todo caso, es el sector cocalero el que en aquel entonces comenzó a dar más forma a la organización de colonizadores, y será por ese motivo que también desde este sector se impulse con mucho más ímpetu un proyecto partidario estatal.

10 “Es evidente que el contenido más importante de las explicaciones anteriores es la búsqueda de respeto a la *autonomía de facto* de las comunidades, que se expresa en la formulación ‘queremos saneamiento interno’; esto es, ‘queremos’ que los diversos funcionarios del INRA no se metan en las decisiones que sean tomadas en cada lugar de acuerdo a los criterios ancestrales de cada comunidad” (Gutiérrez 2009, 143).

Entre 2000 y 2005 también se presentaron varias contradicciones al interior de las Trillizas, la más evidente fue la fractura que sufrió la CSUTCB cuando una facción de esta confederación, cercana al movimiento cocalero y a la CSCB, desconoció a Felipe Quispe Huanca y a la postura aymara que dentro del movimiento campesino propugnaba una postura más comunitaria y autonomista. Luego de la Guerra del Gas, en 2003, y hasta la caída del presidente Carlos Mesa Gisbert, en 2005, la postura de Felipe Quispe perdería fuerza dentro de la CSUTCB y ganaría terreno la de Evo Morales y la de los sectores afines al movimiento cocalero, la cual estaba mucho más subordinada a los designios del MAS-IPSP, que en ese momento tenía muy clara su línea política de búsqueda del poder estatal.

3.1. Las Trillizas ¿en el poder o para el poder?

Luego de la llegada del MAS al gobierno, en enero de 2006, la manera en que las organizaciones sociales se vincularon con el Estado cambió sustancialmente. En ese primer momento lo que pasó puede entenderse como una reedición del proceso de *subordinación activa*, ya que las Trillizas negociaron los términos de su incorporación a la dinámica estatal.

Al inicio del gobierno de Morales, las organizaciones sociales se presentaron como artífices de las luchas que habían desembocado en el nuevo gobierno, mismo que se entendía como un gobierno con un mandato que tenía como objetivo operativizar, entre otras cosas, la denominada Agenda de Octubre y responder a las determinaciones de lo que en ese entonces se había constituido como el *Pacto de Unidad*, una instancia de articulación de organizaciones matrices (CSUTCB, CSCB, FNMCB-BS, CONAMAQ y CIDOB) fundada en 2004, con el propósito de impulsar de manera coordinada la realización de la Asamblea Constituyente para la “refundación” del país.

Sin embargo, esta presencia activa de las organizaciones sociales y sus respectivas agendas se vio limitada por la nueva dinámica estatal que comenzó a operar bajo un principio *posibilista*; *i.e.* el partido de gobierno, al hacerse cargo del aparato burocrático estatal y de gestionarlo, comenzó a establecer límites de lo que era posible demandar, reivindicar y transformar en aquel entonces. Entró en juego, así, una *razón de Estado*, que priorizaba los intereses partidarios por sobre los de las organizaciones, produciendo una dinámica de chantaje que puede sintetizarse en el enunciado de: “no hacerle el juego a la derecha” y que terminó paralizando el alcance de los horizontes transformadores que habían sido la base de la movilización social años antes (Salazar 2015; Salazar 2022).

Los ejemplos de estas limitantes que el gobierno empezó a establecer sobre los horizontes de las organizaciones son varios. Posiblemente, los más elocuentes fueron

la parcial nacionalización de los hidrocarburos y las desavenencias que surgieron en torno a la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria. Sin embargo, fue el proceso de la Asamblea Constituyente el más representativo de todos, no solo por su importancia política, sino porque su finalización marcaría también el cierre del proceso de lucha que se había abierto una década antes, la fractura del Pacto de Unidad y el inicio de un claro momento de *subordinación pasiva* de las Trillizas.

El proceso constituyente fue resultado de una fuerte presión popular y que tuvo como principales protagonistas a las organizaciones que hacían parte del Pacto de Unidad. Estas organizaciones habían logrado elaborar, incluso, una propuesta para una nueva carta magna y que sería la propuesta que inicialmente presentó el Movimiento Al Socialismo.¹¹ Sin embargo, el MAS poco a poco fue asumiendo un rol de mediación entre la propuesta de transformación de las organizaciones y la resistencia de las élites tradicionales, lo que dio como resultado una propuesta constitucional que, más allá de las concesiones realizadas, no dejaba de contener varias de las propuestas de las organizaciones campesinas, indígenas y originarias del país.

Pero ese texto constitucional no fue aprobado debido a la presión ejercida por las clases dominantes tradicionales del país, y después de una serie de conflictos sociales en el año 2008,¹² el gobierno aceptó negociar con ellas a puerta cerrada más de 100 artículos de la propuesta constitucional inicial, modificando sustancialmente el alcance que las organizaciones se habían propuesto (Garcés 2010). Solo después de esta negociación se dio curso al referéndum constitucional de enero de 2009, en el que se aprobaría esta propuesta que fue “consensuada” sin la participación de las organizaciones sociales.

Esta negociación sentó las bases para un pacto entre el gobierno y las élites tradicionales del país. Estas últimas aceptaron el liderazgo del partido gobernante, lo que aportó estabilidad política al gobierno, a cambio de dos concesiones importantes: 1) apoyo para la gestión de sus propios intereses económicos y 2) la gestión de las organizaciones sociales, neutralizando sus aspiraciones de transformación social más inmediatas. De esta manera, las élites tradicionales redujeron el riesgo

11 Es importante señalar que la Asamblea Constituyente no fue parte de la propuesta política que originalmente fue puesta a debate por el MAS (Postero 2010).

12 El año 2008 se suscitaron una serie de conflictos y confrontaciones propiciadas por una élite política atrincherada en las instituciones cívicas de lo que se reconocía como la Media Luna (Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) y por el otro lado las organizaciones sociales que pugnaron por que la nueva Constitución Política del Estado resultado de la Asamblea Constituyente fuese refrendada. Los conflictos sociales de ese año se convertirían en demostraciones de fuerza para una posterior negociación, que se dio luego de la Masacre del Porvenir y del Cerco a Santa Cruz, en septiembre de 2008.

de que las organizaciones sociales representaran una amenaza sustancial para sus intereses, como había sucedido hasta entonces. (Salazar 2020).

La posibilidad de controlar las organizaciones desde el partido de gobierno se debió a la dinámica estatal que se había desarrollado en los últimos años y que se acentuó en la segunda década del siglo XXI. Desde 2007, el gobierno había creado la denominada Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), una instancia articuladora de las organizaciones sociales que, a diferencia del Pacto de Unidad, estaba “auspiciada y controlada por el gobierno, y contó con la participación y coordinación directa de miembros del Ejecutivo promoviendo el objetivo de respaldar el ‘proceso de cambio’ frente a la amenaza interna y externa”(Zegada y Komadina 2017, 51).

La CONALCAM operaría como una mediadora de arriba hacia abajo, logrando que los intereses del partido se conviertan en mandato para las bases de las organizaciones sociales, como sucedió, por ejemplo, cuando se decidió levantar el Cerco a Santa Cruz. Es en este momento en el que las Trillizas pasaron a convertirse en organizaciones paraestatales, cerrando filas en torno al gobierno de Morales y a los intereses promovidos por el mismo, aunque estos pudiesen ser diametralmente contradictorios con aquellos que se habían promovido en las luchas de principios de siglo. Pero no todas las organizaciones aceptarían la subordinación de la misma manera, como sucedió cuando el CONAMAQ y la CIDOB opusieron resistencia a la negociación de la carta magna,¹³ lo que derivaría en fracturas al interior de las organizaciones y el resquebrajamiento del Pacto de Unidad.

Esta subordinación pasiva de las Trillizas actualizará la lógica subyacente del *pacto militar-campesino*. Las estructuras sindicales supracomunitarias se convertirían en mecanismo de articulación y sujeción a la dinámica política estatal, a través de una “relación de intercambio político entre Estado y las organizaciones sociales, que opera mediante una compleja estructura rizomática y de relaciones de clientela” (Zegada y Komadina 2017, 68). Las costras dirigenciales e intermediarios políticos –aquellos a quienes se delega la capacidad de decisión en las organizaciones– se convertirán en actores fundamentales para la concreción de estos procesos de subordinación, ya que operarán desde intereses sectoriales o personales, ofreciendo su capacidad de gestionar la estructura sindical de las organizaciones.

13 En un pronunciamiento del CONAMAQ se establecía lo siguiente: “No autorizamos al Poder Ejecutivo, ni al Parlamento Nacional la negociación y/o modificación del texto del Proyecto de Constitución Política del Estado aprobada en Oruro. [...] El Parlamento Nacional no tiene las competencias constitucionales para revisar y/o modificar el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado, por tanto, cualquier alteración tendría vicios de nulidad” (La Prensa, 11 de octubre de 2008).

Con el tiempo esto llevaría a que, organizaciones como la CSUTCB, que en su tesis política fundacional reivindicaba la autonomía orgánica y política respecto a cualquier partido, delegaran poco a poco al MAS la dimensión política de su accionar: “la línea política de la organización campesina debe ser la del instrumento [MAS-IPSP] y la del ‘proceso de cambio’” (Torres citada en Salazar 2015), esto condujo a que estas organizaciones se conviertan en mecanismos de gestión de masas *subordinas pasivamente* a una estructura política partidaria con objetivos propios.

4. CSUTCB, Bartolinas e interculturales “en” el Estado

Evo Morales fue posesionado por segunda vez, el 22 de enero de 2010. El MAS había logrado una histórica victoria con un 64% de la votación, pero lo importante era que esa elección representaba la entrada en vigor de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. El gobierno presentaba ese momento como la refundación del país y lo hacía de la mano de las grandes organizaciones sociales, las Trillizas estaban en primera fila. Sin embargo, más allá de los grandes festejos y los elocuentes discursos que referían a los variados imaginarios sociales de reivindicación y transformación social que en ese entonces prevalecían en el país, la realidad era bastante distinta a la de 2006. Lo que había cambiado en especial era la función de las organizaciones sociales en torno al “proceso de cambio”.

En este nuevo tiempo estatal, las Trillizas sufrieron importantes transformaciones. Cambiaron en sus distintos niveles (local, regional y nacional) para acomodarse a la nueva dinámica política nacional. Un ejemplo esclarecedor de esta situación fue la manera en que muchas de las federaciones departamentales afiliadas a la CSUTCB modificaron sus estatutos, remarcando el vínculo de estas con el MAS e incorporando artículos que prohibían que las dirigencias sindicales participasen en alguna agrupación política que no fuese la de este partido.

Estas organizaciones también hicieron retoques de forma, de tal suerte de acomodarse a los nuevos cánones establecidos por el nuevo contexto político. La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia pasó a ser, en 2009, la *Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia* (CSCIB), rechazando así la etiqueta de “colonizadores” que había sido impuesta por el gobierno de la Revolución Nacional y que, bajo una gramática “plurinacional”, dejaba de ser un nombre políticamente correcto.

Por su lado, en 2008, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” se pasó a llamar *Confederación Nacional de Mujeres Campesinas*

Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), independizándose legalmente de la CSUTCB. “De acuerdo con sus dirigentes, no solo fue un cambio de nombre sino un verdadero cambio de status en el escenario político, tanto en el entorno del MAS-IPSP, como ante el Estado y la sociedad” (Arce 2022, 247). Si bien esta separación respondía a una reivindicación histórica de la organización de mujeres que en otros tiempos había sido realzada por las voces más críticas de las Bartolinas, lo cierto es que, en este contexto, la independización de una estructura sindical con pocos recursos y que siempre había estado a la sombra de la CSUTCB, significó que progresivamente la misma quedase inserta en una relación de dependencia con el partido de gobierno, resaltándose su función de “guardianas del proceso de cambio” o de defensa de las “políticas del hermano presidente” (de Assis Clímaco 2016).

Así, para el 2010 estas organizaciones habían afinado sus estructuras y producido los engranajes necesarios para articularse a la dinámica estatal centrada en el proyecto político y en las nuevas formas de gestión del poder que estaban gestándose en torno al MAS. Sin embargo, se harán evidentes las diferencias entre la función y las aspiraciones al interior de las Trillizas. La CSUTCB y la CNMCIOB-BS son organizaciones relacionadas con el campesinado tradicional del país, con mayor fuerza en comunidades aymaras y quechuas en el altiplano y valles interandinos, muchas de las cuales cuentan con un régimen de propiedad de la tierra heredera de la Reforma Agraria de 1953, aunque con raíces históricas mucho más profundas. En el nuevo escenario político, la CSUTCB y la CNMCIOB-BS, como instancias supracomunitarias articuladas a la dinámica estatal, jugaron un rol de contención de sus bases, mismas que años antes se habían constituido en el núcleo de las luchas sociales.

En cambio, la CSCIB es la organización matriz de “pequeños productores capitalistas, o capitalistas plenos camuflados en la estructura de los sindicatos de ‘campesinos interculturales’” (Enrique Ormachea en Los tiempos, 13/09/2021). Al interior de esta gran organización también se cobijan gran parte de las federaciones cocaleras. En este sentido, su horizonte reivindicativo, por lo general, ha estado situado en dinámicas de expansión capitalista, en muchos casos articulados a procesos capitalistas transnacionalizados, como en el caso de la agroindustria. En todo caso, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, como ente matriz del sindicalismo intercultural, no solo juega el rol de gestión y control de arriba hacia abajo de este sindicalismo, sino que, en algunas oportunidades, ha estado vinculado a un conjunto de intereses que están ligados a procesos de expansión capitalista de corte “popular” que se gestan desde estos sectores, los cuales terminan siendo una base social y material importante para el sostenimiento del gobierno del MAS.

Con todo, desde el inicio del segundo mandato de Evo Morales, las tres organizaciones principales –cada una con su propia dinámica– se alinearon al poder y respaldaron al gobierno de Evo Morales. Hubo pocas ocasiones en las que alguna de estas organizaciones mostró desacuerdo con la política gubernamental, como sucedió de manera explícita con una buena parte de los interculturales durante el “gasolinazo” de diciembre de 2010. No obstante, en otros momentos en los que la política gubernamental entró en contradicción con los intereses de otros sectores populares, estas organizaciones cerraron filas en torno al gobierno.

4.1. Organizaciones al servicio del poder

El caso más emblemático de esta alineación de las tres organizaciones principales al poder fue el conflicto suscitado en 2011 en torno a la construcción de la carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS). Un año antes, el gobierno del MAS había promulgado la Ley 005, que autorizaba el inicio de obras para la construcción de dicha carretera, la cual uniría las localidades de Villa Tunari, en Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, en Beni, como parte del programa Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Sin embargo, en este caso, la carretera atravesaría el territorio protegido del TIPNIS.

Ante esta situación, la CIDOB, impulsada por los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS, convocó a la Octava Marcha Indígena “En defensa del TIPNIS, los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia”. Esta marcha, que tenía como objetivo llegar a la ciudad de La Paz, fue duramente reprimida por el gobierno en la localidad de Chaparina el 25 de septiembre de 2011, la marcha recibió el apoyo de muchas otras organizaciones como la COB y juntas barriales urbanas de todo el país. Ante esta situación y cuando la marcha llegó a la ciudad de La Paz, el gobierno retrocedió en la medida y promulgó la Ley 180, que disponía “que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atravesará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore-TIPNIS”.

Sin embargo, sindicatos cocaleros y comunidades interculturales que ya habitaban en la región sur de TIPNIS comenzaron a generar presión sobre el gobierno para retomar el proyecto carretero a través de este territorio, utilizando para ello el nombre del Consejo Indígena del Sur (CONISUR).¹⁴ Esta organización realizaría su

14 El CONISUR es la organización de los indígenas del Polígono 7 del TIPNIS, por la dinámica económica de la región, el CONISUR se encuentra fuertemente articulada –e incluso subordinada– a las organizaciones de colonizadores y cocaleros que también actúan en la región.

propia marcha desde el Chapare hacia La Paz, apañada por la CSCIB y en alianza con la CSUTCB y la CSMCIOB-BS. Todas estas organizaciones, junto al gobierno, conminaron a la CIDOB a aceptar la construcción de la carretera a través del TIPNIS, a lo que esta última organización se negaría. Frente a esto el gobierno abrogó la Ley 180 y volvió a impulsar el proyecto carretero de manera unilateral.

La CIDOB volvió a convocar a una nueva marcha, pero esta vez las Trillizas jugarían un rol importante de deslegitimación de la movilización indígena (Azcuí 2012). Por un lado, sindicatos de la CSCIB amenazaron de bloquear e intervenir la marcha indígena en su recorrido. Por su parte, en la CSUTCB, en un ampliado realizado un día antes de la llegada de esta nueva marcha a la ciudad de La Paz, se coreaba: “la marcha no pasará”. Y si bien la marcha pasó, lo hizo disminuida y nunca fue recibida por el gobierno. Meses después el MAS intervino la CIDOB y creó una estructura paralela.

Otro momento representativo de esta amalgama de las Trillizas con el gobierno fue la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, en 2015, organizada por el gobierno y el sector agroindustrial del oriente boliviano, aunque después se sumarían las Trillizas y también organizaciones indígenas, como la CIDOB, pero en sus versiones controladas por el gobierno.

Lo llamativo es cómo las cúpulas dirigenciales de organizaciones como la CSUTCB, que diez años atrás tenían una agenda clara en contra de la agroindustria y de todas sus implicaciones –como la producción de transgénicos–, en este encuentro terminaron aceptando y dando un espaldarazo a la agenda de este sector: “se atendió en su integridad la agenda del sector agroindustrial. Con relación al uso de semillas transgénicas se echó por la borda la normativa que hasta el momento la prohibía y se abrió las puertas para su legalización. Asimismo, en contra de lo que establece la ley actualmente, se aceptó cambiar la periodicidad del control de la Función Económica Social (FES) de 2 a 5 años. Se establecieron metas que aseguran el desbosqueo y la ampliación de la frontera, de al menos 2,5 millones de hectáreas en el corto plazo, tanto a favor de la ganadería como para la agricultura, con el aporte incluso de otros sectores” (Soliz 2015, 5). Esta es la agenda agropecuaria que el gobierno del MAS implementó hasta la crisis de 2019, sin ningún tipo de oposición significativa de las Trillizas.

El caso del Fondo Indígena se convirtió en un resonado escándalo que expuso los mecanismos económicos por medio de los cuales varias organizaciones sociales quedaban articuladas a la dinámica estatal bajo esquemas clientelares. Cuando este caso quedó expuesto, la legitimidad de todo el proceso político quedó en cuestión, ya que las organizaciones sociales que impulsaban el Proceso de cambio,

establecido por el MAS, eran parte de este entramado de corrupción. “No es casual que aproximadamente el 30% de esos recursos haya sido destinado a la CSUTCB, el 29% a los ‘interculturales’ y el 17 % a las ‘Bartolinas’, pues estas organizaciones han demostrado una lealtad incondicional y ciega hacia el gobierno” (Zegada y Komadina 2017, 111). La dimensión descomunal adquirida por este caso tiene que ver con que este Fondo recibió más de 3 mil millones de bolivianos, principalmente provenientes de la renta hidrocarburífera, entre los años 2006 y 2015.

Desde desembolsos millonarios que nunca se tradujeron en obras y que quedaron distribuidos entre dirigencias, hasta la creación de comunidades “fantasmas” que recibieron fondos para proyectos que nunca se concretaron; los recursos gestionados por el Fondo Indígena sirvieron como un mecanismo de control y captura masiva del sindicalismo de las organizaciones sociales.

Finalmente, el conjunto de sucesos que dieron forma al proceso electoral que terminó en la crisis política de 2019, también dan cuenta del apoyo incondicional que estas organizaciones dieron al gobierno del MAS. Ya desde el año 2015, la CSUTCB, la CNMCIQB-BS y la CSCIB anunciaron que buscarían la manera de apoyar la reelección indefinida de Evo Morales, como presidente de Bolivia. Para el Referéndum Constitucional de febrero de 2016, en el que se intentó dar vía libre a la reelección indefinida de Morales, las estructuras sindicales de las Trillizas cerraron filas en torno a la votación del Sí a la reforma constitucional, reforma que no se llevaría a cabo porque en la consulta ganó la opción del No con el 51,3%.

Sin embargo, un año y medio después, el MAS presentó un recurso de inconstitucionalidad abstracta, argumentando que la reelección indefinida debía considerarse un derecho humano. Este recurso, aceptado por un Tribunal Constitucional Plurinacional, aceleró el proceso de desinstitucionalización estatal, dando pie al fortalecimiento de una derecha tradicional que comenzó a reivindicar un discurso democrático, a la vez que incrementó la desconfianza en el proceso electoral de 2019. En este contexto, las Trillizas tuvieron el rol de dotar de base social a la reelección de Evo Morales, para ello organizaron marchas y grandes concentraciones, como sucedió a finales de 2018.

Las Trillizas se mantuvieron a lado de Morales luego de las elecciones de octubre de 2019. Si bien la CSUTCB y la CNMCIQB-BS tuvieron una posición más cauta durante los primeros días luego de las acusaciones de fraude electoral, la CSCIB, a la cabeza de las federaciones cocaleras del trópico Cochabambino, trató de sostener con mayor fuerza al gobierno del MAS. No obstante, luego de la caída del gobierno de Morales y, en especial, después de las masacres de Senkata y Sacaba, las tres organizaciones se mantuvieron en pie de lucha hasta que el 25 de noviembre estas

tres organizaciones, junto a la Central Obrera Boliviana, firmaron el acuerdo de pacificación con el nuevo gobierno de Jeanine Añez.

Durante el año de gobierno de Añez, en medio de la pandemia de covid-19, estas organizaciones mantuvieron su cercanía con el Movimiento Al Socialismo, con una agenda de presión y movilización para lograr unas elecciones generales que llevaran a este partido nuevamente al gobierno, como sucedió en octubre de 2020.¹⁵ Sin embargo, el nuevo contexto político y económico del gobierno de Luis Arce Catacora tendrá diferencias respecto al gobierno de Evo Morales, lo que terminará por modificar el vínculo de las Trillizas con el Estado y de ellas entre sí.

5. Nuevo contexto político nacional y búsquedas de renovación

El nuevo gobierno del MAS enfrentó una difícil situación al asumir la presidencia en 2021. Además de la mal manejada crisis sanitaria, la crisis económica que ya se hacía palpable antes de 2019 se vio acentuada por la pandemia. Para frenar los efectos de la covid-19, el gobierno tuvo que asumir grandes gastos corrientes, los cuales fueron financiados con reservas internacionales y deuda interna y externa. A diferencia del periodo que va del 2006 al 2015, el gobierno boliviano ya no cuenta con los exuberantes ingresos provenientes de la exportación de gas natural a Brasil y Argentina. Esto significó, entre muchas otras cosas, una transformación del vínculo que el gobierno sostenía con las organizaciones sociales, ya que no era posible mantener el mismo esquema clientelar o, por lo menos, se vería reducido a una expresión mucho menor.

Ante esta situación, se han venido desarrollando otras condiciones para la gestión del apoyo de las organizaciones hacia el gobierno. Una de ellas, que ya existía previamente pero que en la actualidad se expandió, es la que tiene que ver con lo que puede denominarse una *política permisiva con actividades no legitimadas de depredación y desahorro social* (Salazar 2022). Es decir, ante la ausencia de recursos económicos, el gobierno permite que distintos sectores sociales, muchas veces a través de sus organizaciones matrices, realicen ciertas actividades económicas consideradas “subterráneas” con severas implicaciones sociales y para el medio ambiente. El caso más evidente es el del cooperativismo minero, que se ha convertido en una base social importante para el gobierno, a cambio de que se le otorgue concesiones cuestionables o simplemente se desentienda cuando estas cooperativas realizan actividades prohibidas o en áreas protegidas.

15 En este artículo no se hace una revisión en profundidad de lo que ha pasado con la crisis política poselectoral en Bolivia. Para profundizar al respecto se sugiere revisar el libro compilado por Luis Claro y Vladimir Díaz (2022) *Crisis política en Bolivia 2019-2020*.

Esto también pasa con las Trillizas. El caso de Las Londras, en 2022, lo hizo muy evidente. Un grupo de personas, apoyadas por la CSCIB, tomó el control a través de la fuerza y con armas predios que estaban en manos de agroindustriales, aunque inicialmente habían sido tierras fiscales. En ese conflicto incluso se llegaron a tomar como rehenes a periodistas (Mamani 2022). Este tipo de situaciones están reconfigurando sustancialmente la manera de operar de las organizaciones sociales, en las cuales muchas veces terminan por primar los intereses de grupos de poder internos en oposición a los intereses generales de toda la organización matriz.

Por otro lado, la disputa interna al interior del Movimiento Al Socialismo por el control del aparato partidario está generando fracturas hacia adentro de las mismas organizaciones, e incluso enfrentándolas entre ellas. Algo que se ha hecho muy evidente durante el 2022, cuando la dirigencia de los Interculturales, cercana a Luis Arce Catacora y su vicepresidente David Choquehuanca, se enfrentó con las dirigencias cocaleras, cercanas a Evo Morales. Situaciones similares vienen dándose en las bases campesinas, en las que en sus reuniones asamblearias los participantes se dividen entre uno u otro bando, lo que en algunos casos ha generado batallas campales, que incluso han terminado con heridos.

Con todo, en este escenario de descomposición “hacia arriba” de las organizaciones y en su vínculo con las instituciones estatales, vale la pena anotar que, “hacia abajo” también comienzan a surgir voces críticas que pugnan por recuperar el sentido de estas organizaciones y una autonomía relativa frente al partido. En el caso del Valle Alto, se ha podido constatar que en las comunidades de la CSUTCB y de la CNMCIQB-BS están tratando de recuperar cierta autonomía política, alejándose de las disputas partidarias, con el ánimo de volver a centrar su interés en decisiones que tienen que ver con problemas y urgencias mucho más inmediatas. Así lo expresa una mujer que hace parte de la estructura de la CNMCIQB-BS a nivel local:

Esta división dentro del mas, netamente, se está volviendo muy polarizada en dos lados: Choquehuanca y Evo. Y ellos [los dirigentes de alto rango] se están yendo mucho a eso. Entonces nosotras no queremos que nos molesten aquí con ese tema, porque incluso tenemos una multa de 500 bolivianos al que habla de Choquehuanca o Evo, aquí pagan sus multas. Entonces no queremos que nos dañen acá con las peleas que tienen arriba (Fernanda¹⁶ 10 de abril de 2023, Valle Alto de Cochabamba).

Pero estos indicios al interior de las organizaciones aún no son extendidos. En todo caso, la situación de las *Bartolinas* es particular debido a que en los últimos

16 Este es un pseudónimo. La entrevistada solicitó no ser identificada debido a la difícil situación que se vive al interior de su organización.

años –en especial luego de la pandemia– esta organización ha comenzado a ser invadida por varones que no solo participan en sus asambleas, sino que incluso llegan a ocupar cargos jerárquicos al interior de esta organización –denominados como “Bartolinos”–. Esto sucede como un mecanismo de control y, al mismo tiempo, opera como un medio de ascenso en las estructuras sindicales (Toledo, Kruyt, y Salazar 2022). Es por este motivo que la reacción de las mujeres campesinas frente a estas dinámicas patriarcales y de control político tiende a ser más radical.

6. Conclusiones

Al hacer un recorrido sobre el devenir de las Trillizas y de su relación con el Estado boliviano, se puede concluir lo siguiente:

- El surgimiento de las organizaciones campesinas –tanto la mixta como la de mujeres–, así como la de comunidades interculturales –anteriormente conocidos como “colonizadores”–, es resultado de luchas históricas contra diversos procesos de opresión, violencia y desigualdad. Los primeros sindicatos agrarios emergen como procesos organizativos frente al régimen de hacienda proveniente desde la colonia y que permeó hasta bien entrado el siglo XX. Por otro lado, el incompleto proceso de Reforma Agraria, así como el impulso de la *Marcha hacia el Oriente*, propiciaron el surgimiento de distintas organizaciones de “colonizadores” que se desplazaron principalmente hacia tierras bajas, buscando consolidar la propiedad sobre su tierra o recibir apoyos económicos para mejorar su capacidad productiva.
- Durante los primeros cinco años del siglo XXI, la CSUTCB, la CNMCIQB-BS y la CSCIB jugaron un rol protagónico en las luchas que pusieron un alto al embate de los gobiernos neoliberales y de sus políticas económicas. Aquellas tres organizaciones, junto a la CIDOB y al CONAMAQ fueron responsables de configurar el Pacto de Unidad, desde donde se propuso refundar el país a través de un proceso de Asamblea Constituyente; para lo cual, este Pacto tuvo una propuesta propia haciendo eco de las principales reivindicaciones históricas de estas organizaciones.
- Desde que el Movimiento Al Socialismo llegó al gobierno en 2006, la vinculación de las Trillizas con el Estado cambió sustancialmente, pasando de ser organizaciones contestatarias al poder a organizaciones articuladas a este. Las cúpulas dirigenciales se convirtieron en mediaciones entre el partido de gobierno y las bases que, por lo general, operaron como un mecanismo de control vertical de arriba hacia abajo, permitiendo la *subordinación pasiva* de estas estructuras sindicales a las necesidades del partido. A partir de este

proceso de subordinación, las organizaciones dejaron de lado gran parte de su agenda reivindicativa de inicios de siglo y se sumaron a la agenda propia del partido de gobierno.

- Entre 2010 y 2019 las Trillizas operaron como organizaciones paraestatales, subordinadas al gobierno. En algunas ocasiones ello implicó, incluso, enfrentarse a otras organizaciones sociales de corte popular, como sucedió con el conflicto del TIPNIS en los años 2011 y 2012. De la misma manera, las Trillizas, siguiendo los lineamientos del partido gobernante, terminaron apoyando la agenda política del agronegocio del oriente boliviano; fueron acreedoras de recursos provenientes del Fondo Indígena, que explotó como uno de los casos de corrupción más sonados en las últimas décadas; y apoyaron el proceso de reelección indefinida de Evo Morales, que terminaría corroyendo la poca estabilidad democrática del país.
- Luego de la crisis poselectoral de 2019 y del retorno del MAS al gobierno en 2020, la disminución de los ingresos estatales como consecuencia de la disminución del valor de las exportaciones de gas natural, entre otros, han oxidado los engranajes del corporativismo estatal, lo que viene generando cuestionamientos y algunas fracturas en las bases de las organizaciones sociales. A ello se suma la disputa del partido de gobierno entre la facción gobernante y la de Evo Morales, que también está teniendo repercusiones en las estructuras sindicales de las Trillizas.
- En este contexto, surgen voces disidentes en las bases campesinas –principalmente en la organización de mujeres– que buscan recuperar autonomía e impulsar una renovación en las estructuras sindicales que actualmente se encuentran solidificadas y articuladas al partido de gobierno.

Bibliografía

Albó, Xavier

1986 ¿Bodas de plata? o réquiem por una reforma agraria. 2º. La Paz: CIPCA.
CIPCA

2011 “Pacto de Unidad = Trillizas + Mellizas”. *CIPCA Noticias* (blog). 2011.
<https://www.cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipca-notas/pacto-de-unidad-trillizas-mellizas->.

Arce, Claudia

2022 “La militancia de ‘las Bartolinas’ 1990-2018. Igualaciones y desigualdades en las trayectorias políticas de mujeres campesinas”. Quito: Tesis de doctorado.

- Assis Clímaco, Danilo de
2016 “Ciencia en práctica. La emancipación desde las mujeres indígenas”. México: UNAM.
- Azcui, Mabel
2012 “Una protesta indígena contra Morales despierta un racismo atávico en Bolivia”. *El País*, 2012. https://elpais.com/internacional/2012/06/14/actualidad/1339663308_831954.html#:~:text=La%20novena%20marcha%20para%20impedir,pero%20no%20se%20han%20aplicado.
- Börth, Carlos
2009 “Cuarenta días que conmovieron a Bolivia y un pacto político forzado”. En , editado por Carlos Romero, Carlos Börth, Peñar, Raúl a, Fundación Ebert, y fBDM, 49-105. La Paz: FES-ILDIS/fBDM.
- Claros, Luis, y Vladimir Díaz, eds.
2022 *Crisis política en Bolivia 2019-2020*. La Paz: Plural/ Fundación Rosa Luxemburg.
- Condarco, Ramiro
1983 *Zárate, el temible Willka. Historia de la rebelión indígena de 1899 en la república de Bolivia*. La Paz: Renovación.
- Garcés, Fernando
2010 *El Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una constitución política del Estado*. La Paz: Programa NINA.
- García, Álvaro, Marxa Chávez, y Patricia Costas
2005 *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. La Paz: Diakonia/Oxfam.
- Gotkowitz, Laura
2011 *La revolución antes de la revolución. Luchas indígenas por tierra y justicia. 1880-1952*. La Paz: Plural/PIEB.
- Gutiérrez, Raquel
2009 *Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*. México: Sísifo/Bajo Tierra/ICSH.
- Jáuregui, Luciana
2019 *Las Bartolinas y sus tres ojos. Historia, identidad y conflicto social*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Mamani, Isabel
2022 “Conflictos por tierras en Las Londras, claves para entender el problema en Guarayos”. *CIPCA Notas*, 2022. <https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipca-notas/conflictos-por-tierras-en-las-londras-claves-para-entender-el-problema-en-guarayos>.
- 2010 *Entre la alianza y la confrontación. Pablo Zárate Willka y la rebelión indígena de 1899 en Bolivia*. La Paz: IFEA/Plural/ASDI/IEB.

- Morales, Juan Antonio
1999 “El retorno de los liberales”. En , editado por Fern Campero y o, 155-92. La Paz: Harvard Club Bolivia.
- Ovando, Jorge
1981 *Historia económica de Bolivia*. La Paz: Juventud.
- Patzi, Félix
2007 *Insurgencia y sumisión. Movimientos sociales e indígenas (1983-2007)*. La Paz: Yachaywasi.
- Postero, Nancy
2010 “Morales’s MAS Government. Building Indigenous Popular Hegemony in Bolivia”. *Latin American Perspectives* 37 (172): 18-34.
- Rivera, Silvia
1986 *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980*. La Paz: THOA.
- Salazar, Huáscar
2015 *Se han adueñado del proceso de lucha. Horizontes comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS*. Cochabamba: SOCEE/Autodeterminación.
2020 “Revisiting Bolivian ‘Progressivism’: The Anticommunalism of the Plurinational State”. *Latin American Perspectives* 47 (234). <https://doi.org/10.1177/0094582X20933637>.
2022 “Las condiciones para la crisis política de 2019 en Bolivia. Una mirada crítica más allá de la estéril polarización”. En *Crisis política en Bolivia 2019-2020*, de Vladimir Díaz y Luis Claros. La Paz: Fundación Rosa Luxemburg / Plural.
- Sánchez, Miereya
2015 “Ser ‘Bartolina’ en tiempos de cambio. Procesos de construcción identitaria de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’ en el Estado Plurinacional”. Documento de trabajo. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20150808105038/360.pdf>.
- Soliz, Lorenzo
2015 *Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”. Resultados, ecos y primeros pasos hacia su implementación*. La Paz: CIPCA.
- Soto, Cesar
1994 *Historia del pacto militar campesino*. Cochabamba: CERES.
- Tapia, Luis
2011 *El estado de derecho como tiranía*. La Paz: CIDES/UMSA.
- Toledo, Daniela, Suzanne Kruyt, y Huáscar Salazar
2022 “Bartolinos: el patriarcado del sindicalismo y la pandemia machista”. *Muy Waso*, 2022. <https://muywaso.com/bartolinos-el-patriarcado-del-sindicalismo-y-la-pandemia-machista/>.

Uc, Pablo

2019 *Tinku y Pachakuti. Geopolíticas indígenas originarias y estado plurinacional en Bolivia*. Tuxtla / Buenos Aires: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas / CLACSO.

Vincenti, Silvana

2021 “Tráfico de tierras: Chiquitania, un botín político y económico”. *El Deber*, 2021. https://eldeber.com.bo/especiales/trafico-de-tierras-chiquitania-un-botin-politico-y-economico_224775.

Zavaleta, René

1986 *Lo nacional-popular en Bolivia*. México: Siglo XXI.

Zegada, María Teresa, y Jorge Komadina

2017 *El intercambio político. Indígenas/campesinos en el Estado Plurinacional*. La Paz: CERES/PLURAL.

Cocaleros, globalización y luchas democráticas en Bolivia

*Roger Cortéz Hurtado*¹

Resumen

Se indaga los factores que generan el proceso de ascenso y declive hegemónico de los cocaleros del trópico de Cochabamba, como parte del proceso democrático en Bolivia, subrayando que dicha hegemonía se fundamenta, tanto en factores sociales e históricos internos, como en la demanda y mercado internacional de cocaína y la guerra de baja intensidad de EEUU contra los productores de coca.

Se apuntan lateralmente algunos rasgos propios de cocaleros de los Yungas de La Paz, que ha experimentado vivencias y presiones similares, en búsqueda de resaltar la identidad propia y particular del sujeto estudiado y lo que particulariza su experiencia.

Palabras clave

Cocaleros, coca, cocaína, hegemonía, guerra de baja intensidad, colonizadores, campesinos

1. Introducción

Se inquiera aquí el rol que jugaron y que desempeñan hoy los campesinos productores de coca del trópico cochabambino, en tanto actores del proceso democrático,

1 Investigador y analista de temas sociales, económicos, políticos, ambientales, de comunicación, transparencia, participación y control social. Director del Instituto Alternativo, desde 2012 Docente universitario, docente de posgrados, desde 1983. Miembro del Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles. Periodismo noticioso e investigativo.

buscando integrar la confluencia de los factores internos con los internacionales, asumiendo que la globalización² ha definido, con igual peso que los primeros, el nacimiento y evolución como sujeto colectivo, características distintivas de su identidad, igual que el sello característico de algunas de sus principales líneas de acción.

La gravitación de factores externos, aquí claramente mayor que con otros sujetos y actores, se debe a que la producción de hoja de coca satisface, en mayor medida que los requerimientos particulares y tradicionales de su consumo interno, la ávida demanda de un mercado global que la requiere como materia prima para la fabricación ilegal de cocaína, una sustancia muy representativa de tendencias sociales y culturales del capitalismo.

En Bolivia, los mayores empresarios locales de producción y tráfico de cocaína³ capturaron el poder estatal en 1980, con la dictadura de García Meza, y, de allá en adelante, acompañados de socios externos, no han abandonado su propósito de acumular, con escasos y cortos paréntesis, el máximo de poder económico y político, mediante su influencia y penetración en el estado.

Los cocaleros del trópico de Cochabamba establecidos en el “centro” geográfico del país, alcanzaron una alta visibilidad pública y predicamento por la intensidad de sus luchas para preservar sus cultivos de coca y contra el intervencionismo extranjero. Los cocales venían expandiéndose desde los años 70 del siglo anterior, hasta que, debido al declive de la industria minera nacional, llegaron a ser producto clave del mercado mundial y la ola de globalización que impactó sobre América Latina, a partir de los años 80 del siglo anterior.

Este trabajo intenta presentar una somera visión de conjunto, basada en la consulta de múltiples investigaciones de autores nacionales y extranjeros, focalizando la atención en el camino de construcción de hegemonía que caracteriza la trayectoria política de los cocaleros del trópico cochabambino.

2. Orígenes

Son dos las fuerzas principales que posibilitaron que un grupo especializado de agricultores, inicialmente poco numerosos y muy poco conocidos en el resto de la sociedad, llegue a ampliar, en plazo brevísimo, su importancia social y política,

2 Y, antes y con ellos, planes de “desarrollo” norteamericanos y de organismos internacionales, elaborados para el país y la región

3 Roberto Suarez Levy, el más célebre, no el único, optó por un alto perfil público que difundió ampliamente su imagen y dichos.

hasta convertirse en el engranaje principal de una amplia coalición social y política que destituyó y sustituyó en el control del poder estatal al bloque dominante formado a la sombra de la revolución nacional de 1952.⁴

La primera fuerza es la amplia y vigorosa ola de migraciones internas que, por un lado, aceleró la urbanización del país y, por el otro, empujó masivamente a indígenas y campesinos desde sus comunidades de la zona andina hacia el campo en las tierras bajas del Oriente, Sur y Norte del país. Pesó sobre el flujo migratorio orientado al oriente boliviano, primigenia y básicamente interno, una destacada influencia estadounidense, iniciada con las recomendaciones de la asesoría prestada por el Departamento de Estado de ese país, a través de la misión encabezada por Merwin L. Bohan⁵ en 1942.

La colonización dirigida por el estado, hacia las Tierras Bajas del Este, empezando con los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), después por las dictaduras militares, hasta llegar a la proyección estratégica que le ha otorgado el Movimiento al Socialismo (MAS) armoniza con la importancia decisiva que tiene en el plan de desarrollo concebido por los técnicos de la misión Bohan. Esta corriente migratoria también se expresó en el trópico de Cochabamba.

La segunda fuerza, decisiva para la creación del sujeto cocalero del trópico de Cochabamba se imbrica con el impulso globalizador mundial que también influyó sobre la recuperación democrática latinoamericana, en la década de los ochenta del siglo anterior.

La recuperación democrática boliviana estuvo precedida de cambios muy profundos, por la irrupción de nuevos sujetos sociales participantes de las luchas democráticas, antidictatoriales, antiimperialistas, de disputa por el poder y del enunciado de nuevas propuestas estatales, fortalecidas en el camino de recuperación y ampliación de libertades y derechos. Los campesinos sobresalen entre los sujetos más activos y de proyección estratégica más nítida, en ese período (Cortéz 2022, 114-116).

Desde la época de la dictadura de Banzer, es decir hace poco más de medio siglo, y por lo menos hasta el primer quinquenio de los años dos mil, el peso de factores

4 Conformado por los sectores financiero, minería, agroexportadores, cúpula militar y la alta gerencia empresarial y estatal.

5 El explosivo crecimiento de Santa Cruz –departamento y ciudad–, el modelo agrícola allá predominante son también parte de las consecuencias vinculadas al Plan que dejó como legado esa misión “de cooperación”, además de su profundo calado en las concepciones de *desarrollo* de casi todas las organizaciones políticas bolivianas; desde ese entonces hasta el presente.

internacionales, de la globalización, se intensificó de una forma muy peculiar en la región andina, desde el momento en que, el centro mismo del sistema de poder internacional, los Estados Unidos, dedicase enormes recursos a una “*guerra contra las drogas*”, haciendo de la erradicación de coca, el foco de su máxima atención durante el gobierno de Ronald Reagan (1981-89).

De esta forma, la conjunción de estos procesos, más la muy diversa y compleja agregación de luchas internas del país y el colapso del tipo de estado nacido en 1952; han conducido a que, desde 2006 a 2021, el poder del Estado sea ejercido por una organización política representativa de una coalición social, hegemonizada por la alianza entre una fracción campesina autónoma, los cocaleros del trópico cochabambino y con sectores de una nueva burguesía burocrática, originada en grupos de profesionales, académicos y funcionarios jerárquicos.⁶

Este núcleo ha sido el referente principal de la convergencia, ideológico, cultural y política de los primeros con campesinos, indígenas de tierras bajas y altas, cooperativistas mineros y la amplia colección de nuevas clases y fracciones urbanas –nietas e hijas de campesinos migrantes– y otras, con una distinta genealogía social origen, se sienten representadas y expresadas política y electoralmente por el MAS-IPSP.

La profundidad y amplitud de la aceptación popular de este proceso se verifica en que el máximo dirigente cocalero, ungido como presidente en tres elecciones nacionales consecutivas (2005, 2009, 2014), y su entorno más cercano, alcanzaron a concentrar poder, político y social, sin parangón en la historia del país.

Juan Evo Morales Ayma, presidente de los cocaleros del trópico cochabambino y, durante catorce años, del Estado, proviene de la dirigencia sindical de los colonizadores de esa región, curtida en años de una guerra de baja intensidad declarada por Estados Unidos y ejecutada por el estado boliviano, contra los cocaleros y la coca. Esta organización social fue de las primeras que coparon el espacio estatal municipal, abierto por la Ley la Participación Popular, así como actor central de la creación del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

Con esa base organizativa compitió y aventajó electoralmente a las organizaciones políticas tradicionales y construyó su papel hegemónico, atrayendo el respaldo de

6 Procedente, en su casi totalidad, de la pequeña burguesía urbana, especialista o estudiosa de Ciencias Humanas, principalmente Derecho, Política, Economía, Comunicación Social. Desde sus puestos gerenciales manejan grandes recursos estatales, con gran discrecionalidad, para dedicarse, en múltiples casos, a un posterior tránsito al sector privado, como ejecutivos y/o propietarios (de allí su caracterización de *burguesía*).

otros sectores, apelando una batería de consignas antiimperialistas, democráticas, pro indígenas, ambientalistas y pro mujer, hasta que consiguió colocarse, a partir del año 2005, a la cabeza del proceso constituyente (1990-2009) que proyectó en la Constitución, ampliamente deliberada socialmente, y aprobada en 2009, una reforma profunda del estado y la sociedad.

3. Campesinos, colonizadores, cocaleros

El bloque nacional popular, representado inicialmente por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue excluido por las fracciones burguesas nacidas de la misma entraña estatal; así, la base popular revolucionaria tomó distancia del MNR, comenzando con la clase obrera.

La autonomía social y política de los campesinos, clase social emergente de la revolución, frente al MNR avanzó más pausadamente. Desde finales de los años 70 el campesinado empezó a convertirse en punto de referencia de la remodelación del bloque popular que, al cabo de décadas, se ha reestructurado como un conglomerado clases sociales (campesinos, obreros, trabajadores urbanos asalariados y autónomos) y pueblos indígenas.

Por más de treinta años, la representación política de este bloque (campesino-obrero) se concentró en la Central Obrera Boliviana (COB), con apoyo e influencia de partidos de izquierda. Pero, entre los años 80 y 90, esa conducción colapsó (internamente por el eclipse obrero y el hundimiento del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP)⁷ generando un vacío, cubierto a la postre por movimientos sociales,⁸ principalmente indígenas y campesinos, menos afectados por la diáspora proletaria.

Durante este trayecto, en el que empieza a detectarse el arranque del proceso constituyente (1990-2009), el bloque nacional popular encuentra su referencia central alrededor de dos sujetos colectivos, muy próximos pero diferentes: los indígenas y los campesinos.

7 E internacionalmente por la caída del *socialismo* "real".

8 Reservo esta denominación a la acción directa e iniciativas de agrupación espontánea que plantean demandas, reclamos, reivindicaciones o propuestas. Nacen ante la falta o estrechez de canales de representación (partidos, sindicatos u otras instituciones similares) y suelen extinguirse con la satisfacción o derrota del planteamiento que los nucleó. Son distintos a las organizaciones sociales (sindicales, gremiales) con las que pueden actuar conjuntamente, sinérgica o contradictoriamente.

La práctica desaparición económica y social de los obreros mineros en los 80, por el cierre de las principales minas estatales, junto a la intensificación de grandes migraciones internas, de tierras altas a tierras bajas y del campo a la ciudad; las actividades de rememoración y rechazo frente al inminente V Centenario del inicio de la conquista española; la gran marcha indígena de tierras bajas, en 1990, con su demanda de cambios fundamentales en las relaciones estado-sociedad (tierra-territorio-dignidad), confluyeron y se exteriorizaron en el rescate y fortalecimiento de una autoidentificación indígena en una incuestionable mayoría nacional, verificada en el censo de población y vivienda de 2001.

En estas condiciones, las organizaciones de los colonizadores (principalmente familias migrantes campesinas pobres que ocupan nuevos territorios) fueron cobrando, dentro la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), mayor influencia y gravitación que los movimientos campesinos tradicionales, del Altiplano y los valles. Los cocaleros del trópico de Cochabamba eran ya en ese momento la fracción más organizada y activa de los colonizadores.

Numéricamente, los cocaleros de Yungas y del trópico de Cochabamba, incluyendo sus familias, representan una minoría del campesinado, lo que no ha limitado su capacidad de constituirse en un sector muy representativo del conjunto la clase social campesina, expresando nítidamente sus principales rasgos distintivos:

- 1) Su origen étnico y cultural indígena (aymaras y quechuas en su mayoría);
- 2) Su múltiple inserción laboral, con base y vínculo constante, con la pequeña y mediana producción agropecuaria;
- 3) Su papel de agentes principales de los mercados de tierra, incluyendo a los que han permitido la expansión de las ciudades, como a los cada vez más dinámicos mercados informales e ilegales en zonas agroexportadoras y cocaleras; y
- 4) su centralidad en el mercado del trabajo, como compradores y vendedores de fuerza de trabajo rural y urbana; compra/vendedores y autónomos (cuentapropistas).

Este conjunto de roles y actividades es un denominador común entre los campesinos bolivianos, que complementan sus ingresos por trabajo agropecuario con actividades productivas y comerciales de distinta índole, (transportistas, artesanos y el más amplio abanico de empleos autónomos). Estas labores se cumplen principalmente en ciudades, donde suele vivir parte o la totalidad de su familia, con lo que tienen creciente peso, vinculación y participación en la vida de los centros urbanos del país. Los empleos a los que acceden o crean, son usualmente precarios

y conforman el cuerpo de la *economía oculta* (o informal) que absorbe más del 80% de la fuerza laboral del país.

La identidad de la clase campesina ha ido adquiriendo características propias y distintas a la de su ancestro indígena, con el que mantiene una profunda, contradictoria y vital relación, que no ha inhibido que se labre una identidad propia y diferente de los indígenas contemporáneos (Cortéz 2020).

El momento de mayor proximidad entre ambos sujetos se ha dado entre los años 90 hasta inicios del siglo XXI; pero, desde el encumbramiento gubernamental del MAS, las diferencias y contradicciones entre ellos se han profundizado al ritmo del avance capitalista del país.

4. Particularidades nacionales y regionales

La coca se produce en tres países de la región andina. Colombia y Perú son actualmente los primeros productores mundiales de coca, Bolivia el tercero; pero, los acontecimientos dejan muy claro que la superficie de los cultivos está lejos de ser el factor decisivo en cuanto a efectos sociales, económicos o policiales.⁹

En Bolivia, la regularidad y la constancia de políticas públicas, compromisos internacionales y la predisposición estatal predominante a limitar drásticamente la producción de la hoja de coca ha favorecido que los productores se involucren en diverso tipo de conflictos sociales.¹⁰

Pero, ni en Perú, ni en Colombia los productores de hoja de coca, eventualmente bien organizados y combativos en ciertas áreas de esos países, se aproximan a constituir un movimiento de la importancia, influencia y proyección social y política que han alcanzado a escala nacional los cocaleros de los Yungas y el trópico de Cochabamba.

Esto demuestra que las influencias externas no alcanzan por sí solas, a definir cursos y resultados que se les suelen atribuir o esperar de ellas. Se toma como principal

9 Minorías demográficas como los trabajadores mineros, antes y ahora los cocaleros en Bolivia, tienen mejores posibilidades de destacar social y política porque sus productos exportables tienen un protagonismo económico que no se da en otros países. Por encima de eso, está la raíz indígena y su larga y peculiar experiencia en nuestro caso.

10 El Estado Plurinacional de Bolivia denunció la Convención de Viena en junio de 2011 y volvió a adherirse a ella a fines de ese año, con una reserva formal al artículo de la Convención que penaliza a la coca en estado natural.

pista para explicar esta notable diferencia, el gran peso cultural de lo indígena en Bolivia, así como sus tradiciones organizativas, sus estrategias anticoloniales, la fortaleza e irradiación social de los campesinos.

La trayectoria política de los cocaleros bolivianos y sus organizaciones se traduce en dos significativos hechos, que destacan al contrastarlos con el primer y segundo productores mundiales de coca (Colombia y Perú).

- La producción boliviana de coca, (la primera en 1980, ocupa ahora un tercer puesto¹¹ es, entre las tres, la que registra menos oscilaciones bruscas y es la más estable en las tres últimas décadas, según las mediciones que hace la oficina especializada de nnuu en los tres países.
- Bolivia es el país que registra los menores índices de violencia, entre los países productores de coca, pese al persistente avance de la fabricación de cocaína y la presencia y actuación de grupos pertenecientes a *carteles* internacionales, dentro de sus fronteras.¹²

5. Colonización y producción de coca y cocaína en el trópico de Cochabamba

Mientras el cultivo de coca en los Yungas de La Paz se remonta a los señoríos aymaras preincaicos (Cajías 1995), la producción en el trópico cochabambino empezó a cobrar importancia a inicios del siglo XX. Pero, es recién a partir de los años 50 que la curva de producción empieza un ascenso sostenido (Salazar 2009).

A falta de tradición de vínculos comunitarios locales, la pertenencia y militancia en los sindicatos, cubre y sustenta los contactos y redes sociales muy fuertes, que se han tejido al calor de la resistencia ante los embates represivos estatales para erradicar la coca y demandas por servicios básicos. Como se verá más adelante, esto viene sucediendo desde mucho antes de la migración de obreros mineros, despedidos en la “relocalización” de 1986, lo que cuestiona una idea ampliamente difundida que atribuye la politización y organización en Chapare y Carrasco a la llegada masiva de migrantes mineros, después del cierre de minas¹³ en 1986.

11 Aproximadamente un 13% del total en 2022, según UNODC.

12 Hernández, H. *Homicidios en América Latina y el Caribe: magnitud y factores asociados*, en revista Notas de Población N° 113 • julio-diciembre de 2021 • págs. 119-144. CEPAL.

13 Hay varios estudios que muestran que el sindicalismo campesino se inspiró en los sindicatos mineros y trató de imitar su solidez y eficacia de lucha, desde los años 30 del siglo pasado. Los migrantes-colonizadores campesinos siguen esa tradición mucho antes de la “relocalización”: La idea que esta modificó o “moldeó” al sindicalismo cocalero no aporta

Los núcleos productores (colonias/sindicatos) del trópico cochabambino (en sus seis municipios: Chimoré, Colomi, Entre Ríos, Puerto Villarroel, Sinahota y Villa Tunari) han sido conformados por familias campesinas migrantes, ahuyentadas por la pobreza y extrema pobreza de sus comunidades originarias (Blanes y Flores 1984).

La suma de oleadas migratorias en los años 60, 70 que se prolongan y masifican en los siguientes años, haciéndose muy intensa en la actualidad. Esta ocupación territorial en ascenso continuo, presenta un paréntesis, con tendencia a la baja, a finales de los años 90, a raíz del recrudecimiento represivo ejercido contra la expansión descontrolada de los cultivos de coca, en la década previa. En ese momento se presenta una fase de expulsión de población intimidada y amedrentada por la guerra contra la coca, la caída de los precios de la hoja y la parálisis económica de la región (Toranzo 1990).

La colonización del trópico cochabambino proviene cuantitativamente, en más de la mitad, de otras provincias de Cochabamba –incluyendo zonas altas de las que conforman el trópico– y, luego, de Oruro, La Paz, Chuquisaca, Potosí (Blanes y Flores 1984, 98). El traslado desde las yermas, altas y frías regiones de las que procede la mayoría, a las tierras ardientes, plétóricas de humedad, biodiversidad y múltiples y desconocidas amenazas (enfermedades, insectos, serpientes, depredadores) requirió de gran audacia de sus protagonistas.

Esto deja su huella en la combatividad de sus acciones y el tino de su intuición estratégica para sortear y resistir la combinación de la fuerza represiva del estado y la intervención de la mayor potencia militar, con todos sus recursos y tecnología. La violencia de estos choques se manifestó crudamente durante los años de vigencia de la guerra contra la coca igualmente en Yungas, pero en Chapare y Carrasco alcanzó sus puntos más altos y cruentos.

La colonización del trópico de Cochabamba ha estado determinada por las oscilaciones de la demanda internacional de coca,¹⁴ por la paupérrima oferta de trabajo digno, ingresos y horizonte de futuro de la economía nacional.

pruebas factuales. La estabilidad poblacional de Yungas de La Paz, matizada ocasionalmente por el avance de población citadina en algunas poblaciones no trastoca la fortaleza de la influencia comunitaria y sindical, en esa región. Más bien, ha llegado a hacerse hegemónica en algunas localidades, antes controladas por la clase media urbana gracias al poder económico de la producción y comercio de coca, muy notoriamente en los treinta últimos años (Spedding 2013).

14 Es unánime la opinión de los estudiosos respecto a que la demanda para acullicu (masticado) busca invariablemente a la coca yungueña; inclusive en el Chapare, debido a sus características (“más dulce” y “suave al paladar”).

Entre los años 50 a los años 80 se producen al menos cuatro oleadas de migración hacia el trópico cochabambino: *del nacionalismo revolucionario (1952-1963) que apoyó los asentamientos espontáneos; (...); de las dictaduras (1964-1982), (mediante) programas de colonización semidirigido (1965-1971) y, sobre todo, la colonización espontánea inducida por la pobreza y el “boom de la coca-cocaína (1972-en adelante)”*. (Salazar 2009)

Las diferencias de los tiempos y tipo de migración entre las regiones cocaleras, con sus efectos e influencias culturales y políticas, dependen en alto grado de su ubicación geográfica. Las zonas de producción de coca en los Yungas de La Paz se distribuyen alrededor de la azarosa carretera entre La Paz y el Beni, un eje hasta hoy secundario en la economía del país, en tanto que los centros de producción en Cochabamba “cabalgan” sobre la vía caminera más importante del país, Santa Cruz-Cochabamba. Los bloqueos y movilizaciones de los cocaleros del Chapare-Carrasco afectan de manera directa e inmediata la principal vía económica del país, mientras que en Yungas tienen un impacto menor.

La zona cocalera de Cochabamba está instalada en una *frontera* entre los colonizadores y los pueblos indígenas que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). En ella se manifiesta una tendencia de los colonizadores a extender, sin pausa ni tregua, la ocupación territorial, mediante un persistente avance campesino sobre el territorio indígena. Así ha nacido el mayor conflicto de los colonizadores, resueltamente apoyados por el estado, con los pueblos del TIPNIS, por el avance de una carretera (Villa Tunari-San Ignacio de Moxos) diseñada para atravesar y dividir el territorio indígena y parque nacional, abriéndolo a nuevas oleadas colonizadoras.

La diversificación y reproducción ampliada de capital originado en la coca es visible al recorrer la carretera que atraviesa el trópico de Cochabamba, donde se observa una febril actividad productiva y comercial, acompañada de una irrefrenable ampliación de áreas urbanizadas. Esto contrasta con el aislamiento relativo de los centros urbanizados en Yungas,¹⁵ donde también existe una multiplicación de negocios y parque automotor, como parte de las ganancias que se obtiene de la coca, pero, sin la articulación y fluida relación de la región cocalera cochabambina que se proyecta sobre Santa Cruz y el Beni.

15 Existe una posibilidad importante, que no he podido documentar, de que la influencia económica yungueña, más directa e importante –sin descartar otras– se proyecte sobre la ciudad de El Alto que manifiesta una fisonomía tan activa como la que se observa en el trópico cochabambino.

6. Modelo económico, intervención extranjera y cultivo de coca

La gran movilización territorial campesina, a partir de la reforma agraria de 1953, en búsqueda de mayores ingresos, calidad y oportunidades de vida, se perfila como la herencia económica y social más duradera de la revolución de 1952. En gran parte espontánea, conecta perfectamente con los planes basados en las principales recomendaciones del diseño que elaboró la misión de cooperación norteamericana encabezada por Merwin Bohan (1941) y, en 1956, el plan Eder de ajuste financiero, a cargo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La intención general de ambas propuestas es un avance modernizador capitalista, con base a intensificar y diversificar la extracción de recursos naturales, industrializar (enfaticando la agroindustria y metalurgia), ocupar los amplios territorios del este y el norte, expandiendo la economía y los mercados.

Son los pilares del modelo económico desarrollista¹⁶ que, en sus diversas variantes, más liberales unas, o más estatistas las otras, constituyen el meollo de los programas gubernamentales, del MNR al MAS, o de las dictaduras al MIR, sin solución de continuidad hasta el presente.

El conjunto de migraciones campesinas ha expandido y consolidado el mercado interno y, bajo ese manto, ha permitido la ampliación de la presencia territorial del estado.

La combinación de migraciones espontáneas y las dirigidas, o patrocinadas por el estado explica el notable incremento de la población en el trópico cochabambino que, gracias a su mayor productividad y cantidad de cosechas anuales de coca –en comparación con los Yungas paceños– ha pasado a ser el primer productor y comercializador de coca del país, aunque representa 1/3 de la superficie cultivada, frente a la de Yungas (y Norte) de La Paz.

La proscripción de la coca, por presión directa de EEUU y la casi totalidad de organismos internacionales, incluyendo en primer lugar NNUU y varias de sus

16 Ya sea para independizarse, para buscar un horizonte *poscapitalista*, o para imitar el avance de las potencias occidentales, la ideología desarrollista que campea en el continente, trata –sin lograrlo– de combinar extracción y exportación de materias primas con una industrialización fr los siglos XIX o XX– a la europea, o estadounidense, o de tipo stalinista. El resultado ha sido invariablemente el avance y consolidación de un capitalismo rezagado, con escasa industrialización y un enorme retraso tecnológico, mayor o menor según los casos, pero siempre creciente, comparado con las economías centrales.

agencias,¹⁷ que actuaron en este espacio como intermediarios o administradores de la estrategia de la *GCLD*, contribuirá a moldear el perfil de la movilización de colonizadores y sus organizaciones, antes de que cobren visibilidad en la escena política, como fracción autónoma de clase.

7. Construcción y asentamiento de la hegemonía cocalera

La capacidad de resistencia de los cocaleros obligó a los gobiernos a negociar y otorgar concesiones a los movilizados, en contraste con otros sectores sociales, silenciados y maniatados por la represión.

La lucha puramente corporativista y sectorialista por la defensa de la coca, que comparten con los campesinos comunarios de los Yungas paceños, empezó a convertirse gradualmente en una reivindicación general frente a las imposiciones foráneas y a la sumisión del estado boliviano ante ellas, a consecuencia de la omnipresencia de la *GCLD*.

En consonancia con ese cambio del sentido común colectivo, la dirección cocalera rompe la burbuja de sus demandas exclusivas, enfatizando su sentido nacional y antiimperialista, mientras intensifica su participación en los reclamos democráticos generalizados. Utiliza la participación electoral y parlamentaria de su *instrumento político* en plataforma de construcción de un perfil propio, que ensancha canales de relación con otros sectores populares. Difunde simbologías y mecanismo de comunicación de entendimiento entre los sectores cocaleros, de ellos con todos los campesinos y con el conjunto de sectores populares (Komadina 2007).

Queda como cuestión a investigar hasta qué punto la prolongada y compleja negociación cocaleros-estado ha influido para que la producción de coca en Bolivia nunca volviera a elevarse hasta lo más altos niveles que alcanzó a principios de los años 80 y mantenga hasta ahora una mayor estabilidad, en comparación con los otros países productores.

Durante el período de 1986 a 2002, año en que la reducción de cicales llega su máximo nivel, la dirigencia cocalera se entrena al máximo en el ejercicio combinado

17 “(...) desde 1948 las Naciones Unidas ordenaron una investigación sobre la hoja de coca en Bolivia y Perú, respaldada por seguidores locales, como el caso del médico peruano Carlos Gutiérrez Noriega”, Según ese estudio, impregnado de prejuicios y un claro sesgo racista (Becerra, 2021:61), la masticación de coca produce “bajos índices de inteligencia, poca memoria, incapacidad para expresarse hasta los límites de la subnormalidad” (Citado por Meza 2013, 12).

de la resistencia frente a la guerra, con una línea de negociación que le permitía anotarse puntos ante los demás sectores populares y la opinión pública.

Desarrolla al mismo tiempo una vigorosa y constante política de alianzas que pone de su parte a la CSUTCB y a la COB, entre las principales organizaciones sociales que empiezan a respaldarlos. El recuento de muertos, heridos, apresados, perseguidos y desvalijados que acumula en la guerra de las autoridades y sus mandantes contra la coca, sensibiliza al público. Fernando Salazar O. contabiliza 95 muertos civiles y 28 uniformados, entre 1998 a 2004, (Salazar 2004, 356).

La fuerza de su movimiento sobresale entre los campesinos, pero, con criterio estratégico, los coccaleros no pugnaron por lograr los principales puestos de la CSUTCB, ni siquiera en los momentos de mayor crisis y desorden interno de la confederación campesina. Optaron más bien por fortalecer sus propios sindicatos y federaciones, afianzando su gravitación en la Confederación de colonizadores, con una disciplina cada vez mayor, más vertical y centralizada, en la línea que impulsa la conducción de Evo Morales Ayma, cuya continua exposición en los medios de difusión masiva lo consagran como cabeza y símbolo del movimiento.

El proceso que despeja el camino para que los colonizadores coccaleros del trópico cochabambino, logren hegemonizar al bloque popular presenta dos características originales. La primera engloba el repertorio táctico-estratégico con que sus dirigentes participan de la creación en la Asamblea por Soberanía de los Pueblos¹⁸ (ASP), para llegar en poco tiempo a copar su dirección para utilizarla como puntal de la creación de Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP), antecesor del MAS.

Este paso concreta la reiterada aspiración de sindicatos y la propia CSUTCB de contar con un “*instrumento político propio*”, libre del control de partidos tradicionales y de cualquier otra influencia, tal cual se afirma en el VI Congreso nacional de la CSUTCB (citado por Zuazo 2009, 31).

La obstinación de las seis federaciones del trópico y, en especial, la de su perpetuo y supremo presidente, Juan Evo Morales Ayma, en crear y mantener al “instrumento político”, distingue a los coccaleros cochabambinos de cualquier otra fracción campesina, igual que la de las demás clases sociales subalternas y pueblos indígenas.

18 Alejo Veliz Lazo “ASAMBLEA POR LA SOBERANIA DE LOS PUEBLOS: ¿Qué es la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos?”, <https://www.angelfire.com/ca/pueblosoriginariosbo/> (consultado el 09 de mayo de 2023).

La presencia política y electoral del IPSP/MAS establece un viraje sustantivo en la construcción democrática del país, donde las demandas de democracia participativa y directa, así como la de “desmonopolizar la representación política” que hacen parte del proceso constituyente parecen cada vez más alcanzables. Desde el momento que una fracción campesina, inicialmente y, a continuación, el bloque nacional popular, cuentan con una organización que encabeza y canaliza sus demandas, los partidos de las clases dominantes marchan hacia su desintegración y las asociaciones de “*intelectuales orgánicos*” que quisieron representar la “*conciencia de clase o el pensamiento científico de la clase revolucionaria*” pierden el espacio paternalista que ocupaban desde principios del siglo XX.

Esta determinación autónoma, de una clase social clásicamente considerada tradicionalista y conservadora por el pensamiento marxista convencional, es intrínsecamente distinta a los prolongados intentos del sindicalismo obrero revolucionario boliviano y la izquierda partidista del país por imaginarse o tratar de convertir a la COB (sindicato de sindicatos) en un “órgano de poder” ejecutor de la revolución y molde orgánico de una nueva estructura estatal.

La creación del IPSP-MAS corrobora que los campesinos percibieron durante años la profunda crisis de representatividad de los partidos políticos, incluyendo al MNR que fue por décadas su referente, y la caducidad de los modelos paternalistas imperantes en la izquierda y muchas ONG, conducidas por expertos, técnicos o académicos (Cortéz 2021).

La segunda peculiaridad del movimiento cocalero es que en un período de pocos años supera los linderos del discurso propio y particular de su sector (defensa de sus cultivos) haciéndolo parte de una narrativa antiimperialista amplia, que recoge su experiencia, multiplicándola al reivindicar a los pueblos indígenas, como base y sustancia de la nacionalidad y su peculiar pluralidad en Bolivia. Suma a lo anterior el repertorio simbólico y narrativo del nacionalismo revolucionario y la izquierda, referido a la *defensa de los recursos naturales*. Desarrolla al mismo tiempo una vigorosa y metódica política de alianzas que pone de su parte a la CSUTCB y a la COB, entre las principales organizaciones sociales que empiezan a respaldarlos.

En esta intersección de contradicciones internas, donde sobresalen los rigores del ajuste estructural, el desempleo y el debilitamiento sindical y concurren con la presión imperial abierta, la *defensa de la boja de coca*, previamente restringida a las zonas productoras y al reclamo de un gremio trasciende a cuestión nacional (Komadina, 2006), lo que coloca a los cocaleros como la expresión concreta y tangible de resistencia antiimperialista y antineoliberal.

La ofensiva bélica norteamericana contra la coca y los cocaleros se aplicó celosamente desde 1985 hasta los primeros tres años del nuevo siglo. La embajada de EEUU y la DEA llegaron a fundirse en una sola representación en el imaginario popular, porque la intervención se hizo tan descarnada y directa, que la diplomacia y sus protocolos sucumbieron ante las órdenes abiertas, las “certificaciones” que calificaban al país sobre si era *apto* o no para esto o lo otro (ayuda, comercio, contratos); o la otorgación de visas como estímulo o castigo (Labrousse 2012). La aversión contra las imposiciones se hizo tan marcada que pasó de las marchas y manifestaciones los grafitis callejeros: *Gringos, erradiquen sus narices* (no la coca) y a la música “*Que la DEA no me vea que causa estrés*” (Atajo).

El MAS que desde su fundación concentró gran parte de sus esfuerzos en la arena electoral, catapultó a la cabeza del Gobierno, con el respaldo electoral de una inequívoca mayoría absoluta nacional, al presidente de las Federaciones del trópico de Cochabamba, en diciembre de 2005.¹⁹

Con el explícito objetivo de elevar la convocatoria electoral a un prolongado triunfo “en las mentes y corazones”, el nuevo jefe de Estado, opta por autoidentificarse como indígena,²⁰ no como campesino, o colonizador.²¹ Desanda intencionadamente, el recorrido de los indígenas aymaras y quechuas que con la revolución nacional de 1952 acogieron, entusiastas, la invocación del MNR para dejar en el pasado la identidad de *indio/indígena* y adoptar la de *campesino*. La reivindicación de la identidad indígena capta una muy patente determinación pro autonómica de una mayoría nacional, durante el proceso constituyente.

En los primeros cinco años de su gobierno, el nuevo régimen, representante del bloque popular encabezado por el MAS, abrió el arco de sus alianzas, dando espacio a reivindicaciones de otros sectores, en particular a las de pueblos indígenas. De

19 El decreto de nacionalización de los hidrocarburos en 2006, la expulsión de la DEA de Bolivia en 2008, junto a una larga cadena de decisiones diplomáticas independientes, y muchas abiertamente contrarias a posiciones de EEUU, son parte de una larga colección de acciones *antiimperialistas* del régimen del MAS.

20 El origen de ese cambio de perspectiva se relaciona con la huella que deja la rememoración del centenario V de la conquista española, el profundo impacto causado por la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas en 1990 y un ánimo colectivo que se expresó en el censo de 2001 en la autoidentificación de casi 2/3 de la población boliviana con alguno de los pueblos indígenas del país (NOTA).

21 Con el respaldo de la Confederación de colonizadores, estos renuncian a esa identidad histórica (bajo la idea de romper cualquier relación, con *lo colonial* y el colonialismo, adoptando para sí el ambiguo y confuso nombre de *interculturales*. El cambio no modifica ni el origen, tradiciones y cultura del sector, porque su tendencia a ocupar nuevos territorios, expandir las fronteras agroganaderas.

ese modo la nueva Constitución Política del Estado (CPE), al mismo tiempo que consagra a la coca, expresa propuestas principalmente sustentadas por organizaciones indígenas, como: la aspiración de un modelo de desarrollo compatible con el respeto a la naturaleza; la más amplia descentralización y la vigencia de autonomías territoriales; la participación y control social; el reconocimiento de que la propiedad de los recursos corresponde al pueblo boliviano y no del estado, que tiene el papel de administrador y muchas otras (UNITAS, 2010). Durante esa fase inicial de gobierno se ejercita una ampliación de libertades, derechos colectivos y civiles, con funcionamiento de espacios participativos.

8. Del repliegue a la marginalización

La proclamación de una honda reforma estatal, representativa de amplios sectores populares, bajo un núcleo de hegemonía cocalera, ocurrió en una situación de cambios rápidos y profundos, global y localmente.

En Bolivia, la etapa de apertura y ampliación democrática se desarrolló con contradicciones desde un inicio. La voluntad del núcleo hegemónico permitió la aprobación de una CPE de avanzada, pero, la amplitud de los acuerdos en que se sustentan han ido estrechándose, como lo evidencia la cadena de atropellos de todos los órganos estatales contra la CPE, de manera muy visible a partir del segundo mandato presidencial (Cortéz 2022).

El *instrumento* (MAS/IPSP), donde la dirigencia cocalera tiene la última palabra, empezó desde 2010 a deshacerse de sus aliados políticos y sociales como los indígenas. La prácticas iniciales de búsqueda de consenso y acuerdos igualitarios ha transitado hacia una práctica de cooptación de la dirigencia de las mayores organizaciones sociales (principalmente las campesinas, las de cooperativistas mineros, transportistas) y de división de las que no se someten.

El caudillismo extremo, la ocupación forzada, gran parte de veces, de todos los espacios estatales y la determinación de permanecer indefinidamente en el poder, hicieron crisis en 2016 (derrota en referendo popular) y en 2019, causando la fuga de las cabezas del Gobierno. Un año después el MAS pudo retornar al control del poder del estado, con una victoria de 55% de votos.

El regreso alivió brevemente la crisis política²² que ahora afecta la unidad del MAS y de su base corporativa, cuyos dirigentes pugnan por recuperar y acaparar

22 Abarca la concentración de *grandes obras*, como la planta de urea de YPFB en Bulo Bulo, aeropuerto internacional de Chimoré, centro de alto rendimiento en Villa Tunari, con un

privilegios. El desmoronamiento hegemónico, dentro del MAS-IPSP y del conjunto de la sociedad también está íntimamente ligado al descenso, casi vertical, de la presencia física e influencia de la intervención estadounidense (y con ella de la GCLD), dado el enfriamiento y distancia entre el gobierno de Morales Ayma, desde su inicio y con un pico dado por la expulsión del embajador de EEUU 2011 y de la DEA en septiembre de 2008. Con el tiempo, esta ausencia directa desgasta la potencia del simbolismo antiimperialista que los cocaleros estampaban como firma en sus alianzas con otros sujetos sociales y socava la narrativa del gobierno, cuando busca atribuir todos sus problemas y tropiezos al *imperialismo*.

La intensa y constante presencia política del máximo dirigente cocalero de Cochabamba, en su papel de expresidente de Estado, igual que la adhesión sin fisuras de las Seis Federaciones del Trópico a las acciones de Morales A., incluyendo su papel en la fragmentación del MAS/IPSP, tiene efectos sobre la percepción colectiva frente a *los cocaleros de Chapare*. Ahora es bastante más probable que sean identificados como privilegiados (por inversión pública, poder político y la importancia económica de la hoja de coca), que con la imagen de quien puede enfrentar exitosamente al imperio y rodearse de sujetos aliados.

Las bases del poder hegemónico construido por este sector se han debilitado externa e internamente, al compás del crecimiento de sus demandas e imposiciones corporativistas (toda experiencia del TIPNIS), su respaldo incondicional a políticas gubernamentales contra otros sujetos sociales y, desde luego, a la difuminación de la GCLD de la escena política nacional y regional, al mismo tiempo que cobran fuerza inusitada la presencia y violencia de los grupos transnacionales de traficantes de drogas ilegales.

El cuasi retiro voluntario del expresidente en Villa Tunari, corazón geográfico y político del territorio cocalero cochabambino, representa con fidelidad una nueva relación de fuerzas, donde se acumulan los datos de la ausencia de los cocaleros en el núcleo hegemónico y la tendencia de que lleguen inclusive a resultar marginales dentro del bloque social que controla el estado desde 2006.

valor de más de 7.000 MM de bs (ver <https://www.paginasiete.bo/economia/chapare-cinco-empresas-y-obras-estatales-que-costaron-bs-7173-mm-no-se-usan-BIPS295958>) hasta la priorización de demandas municipales que superan, entre 2011 a 2019) los 1.400 MM de Bs, frente a los 318 MM de bs, en Yungas, en el mismo lapso (ver <https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/-34evo-cumple-34-potencio-el-chapare-con-417-obras-y-a-los-yungas-otorgo-solo-138-406050>)

Bibliografía

- Barrios-Morón, Raúl
1993 *La política contra las drogas en Bolivia. Interdicción y guerra de baja intensidad.* Nueva Sociedad 123 (enero- febrero 1993): 35-49.
- Becerra, Mauricio
2021 *Produciendo catatonias y psicosis artificiales: Carlos Gutiérrez-Noriega psiquiatría experimental en Perú (1936-1950).* Barcelona: Tesis doctoral, Institut d'Història de la Ciència Universitat Autònoma de Barcelona.
- Carter, William y Mamani Mauricio
1986 *Coca en Bolivia.* La Paz: Editorial Juventud.
- Centro de Documentación e Información Bolivia e Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
1992 *100 documentos. Coca-Cronología. 1986-1992.* Cochabamba: Kipus.
- Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
1993 *Economía política de las Drogas.* Lecturas Latinoamericanas. Cochabamba: CLACSO.
- Comisión Andina de Juristas
1989 *Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes.* Lima: CAJ.
- Cortéz H., Roger
2023 *Lo popular y la democracia plural en Bolivia en La trayectoria de la democracia en Bolivia 40 años de lucha, sueños y esperanza (1982-2022)* La Paz: KAS Bolivia; Plural.
- 2022 *Del auge a la Descomposición de un proceso de cambio. Bolivia 2013-2021.* Pan para el Mundo-CEP; Plural.
- 1992 *La guerra de la coca. Una sombra sobre los Andes.* La Paz: CID-FLACSO.
- Del Olmo, Rosa
1992 *¿Prohibir o domesticar?* Nueva Sociedad.
1989 *Drogas: distorsiones y realidades,* Revista Nueva Sociedad 102: 81-93.
- Escohotado, Antonio
1989 *Historia general de las drogas.* 3 tomos. Madrid: Alianza editorial.
- Flores Gonzalo y Blanes José
1984 *Dónde va el Chapare.* Cochabamba: CERES.
- Guzmán, Michael y Rojas A.
2012 *¿Y qué de la Participación?: Caso de Estudio PDM 2006-2011 Municipio Villa Tunari.* Tesis de licenciatura., Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón.
- Komadina, Jorge y Geffroy Céline
2007 *El poder del movimiento político. Estrategia, tramas organizativas e identidad del MAS en Cochabamba (1999-2005)* La Paz: CESU; DICYT-UMSS; PIEB.

- Labrousse, A.
2012 *Geopolítica de las drogas*. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
- Mamani, Wilson
2014 *Movimientos sociales en torno a la producción de coca en Bolivia: políticas de asentamiento, producción-erradicación de coca y desarrollo alternativo en el trópico de Cochabamba Bolivia, 1920-2006*. Tesis doctoral., Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Meza, Mario
2013 *El enfoque médico social sobre el uso y consumo de la coca y la cocaína en Perú en la primera mitad del siglo XX*. Lima: Universidad Antonio Ruiz de Montoya, S.J.
- Ramos, Sandra
2011 *Las Federaciones del Trópico de Cochabamba en el proceso de construcción de un Instrumento Político (1992-1999)*. Informe de investigación. La Paz: IDIS-UMSA.
- Roncken, Theo
2004 *La lucha contra las drogas y la proyección militar de Estados Unidos*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala.
- Salazar, Fernando
2009 *Movimientos Sociales en Torno A la Producción de Coca*. Cochabamba: CLACSO, IESE/ASDI-SAREC.
- Spedding, Alison
2020 *Masucos y Vandálicos*. La Paz: Instituto editorial Mama Huaco.
2019 *Kawsachum coca: la economía campesina cocaleros en Los Yungas y el Chapare*. 3ra edición. La Paz: Mama Huaco.
2013 *Chulumani flor de clavel Transformaciones urbanas y rurales, 1990-2012*. La Paz: PIEB.
- UNITAS
2010 *El Pacto de Unidad y el Proceso de Construcción de una Propuesta de Constitución Política del Estado*. La Paz: UNITAS-Centro Cooperativo Sueco.
- UNODC
2023 *Global report on Cocaine 2023 - Local dynamics, global challenges*. Viena: UN Publications.
2022 *Estado Plurinacional de Bolivia. Monitoreo de cultivos de coca 2021*. La Paz: UNODC.
- Zuazo, Moira
2009 *¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia*. La Paz: ILDIS.

La COB y los años de la decadencia en el siglo XXI

*Lupe Cajías*¹

Resumen

El texto describe la relación de la principal organización sindical, la Central Obrera Boliviana (COB, 1952) con el Estado. Hace un recorrido de los hitos históricos más notables de esa entidad en sus 70 años de funcionamiento y subraya las características con las cuales inició sus actividades.

El desarrollo central muestra la pérdida de la centralidad minera y cómo diferentes factores internos y externos contribuyeron a la decadencia de la otrora “gloriosa COB” y de su columna vertebral, la Federación de Mineros.

A medida que decaía el protagonismo de la COB, otros actores sindicales, no siempre urbanos ni siempre asalariados ni orgánicos, asumieron el protagonismo de las protestas sociales, en relación con la COB o a pesar de la COB.

Palabras clave

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Central Obrera Boliviana, Centralidad Minera, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Coordinadora de las Seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Pacto de Unidad, CONALCAM.

1 Periodista, historiadora y escritora boliviana.

1. Introducción

Un organismo vivo cumple un ciclo: es engendrado con algún tipo de semilla, nace, crece, madura, quizá se reproduce, probablemente logre envejecer y al final muere. Cuando una institución empieza tiene la posibilidad de durar décadas –hasta siglos–, siempre y cuando sea capaz de mantener una coherencia con sus orígenes y principios fundamentales y a la vez adecuarse a los tiempos, a las modernidades. En cambio, si se olvida de sus principales objetivos, una entidad deja de tener gravitación, agoniza y termina desapareciendo.

La Central Obrera Boliviana (COB) cumplió 71 años el 17 de abril de 2023 como un cuerpo maltrecho y decrepito, casi sin aliento. ¿Qué pasó con su antiguo vigor? Aparentemente estaba destinada a permanecer, pero sus propios protagonistas acabaron por enterrarla después de una larga agonía de tres décadas.

Este texto enfatiza que la pérdida de la centralidad minera (proletaria) en el máximo organismo de los trabajadores bolivianos (asalariados y no asalariados) significó su extravío. La afiliación masiva de sectores agrarios también influyó en el desplazamiento de las vanguardias y la capacidad de movilizaciones quedó en agrarios y cocaleros. El engranaje creciente de la COB con organismos creados por el Movimiento al Socialismo (MAS) y su relación con ese partido quebró medio siglo de independencia de clase. Hace un rápido recorrido histórico desde su creación (1952), la etapa de mayor crisis (1986-1999) y el desenlace (2008-2020).

2. Las primeras etapas de la COB

La COB fue fundada a los pocos días de la victoria de las corrientes políticas y sindicales surgidas después de la Guerra del Chaco contra Paraguay (1932- 1935). Un conjunto de ideas, de personajes y de hechos contribuyeron a la llamada Revolución de abril de 1952.

Las huestes de los barrios periféricos (comandos) y la intervención definitiva de los mineros que bajaron desde Milluni al centro paceño inclinaron la balanza a favor del principal partido involucrado, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. El MNR, fundado en 1942, había preparado un golpe de estado contra el gobierno que desconoció su triunfo electoral de 1951. Ese partido ya tenía amplia experiencia en conspiraciones, combates callejeros y revueltas y había logrado participar en el régimen de Gualberto Villarroel (1943-1946) con apenas unos meses de existencia.

El putsch, como se decía entonces, se transformó en una insurrección popular a medida que pasaban las horas desde el amanecer del miércoles 9 de abril. Los intentos de rendición desde una corriente del MNR o de pactos con los antiguos gobernantes fracasaron. En vez, las fuerzas sindicales y vecinales aliadas con carabineros y con sectores de la clase media, resistieron hasta vencer en la mañana del 11 de abril.

Tanto en La Paz, como en Oruro y en las minas, la organización de los proletarios agrupados en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB, fundada en 1944) fue decisiva para definir el resultado de los combates callejeros, la toma de cuarteles y la derrota del ejército convencional.

Los mineros habían enfrentado durante seis años a los gobiernos llamados del “sexenio” o de la “rosca minero feudal” con paros, huelgas, tomas de rehenes, conflictos permanentes. Usaban la dinamita para detener a las tropas militares, pero también tenían armas y la mayoría sabía emplearlas por haber participado en la guerra internacional.²

A fines de la década de los 40, se sumaron con vigor otras organizaciones sindicales como los fabriles en las ciudades, principalmente en La Paz, Oruro y Cochabamba; los ferroviarios en todos los tramos de la red de trenes; los agrarios (indígenas) en las haciendas, principalmente del altiplano y de los valles; y también los artesanos de diversos oficios, los constructores, los gráficos, los estudiantes, los trabajadores en salud, los maestros. Además, actuaban otros grupos con menor impacto en la economía, como las floristas, las cocineras, los carpinteros y los albañiles, pero muy combativos.

Antes de abril de 1952, los sindicalistas habían participado en “ensayos generales” como la guerra federal de 1949, la revuelta fabril de 1950,³ las tomas de haciendas y un gran número de paros, huelgas sectoriales y huelgas generales entre 1946 y 1952.

Esos protagonistas ganaron en las calles, pero el MNR asumió el gobierno, poder que duró formalmente hasta 1964. Derrocado en noviembre de ese año, varias de sus medidas políticas como la Reforma Agraria, la nacionalización de las minas más grandes y el voto universal permanecieron. Además, los movimientistas

2 Era una organización disciplinada y con conciencia de clase, aspecto largamente expuesto por autores bolivianos y extranjeros.

3 El resumen histórico se basa en Lupe Cajías, Lechín, historia de una leyenda, (Cochabamba, Amigos del Libro, 1994, Tercera Edición) 45-194

desde las distintas fracciones del nacionalismo (desde corrientes fascistas hasta simpatizantes de León Trotsky) se mantuvieron en el poder central varias décadas más y hasta la actualidad en poderes departamentales o locales.

También es importante recordar que la COB surgió de las cenizas de otras centrales obreras que fueron organizadas desde los años 20 como federaciones o como organismos más amplios, de orientación anarquista o marxista. Eran intentos de los partidos políticos de tener al sindicalismo como un apéndice de su estructura. Principalmente los comunistas, allegados con la línea del PC soviético, querían una central dependiente del partido.

Los intentos de unidad y los sucesivos fracasos mostraron que el proletariado boliviano prefería una organización pluralista y unitaria, como era la FSTMB desde su fundación. Ese dato es muy importante para entender la situación actual, cuando tanto la COB como la FSTMB actúan bajo las instructivas del partido en el gobierno.

Los elementos constitutivos del sindicalismo boliviano eran: el territorio, principalmente minero con sus características de concentración poblacional que dan al movimiento minero un rostro único; la independencia de clase y por tanto de todo partido político y la combatividad.⁴

En el siglo XXI, especialmente desde 2006 a 2022 qué tenemos: ¿poder dual? ¿cogobierno? ¿cooptación? ¿clientelismo?

3. Escenarios y Personajes

Casi todos los textos destacan el germen de la organización y de la capacidad de protesta del proletariado boliviano en las minas ubicadas en el departamento de Potosí, fundamentalmente en el eje Uncía-Catavi- Llallagua-Siglo XX (Provincia Bustillos); hacia el sur, el incansable Sumaj Orko o Cerro Rico, al borde del centro urbano más famoso de la colonia. También Porco, hasta el llamado Complejo Central Sur con decenas de minas medianas y chicas en las antiguas provincias de los Chichas:⁵ Huanchaca, Pulacayo, Chorolque, Ánimas, Siete Suyos, Telamayu. Hacia el norte, casi formando una unidad con Potosí, la famosa y rica mina de

4 Hace poco publicamos un panorama sobre las características de ese proletariado, que reproducimos a continuación. El punto central hace referencia al Poder Dual; ¿hubo o no poder dual de la COB y del MNR en los primeros años de la Revolución de Abril? Se habló también de cogobierno en 1971 con el régimen militar de Juan José Torres.

5 Lupe Cajías, Poder Dual. In: Cajías y Velásquez (2021). Un amor desenfrenado por la Libertad. Antología de la historia política de Bolivia, Plural. La Paz. Pp.

Huanuni, en la provincia Dalence del departamento de Oruro. San José, en plena ciudad de Oruro y completando con los centros mineros en el departamento de La Paz: Colquiri, la rica cordillera del Quimsa Cruz con las emblemáticas Corocoro, Viloco y decenas de socavones más pequeños, hasta Milluni y muchas bocaminas repartidas desde la cordillera andina hasta el pie de monte en Los Yungas, además de la presencia de yacimientos auríferos que tienen su propio desarrollo.

Aunque en la última mitad del siglo XX también han entrado a la explotación reservas en otros departamentos, en las estribaciones de la cordillera, incluso el hierro en el Mutún, en la frontera con Brasil y hay decenas de corrientes de agua con oro aluvial, estos espacios no formaron parte de la formación política de los obreros bolivianos.

En cambio, la mayoría de los dirigentes más famosos de las revueltas mineras, de la FSTMB, y de la COB eran criollos, más blancos que mestizos, más urbanos que campesinos, de saco y corbata más que de montera y abarcas. Salvo algunas excepciones, los dirigentes no eran los que morían en los socavones o los que disparaban a los soldados, los que lanzaban las dinamitas o los que rodeaban los cuarteles.

Los mineros, así con ese nombre tan general, eran los combatientes, los proletarios, la clase en sí y para sí, los asombrosos guerreros, los incansables y los maestros para el resto de los dirigentes sindicales y políticos. Pero no tenían rostro y morían sin nombre ni apellido bajo cruces blancas perdidas en el páramo.

El dirigente era letrado, urbano, carismático, ligado a diferentes niveles del poder, con posibilidades de moverse entre estratos diversos e, incluso, con amplios movimientos de cintura para llegar a salones elegantes o para compartir en la cantina del campamento. Llegaron a ser parlamentarios, ministros, embajadores, historiadores.

Por ello, la figura de Juan Lechín Oquendo no era extraña para el minero de base, aunque ninguno de sus rasgos físicos y su forma de vivir y de amar podía compararse con la cotidianidad del minero en el socavón. Casi por una casualidad, el antiguo perforador llegó a ser secretario general de la FSTMB cuando ésta fue creada el 11 de junio de 1944. Por sus gestiones en La Paz, sede del gobierno, fue nombrado secretario ejecutivo en 1945, cargo que ocupó hasta 1987.

Lechín personificó al dirigente que reflejaba el sentimiento de las bases. Intentó mantener la unidad de los mineros, que tenían procedencia anarquista, nacionalista, marxista, y de otras ramificaciones de izquierda, pero también de otros que militaron en nacionalismos anticomunistas, católicos, independientes.

Representó las etapas más lúcidas de la FSTMB y también de su fuerza numérica, incluyendo a los trabajadores petroleros. Esos obreros eran los responsables del ingreso de divisas al país y de crear la dinámica económica a lo largo del siglo XX.

Esas características pasaron a la COB desde su fundación: las carteras desde el primer directorio, las demandas economicistas y también ideológicas, la aprobación de métodos de lucha como la acción directa, la unidad, la independencia de los partidos, el rechazo a empresas capitalistas, principalmente las mineras.

El MNR tenía influencia en la mayoría de los dirigentes. Había ayudado a la fundación de la FSTMB con infraestructura para su congreso y con la tramitación de su personería jurídica y otras gestiones. Sin embargo, los anarquistas, trotskistas, independientes y otros impidieron que el partido controle a los sindicatos. Lechín respetó el deseo de los trabajadores de mantener la independencia de la Federación y esa fue la herencia más preciada del sindicalismo boliviano.

El 17 de abril, a las 11:35, fue fundada la Central Obrera Boliviana y nombró a Lechín como Secretario Ejecutivo; a Germán Butrón (fabril), como Secretario General; a Mario Torres (minero), Secretario de Relaciones; Ángel Gómez, Secretario de Conflictos; José Luis Jofré, Secretario de Hacienda; Julio Gonzales, Secretario de Prensa y Propaganda; Edwin Moller, Secretario de Organización (Posteriormente Mariano Baptista).

Este equipo de la anhelada central obrera unitaria que a la vez cumplía funciones en el gabinete (aunque en amplia minoría) fue el rostro que más confundió. Poder dual, obreros en el poder, organizaciones sindicales en el Poder Ejecutivo, la brigada minera en Palacio de Gobierno. ¿Otro juego de espejos?

Su primer documento fue el plan de lucha para lograr la nacionalización de las minas y de los ferrocarriles, la reforma agraria, la diversificación industrial, defender las conquistas sociales, la derogatoria de las disposiciones anti obreras. Un asunto que marca una diferencia profunda del caso boliviano con otras futuras revoluciones, como la cubana en 1959 o la sandinista en 1979 es que la COB reitera y subraya su “independencia política” de cualquier partido, aún entre los ecos de la victoria del 9 de abril.

La creación de una empresa estatal, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), el control obrero y el debate del derecho a veto, la cogestión, fueron largos caminos de luces y sombras, de clientelismo y de heroísmo, de oasis momentáneos y de las más fuertes desilusiones.

La presencia obrera en el directorio era minoritaria, dos contra cinco (y dos elegidos por el gobierno de una terna de la FSTMB). Los primeros directores, Mario Torres y Luis Kuncar, se encontraban totalmente identificados con el MNR y jalados por tres intereses: empresa, federación, gobierno. La COB había planteado en 1952 que el control obrero fuera colectivo, un *Comité Obrero* con carácter más revolucionario. En algún momento, se cambió el planteamiento por control obrero individual.

Sin embargo, la FSTMB entró en un letargo que recién despertaría cuando los problemas económicos, los planes fomentados por Washington, el aparente retroceso de la Revolución que no llevó el estado de bienestar a los hogares mineros, quebraron la alianza del MNR con la Federación de Mineros, con la COB y con el propio Lechín.⁶

Hubo muchos intentos para mantener la ilusión de ese “poder dual”, pero el nuevo gobierno surgido en las urnas en 1956, presidido por Hernán Siles, los intentos de crear bloques restauradores para quebrar la unidad sindical y las persecuciones, como en los años de la rosca, terminarían por sepultar la ilusión.

En 1971, con la experiencia de la Asamblea Popular; en 1984, con los intentos de recuperar la cogestión obrera, el control obrero en la COMIBOL o en la planta de Karachipampa; en noviembre de 1979, con el manejo del poder político desde las calles; con la fuerza del sindicato frente al poder central, se fortaleció el debate entre historiadores y sociólogos sobre ese doble poder; ese doble estado que jalonaba los destinos de Bolivia desde las bases.

Los años de las dictaduras militares significaron la clandestinidad, el apresamiento, el exilio y también la muerte de dirigentes obreros. Hubo masacres en las minas desde el último año del MNR, en 1963, y luego en 1965, 1967, 1971, 1975 y una larga lista de conflictos, principalmente en el occidente del país. La represión afectó a muchos líderes y a sus familias, además de la muerte de decenas de proletarios anónimos.

Es posible que en estos dieciocho años de resistencia se fuesen infiltrando los primeros síntomas de decadencia: la corrupción de las dirigencias a través de los

6 Agustín Barcheli, historiador peruano opinaba en una entrevista con esta autora (*) que Lechín tuvo la posibilidad en más de una ocasión de ampliar su poder o de tomar el poder para la clase obrera, por las divisiones internas del MNR y porque durante meses la fuerza militar estaba en las milicias obreras y campesinas. El curso de la revolución podría haberse definido en las calles.

llamados “coordinadores laborales” que reemplazaron a los elegidos en los congresos orgánicos y eran parte del gobierno militar. Esto también afectó la llamada “democracia obrera”. La llegada de la televisión estatal a las minas introdujo otros mensajes y otras imágenes que mostraban otras formas de vida a los obreros; las famosas radios mineras y los teatros perdieron paulatinamente su influencia.⁷

Sin embargo, ni la represión, ni la corrupción, ni la enajenación afectaron la combatividad de los mineros y de la COB, su unidad y su independencia. A diferencia de otros resultados en el Cono Sur, en Bolivia hubo permanentemente huelgas y protestas. Fueron mujeres mineras las que encabezaron en 1978 la movilización civil para empezar la apertura democrática, profundizada desde 1982 como una de las más participativas del continente.

Durante los primeros años de gobierno civil, en la etapa de la Unidad Democrática y Popular, la FSTMB y la COB rechazaron las medidas económicas. Durante 1983, pero sobre todo a lo largo de 1984, los mineros volvieron a tomar las calles paceñas y a paralizar la economía. Los afiliados a la COB cumplieron sucesivas huelgas en todo el país.

La inestabilidad política y económica obligaron a acortar el periodo del primer gobierno constitucional en 1985. Empezaba otra etapa.

4. El 21060 y la pérdida de la centralidad minera

En agosto de 1985, la aprobación del Decreto Supremo 21060, transformó las relaciones económicas y sociales que con leves modificaciones se habían mantenido desde los gobiernos del nacionalismo revolucionario, incluyendo las dictaduras militares.

En menos de tres minutos, un mensaje presidencial pulcro y austero anunció que el país se moría. Para salvarlo eran necesarias duras medidas de estabilización económica. Esa noche, mientras los bolivianos seguían asustados la transmisión de Canal 7, empezaba un periodo de veinte años que ordenó la macroeconomía y pintó de un rostro diferente al capitalismo de estado vigente desde 1952. De otro lado, desarticuló a los actores sociales tradicionales. Ni la FSTMB ni la COB volvieron a sus cauces originales.

La “Marcha por la Vida”, en 1986, como reacción al despido masivo de obreros en las principales minas, fue un adiós –como el acto final de una obra– épico pero

7 Entrevista realizada en el Café Haití, Lima, Perú en 1986. Archivo personal Lupe Cajías.

fatídico, de medio siglo de combates proletarios en las minas. Nuevos protagonistas que habían empezado a ocupar tímidamente los titulares de la prensa se convirtieron en los nuevos actores en las calles y en los caminos.

Alrededor de 40 mil obreros y sus familias salieron de los campamentos de forma paulatina pero sostenida. Fueron a buscar trabajo como cocaleros, transportistas, albañiles, comerciantes, contrabandistas. Alejados de las minas perdieron el entramado territorial y de clase que les había dado la vanguardia del movimiento obrero boliviano.

Como veremos en los siguientes párrafos, la pérdida de la centralidad minera significó a la vez la pérdida de la consciencia de clase; confundió los objetivos de las batallas; truncó la idea de crear un Hombre Nuevo a cambio de fomentar el consumismo y otras ambiciones, así sea con métodos legales, ilegales o delincuenciales. Las movilizaciones populares y la combatividad continuaron sin esa guía lúcida que fue la FSTMB.

La agonía duró décadas, hasta el entierro sin sepulcro conocido, cuando las directivas de la FSTMB y de la COB decidieron entregar los sindicatos bolivianos a un partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), a cambio de dádivas en dinero, vehículos, hoteles.

Así, como una comedia, cuando los asalariados podían ilusionarse finalmente con la toma del poder, el poder los tomó a ellos y los lanzó al vacío. Añicos.

La pérdida de la centralidad minera dejó sin su columna vertebral a la COB. Son varias las razones objetivas de esa decadencia: las huelgas en las minas estatales (sin considerar el creciente poder de las cooperativas mineras) no tenían el mismo efecto económico que en las setenta años anteriores; la disminución de los obreros asalariados les quitaba protagonismo, al punto que en más de una ocasión se cuestionó la vigencia de los estatutos que reservan la secretaría ejecutiva para un representante minero; los despedidos de trabajadores asalariados en fábricas, ferrocarriles y otras empresas también impactó en la capacidad de movilización de la COB.

5. La COB y la CSTUCB

El creciente protagonismo de los sectores agrarios también aportaba para trastocar la esencia proletaria (y de los sectores asalariados) que caracterizó originalmente a la COB. Fundamentalmente desde la unificación de las centrales campesinas y

la superación del llamado Pacto Militar Campesino de los años 60, aparecieron liderazgos agrarios con gran poder de convocatoria como fue el caso de Genero Flores. La fundación de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), auspiciada por la propia COB en 1979, fue al mismo tiempo el nacimiento del hijo destinado a engullir a su progenitor.

La CSTUCB mostró su poderío al poco tiempo de su creación, ya en diciembre de 1979 con la primera gran huelga rural y el bloqueo de caminos, recreando los métodos de lucha de sus antepasados andinos en 1780. La presencia de Tupac Katari (Julián Apaza), sus ideas, su rebelión y el cerco a La Paz tienen a la vez una larga y creciente influencia en esa organización y en otros líderes aimaras, que luego fueron parte del MAS.

La Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” (esposa y lugarteniente militar de Katari) fue otra novedad. Anteriormente la COB y las confederaciones sindicales se limitaban a una secretaría femenina. Las “Bartolinas” consiguieron levantar una organización propia con alcance nacional y con una gran capacidad de organización, rebelión y resistencia.

Los campesinos y las mujeres rurales representaban desde su inicio una fuerza mayoritaria, mucho más grande que cualquier otra federación obrera. Tenía un alcance territorial creciente, que comenzó en el altiplano norte pero que pronto cubrió los valles centrales, el sur, hasta llegar a los últimos rincones de Bolivia. Por la propia dinámica de la doble residencia, también sus afiliados podían estar en las ciudades, en los barrios populares, pertenecer a otras estructuras como las vecinales o tener otros trabajos como constructores, transportistas, artesanos.

Esa fuerza exigió en más de una ocasión conducir la COB, a pesar de los estatutos. La negativa de los mineros en acceder era asunto de sobrevivencia. Aunque formalmente la CSUTCB ocupa una cartera secundaria, es la entidad que puede realizar sus propias protestas de forma autónoma y con contundencia como mostró el 2000, el 2001, el 2003 y durante el siglo XXI.

Desde fines de 1999, la prensa registra la posibilidad de que los campesinos se hagan cargo de las principales carteras de la Central Obrera Boliviana en el congreso que fue convocado para enero de 2000.

Los trabajadores del agro plantean asumir el Comité Ejecutivo de la COB. Los actuales dirigentes dicen que eso es algo que tendrá que resolver el duodécimo congreso ordinario de la organización laboral. El exasesor legal de la COB, Gonzalo Trigosó, opina que no es el momento. La última palabra se dirá el 17 de enero (*La Razón*, 29 de diciembre de 1999).

Evo Morales, dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, y Felipe Quispe, Secretario Ejecutivo de la CSUTCB insistían en debatir ese derecho en el Congreso de la COB convocado para el 17 de enero de 2000 en El Alto. La organización campesina sólo tenía la segunda secretaría que debería disputarse entre las distintas agrupaciones agrarias.

Inmediatamente, los mineros rechazaron la sugerencia de Morales y de Quispe y anunciaron que no cederían “ni un milímetro” sus derechos en la COB. Tampoco los otros sectores asalariados ciudadanos estaban dispuestos a abrir más espacios a los rurales o a cambiar el Estatuto Orgánico.

Froilán Fulguera, dirigente de la FSTMB planteaba que la presencia mayoritaria minera se consiguió “con años de lucha y a costo de la sangre de los dirigentes”. Mientras Quispe “El Mallku” adelantaba que la CSTUCB presentaría una tesis política para justificar la toma del cargo ejecutivo en el directorio de la COB.

Inmediatamente se pronunciaron los fabriles a través de su dirigente Jhony Butrón apoyaron a los mineros, a pesar del anuncio de Quispe de abandonar a la COB si no cambiaba su “estructura clasista” y se adecuaba a los nuevos tiempos.

El Mallku argumentaba que la lucha del sector era diferente a la del sector asalariado, porque para los originarios era prioridad la defensa de la tierra, del territorio, del agua, de los coteles y de otros recursos naturales renovables. El dirigente aimara criticaba a los mineros que se creen como si “fueran de origen divino” y mantienen a la COB estática.

Este debate no dejaba de ser importante, aunque no encajaba en las visiones teóricas sobre la vanguardia proletaria en las luchas revolucionarias. Sin embargo, los futuros sucesos con los bloqueos durante el año 2000, el avance electoral de Morales en 2002 y la victoria del MAS en 2005 mostraron que Felipe Quispe era más visionario que los dirigentes mineros.

Los campesinos no querían enfrentar a los obreros, pero insistían en que la agenda por el cambio y por la conquista del poder no era la misma que en 1952 o que en 1986. Evo Morales y, en ese momento, sobre todo Felipe Quispe tenían un liderazgo y una presencia mediática que opacaba a los otros líderes sindicales.

Quispe planteaba no sólo el poder para los sectores oprimidos sino imponer el “poder indígena”, sea por la vía legal o con la lucha revolucionaria “desde el campo hacia la ciudad”. Sus principales mentores no eran Carlos Marx o Vladimir Lenin, ni siquiera Fidel Castro o Ernesto “Ché” Guevara sino Tupac Amaru (José Gabriel

Condorcanqui), Tupac Katari y Zárate Willca (Pablo Zárate), que lucharon por recuperar las tierras de comunidad.

Al invocarlos, el Mallku mostraba la disposición de los afiliados a la CSUTCB de usar los mismos métodos de lucha de sus antepasados, fundamentalmente el cerco a las ciudades y los bloqueos de carreteras. Estas formas se convertirían a lo largo del siglo XXI en una constante, cada vez con más alcance territorial. Atrás quedaban las huelgas mineras que impactaban con tanta fuerza en los años 50.

Las marchas campesinas desde El Alto hacia la ciudad de La Paz mostraban el poderío de la CSUTCB. Poco a poco se practicaba la toma simbólica del espacio urbano. El 12 de enero de 2000, los campesinos bajaron a la “Hoyada” desde puntos similares del cerco de Katari en 1780 contra las leyes promulgadas por el gobierno y en defensa de los cocaleros en el Chapare.

Quizá otra hubiese sido la historia de la COB si en ese momento de tanta debilidad orgánica aceptaba dar la cabeza ejecutiva a la CSUTCB.

6. Cocaleros, ¿herederos de la centralidad minera?

Entre las nuevas organizaciones que surgieron desde la etapa democrática, más aún después del D.S. 21060, están las federaciones de campesinos cocaleros en el trópico de Cochabamba que fueron convirtiéndose en la fuerza movilizadora más importante en los años 90 hasta el 2006. Ese año conquistaron la presidencia de la república con su máximo líder, Evo Morales, dirigente al mismo tiempo, el Movimiento al Socialismo (MAS).

La organización cocalera fue reforzada por decenas de mineros, varios antiguos dirigentes, que habían sido relocalizados de sus centros de trabajo en Oruro o en Potosí. Los mineros, como describe la historiadora Magdalena Cajías “(...) llevaron consigo su memoria colectiva de décadas de luchas rebeldes”.

El fogueado dirigente Filemón Escóbar, de militancia trotskista y con una larga experiencia en el sindicalismo minero desde la época del MNR y durante las dictaduras militares, se convirtió en la principal figura ideológica del movimiento cocalero.

Escobar es una síntesis de esa transferencia del proletario, formado como cuadro político y con amplio conocimiento teórico, hacia los cocaleros que poco a poco dejaron de ser agrarios para transformarse en un elemento híbrido y autónomo.

Los cocaleros aprendieron pronto las formas y métodos de las antiguas huelgas mineras. Ellos no podían paralizar centros de trabajo, pero sí podían cortar carreteras (como hicieron los campesinos), además en el centro neurálgico del país que une los cuatro puntos cardinales.

La disciplina sindical en las marchas en columnas donde cada persona tiene su lugar, los protocolos y sistemas de la policía sindical, los castigos al disidente, la combinación con la participación de las mujeres y de sus hijos, fueron una imitación mejorada de lo que hicieron los mineros durante décadas, sobre todo en el sexenio (1946-1952).

La marcha cocalera hacia La Paz, en 1998, mostró a los ciudadanos la fuerza del grupo, que no era un sindicato proletario, pero tampoco era una central campesina tradicional, a pesar de su pertenencia rural. Los cocaleros consiguieron además respaldos de otros movimientos rebeldes. La Federación de la Seis Centrales del Trópico estaba afiliada a la COB, aunque a la vez actuaba por sus propios momentos de demandas, de combates y reemplazaba sutilmente al liderazgo cobista para movilizar a otras organizaciones.

A medida que crecía su fortaleza numérica y su alcance territorial comenzaron también las primeras divisiones. Para el nuevo siglo, estaba claro que no existía ningún competidor para el liderazgo del orureño Evo Morales Ayma. Atrás quedaron Alejo Veliz, como después serían anulados Román Loayza y el propio Filemón Escóbar. En cambio, las mujeres cocaleras, con Leonilda Zurita a la cabeza, se mantuvieron leales con Morales y pronto también mostraron una gran capacidad de autoorganización y de resistencia.

En el polémico XII Congreso de la COB, el último del siglo XX, los únicos afiliados que presentaron una tesis política fueron los cocaleros. El debate y la aprobación de una tesis habían sido desde 1946 el corazón teórico de la organización minera y luego, desde 1952, de la COB, con una capacidad de irradiar al resto de la sociedad. Además, por su misma composición de “doble residencia” entre el barrio marginal y el área rural, los cocaleros también cobraron importancia en otros grandes movimientos de protesta ciudadana.

La capacidad de liderazgo de Morales también fue notable en la llamada “Guerra del Agua” en Cochabamba, al inicio del nuevo siglo, en enero del 2000. Aunque no había sido el principal operador de esa gran protesta popular, logró visibilizarse y convertirse en parte de la comisión que negociaba con el gobierno. Oscar Olivera y Víctor Gutiérrez no lograron mantener ese liderazgo coyuntural de la movilización popular.

El rechazo al alza de las tarifas en el servicio de agua potable (un recurso escaso en Cochabamba) gatilló la presencia de los actores que reemplazarían a los dirigentes de la COB. Aunque, es interesante repasar los discursos, las convocatorias, los planteamientos y las formas de la negociación porque recogen las antiguas formas cobistas. Las comisiones manejaban tanto las cifras y datos para anular las nuevas tarifas, como también salían a las calles para encabezar violentos enfrentamientos y, más tarde, se sentaban en la mesa de las negociaciones.

La “Guerra del Agua”, por otra parte, inauguraba otra fase de las demandas sociales y de las organizaciones que las canalizan. Ante la profunda crisis de la COB, como veremos más adelante, fueron los pequeños liderazgos de barrios, de vecinos, de jóvenes, de mujeres, los que asumieron la vanguardia del combate.

La participación de los parroquianos, más por pertenencia territorial que por pertenencia a un centro laboral o a un sindicato, transformó para siempre las sucesivas grandes movilizaciones del siglo XXI.

Esas articulaciones presentaban particularidades que cada vez adquieren mayor protagonismo colectivo y al mismo tiempo desplazan a las antiguas formas de dirigencia individual. Así se desarrollaron las manifestaciones y bloqueos callejeros en febrero de 2003 contra nuevos impuestos y con mayor contundencia en octubre de ese mismo año con la “Guerra del Gas”. Así pasó el 2004 y el 2005 hasta lograr las renunciaciones de presidentes electos.

A lo largo del 2019, fueron también los vecinos los que resistieron las irregularidades y abusos en el proceso electoral de ese año. No fue la COB como en 1979, sino la gente de boca en boca, de red en red, la que organizó el bloqueo en la esquina, la marcha por la plaza, la defensa del voto, el concierto de música de protesta.

El paro de 36 días en 2022 en el departamento de Santa Cruz, sobre todo en la capital, fue la mayor demostración que las familias aprendieron a organizarse por sí y para sí, sin que importe la pertenencia a una clase social, a una ocupación o trabajo determinados o a un sindicato. La madre, la abuela, la vecina salieron a la protesta, por voluntad propia más allá de la convocatoria del Comité Cívico y siguieron con el paro y los cortes de ruta en las rotondas, aun cuando las dirigencias habían levantado las medidas contra la postergación del Censo 2023.

El cabildo de enero de 2000 en Cochabamba durante la “Guerra del Agua” recuperó formas de auto convocatoria y de participación anteriores a los congresos o manifestaciones obreras. A lo largo del siglo XXI, particularmente en Santa Cruz de la Sierra, la figura del “cabildo” arrasó con las anticuadas concentraciones de

la COB. Ninguna central obrera, ni a nivel nacional ni a nivel departamental o local, tiene actualmente la fuerza de los comités cívicos para reunir multitudes. El Comité pro Santa Cruz reunió en 2019 y 2022 más de un millón de personas alrededor del monumento al Cristo.

Esto significa que, al contrario de lo que ocurría con la COB durante el siglo XX que era capaz de ser obedecida hasta por los dulceros de la esquina, ahora son otros los mecanismos de resistencia, de activismo y de combate.

Un rasgo que se junta a las otras debilidades de la COB decadente en el nuevo siglo.

7. El XII Congreso de la COB, el inicio del fin

La convocatoria al XII Congreso de la COB salió en el último mes de 1999, el último del siglo XX y del milenio. La fecha prevista era el 17 de enero de 2000, es decir en el primer mes del primer año del nuevo milenio. Parece una metáfora pues ese congreso fue el último intento de salvar la decadencia de la COB y a la vez la derrota de esa posibilidad.

Desde el comienzo, el Congreso presentaba dificultades orgánicas. Una cantidad de organizaciones afiliadas no tenían ya actividad ni aportaban al ente matriz, entre ellas las de los bancarios, de los petroleros, las cooperativas mineras, las cooperativas agropecuarias, los ferroviarios (casi no existían trenes), los universitarios, los colonizadores, los periodistas, los gastronómicos, los harineros. (*Presencia*, 19 de enero de 2000). Varias organizaciones estaban divididas y otras, como el magisterio, amenazaban con no asistir. La prensa calculaba que no estaban representados ni la mitad de los sectores afiliados. Antiguos gremios de gran gravitación en la original COB como los ferroviarios o los petroleros estaban disminuidos por la capitalización (forma original de privatización) de las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

El trabajo de la Comisión de Poderes fue lento y complicado.

Los campesinos, como se adelanta en anteriores párrafos, querían ocupar las principales secretarías y también anunciaban su salida de la COB. Los campesinos insistían en tener más representación. Los cerca de cinco mil trabajadores mineros tenían ciento veintisiete participantes representantes acreditados en el Congreso (con goce de haberes); o sea, un delegado por cada treinta y nueve obreros.

La mayor cantidad de trabajadores en las minas –sobre todo cuando los precios de los minerales comenzaron a subir eran los cooperativistas– con un tipo de organización muy distinta, con capital propio y con sus propios obreros contratados eventualmente.

La CSUTCB tenía dos millones de campesinos afiliados en casi todo el país, pero la Comisión de Poderes sólo aceptaba ochenta y ocho representantes acreditado; o sea, un delegado por cada 22. 727 trabajadores agrarios.

Lo más complicado era la injerencia de los partidos de la llamada “mega coalición” que iban desde la extrema derecha a la socialdemocracia: Acción Democrática Nacionalista (fundada por antiguos funcionarios de las dictaduras militares), Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de la socialdemocracia y también democristianos o militantes de una nueva agrupación Conciencia de Patria (auto identificados como la izquierda nacional).

Las candidaturas para la secretaría ejecutiva eran de dos dirigentes mineros: Edgar Ramírez, comunista, de la vieja guardia, uno de los últimos representantes del “proletariado ilustrado”, que no trabajaba en una mina desde hacía años; y Milton Gómez, de la nueva generación, cercano a los partidos oficialistas. El MIR apoyaba a Gómez y el MNR (en la oposición) apoyaba a Ramírez para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la COB.

Los primeros días pasaron lentamente en la entrega de credenciales, provocando la protesta de los asistentes que se quedaban sin viáticos. Por otra parte, las noticias insistían en la intromisión de los partidos políticos, fundamentalmente el MIR que ocupaba ministerios claves, para manejar el congreso y elegir a un directorio oficialista.

Este asunto no era nuevo. Vimos que el MNR intentó controlar a la COB desde su fundación. Lo grave es que al frente no existía una dirigencia sólida ni creíble para mantener los principios de la COB, sobre todo la independencia y la relación orgánica con las bases.

Aunque el Congreso había sido muy esperado por los últimos sindicatos organizados para intentar reencausar el activismo de la COB, las peleas y las divisiones precipitaron su final sin elegir a los nuevos dirigentes. Se declaró “cuarto intermedio” hasta mayo (90 días) y se nombró a una comisión con dirigentes poco conocidos para convocar a la nueva cita.

La propuesta fue hecha por la Federación de Mineros ante el riesgo de una división definitiva de la COB, como pocas veces en su vida orgánica.

Entre 2000 y el 2005, la COB insistió en volver a protagonizar las protestas y las movilizaciones, fundamentalmente contra los procesos de privatización, las políticas económicas, el alza del costo de la canasta familiar.

Sin embargo, no logró nunca más reunir más que un puñado de gremios. Ni siquiera en las tradicionales marchas del Primero de Mayo, la COB consiguió el impacto de sus desfiles de los años 50 hasta los 80.

Los sucesivos congresos cobistas hasta 2006 se convirtieron en un ejercicio discursivo y de disputas internas. A partir de ese año, con la victoria del MAS, la situación empeoró porque la Central Obrera y su máxima expresión simbólica, la FSTMB, aceptaron la intromisión directa del partido en funciones de gobierno y siguieron las líneas que salían del Palacio Quemado.

La COB aceptó la presencia del presidente Evo Morales y posteriormente del presidente Luis Arce en el recorrido del Día del Trabajador por las calles paceñas. Esto desvirtuó absolutamente el sentido del homenaje a los ocho mártires de Chicago.

Otro punto que hay que resaltar es el debate al inicio del siglo sobre la Ley del Trabajo. El Ministerio de Trabajo, en manos del MIR, pretendía modernizar la antigua legislación para adaptarla a las nuevas épocas. Aunque se pretendía respetar las conquistas laborales y los beneficios conquistados desde 1928 y sobre todo desde 1935, los obreros rechazaron la propuesta.

Durante meses entre el 2000 y el 2002, se redactaron proyectos y modificaciones sin llegar a consensos. La COB contaba con asesores, como en anteriores ocasiones, pero no fue capaz de ceder a asuntos anacrónicos. Esto significó que la legislación, aparentemente beneficiosa para el trabajador, produce también efectos perversos con la disminución de los empleos estables y de las propias fuentes de trabajo. Cada vez son más las personas que consiguen ingresos como cuentapropistas o en el mercado informal.

En los últimos quinquenios, la lucha cobista se ha limitado a un ejercicio de pliegos petitorios para conseguir aumentos salariales porcentualmente a la inflación y para el haber básico.

También al inicio del siglo XXI se debatió el Estatuto Orgánico del Empleado Público, que intentaba modernizar la administración pública a través de la meritocracia y de la estabilidad laboral, garantizando un aparato administrativo que trascienda los cambios de ministros o de gobiernos.

Este Estatuto estaba relacionado con los lineamientos de la Ley SAFCO de 1992 para controlar el manejo adecuado de los recursos públicos y con las nuevas agendas internacionales para achicar el estado y volverlo más efectivo. Ello significaba una ganancia a mediano plazo, pero el despido de muchos funcionarios supernumerarios, sobre todo en las principales empresas (capitalizadas en los años noventa), donde el estado mantenía presencia como YPFB, COMIBOL, ENFE (transporte ferroviario), ENDE (servicio eléctrico), ENTEL (telecomunicaciones), LAB (transporte aéreo).

La COB rechazó este proyecto y la posibilidad del despido de decenas de funcionarios públicos tanto a nivel de la administración central, como también en las prefecturas (actuales gobernaciones) y alcaldías.

Sin embargo, el Estatuto fue aprobado, junto con otras disposiciones para transparentar el gasto público, garantizar mejores salarios, y cumplir con las recomendaciones de la Convención de la Organización de Estados americanos contra la Corrupción.

En cambio, el gobierno del MAS aumentó significativamente el número de funcionarios públicos, anuló los mecanismos de la meritocracia y gastó mucho más en salarios, en viajes y en otros beneficios. Los funcionarios públicos fueron obligados a participar en marchas, bloqueos y en campañas electorales, especialmente desde el 2010.

8. La COB y la relación con el MAS

El nuevo siglo comenzó con la creciente influencia de la CSUTCB, particularmente de los coccaleros y de sus líderes Felipe Quispe y Evo Morales en las movilizaciones sociales y en las protestas contra las políticas públicas “neoliberales”.

El MAS logró una alianza con la COB a través del llamado “Pacto Anti oligárquico”. Se unían los reclamos contra la erradicación de la coca y los crecientes debates para la exportación de gas a Estados Unidos a través de Chile, además del discurso antiimperialista. Mientras discutían proyectos de una nueva legislación para los hidrocarburos, los dirigentes hablaron incluso de un “pacto de sangre”. Se ordenó la expulsión de las provincias de aquellos que se opusieran a ese pacto; o “aplicarles la justicia comunitaria”.

Aunque los dirigentes cobistas más veteranos se oponían a una alianza con un partido político y también a la militancia abierta de los líderes sindicales en partidos políticos, la relación MAS-COB se estrechó cada vez más. A ello se agregó

la fuerza vecinal de El Alto, sobre todo de barrios donde vivían antiguos mineros relocalizados; ahí también se dio la organización disciplinada y combativa heredada de Siglo XX y Catavi.

También en el MAS rechazaron ese pacto. Voceros como Gustavo Torrico y Antonio Peredo opinaban que no era favorable la presencia de los sectores más radicales de la COB en el partido.

Esta fue la base del Pacto de Unidad que se firmó en 2000 con catorce organizaciones activas. El Pacto de la Unidad (sindicatos, organizaciones sociales, MAS) mostró su fuerza en las calles, sobre todo en 2003 en la llamada “Guerra del Gas” contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR). En 2005 iniciaron protestas desde mayo de ese año hasta lograr la renuncia del presidente Carlos Mesa, quien había sucedido constitucionalmente a Sánchez de Lozada.

El MAS con Evo Morales a la cabeza, la COB presidida por el minero Jaime Solares y Felipe Quispe de la CSUTCB, además de dirigentes vecinales y políticos de El Alto se unieron para pedir la nacionalización de las empresas petroleras y la convocatoria a la Asamblea Constituyente (que salió inicialmente de organizaciones indígenas de tierras bajas).

Poco a poco aparecieron otros reclamos en distintos puntos del país y en las ciudades se desarrollaron grandes manifestaciones. Comenzaron bloqueos de caminos en el altiplano y en los valles.

Aunque Morales se peleó con el secretario ejecutivo de la COB, Solares, a quien calificó de “paramilitar”, la COB aparecía como la organización que liderizaba las protestas. En junio declaró “desacato público”. Se hablaba de organizar un nuevo futuro gobierno o cogobierno entre el MAS, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la COB, la CSUTCB y las Bartolinas Sisas.

Un cerco a la Plaza Murillo, donde se concentra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y la creciente violencia de las acciones sindicales y masistas consiguió la salida de Mesa de la presidencia. La presión se trasladó a Sucre, donde fue aprobada la fórmula de una presidencia transitoria a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, como fórmula constitucional para salir del empantanamiento. Era la segunda vez, desde 1951 que se recurría a la extrema fórmula.

El MAS, Evo Morales y Álvaro García Linera, ganaron cómodamente las elecciones en diciembre de 2005 con más del 50%, la cifra más alta de la etapa democrática y cercana a las grandes victorias del MNR en 1956 y 1960.

La COB realizó su XIV Congreso en junio de 2006, el primero en la etapa masista. El minero Pedro Montes Gonzáles fue elegido para “reorganizar la COB desde las bases”. Montes había trabajado en Catavi y en Huanuni y tenía amplia experiencia en las luchas sindicales. Sin embargo, su sumisión al gobierno confirmó la decadencia cobista.

La Central Obrera no logró en los siguientes años tener convocatoria ni consiguió la representatividad de los trabajadores, asalariados o con otras ocupaciones, formales o informales.⁸

Algo inédito sucedió entonces. Los enfrentamientos fueron entre mineros asalariados de la Corporación Minera de Bolivia (casi todos adultos y antiguos trabajadores) y los cooperativistas (casi todos jóvenes, muchos hijos de mineros relocalizados). La disputa por el cerro Posokoni era la pelea por uno de los pocos espacios rentables desde la crisis del estaño en 1985. Huanuni, al contrario de otros campamentos mineros, creció poblacionalmente en esa década.

Radio Pío XII, de tendencia obrera, informaba incrédula de los combates, desde las alturas de Huanuni hacia las bocaminas para tomar la mina. Con un saldo de dieciséis muertos y más de cincuenta heridos, la batalla fue el prólogo del estilo de los nuevos conflictos en el siglo XXI. No eran proletarios contra militares o huelguistas contra policías, sino obreros regulares de la empresa estatal contra mineros que trabajaban a su propio riesgo, pero aportando a la productividad de la principal mina de COMIBOL.

Ambos bandos conocían el uso de la dinamita y del anfo y por ello el saldo fue tan trágico. Fue muy difícil para los científicos sociales encontrar las explicaciones profundas y para dar la razón a uno u otro grupo. El gobierno optó por una salida inmediata, dar trabajo a los cooperativistas en la propia COMIBOL (con sueldos que subieron anualmente), con lo cual calmó la protesta, pero afectó en el mediano y largo plazo el rendimiento de las ricas vetas.

Con el alza de los precios de los minerales, estos enfrentamientos –con un tercer actor: población civil y comunidades– se repitieron en otras minas. Los cooperativistas se convirtieron en la fuerza más numérica, organizada y disciplinada. Su presencia definió los futuros conflictos, sobre todo en Potosí y en La Paz.

8 La prueba más grave para el nuevo gobierno y para el movimiento sindical fue Huanuni en la llamada “Guerra del Estaño”. Los cooperativistas mineros acusaron al gobierno de Morales de desconocer su compra de acciones de la empresa RBG en Londres que habían adquirido para un emprendimiento de riesgo compartido. El drama estalló entre el 5 y el 6 de octubre, a sólo 10 meses del primer gobierno del MAS.

A los pocos meses, en enero de 2007, otra tragedia evidenció que más allá de las tensiones de clase, aparecían las pertenencias territoriales. En Cochabamba pelearon en las calles jóvenes ciudadanos contra coccaleros y campesinos. El respaldo del prefecto de entonces, opositor, Manfred Reyes Villa, al movimiento autonomista iniciado en Santa Cruz fue el pretexto para amenazarlo con grandes manifestaciones y bloqueos de los coccaleros.

Para los comentaristas locales, Cochabamba sufrió esos días un connato de guerra civil con el saldo de doscientos heridos de ambos bandos, dos muertos (luego falleció otro herido), jóvenes, cada uno de uno y de otro lado.⁹

El ataque organizado y planificado de los agrarios contra los ciudadanos evidenció su fuerza y al mismo tiempo sacó a la luz asuntos como el racismo, los resentimientos seculares, el accionar de las turbas, el miedo en las ciudades.

Similares escenas se repitieron en otras ocasiones, las más contundentes en los 21 días de protesta ciudadana contra las irregularidades que se dieron antes y durante las elecciones generales de octubre de 2019.

Mientras, la COB dejó de ser la matriz de los trabajadores, la voz representativa, la entidad que convocaba a las masas a la protesta, en las calles o en las industrias.

Evo Morales consiguió convencer a los dirigentes cobistas como nunca lograron Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles ni el propio Juan Lechín.

Regularmente, sobre todo en fechas significativas, regaló a las organizaciones y a los dirigentes sedes sindicales, vehículos, viajes y otras dádivas. Incluso entregó a la COB un hotel para sus visitantes ocasionales.

Los dirigentes no rindieron cuenta de ello. Es más, salieron denuncias por el mal uso, personalizado, de esos bienes y sobre las fiestas (farras) en el hotel cobista.

Las críticas tampoco faltaron, sobre todo contra los principales dirigentes a los que se responsabiliza de la decadencia cobista. El caso más grave es el de Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de la COB en periodos complejos. Primero respaldó al MAS y a sus principales dirigentes, luego fue uno de los que sumó su voz para la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.

9 Los datos sobre la “Guerra del Agua”, la “Guerra del Gas”, el conflicto de Huanuni y el enfrentamiento en Cochabamba fueron extraídos de los matutinos paceños La Razón y La Prensa.

Posteriormente mantuvo relaciones estables con el gobierno transitorio de Jeanine Añez en 2020. Volvió a respaldar al MAS cuando Luis Arce Catacora y David Choquehuanca ganaron las elecciones a fines de ese año. A lo largo de 2022, en el contexto de pugnas internas en el MAS, apareció del lado de Arce. Por ello fue criticado por parlamentarios evistas que lo acusaron de traición. Sin embargo, logró tres mandatos al mando de la COB.

Los otros secretarios de la COB en el siglo XXI, Juan Hoyos y Juan Carlos Trujillo no consiguieron frenar la intromisión de organizaciones masistas. En 2006, el llamado “Estado Mayor del Pueblo” formó parte de comisiones, aunque no representaba directamente a un sindicato (ANF, 27 de junio de 2006, Sociedad).

El presidente Arce desfiló junto a la dirigencia cobista el Primero de Mayo de 2023. En la marcha aparecieron banderas rojas, pero no flamearon las azules del MAS. Esto fue criticado por militantes del sector evista del partido oficialista.¹⁰

Morales presentó a la CONALCAM como una instancia de coordinación de los sindicatos con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Empezó con trece organizaciones y creció hasta casi el medio centenar. La COB y la FSTMB, además de federaciones históricas, no sólo eran ya parte del MAS, sino que aparecían subordinadas a federaciones de cocaleros en el Chapare.

La fundación de la CONALCAM y sus actividades presentaron muy pronto dificultades estructurales por su carácter bicéfalo o esquizofrénico. Algunos dirigentes ocuparon puestos de funcionarios públicos de diferente rango y eran a la vez parte de un “movimiento social” y parte del gobierno.

Funcionó inicialmente con las mismas características que el Pacto de Unidad, pero su rostro más visible era el campesino indígena y no el proletariado.

Otra característica inmediata fue la participación de entidades de origen urbano con un alcance territorial y una pertenencia más a un barrio que a una organización sindical. Estas entidades, sobre todo en El Alto, alrededor de Cochabamba y en poblaciones estratégicas de Santa Cruz cumplieron roles vitales en la crisis de 2019. Aún no existen estudios en profundidad sobre la composición de estas

10 Otro tema que afectó la representatividad de la COB en el nuevo siglo fue la creación de la Coordinadora Nacional por el Cambio, CONALCAM, el 22 de enero de 2007, anunciada por el propio Evo Morales en su doble condición de dirigente cocalero y de presidente de Bolivia. La CONALCAM ampliaba y consolidaba el Pacto de Unidad, pero a la vez se sometía aún más a las organizaciones sociales y sindicales a ser un simple apéndice del MAS con la misión de poner la gente en los bloqueos, marchas, ataques a los opositores, etc.

juntas vecinales, el grado de infiltración de agitadores extranjeros, su relación con grupos paraestatales como lo “guerreros digitales”.

Aunque fueron de alguna forma arrinconadas en octubre de ese año, no se conoce cuál fue su rol entre los grupos juveniles que pedían guerra civil.

Está más claro su involucramiento en puntos neurálgicos del territorio nacional para colapsar el país, como lograron en agosto de 2021, a pesar de la pandemia del COVID. Un gigantesco bloqueo urbano y rural impidió la llegada de oxígeno, vital para salvar a pacientes contagiados o a bebés recién nacidos.

Evo Morales dio gran importancia a la CONALCAM, con la cual se reunía semanalmente en Palacio de Gobierno y luego en la Casa del Pueblo. Esto es un arma de doble filo, por una parte, las organizaciones sindicales y territoriales de larga trayectoria podrían pensar que estaba en el poder sobre todo en el Poder Ejecutivo y daban su fuerza para defender en las calles a ese propio poder. Por otra parte, se quedaron sin independencia de acción¹¹. Eran beneficiadas por muchas políticas clientelistas del más al mismo tiempo que no tenían responsabilidades legales de las decisiones que se tomaban en el Ejecutivo y que de alguna manera ellos salían a defender.

Quizá esto influyó en la decadencia de la propia Coordinadora Nacional por el Cambio que después de que Evo Morales huyó del país tuvo una primera reunión y mostró que esa estructura no podía superar la ausencia de Evo o el cambio de gobierno

La CONALCAM quedó como una estructura cupular muy beneficiada con viajes y con otros beneficios que le daba el gobierno del MAS, pero sin bases y por tanto sin futuro.

9. Conclusiones

En las últimas tres décadas, las principales características de la Central Obrera Boliviana se transformaron o se perdieron. En primer lugar, el modelo económico expulsó de sus centros de trabajo a mineros, fabriles y otros obreros. Esto se tradujo en la pérdida de la centralidad minera como columna vertebral de la COB y en la reducción del número de proletarios y su importancia en las movilizaciones de protesta.

11 Los datos sobre la CONALCAM fueron extraídos de los matutinos paceños La Razón y Página Siete.

La incorporación de las centrales campesinas a la COB en forma masiva amplió el alcance territorial (a diferencia de las minas concentradas en el occidente) y a la vez desbalanceó la fuerza numérica. La CSUTCB aglutinaba a más de dos millones de afiliados, aunque nunca consiguió tener un mayor número de delegados en los congresos cobistas ni ocupar las principales secretarías. Los campesinos, desde el área rural a las ciudades y desde las tierras altas a las tierras bajas lograron poco a poco ser los principales sindicatos activos, desde el primer bloqueo orgánico en diciembre de 1979.

De la CSUTCB se desprendió como parte de ella y a la vez de forma autónoma la organización de federaciones de productores de hojas de coca en el centro del país. Los cocaleros del trópico de Cochabamba se convirtieron en pocos años en la fuerza más belicosa dentro de la COB. Su relación económica y su ubicación territorial en el nudo neurálgico de las principales carreteras para el comercio boliviano –interno y de exportación– pesaron más que otros sectores sindicales. Además, los cocaleros organizaron un instrumento político con el cual ocuparon el poder local, parlamentario y llegaron a presidir el país. Su enfrentamiento con la agencia estadounidense DEA alimentó su discurso antiimperialista.

Los actores principales dentro de la COB han cambiado. El cooperativista minero es diferente al proletario ilustrado de los años 40 ó 70. Es más joven, le gusta la vestimenta moderna, luce zapatos finos y no botines y menos ojotas. Mantiene la combatividad y su fuerza de choque, la disciplina minera, pero para lograr sus objetivos particulares. La cuestión de la nación, que tanto preocupó a los obreros mineros fundadores de la COB, está ausente.

La parte más sensible que ha cambiado la esencia de la COB es la pérdida de la independencia de clase. La relación del MAS y los sindicatos afiliados a la COB introdujo elementos nuevos. En el artículo 10 del Estatuto del MAS (dice) (origen campesino indígena de la organización): “Se respeta la trayectoria histórica de las tres organizaciones matrices a la cabeza de la dirección nacional del MAS IPSP: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIQB- BS).

Esta relación del MAS con estas organizaciones, afiliadas al mismo tiempo a la COB, transformó a la matriz de los trabajadores. De alguna forma desordenó el principio de la independencia de partidos políticos que los antiguos dirigentes habían defendido desde la fundación en 1952.

La COB probablemente no podría seguir sin los trabajadores mineros asalariados; sin embargo, ese sector se ha reducido en número, sobre todo en las grandes minas privadas. Los cooperativistas mineros no logran heredar su pensamiento nacional, su identificación clasista ni su capacidad de ser la vanguardia de las diferentes protestas o movilizaciones populares.

Los campesinos, fundamentalmente en el área andina, sobresaliendo la organización de las mujeres “bartolinas”, y las federaciones cocaleras protagonizaron desde el inicio de siglo los mayores y más contundentes actos de rebeldía, de demandas, de ocupación de calles y caminos.

Notar que no se describió la lucha de las organizaciones agrarias de tierras bajas porque no se relacionaron con la COB, pero influyeron en su agenda como la demanda por una Asamblea Constituyente o por la temática medioambiental. La CONAMARC fue la contraparte en el Occidente.

La subordinación de sucesivos dirigentes de la FSTMB y de la COB al discurso, las posturas y las decisiones del partido oficial MAS ha afectado el presente y el futuro de la Central Obrera Boliviana.

Actualmente, justamente a cien años de la primera masacre obrera en el centro minero potosino de Uncía, la COB no es capaz de convocar a grandes movilizaciones. Dejó de ocupar las primeras planas y en los tres últimos quinquenios casi toda su labor se resume en presentar anualmente un pliego petitorio, debatir con el gobierno el monto del salario mínimo, y marchar el Primero de Mayo.

Su antiguo poder dual, casi un estado dentro del Estado, es asunto del pasado.

Bibliografía

- Cajías, Lupe
2021 “Poder Dual o Contrapoder.” En Un amor desenfrenado por la Libertad. Antología de la historia política de Bolivia 1825-2020, Tomo II, La Paz: Plural.
- Cajías, Lupe, et al.
1992 Cincuentenario de la Revolución del 9 de abril de 1952. MNR. La Paz: Fundación Cultural Huáscar Cajías Kauffman.
- Cajías, Lupe. Lechín
1994 historia de una leyenda. Tercera edición. Cochabamba: Amigos del Libro.

Geddes, Charles

1984 Patiño, Rey del estaño. España: Editorial A.G. Grupo.

Harris, Olivia y Xavier Albó

1975 Monteras y guardatojos. Campesinos y mineros en el norte de Potosí. Bolivia: Cuadernos CIPCA.

Klein, Herbert

2017 Población y Política en la Historia de Bolivia. Bolivia: Editorial Gisbert.

Lora, Guillermo

1970 Historia del Movimiento Obrero Boliviano. Bolivia: Editorial Los Amigos del Libro.

Platt, Tristan, et al. Charka, Malku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos VX-XVII)

2006 Historia Antropológica de una confederación aimara. Bolivia: Thierry Saignes, Instituto Francés de Estudios Andinos /Plural Editores, University of St.Andrews/University of London/ Interamerican Foundation, Fundación cultural del Banco Central de Bolivia.

Rodríguez Ostría, Gustavo

2014 Capitalismo, Modernización Y Resistencia Popular, 1825-1952. Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tapia, Felipe

2019 Las luchas históricas del movimiento fabril 1945-2017. Bolivia: CEDLA.

Zabaleta Mercado, René

2011 Obra Completa. Tomo I, ensayos 1957-1974. Bolivia: Plural.

La Calle, La Razón, El Diario, Ultima Hora, La Patria (1930-1952). Presencia (1998-2000). La Razón (1999-2000, 2006, 2007, 2023). La Prensa (2007). Página Siete (2023).

CIDOB y CONAMAQ en la Bolivia Plurinacional

Gabriela Canedo Vásquez¹

*Eso de no saber separar un partido político que es coyuntural
y una organización indígena que es de por vida,
está haciendo mucho daño.
Para volver a ser fuerte, la organización
se tiene que articular desde las comunidades,
abí está su fortaleza, el respaldo social y político (...)*

(Marcia Mandepora Chunday, guaraní, abril de 2023)

Resumen

El escrito aborda a la CIDOB y al CONAMAQ, las dos organizaciones representativas y articuladoras de los pueblos indígenas de Tierras Bajas y originarios de Tierras Altas de Bolivia. El país ha atravesado una serie de cambios en las últimas dos décadas, siendo el carácter Plurinacional del Estado, la principal transformación. El artículo expone el nacimiento de ambas organizaciones, los hitos fundamentales por los que han atravesado, el rol protagónico que ambas instancias tuvieron en la Asamblea Constituyente y la marcha en defensa del TIPNIS, y la crisis posterior que vino. En la actualidad ambas aún se encuentran divididas, con organizaciones paralelas, y anteponiendo la agenda político-partidaria a la orgánica, ocasionando daño a la organización. En el caso de Tierras

1 Socióloga y Doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-México). Docente de pregrado y posgrado en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Universidad Católica Boliviana (UCB). Investigadora adscrita al Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) y al CIDES-UMSA.

Bajas, existen algunas articulaciones interterritoriales que se están dando, para afrontar problemáticas urgentes, ante la inoperancia de la CIDOB. En el caso de CONAMAQ, falta trazar un horizonte claro por el que luchar. Se encuentra debilitada y el camino por recorrer aún es largo.

Palabras claves

Indígena, originario, derechos, organización, división y rearticulación los cambios más importantes.

1. Introducción

Sin duda que el siglo XXI en Bolivia, arribó con cambios que paulatinamente transformarían el país, la democracia, la acción de la sociedad civil. Entre los cambios más importantes que se dieron en la estructura estatal están el carácter del Estado boliviano, que se reconoce como Estado Plurinacional y la profundización del proceso de descentralización por medio de un régimen de autonomías territoriales. En conjunto, tienen efectos en el acontecer de la democracia.

Por lo menos el Estado Plurinacional significó en términos simbólicos, la apertura del horizonte de sentido hacia uno de mayor pluralidad (cultural, social, económica y también política). Asimismo, el régimen autonómico, por su parte, implica una distribución y democratización del poder en los distintos niveles estatales.

La propuesta de la Plurinacionalidad fue asumida por las organizaciones indígenas y campesinas, cohesionadas en el conocido Pacto de Unidad² y presentada en la Asamblea Constituyente. El proyecto de las organizaciones campesinas e indígenas reclama su participación en el Estado, pero sobre todo el reconocimiento del derecho a su autodeterminación, que sería alcanzada a través de las autonomías indígenas. (Asamblea Nacional 2006, 4).

Estas transformaciones nodales y el hecho de que Bolivia se haya fundado como Estado Plurinacional el 2009, tiene un autor central: el movimiento indígena-originario a comienzos de la década de 1980 (Ticona 2006). La nueva CPE sintetiza la reestructuración del Estado. El artículo segundo de la nueva CPE es en términos normativos, un avance en el reconocimiento de los derechos indígenas.

2 El Pacto de Unidad se constituyó en septiembre de 2004 y a partir de mayo de 2006 empezó su trabajo específico de elaboración de una propuesta de Constitución Política del Estado para presentarla a la Asamblea Constituyente. (Garcés 2010, 15).

Es el planteamiento más claro de la plurinacionalidad, puesto que allí se condensa la autodeterminación de los pueblos indígenas, las autonomías. “[...] se garantiza [a las naciones y pueblos indígena originario campesinos] su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales...” (Constitución Política del Estado, art. 2, 2009). Como sostiene Zegada (2011), el texto constitucional, reconoce la matriz *indígena originaria campesina*, y sus portadores se constituyen en sujetos políticos de derecho colectivo.³

En el marco del nuevo siglo, y de las transformaciones acaecidas en nuestro país, el artículo analizará el rol de las organizaciones de pueblos indígenas de Tierras Bajas y Tierras Altas en el contexto de la dinámica democrática en Bolivia en estas más de dos décadas.⁴

En primera instancia presentaremos los antecedentes necesarios que resaltan el contexto propicio que precede a la asunción de Evo Morales al poder. Es decir, la serie de movilizaciones protagonizadas principalmente por el actor indígena, originario y campesino. A esto se suma, los avances en materia indígena y la clave de las transformaciones de carácter étnico-político. En segundo lugar, abordaremos la Confederación Indígena del Oriente, Chaco, y Amazonia de Bolivia (CIDOB) como organización articuladora y representativa de los pueblos indígenas de Tierras Bajas. Presentaremos la forma de surgimiento de esta organización, el objetivo para su nacimiento, así como; brevemente desarrollaremos los hitos positivos y negativos por lo que atravesó. Los actores con los que se confronta, siendo el Estado su interlocutor central. Sin duda la Asamblea Constituyente ha sido uno de los momentos propicios y cúspide en el que la CIDOB ha tenido una capacidad propositiva e incidencia en la construcción del Estado Plurinacional. De la misma manera, la octava marcha en 2011 por la defensa del TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure) se constituye en el hito que le supuso a la CIDOB la ruptura y distanciamiento con el gobierno y las otras organizaciones aliadas en el Pacto de Unidad. Finalmente plantearemos algunos aspectos de la situación actual, los principales retos y el horizonte que se avizora como movimiento indígena de Tierras Bajas.

3 Existen bemoles en lo logrado a 14 años del nacimiento del Estado Plurinacional. No existe igualdad política entre las diferentes matrices culturales que lo componen (se han identificado 36 diferentes comunidades culturales). Asimismo, la relación con respecto a la matriz que hasta este momento ha sido la hegemónica: la mestiza moderna estructurada políticamente en base a la democracia liberal representativa.

4 Cabe señalar que la metodología seguida, responde a la revisión de fuentes secundarias, prensa, y entrevistas a especialistas que trabajan bastante tiempo en Tierras Bajas y Tierras Altas.

En un tercer momento haremos lo propio con el *Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu de Tierras Altas* (CONAMAQ). Presentaremos el nacimiento de esta organización aunada a determinados objetivos y el horizonte hacia el que pretendió dirigirse. Brevemente desarrollaremos los hitos por los que atravesó. Tanto positivos y aquellos que fueron un desacierto. En los mismos resaltan los actores con los que se confrontan. El Estado y la CSUTCB son sus interlocutores centrales. Con esta última, cabe destacar el paralelismo que tuvo desde su surgimiento, hasta la actualidad. De la misma manera que para la anterior organización, la Asamblea Constituyente se convirtió en el momento propicio para que el CONAMAQ incidiera de manera importante en la redacción de la nueva carta magna. Otro de los hitos que marcará la ruptura y alejamiento de CONAMAQ con el gobierno y con las organizaciones de corte campesino (CSUTCB, Confederación de Mujeres Indígenas, Campesinas “Bartolina Sisa”, y la Confederación de Colonizadores), será la octava marcha en defensa del TIPNIS. Por último, plantaremos la situación actual, los principales retos y el horizonte que se avizora como movimiento indígena de Tierras Altas. Finalmente, delinearemos algunas conclusiones.

2. Antecedentes

El inicio del siglo XXI en el país se da con una serie de luchas que junto al malestar social por las políticas causadas por el modelo económico y la crisis se materializaron en intensas protestas propiciadas por movimientos sociales articulados justamente contra el modelo neoliberal, los viejos partidos en el poder y en procura de una participación política directa y sin mediaciones. En ese marco estallaron eventos como la Guerra del Agua en Cochabamba el año 2000 que logró la expulsión de una empresa transnacional de agua potable en rechazo a la privatización del servicio y el incremento de tarifas. O es el caso de la Guerra del Gas, precedida por varios enfrentamientos previos como los denominados febrero negro y octubre negro que involucraron a distintos sectores sociales como policías, indígenas y campesinos, así como sectores populares urbanos contra las medidas del gobierno. Este último evento culminó en la derrota y expulsión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, quien huyó del país dejando un saldo de alrededor de 60 muertos y centenas de heridos.

Estos acontecimientos fueron el germen de las transformaciones que sucedieron después. En este contexto de desborde social y empoderamiento de la sociedad civil, se produjeron las elecciones generales de 2005, en las que el MAS a la cabeza del líder sindical campesino Evo Morales, logró representar con éxito las demandas políticas en el campo electoral, y obtuvieron una inédita victoria con la

mayoría absoluta de votos. El MAS llegó al poder con la bandera de la Asamblea Constituyente, la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.

La asunción de Evo Morales a la presidencia se dio en un contexto en que el movimiento indígena, sobre todo de tierras bajas, había posicionado paulatinamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la demanda histórica de participar en los escenarios de decisión. De esta manera Evo Morales se consagra como “el primer presidente indígena”. No cabe duda que la llegada del MAS al poder en 2005 conllevó transformaciones concretas, como la sustitución de las viejas élites en el poder y se dio por lo menos en el primer mandato de Evo Morales la presencia directa de los movimientos indígenas y campesinos a través de sus organizaciones y representaciones en el mundo institucional de la política. El protagonismo del Pacto de Unidad mediante su participación en la Asamblea Constituyente aportando con el contenido central del nuevo texto.

3. La Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia

Hace treinta años en Bolivia las Tierras Bajas eran imaginadas como un reservorio de recursos naturales, tierras despobladas. La reforma agraria de 1953 marginó a los pueblos de tierras bajas del derecho a la propiedad de la tierra porque consideró que los espacios ocupados por los indígenas eran baldíos, de modo que fueron adjudicados a empresarios. A mitad del siglo XX las tierras bajas de Bolivia se convirtieron en el gran sueño alternativo para el desarrollo rural y empezaron a ejecutarse una serie de proyectos de colonización en las mismas.

La primera marcha indígena de 1990, por “El territorio y la dignidad”, protagonizada por los grupos indígenas de Tierras Bajas, obligó al país a abrir los ojos ante la realidad de la presencia de población indígena en las tierras bajas y sus reivindicaciones territoriales. La década del noventa marca un giro en la historia de los grupos indígenas no sólo amazónicos sino bolivianos, pues el Estado escucha y atiende sus reivindicaciones territoriales, junto a otras demandas.⁵

5 Por ejemplo en 1994 se realizó una de las reformas constitucionales. Se incorporó en el artículo 1, los términos “multiétnica” y “pluricultural” con relación a la caracterización de Bolivia. Asimismo se modificó el art. 171, reconociendo los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen.

La CIDOB surge en octubre de 1982 como legítimo representante nacional del movimiento indígena de tierras bajas de Bolivia. En ese entonces surge agrupando a cinco pueblos indígenas del oriente, la mayoría de Santa Cruz (izozeños, avas, ayoreos, guarayos y chiquitanos. (García 2005, 217-219). En 1989 se da la conversión de la CIDOB de Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano en Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia, de modo tal que fuese una organización más amplia, abarcadora y que recogiese las formas ya existentes de formas de autogobierno local y regional de los indígenas de tierras bajas. Este ente matriz aglutina a los treinta y cuatro pueblos indígenas de Tierras Bajas.

La base organizativa de la CIDOB, sin duda son las comunidades que resultan de la agrupación de varias familias que comparten un territorio común para la reproducción familiar y de las autoridades que regulan la convivencia colectiva, tal vez con un ancestro común y un conjunto de prácticas e instituciones sociales, económicas, políticas y culturales mediante las que ponen en circulación bienes materiales y simbólicos comunes. Las comunidades son consideradas por la CIDOB como *“la base orgánica y fuerza política de la Confederación. Ellas tienen su propias formas de representación de acuerdo a sus costumbres y normas consuetudinarias* (García 2005, 220).

En tierras bajas los denominativos de las estructuras intermedias varían. Pueden denominarse: subcentrales, centrales o capitanías. La coordinación de varias capitanías, de todas las subcentrales o de varias centrales de pueblo conforma el segundo nivel intermedio de la estructura de la CIDOB que se llama, en algunos casos, Asamblea (Asamblea del Pueblo Guaraní-APG). En el caso guaraní, la agrupación de varias comunidades constituye una capitanía. En el caso de los baures, itonamas y moxeños, al agrupamiento de comunidades se las llama subcentrales, en tanto que entre los ayoreos o chiquitanos se llaman centrales. La reunión de varias subcentrales en algunos casos como en el Beni adquieren el denominativo de Central de Pueblos, como la CPIB (Central de Pueblos Indígenas del Beni). Por su parte, entre los araonas, tacanas, yuracarés, lecos o mosetenes, la suma de varias comunidades constituye una central de pueblo. A su vez, entre los ayoreos, chiquitanos, guaraníes y guarayos, la suma de varias centrales da lugar a cuatro centrales de pueblo. Lo común en este nivel es que las centrales, subcentrales y capitanías unifican por identidad cultural y lingüística a comunidades que en algunos casos tienen discontinuidad territorial. Éste es el primer nivel intermedio de la organización de la CIDOB (García 2005, 220 y 221). Es interesante que el segundo nivel intermedio de organización social pueda llegar a estar conformado por subcentrales de varios pueblos indígenas, constituyéndose en multiétnico, tal el caso de la CPIB y CPEMB. Otros como la APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) sobrepasa los límites departamentales, albergando

a las capitanías guaraníes que se encuentran en Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. En conjunto, la CIDOB tiene trece regionales.⁶

3.1. Surgimiento de la CIDOB. Territorio y mandato desde abajo

Entre los motivos para que surja la CIDOB, y le den su razón de ser, estarían dos fuerzas que han jugado una incidencia especial. Una, más interior de tipo organizativo que nace de la iniciativa de los propios pueblos indígenas, que ven la necesidad de articularse y ser escuchados por el Estado. Y la otra, relacionada a un contexto internacional favorable para los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos.⁷ En tal sentido, existía un terreno favorable para que nazca la CIDOB.

Uno de los aspectos que llama la atención es que la organización adopta características sindicales, al menos en la denominación de sus niveles de organización. Por ejemplo, la CIDOB está organizada de la siguiente manera: a) Presidente/a, b) Vicepresidente/a, c) Secretaría de defensa de tierra y territorio, d) Secretaría de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Económico, e) Secretaría de Comunicación, Investigación y difusión, f) Secretaría de educación bilingüe y cultura, g) Secretaría de salud y h) Secretaría de Género.

De acuerdo con la apreciación de nuestros expertos, la CIDOB “nunca ha logrado consolidarse como una organización extremadamente representativa de los pueblos indígenas. Creo que es una forma de sindicato, que no ha adoptado la forma

6 Con base en García (2005) y otras publicaciones que actualizan la composición de la CIDOB, resumimos que ésta se compone de: La Central Indígena de la Región Amazónica (CIRABO), que agrupa a ocho centrales de pueblo correspondientes a ocho pueblos que habitan en Pando y Riberalta. La Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) que agrupa a las centrales de los pueblos Baure, Canichana, Cayubaba, Itonama, More, Movima, Moxeño-trinitario, Moxeño-javeriano, Sirionó, Tsimane. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), fundada en 1986 y que hoy agrupa a 28 capitanías 16 de los pueblos Guaraní y Tapiete de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. La Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), que articula a las cuatro centrales de cuatro pueblos: Ayoreo, Chiquitano, Guaraní y Guarayo. La Organización de Capitanías Weehnayek (ORCAWETA) que básicamente reúne a las distintas comunidades del pueblo Weehnayek del departamento de Villamontes. La Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO), donde coordinan dos centrales de pueblo; la primera de los Yuracaré y la otra de los Yuqui. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), que reúne a las centrales de los pueblos Leco, Masetén y Tacana del Norte de La Paz. La Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (CIPOAP). La Central Organizativa de los Pueblos Nativos Guarayo (COPNAG). La Central de Mujeres indígenas del Beni (CMIB). La Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB). El Gran Consejo Tsimane (GCT) y la Organización Indígena Chiquitana OICH. (García, 2005 y <https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/confederaci%C3%B3n-de-pueblos-ind%C3%ADgenas-de-bolivia-cidob-37-a%C3%B1os-defendiendo-y>).

7 Ver Assies *et al.* 2002 y Bello, 2004

vertical de los sindicatos como tal, y esto la hace vulnerable a las posibilidades de fraccionamientos, divisiones y paralelismos orgánicos. Porque es labor quijotesca tratar de articular muchas organizaciones que tienen muy marcado el sentido de la autonomía orgánica” (Entrevista a Edgar Izurieta, 19/04/2023). Efectivamente los denominativos que son las carteras y responsabilidades de quienes las asumen, provienen de la organización sindical. Sin embargo, a pesar de que esta organización tiene una estructura sindical, el mandato opera de abajo hacia arriba: “Las subcentrales les tienen que hacer llegar el mandato a las centrales y, las centrales, tienen que hacer llegar a la CIDOB. Y si no son escuchado por la CIDOB pueden desmarcarse. Hay un mandato más de abajo para arriba. Situación muy sui generis de la CIDOB” (Entrevista a Edgar Izurieta, 19/04/2023). Consideramos que la fuerza se encuentra en las bases, de tal manera que se debe hacer caso a las comunidades.

Uno de los temas centrales y prioritarios que ha articulado a los pueblos indígenas de tierras bajas es la demanda de tierra y territorio. Sobre todo, la de territorio⁸, al ser el elemento que hace posible la reproducción, material, identitaria y política, pues como sostiene Canedo:

El territorio para los grupos indígenas en general es el elemento central en su constitución como grupo. El territorio es el lugar central de su existencia y reproducción material, donde se desarrolla la caza, pesca, recolección y cultivo para la subsistencia. Simbólica y culturalmente les permite la reproducción de la identidad, pues es en la relación cotidiana con el territorio que se desarrolla, reproduce y transmite la cultura. La defensa del territorio les ha llevado, además, a posicionarse como actor político, porque es el eje vertebral de la organización y motor de su accionar político. (Canedo 2011, 24)

3.2. Hitos de la CIDOB en el siglo XXI

Resulta necesario rememorar brevemente algunos hitos anteriores al siglo XXI. Históricamente estamos ante una región, que ha sido constantemente avasallada. De esto da cuenta su historia. Por ejemplo, en la zona de Mojos y la zona guaraní, se dieron las míticas *búsquedas de la loma Santa* y la *búsqueda de la Tierra sin mal (Iyambae)*, respectivamente, como formas de escape de actores externos que avasallaban sus territorios. De esas búsquedas en las que los indígenas se internaban “monte adentro”, viene la tradición de las marchas en el siglo XX. La marcha “por el Territorio y la Dignidad” de 1990, fue un parteaguas, pues fue la primera marcha indígena que dio a conocer a la sociedad boliviana, la existencia de una diversidad de pueblos indígenas que habitaban las Tierras Bajas.

8 La literatura sobre la importancia que adquiere el territorio para las poblaciones indígenas es amplia. Como ejemplo ver: García Pedro, 2004. Canedo, 2011. Lehm, 1999.

Esta movilización logró en cierta medida el reconocimiento de sus modos de vida e inició un proceso de restitución parcial de sus territorios ancestrales por parte del Estado (Albó, *et.al*, 2021:209). Después de aquella primera marcha, vendrían otras diez, con diferentes demandas.

4. Tres décadas, once marchas

Las once marchas indígenas, nos remiten a demandas de carácter orgánico político; por tanto, a través de dichas medidas los pueblos indígenas se convierten en actores proponentes del Estado. La primera marcha indígena de 1990 contribuye a que se dé la Reforma de la CPE de 1994 en la que el país se reconoce como Estado multiétnico y pluricultural. Asimismo, se modificó el artículo 171 reconociendo los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen.

El tratamiento de cada una de las marchas⁹ lo hace de manera interesante la tesis de Nelba Fuertes. De manera sucinta rescatamos que el surgimiento de las demandas específicas del Movimiento Indígena de Tierras Bajas, tiene que ver con una lucha territorial y acceso a tierra, donde el territorio es crucial, y está permanentemente en la agenda del movimiento. Sin embargo, también los pueblos indígenas han marchado por reconocimiento, autonomías, Asamblea Constituyente, entre otras. La estrategia y la acción de movilización para que sus demandas sean escuchadas y atendidas son las marchas, ante las cuales el Estado responde con decretos y leyes. De ninguna manera, se da una modificación a las relaciones de poder como señala Fuertes “(...) las respuestas estatales han sido sobre todo medidas legislativas en base a acuerdos recurrentes. Sin embargo, a pesar de haber sido incorporadas las propuestas del MITB (Movimiento Indígena de Tierras Bajas) en la agenda pública, aunque de manera parcial, no modifican las relaciones de poder entre el Estado, las empresas y los pueblos indígenas (Fuertes 2018, 52).

5. La Asamblea Constituyente, momento lúcido del movimiento indígena

La Asamblea Constituyente fue un espacio de condensación, articulación de distintas organizaciones compuestas principalmente por actores indígenas, originarios y campesinos. Las cinco organizaciones campesinas, indígenas y

9 Hasta la novena marcha encontramos un desarrollo en Albó 2021: 24-42.

originarias¹⁰ aunadas en el Pacto de Unidad, diseñan una nueva forma de país, rescatando su carácter plurinacional e intercultural. De acuerdo con la apreciación de los especialistas que trabajan con pueblos indígenas, la Asamblea Constituyente es un momento lúcido del movimiento indígena, especialmente por la oportunidad que tienen de insertar propuestas medulares que le dan un carácter Plurinacional al Estado. “Porque juntos en esa alianza diseñan una nueva forma de país, de ahí nace la concepción de Estado Plurinacional, para el movimiento indígena de tierras bajas es un momento cúspide al entablar alianzas con las otras organizaciones. En la asamblea Constituyente, la propuesta del Pacto de Unidad es la que predomina¹¹. (Entrevista a Edgar Izurieta, 19/04/2023).

Sin embargo, dicha alianza contenía la tensión en su seno de la diversidad de organizaciones que la componían, puesto que estaba conformado de forma más permanente por tres organizaciones “matrices” campesinas (la CSUTCB, los “colonizadores” y la Central de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa) y por dos organizaciones matrices de originarios e indígenas (CONAMAQ, y CIDOB). En función de esta división en el mundo político boliviano, la unión de indígenas y campesinos aparecía en primera instancia como contranatural. Las dos mitades del Pacto de Unidad mostraban sus diferencias en la cotidianidad de sus relaciones en la asamblea. Las organizaciones de matrices campesinas eran instancias orgánicas del MAS, en cambio CONAMAQ y CIDOB eran organizaciones indígenas que formaban el Pacto de Unidad y apoyaban el *proceso de cambio* liderado por Evo Morales, pero no eran “orgánicos” del MAS, ni participaban de sus congresos ni en instancias de decisión (Schavelzon 2013, 40-41).

Resulta interesante lo sostenido por Marcia Mandepora, quien señala que uno de los aportes del pueblo guaraní en el proceso constituyente fue el concepto de Asamblea, tan propio de los guaraníes. “En la Asamblea constituyente el aporte importante de la APG ha sido justamente el concepto de Asamblea. Porque el concepto asamblea surge siempre en tierras bajas, y la APG ha trabajado esa propuesta para que se incorpore en ese proceso, porque la asamblea es parte de la vida democrática del pueblo guaraní” (Entrevista a Marcia Mandepora, 02/05/2023). Asimismo, el tema de las autonomías indígenas trabajado desde las organizaciones de Tierras Bajas fue otro tema crucial en la Asamblea Constituyente.

10 Las cinco organizaciones que formaron el Pacto de Unidad eran: tres organizaciones “matrices” campesinas (la CSUTCB, La confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y la Central de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa) y por dos organizaciones matrices de originarios e indígenas: CONAMAQ, formada por ayllus especialmente de tierras altas y CIDOB con representantes de Tierras Bajas.

11 Puesto que el MAS tenía su propia propuesta de texto constitucional, sin embargo, es la del Pacto de Unidad la que se impone.

6. Marcha por el TIPNIS cúspide de la articulación, e inicio de la crisis

La VIII marcha por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, TIPNIS llevada a cabo en 2011 se constituye en otro hito que marcó la articulación de las organizaciones pertenecientes a la CIDOB, y las alianzas con otros sectores, así como el alejamiento del movimiento indígena de Tierras Bajas del gobierno, y una ruptura con las organizaciones de corte campesina y cocalera, es decir con la CSUTCB,¹² la CSCB¹³ y la Organización de Mujeres Bartolinas CNMCIQB-BS.¹⁴

El proyecto carretero que atravesaría el TIPNIS fue aprobado por el gobierno de Morales ya en el año 2008 sin una negociación o Consulta Previa con los pueblos del territorio en cuestión. El 30 de junio de 2011, Evo Morales había declarado que la Carretera que uniría las poblaciones de Villa Tunari (en el Departamento de Cochabamba) y San Ignacio de Mojos (en el Departamento del Beni) y que atravesaría de Sur a Norte el TIPNIS, se construirá “quieran o no”. Este incomprendible empecinamiento desataría uno de los más largos y violentos conflictos entre el Gobierno y los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de la carretera en defensa de la integridad de su territorio. Este conflicto ha desatado una serie de contradicciones que trascienden el tema de la construcción de la carretera, puesto que ha dado lugar al cuestionamiento de la esencia misma del Estado Plurinacional, pues el conflicto ha hecho aflorar el cuestionamiento al incumplimiento del reconocimiento de la libre determinación de los pueblos que en la nueva Constitución Bolivia se halla expresada en el segundo artículo, y que es considerado como uno de los grandes avances de la misma.

Como señala Izurieta, en la octava marcha se ha dado el rol protagónico y positivo de la CIDOB. La marcha sin ella, hubiese sido distinta.

La marcha la convoca la CIDOB, un directorio cercano al MAS pero que luego se ha alejado radicalmente. Es un directorio que ha sacado el pecho, que incluso ha sufrido las agresiones en el proceso constituyente y que al final han sufrido un desencanto. Creo que ese contexto ha hecho que ellos se plieguen, han sido un actor importante en el momento de aglutinar a todas las regionales en defensa del TIPNIS. Una marcha en defensa del TIPNIS sin la CIDOB hubiera sido distinta. Han sido un articulador, un catalizador y se ha observado la participación de la acción colectiva de todas las regionales. Ha sido un momento de encuentro y no hubiese sido posible sin la convocatoria de la CIDOB (Entrevista a Edgar Izurieta, 19/04/2023).

12 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

13 Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia.

14 Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa.

De esta manera, el TIPNIS se convierte en un caso emblemático de resistencia y que ha dejado huella y lecciones. Ese acontecimiento ha marcado pautas orgánicas que se resumen en “‘el problema de uno es el problema de todos’, es decir lo que te puede pasar a ti, también me puede suceder a mí, así que mejor te defiendo”. (Entrevista a Edgar Izurieta, 19/04/2023).

La VIII marcha es un cuestionamiento del movimiento indígena al Estado Plurinacional que pretendía construir una carretera que atravesase el Parque y la Reserva. Es una forma de recordarle al Estado, el horizonte del Vivir Bien que se encontraba plasmado en la CPE, y reprocharle el modelo extractivista que lleva a cabo.

La octava marcha es un momento crítico, es un llamado al Estado Plurinacional de que está perdiendo el rumbo y que había que volver al origen. No había surgido para partir territorios y entregarlos a la vorágine del extractivismo (Entrevista a Edgar Izurieta 19/04/2023).

La octava marcha indígena por la defensa del TIPNIS, se podría considerar el momento de organización y de articulación de la CIDOB. Sin embargo, también es el principio de la crisis de la que no termina de levantarse hasta hoy.

La novena marcha llevada a cabo en 2012, mostró el repertorio del agotamiento de la marcha como protesta. La novena marcha, marca el declive del movimiento de Tierras Bajas, y es el inicio de la división orgánica de la CIDOB que continúa en la actualidad.

7. Autonomías indígenas, hitos más locales

La octava marcha en defensa del TIPNIS constituyó en uno de los últimos hitos importantes. Después de ella, ya no se ha visto experiencia parecida. Y de aquella, ya ha transcurrido más de una década. Sin embargo, existen acontecimientos más locales que marcan logros. Tal es el caso del avance en las autonomías indígenas. Si bien la consolidación de los procesos autonómicos podría haberse constituido en una única bandera por medio de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originarias y Campesinas (CONAIOC), no se dio de esa manera. El balance que se hace es que la consolidación de las autonomías indígenas hubiese sido “como una herramienta de articulación y de demanda para ejercer su libre determinación para ejercer sus autonomías, podría haber sido un referente, pero ya no lo es. Entonces el avance lo hace cada pueblo de manera aislada y de manera silenciosa. Son mini hitos que van teniendo” (Entrevista a Edgar Izurieta, 19/04/2023).

Una evaluación de las autonomías en Tierras Bajas, se centra en destacar que existen algunos problemas referidos a que el funcionamiento de las autonomías indígenas se parece a la de un municipio, echando en falta las características propias que debe tener. Asimismo, se destaca la incorporación de algunos elementos propios de la organización. Por ejemplo, en el caso Guaraní:

Hay tres autonomías, en Santa Cruz está Charagua y Gutiérrez. Hay problemas y esperamos que en un futuro vayan adquiriendo características propias, pero difícil las competencias ya están dadas desde arriba, son como municipios con algunas competencias. El sistema de administración es al estilo de gobiernos municipales. Claro que algunas cosas el *Kereimba Iyambae* ha logrado incorporar, por ejemplo la Gran Asamblea y también el PISET, a nivel de las autonomías se traslada a ellas esto de la Producción, Infraestructura, Salud Educación y Tierra y Territorio. Antes estaban los concejales. Con las autonomías hay la Gran Asamblea conformada por las autoridades naturales de cada comunidad: una mujer y un varón. Esta Gran asamblea elije a sus administradores, deliberan y toman decisiones sobre aspectos administrativos. Estos asambleístas, son las autoridades de las comunidades que se convierten en asambleístas que se reúnen dos veces al año. No son como concejales que deciden, sino ahora es como la Gran Asamblea que decide. Implica también concientizar a la gente a las comunidades, y lograr comprender porqué es una autonomía, porque siguen creyendo que es una alcaldía. (Entrevista a Marcia Mandepora 02/05/2023)

7.1. La CIDOB en la actualidad

Como varias de las organizaciones sociales, en la actualidad, se encuentran atravesando una profunda crisis, la CIDOB no es la excepción. Después de la marcha por la defensa del TIPNIS, la CIDOB entró en una etapa de aletargamiento. Y claro, también sufrió las consecuencias del alejamiento y ruptura con el gobierno. Ante esta ruptura, la estrategia pernicioso que se ha dado el gobierno es la cooptación de la organización, y cuando no ha sido posible la cooptación, la fragmentación ha sido el camino. De tal modo, que en la actualidad nos encontramos ante organizaciones escindidas, lo que ocasiona que se debiliten aún más y sea imposible dar respuesta a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas. La CIDOB se halla dividida, al igual que sus niveles organizativos como las Centrales: la CPIB y la APG por ejemplo. Al estar divididas están perdiendo representatividad. La escisión provoca que cada parte se esfuerce por ganar base social. Se han originado organizaciones paralelas: existiendo una CIDOB orgánica, y otra oficialista.¹⁵ Esto

15 “Hoy en día por lo menos existen dos facciones de la CIDOB que están claramente definidas, y una tercera que no tiene mucha llegada y se han quedado en dos que responde a intereses político partidarios. Quizá una fracción más cercana al MAS y la otra a la otra facción. Nunca ha habido articulación real de todas las organizaciones que la conforman” (Edgar Izurieta, 19/04/2023).

desembocó en la descoordinación total con sus regionales, y las regionales hacia sus subcentrales. No existe un flujo comunicativo, sino más bien hay rupturas en estos niveles. Como bien señala Izurieta, “Sino se recupera la comunicación, la opción es que se generen nuevos canales de articulación hacia el Estado para ser escuchados” (Entrevista a Edgar Izurieta, 19/04/2023).

O en el caso guaraní, lo que acontece se ilustra claramente de la siguiente manera:

Había un directorio de la APG que son más progobierno, y otro directorio que son más críticos, o se los tilda de antigobierno. Hasta ahora se mantiene así, pero estamos a la espera de una nueva directiva que articule y vuelva a escuchar a las bases. Porque en estos últimos años la APG a nivel nacional este nuevo directorio ha dejado de escuchar a las bases porque unas Capitanías coordinan con la APG, otras con el paralelo y eso hace daño. Entonces la APG ha perdido credibilidad con las comunidades. Y ese nivel de relación con las comunidades está débil. (Entrevista a Marcia Mandepora, 02/05/2023)

Lo cierto es que cuando la organización indígena se acerca al partido de gobierno, lo que sucede es que se sobrepone la agenda política y abandona la orgánica. A esto se suma, que los dirigentes que están respondiendo a los mandatos del partido político, van a sufrir las consecuencias de censura, falta de legitimidad y desconocimiento de parte de las comunidades, y estas además buscarán otros canales para hacerse escuchar. “Lo que está sucediendo es que existen organizaciones que ‘están haciendo buena letra con el gobierno’, y esto les va a pasar factura a la larga, porque no están defendiendo los derechos de los pueblos indígenas” (Entrevista a Edgar Izurieta 19/04/2023).

El hecho de que el MAS haya subido al poder durante más de catorce años, y ahora contemos con un panorama donde las organizaciones indígenas se encuentran debilitadas, divididas o cooptadas, llama a una profunda reflexión de lo que está aconteciendo con estas instancias que debían ser el bastión de interpelación al Estado.

7.2. Tejiendo articulaciones

Resulta por demás interesante, que ante el contexto de crisis por el que la CI-DOB está atravesando, la forma de resolver no es fortaleciendo sus directorios o sacando a algunos dirigentes y colocando a otros. En Tierras Bajas, un ejemplo es lo que sucede en el Beni, donde se están gestando alianzas interterritoriales, que buscan hacerse escuchar con el Estado y dar respuesta a sus necesidades y problemas, ante el incumplimiento de las organizaciones matrices y de la agenda estratégica.

Por ejemplo, el Gran Consejo Chimán está entablando alianzas con otros pueblos con la característica de que lo está haciendo como pueblo, como representante del territorio chimán y no como organización supracomunal. De esta manera la forma de articulación es tejer alianzas entre territorios. Podría ser, como apunta Izurieta que “a la larga, estas alianzas puedan generar nuevas formas de organización”. De alguna manera, estas articulaciones son vestigios locales de reunificación. Como cuenta el investigador Edgar Izurieta: “En San José Angosto se han reunido y los procesos de unificación pueden darse a este nivel considerar la articulación de varias comunidades. Son cincuenta y tres comunidades reunidas que estaban opuestas, no se miraban la cara y ahora se han unido a una sola voz, diciendo no queremos la carretera por medio de nuestro territorio les han dicho a la gobernación de Beni y Cochabamba”. (Entrevista a Edgar Izurieta 19/04/2023). Son procesos que no están concluidos y que vislumbran una continuación en pos de un fortalecimiento.

Como sostuvimos líneas arriba, llama la atención que nuevas propuestas de organización estén circulando. Tal como la propuesta del Parlamento indígena. Marcial Fabricano en la onceava marcha planteó la posibilidad de formar esta instancia. Por tanto, se trata de la posibilidad de recuperar la representatividad de los pueblos indígenas como etnias, como pueblos indígenas como tales: chimán, guaraní, moxeños, movimas. Dejando de lado la forma de organización sindical. Y a esto apuntarían las alianzas interregionales.¹⁶

Uno de los problemas actuales que realmente atingen a los pueblos indígenas son los avasallamientos por los colonizadores, en los que sus territorios se ven amenazados y cada pueblo de manera aislada se encuentra afrontándolos.¹⁷ Por tanto, nuevamente el enclave tierra y territorio podría ser el eje articulador de los pueblos. “Y la lucha contra los avasallamientos podría constituirse en un foco de resistencia, por medio de alianzas” (Entrevista a Edgar Izurieta, 19/04/2023).

El momento actual es de alta fragmentación y a la vez las muestras de recomposición propician un momento interesante, pues a pesar de la crisis existen ganas de

16 Además de las alianzas interterritoriales, alrededor de agendas determinadas. Hay otras como la entablada con la Confederación Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA). Esta instancia panamazónica que fue creada en la década del 80, está conformada por las organizaciones de distintos países amazónicos. En la actualidad es la CIDOB orgánica la que ha sido reconocida por la COICA, sin embargo, la respuesta a los encuentros de las organizaciones amazónicas y las propuestas trabajadas con esta instancia internacional no son socializadas en los territorios. Por tanto, es como si la CIDOB respondiese a manera de esqueleto sin carne, sin una base social empapada de los temas y preocupaciones tratadas.

17 Fundación Tierra es una de las principales instituciones que ha investigado el tema. Ver Colque, Gonzalo (2022)

proponer algo nuevo “con líderes antiguos proponiendo parlamentos indígenas, y líderes nuevos proponiendo alianzas interterritoriales, que puede llegar a buen puerto, pues en algo tiene que decantar este magma en pleno estado plurinacional. Ya no es un momento de un movimiento que levantó las banderas en defensa del TIPNIS pero es un momento que abre luces para nuevas formas de articulación” (Entrevista a Edgar Izurieta, 19/04/2023).

Quedan puntos pendientes y cuestionamientos sobre temas centrales, como las razones para que las autonomías indígenas no hayan avanzado. O los motivos por los que no se ha concluido el saneamiento de tierras. O las demandas hacia el Estado para que éste resuelva el tema de los avasallamientos. O el cuestionamiento al modelo económico de corte extractivista que afecta directamente a los pueblos indígenas. O el reclamo por la deforestación y los incendios principalmente en el oriente boliviano,¹⁸ entre otros.

8. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) fue creado el 22 de marzo de 1997 en Ch'allapata. Es una organización estructurada básicamente por comunidades y ayllus regionales aymaras, quechua y uru, teniendo presencia, en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí. En 1997, se había dado el Primer Encuentro de Autoridades Originarias de los Ayllus y Markas del Qullasuyu, organizado por la Federación de Ayllus del Sur de Oruro (FASOR). Antes de la fundación de CONAMAQ, existieron varios encuentros que agruparon a las diferentes organizaciones originarias que habían ido “reconstituyéndose” en términos simbólicos y organizativos (García 2005, 323).

La Confederación Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (conamaq) agrupa a distintas organizaciones de autoridades originarias de la zona andina de Bolivia. Entre ellas figura la organización de los ayllus de Cochabamba. En Oruro existen grandes asociaciones de ayllus, como la Confederación de Ayllus del Jacha Carangas, los Soras, los Urus Chipayas, FASOR (Federación de Ayllus del sur de Oruro). Cada una intenta agrupar a varios ayllus. Al ser instancias organizativas recientes, tienen el problema del doble liderazgo y divisiones internas. Tanto CONAMAQ como las que la componen surgieron en el transcurso de la década del 90, en un intento de reconstituir la antigua organización de ayllus de la zona andina. Puesto que en muchos casos los ayllus desaparecieron para dar lugar a los sindicatos agrarios. De

18 Para ver el tema de la afectación de la minería aurífera y los incendios de los últimos años en los pueblos indígenas, revisar Canedo (2022).

tal modo que la pretensión principal es la reconstitución del sistema organizativo, ya no con un discurso de clase, como el que tienen los sindicatos campesinos; sino con un discurso basado en la identidad étnica (Antequera 2016, 334).

En el campo, el sistema sindical se entronca en las comunidades, pero las comunidades son más complejas, más interesantes, tienen su base ideológica en el sistema del ayllu, *markas* y *suyus* y eso no era parte del sindicalismo, y el CONAMAQ rescata esa vertiente olvidada pero presente en las comunidades. (Entrevista a Wilfredo Plata 18/03/2023).

Diversos textos y especialistas mencionan que el surgimiento de CONAMAQ, enarbolando la estructuración de las organizaciones originarias por regiones y a nivel nacional, se da por un cuestionamiento hacia el denominativo, el nombre y la forma de actuar de los sindicatos campesinos. El CONAMAQ reivindica su derecho a un desarrollo autodeterminado y la reconstitución de sus propias autoridades y territorios (García 2005, 324).

CONAMAQ surge como una especie de respuesta al sindicalismo. La CSUTCB tiene su origen en la revolución del 52, en la Reforma Agraria en 1953, que representa al campesino que reclama tierra. Esa matriz sindical, se implanta en el campo a partir del 53. El valle Alto, en Cochabamba y Achacachi en La Paz. Así, surgen sindicatos campesinos y la revolución que dice la tierra es para quien la trabaja, contra los patrones. Esa matriz sindical, no recoge la versión originaria del sistema de los ayllus las comunidades indígenas originarios tienen como base el Ayllu y el sindicato no refleja esa vertiente (Entrevista Wilfredo Plata 18/04/2023).

En palabras de Fredy Villagómez, algunos de los objetivos fueron la reconstitución de los territorios, la restitución de las autoridades originarias y en definitiva, la creación de organizaciones propias, autónomas que no se alineen al gobierno de turno.

Entonces el CONAMAQ nace con la finalidad de reconstituir los territorios ancestrales y restituir autoridades originarias. Desde los años 50 en la región del altiplano, casi se impuso la organización de sindicatos. Incluso en algunos casos funcionaba de manera paralela entre sindicato y organización originaria. Porque el sindicato era la instancia reconocida por el Estado para dialogar con las comunidades. En este marco, de manera obligatoria, todas las comunidades organizaron su sindicato para relacionarse con el Estado. Y los sindicatos se alinearon a los gobiernos de turno. Por tanto, el objetivo era recuperar costumbres, reconstituir territorios ancestrales y el manejo colectivo del territorio. (Entrevista a Fredy Villagomez 28/04/2023)

De acuerdo con García, los principios básicos del CONAMAQ están referidos primero: al rol protagónico e histórico que deben desempeñar, como pueblos

originarios. En segundo lugar, la protección del medio ambiente. Como tercer precepto, el que los ayllus se mantuvieran en el tiempo con capacidad de desarrollar y sostener sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, etc., subrayando, además, sus principios de “multiétnicidad y pluriculturalidad”. A partir de una presencia de numerosos ayllus en las zonas del altiplano sur, que durante décadas se resistieron a la adhesión a la forma sindical, el CONAMAQ en parte es fruto de un esfuerzo organizativo de los propios ayllus, pero también de instituciones no gubernamentales, como el THOA (Taller de Historia Oral Andina). Esta presencia de oenegés en la constitución del ayllismo en espacios territoriales mayores, en los que localmente tienen fuerza autónoma los ayllus, marcará ciertas características burocrático-administrativas del CONAMAQ (García 2005, 324).

Como bien queda grabada en la historia y trayectoria del CONAMAQ, hubo la idea de que la CSUTCB sea la organización originaria era lo más coherente. Sin embargo, la CSUTCB se quedó con la reivindicación sindical y con la fundación del CONAMAQ, buena parte de las organizaciones y base social se quedaron en la sindical y otras se han adherido a la nueva, dando la impresión de que el CONAMAQ fuera una organización paralela a la CSUTCB. Con todo, resulta visible que en términos de fuerza política y numérica la CSUTCB es más grande y fuerte. Puesto que la presencia de CONAMAQ se focaliza a los departamentos de Potosí, Oruro, Cochabamba y La Paz, de los cuales en Oruro y Potosí las organizaciones que están afiliadas al CONAMAQ son fuertes. En La Paz los enclaves se encuentran en Pacajes. De Chuquisaca la nación Qhara Qhara, constituye una pequeña parte.¹⁹

Una de las diferencias esenciales entre el CONAMAQ y la CSUTCB es el aporte del *chacha warmi*, esta práctica presente en el sistema originario, es un aporte simbólico. La autoridad mallku originario se lo asume en pareja, hombre y mujer. En el caso de la mujer, no necesariamente tiene que ser la esposa, sino puede ser la hermana o la hija. De esta manera la mujer queda incluida, caso contrario ella quedaría relegada a la casa y a las labores domésticas. En cambio, en el sindicato solo participa el hombre, es una instancia patriarcal y machista.

19 Resulta ejemplificador lo que sucedió en la provincia Ingavi. La provincia Ingavi en La Paz tiene que ver con CONAMAQ. Hubo una reunión en 1998 en Jesús de Machaca y supe que la pugna era esa. En términos organizativos, se crea la SIMACO (Suyú Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias), ubicada en la zona de Tilata del municipio de Viacha, provincia Ingavi, y SIMACO que es parte de la recuperación de lo originario, perfectamente encaja en CONAMAQ. Sin embargo, hoy en día SIMACO es parte de la CSUTCB de la Tupaj Katari, por ese error político que cometió CONAMAQ (de pactar con Banzer) (Entrevista a Wilfredo Plata, 18/04/2023).

La autoridad mallku originario es en pareja, aunque no fuera su esposa, sino su hermana o su hija. Ese aporte es interesante. El sistema originario, en Jesús de Machaca y se ha amplificado a toda provincia el sistema originario. Chacha warmi viene del ayllu, aunque es simbólico. Es un gran aporte sino la mujer se queda en la casa y el hombre va de jefe de autoridad. Macho hembra, se puede amplificar, aransaya/urinsaya. Un concepto de la vida aplicado a lo organizativo, esa es la esencia, la lógica, el camino que ha recuperado la fundación del CONAMAQ (Entrevista a Wilfredo Plata 18/04/2023)

9. Hitos del CONAMAQ en el siglo XXI

Varios son los hitos por los que atravesó el CONAMAQ, algunos se constituyeron en acontecimientos positivos, otros marcaron quiebres y alejamiento de determinados actores. De esta manera resaltaremos su fundación, el pacto que hace con el entonces presidente Hugo Banzer Suárez, la participación en la Asamblea Constituyente, el apoyo a la octava marcha, las autonomías y la titulación de territorios colectivos.

9.1. Hitos el nacimiento del CONAMAQ y el pacto con Banzer

De acuerdo con especialistas, un hito del Consejo Nacional de Marcas, Ayllus del Qollasuyu es su misma fundación, puesto que con ella se ha posicionado y ha ganado terreno lo originario. De tal manera, que no se halle subordinado al sistema sindical. Seguro que la conmemoración en 1992 de los 500 años de la llegada de la colonización jugó un papel importante, resaltando el carácter cultural y étnico de los pueblos que fueron conquistados y subyugados.

Asimismo, otro hito, aunque este será de quiebre, es el pacto con Banzer que el CONAMAQ hizo en el contexto de las movilizaciones del año 2000. Las movilizaciones del año 2000, que implicó el gran bloqueo de caminos fue un evento histórico en el que la organización pudo tener un gran protagonismo; sin embargo, la actitud pragmática de algunos líderes del CONAMAQ hicieron que sea una oportunidad perdida, debido al pacto que hizo con el entonces presidente Gral. Hugo Banzer Suárez.

En ese acontecimiento “CONAMAQ estaba negociando con Banzer y ese fue el quiebre. Fue un error táctico y político, grave. Entonces la idea de convertir CSTUCB en CONAMAQ ya no se dio. Felipe Quispe ya desechó esa posibilidad porque tenía razón, en plena lucha de reivindicaciones CONAMAQ queda fuera y CSUTCB fue la contestataria. Esta fue la división definitiva”. (Entrevista a Wilfredo Plata, 18/04/2023). Este pacto, le costó a CONAMAQ la permanente crítica de parte de la CSUTCB y de sectores de izquierda. Sin duda, fue un craso error.

CONAMAQ muestra un carácter más pragmático, y de alianza con los gobiernos, pretendiendo diferenciarse de la CSUTCB y dando el mensaje de que no es una instancia político-partidaria. De esta manera, se negocia proyectos, se realiza pactos abandonando una posición reivindicativa. En las movilizaciones del 2000, claramente la CSUTCB a la cabeza de Felipe Quispe mostró una visión más política, coherente, y más radical: la propuesta de las dos Bolivias donde una de ellas se reivindicaba a través de la nación aymara, es una propuesta firme. A esto se añade que la CSUTCB se halla anclada en una reivindicación de clase y étnica. En tal sentido, maneja propuestas en las que defiende y representa a los pobres, excluidos y originarios.

De esta manera, determinados argumentos que se refieren al hecho de que el COMANAQ y la CIDOB no tengan una reivindicación de clase, hace que estas instancias sean más propensas a los pactos con sectores dominantes.²⁰

9.2. La titulación de TCOs y la Asamblea Constituyente

Desde la promulgación de la Ley INRA en 1996 tanto la CIDOB en Tierras Bajas, como el CONAMAQ en Tierras Altas se abocaron a la titulación de la tierra de manera colectiva, o bajo la figura jurídica de Tierra Comunitaria de Origen. Se contó con el apoyo de DANIDA, una oenegé danesa.

De esta manera en Oruro y Potosí se avanza en la titulación de territorios. CONAMAQ tiene de referencia la experiencia de CIDOB, en cuanto a reivindicación y titulación de territorios. Es así como, se reivindica TCO ya sea pequeñas o grandes. Por ejemplo, la TCO López es la más grande de Bolivia, y tuvo que ser impulsada por el CONAMAQ.

Otro hito para CONAMAQ es el haber sido parte del Pacto de Unidad,²¹ ya desde el 2004. Haber desempeñado un papel central en la Asamblea Constituyente. Gran parte de la propuesta de autonomía indígena fue dada por el CONAMAQ y la CIDOB. La reivindicación de lo originario para que se convierta en autonomía indígena fue dada por el CONAMAQ.

20 De igual manera en el conflicto de 2019, los ponchos rojos muestran acercamiento a Luis Fernando Camacho. Tienen una postura crítica al gobierno, pero sin tener claro que no pueden entablar alianza con facciones de derecha.

21 CONAMAQ se encontraba en el Pacto de la Unidad con organizaciones que apoyaban al Gobierno, pero mantenía su independencia y en algunas coyunturas fue crítica. En 2007, sus bases y organizaciones locales vivían disputas internas entre sectores afines al Gobierno, sectores independientes y sectores cercanos al alcalde de Potosí, René Joaquino, del partido Alianza Social. (Schavelzon 2012, 104).

Yo recuerdo que durante la Asamblea Constituyente elaboraron una propuesta los del MAS paralelo al pacto de unidad. En esa propuesta estaban dirigentes de MAS y Bartolinas, y recuperación de recursos naturales y del otro lado, eran más de tipo territorial de tipo más colectivo. Los derechos colectivos son incorporados por la CIDOB y CONAMAQ. Desde entonces ya había tensión entre CSUTCB y CONAMAQ, porque los otros planteaban más temas individuales, y los otros más temas colectivos. Y en esto puedo afirmar que la propuesta del Pacto ha estado sostenida por la CIDOB y CONAMAQ con un contenido y fundamento de carácter colectivo, territorial. (Entrevista a Fredy Villagómez 28/04/2023)

De acuerdo con la etnografía de la Asamblea Constituyente realizada por Schavelzon, el CONAMAQ fue una de las organizaciones sociales más activas durante la Asamblea Constituyente, con veedores en varias comisiones y acompañamiento permanente con oficina en Sucre. Concretamente los principios que se buscan recuperar o reforzar en el trabajo comunitario eran los de la dualidad-complementariedad; la rotación; la reciprocidad y la redistribución. Asimismo, señala que el CONAMAQ se definía como crítica del neoliberalismo, defensora del llamado “Desarrollo Integral” y también de la propuesta de Estado Plurinacional Comunitario (Schavelzon 2012, 104). Tal como se sostuvo líneas arriba, para el CONAMAQ era central la reconstitución de los territorios ancestrales, en tal sentido en la Asamblea Constituyente tenía como prioridad avanzar en la *reconstitución* de los territorios ancestrales de las naciones originarias y pueblos indígenas. Para ellos, la territorialidad y consolidación de territorios ancestrales era base fundamental para la autonomía, el autogobierno y otros derechos que la Nueva Constitución reconocería a los pueblos indígenas. (Schavelzon 2012, 164). Asimismo, el autor señala las pulsetas que se dieron dentro la Asamblea Constituyente las que nos muestran que el proceso de elaboración y redacción de la nueva CPE no fue llana, sino más bien llena de tensiones entre las propias organizaciones del Pacto de Unidad.

9.3. El TIPNIS y la defensa del territorio. Un momento de quiebre

Para el CONAMAQ, de igual forma que lo fue para la CIDOB, el gran quiebre y distanciamiento de esta organización con el gobierno se produjo a raíz de la octava marcha por la defensa del TIPNIS y en contra de la construcción de la carretera. Así como el alejamiento de aquella alianza –el Pacto de Unidad– que había logrado grandes avances durante la Constituyente.

La defensa del territorio es el vínculo común entre la CIDOB y el CONAMAQ. Para ambas organizaciones, el territorio adquiere una importancia crucial. De tal manera, que la ofensiva al TIPNIS, construyendo una carretera que lo atravesase, era herir de muerte aquello que es esencial, *el territorio*.

El gran quiebre es el TIPNIS, la octava marcha del 2011, esa es la razón porque rompen CONAMAQ y CIDOB con el gobierno; porque estaban tocando algo esencial que hace a la misma organización, el territorio. Más a CIDOB que a CONAMAQ. Es como tocar el corazón de la propuesta política, ideológica con la partición del territorio por la carretera. Esa es la razón. Principalmente para la CIDOB. (Entrevista a Wilfredo Plata 18/04/2023)

Las priorizaciones del Estado boliviano están dirigidas a un modelo de desarrollo extractivista que atenta contra los principios defendidos por los pueblos indígenas.

Ahí ha sido un punto de inflexión al interior de las organizaciones. Ahí ha habido quiebre del Pacto de Unidad. CIDOB y el CONAMAQ se sumaron de lleno a la demanda o a la reivindicación de los pueblos indígenas del TIPNIS por la construcción de la carretera por el gobierno nacional. Ahí han empezado a reclamar el derecho a la consulta, y el derecho al territorio. El gobierno de manera autoritaria, sin consultar a los pueblos indígenas dijo que sí o sí se construiría la carretera. Eso generó el embrollo del 2011. De lleno estuvieron el CIDOB y CONAMAQ, en temas de autogobierno libre determinación, consulta previa, retomando las normas que les defienden y les respaldan como el convenio 169 de la OIT. La declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, del 2007 (Entrevista Fredy Villagomez, 28/04/2023).

Finalmente, a partir del 2009, una vez aprobada la CPE, el CONAMAQ ingresa en una etapa de aletargamiento. Por ejemplo, la consolidación de las autonomías, podría haber sido un buen momento de aplicación de la nueva Constitución en la que el CONAMAQ hubiese tenido un papel protagónico. Sin embargo, como sostiene Wilfredo Plata, “se da un hito al revés, CONAMAQ se pierde en sus peleas y no es parte de la aplicación de la Constitución, la autonomía. En Jesús de Machaca, Raqaypampa, Lomerío, influenciados desde la academia y las oenegés, se da lo de las autonomías; pero no está CONAMAQ, que era la más indicada, representativa de lo originario y no las lleva adelante” (Entrevista a Wilfredo Plata 18/04/2023).

10. Fragmentación en CONAMAQ

El CONAMAQ en la actualidad se encuentra en crisis y una de las debilidades radica en que no tiene razón de ser. Es decir, carece de una bandera que enarbolar, por la que luchar. Efectivamente cualquier organización tiene que contar con una base a la cual representar. Y es lo que el CONAMAQ no tiene. Constantemente surge la comparación con la CSUTCB, organización que ya sea con Genaro Flores o Felipe Quispe tenían sus misiones mucho más claras. “No veo una acción colectiva, con fuerza, que muestre músculo. Ingavi tiene dos carreteras, tiene fuerza. Han bloqueado solitos.

Han ganado respeto. Tienen músculo, pero pertenece a la CSUTCB” (Entrevista a Wilfredo Plata, 18/04/2023). Fuerza que no tiene CONAMAQ.

De igual forma que la CIDOB, el CONAMAQ se halla fragmentado. Esta división se dio alrededor del año 2018. Sin embargo, ya después de la octava marcha por el TIPNIS hubo amagues del gobierno, organizando instancias paralelas. El Jiliri apu Mallku Felix Becerra fue la última autoridad en la que CONAMAQ estaba unificada. Hoy en día se tiene una CONAMAQ oficial y la otra orgánica.

Luego de la marcha del TIPNIS, el gobierno organizó otras instancias paralelas para defenestrar a las organizaciones orgánicas. Y de ahí comienza las rupturas internas. Estas rupturas han llegado a nivel nacional, sino a las regiones (Entrevista Fredy Villagómez, 28/04/2023)

De acuerdo con la visión y análisis de Fredy Villagómez, la facción de la CONAMAQ oficialista se ha recuperado y ha vuelto a rearticular la mayoría de los Suyus.

Sin embargo, no tiene claridad, no tiene proyecto político como antes solía tener esta instancia. Antes tenían claridad en la reivindicación de lo colectivo. Antes tenía claridad en la reivindicación de los derechos colectivos, autogobierno, restitución de autoridades originarias, reconstitución territorial. Esa claridad no hay ahora. Más bien es en función a la agenda política del gobierno: Cargos, eventos, más aparece el CONAMAQ respaldando al gobierno. En la última movilización que protagonizaron los de Santa Cruz, por el CENSO, han salido los del CONAMAQ para defender el proceso de cambio, a Arce. Ese rol está jugando en este momento. No están reivindicando las agendas, históricas, estratégicas de los pueblos indígenas, sino acompañando a un proceso que está en crisis. Procesos *de cambio*. (Entrevista a Fredy Villagómez, 28/04/2023).

De esta manera, comprendemos que acciones más autónomas y autogestionarias no existen. Si bien hubo un periodo de lucidez entre el 2003 y 2011, donde existió una discusión más estructural y política, en la actualidad el accionar es mucho más pragmático. Consiste en acompañar el proceso y sacar beneficio de ese apoyo y acompañamiento. Y como es de entender, el CONAMAQ oficialista es la que no quiere quedar aislada de cargos, proyectos.

11. Epílogo

En el breve recorrido y abordaje que hemos realizado de las dos organizaciones que por excelencia representan a los pueblos indígenas de Tierras Bajas y Tierras Altas, hemos transitado por el origen, y la razón de ser las mismas. La

CIDOB fue fundada en 1982, quince años antes que el CONAMAQ, por tanto, la necesidad de articulación y el reconocimiento de los pueblos indígenas se dio en Tierras Bajas. En 1997 el CONAMAQ se fundó para rescatar la esencia del ayllu y la reconstitución de los territorios ancestrales. Concluimos que CONAMAQ se fundó posteriormente, porque la CSUTCB había copado a través del sindicalismo la región andina. De hecho, la CSUTCB reivindicaba los derechos de las comunidades desde una perspectiva de clase. Aquí radica su principal diferenciación con el CONAMAQ.

Entre los hitos por los que han atravesado, la Asamblea Constituyente como espacio de diseño del nuevo Estado y la nueva CPE se constituye en un momento de lucidez del movimiento indígena y originario. De hecho, pese a que se conformó el Pacto de Unidad que aglutinó a cinco organizaciones de matriz campesina, indígena y originaria, en el desarrollo de la Asamblea de manera evidente afloraron las diferencias, tensiones, y las organizaciones tuvieron que sortear una serie de obstáculos y llevar a cabo pulsetas. Sin embargo, fueron de manera crucial la CIDOB y el CONAMAQ quienes contribuyeron con la propuesta central para darle al nuevo Estado, el carácter Plurinacional y autonómico. El aporte en la nueva CPE para atravesarla y permearla con componente indígena, originario y alcanzar de manera vital su inclusión, fue trascendental.

Asimismo, hemos podido constatar que otro hito ha sido la octava marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Este acontecimiento, ha permitido a la CIDOB ser la protagonista para aunar y convocar a todas las organizaciones que representa. El CONAMAQ, ha apoyado. Estas dos organizaciones que tienen en común –el manejo colectivo de sus territorios– por medio de la octava marcha, han interpelado al Estado Plurinacional, y le han señalado su lado extractivista, opuesto y contradictorio al Vivir Bien que habían enarbolado.

Después de la marcha en defensa del TIPNIS, vino un periodo de aletargamiento y poca incidencia de estas dos organizaciones. Asimismo, están aún sufriendo una etapa de crisis, de división y existencia de organizaciones paralelas. De la misma manera, la agenda política-partidaria se ha convertido en lo más importante en detrimento de la orgánica. Esta situación es de conocimiento y reflexión de las comunidades y la gente de base.

Los especialistas analizan lo pernicioso que resulta que los partidos políticos se hayan inmiscuido en la organización, por medio de dirigentes que son más obedientes al partido político que a la población indígena a la que representan. O también sucede que alinearse con el partido de gobierno, por ejemplo,

supone que recién las comunidades se benefician de proyectos, infraestructura, entre otros.

En el caso de las Tierras Bajas, lo que nos llama la atención y se constituye en un desafío son las muestras de alianzas que se están dando de manera interterritorial. Esta estrategia adoptada ante la falta de solución y falta de atención de las Organizaciones matrices, arroja la esperanza de que esta sea el camino certero para atender problemáticas cotidianas y estructurales que atingen como: el avance en el proceso autonómico, la detención a los avasallamientos, la respuesta ante necesidades de infraestructura u otros requerimientos en las áreas de salud, educación, que importan a las comunidades.

El emprendimiento de alianzas entre territorios y ojalá la consolidación de las mismas, se dan porque un territorio se siente reflejado en la situación del otro. Lo que ha llevado a formar estos pactos.

Respecto a la autonomía existe una serie de retos que deben ser afrontados. Una de las críticas centrales es que ésta no recoge la demanda de autonomía y libre determinación de antaño; sino que han sido absorbidos por la lógica municipal. Y como sostienen nuestros entrevistados, estos procesos lo viven de manera individual. Si es que se afrontara de manera orgánica, el avance podría ser mucho más rápido, y mucho más reflexivo.

En ambos casos, la CIDOB y el CONAMAQ no tienen un horizonte claro y certero al cual dirigirse. Las reflexiones recogidas, van en el sentido de que ambas tienen que perseguir un objetivo y, en el contexto actual, hallar una razón de ser que les permita articularse, fortalecerse y movilizarse.

Bibliografía

Albó, Xavier

2021 “Contextualización del TIPNIS, TICH y más allá” en Albó, Xavier, Ismael Guzmán y Fredy Villagómez. *Territorio y disputa de recursos naturales: el caso del TIPNIS y Bosque de T'simane*. La Paz: CIPCA.

Albó, Xavier, Ismael Guzmán y Fredy Villagómez

2021 *Territorio y disputa de recursos naturales: el caso del TIPNIS y Bosque de T'simane*. La Paz: CIPCA.

Antequera, Nelson

2016 *Debemos gobernarnos a nosotros mismos. Gobiernanancheq tian noqancheq pura. Organización política originaria del ayllu andino (Kirkyawi-Bolivia)*, Bolivia: Tupac Katari.

- Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia
 2006 “Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado. ‘Por un Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas’. Sucre.
- Assies, Willem, Marco Calderón y Tom Salman (editores)
 2002 *Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina*. Mexico: Colegio de Michoacán/Instituto Federal Michoacán.
- Bello, Alvaro
 2004 *Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los pueblos indígenas*, Santiago de Chile: Naciones Unidas/cepal/gtz.
- Canedo, Gabriela
 2011 *La Loma Santa: una utopía cercada. Territorio, cultura y Estado en la Amazonia boliviana*. La Paz: IBIS/Plural.
- Canedo, Gabriela
 2022 *Pueblos indígenas entre la deforestación, el fuego y el mercurio en la amazonia boliviana en el siglo XXI*. (Ponencia presentada en la Plataforma de Diálogo: La amazonia andina y las crisis del siglo XXI: cambio climático, extractivismo y pandemia. Quito: CALAS.
- Colque, Gonzalo
 2022 *Deforestación 2016-2021. El pragmatismo irresponsable de la Agenda Patriótica 2025*. La Paz: Fundación Tierra.
- Constitución Política del Estado, 2009.
- Fuertes, Nelba
 2018 Conflicto político, cambio y dominación: La relación entre Indígenas de Tierras Bajas y el Estado en Bolivia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador Departamento de Estudios Políticos Convocatoria 2014-2016. Quito: Tesis para obtener el título de maestría en Ciencias Políticas.
- Garcés, Fernando, (coord.)
 2010 *El Pacto de Unidad y el Proceso de Construcción de una propuesta de Constitución Política del Estado. Sistematización de la experiencia*, Programa Nina, CEJIS, CENDA, Agua Sustentable, CARITAS Boliviana, CEFREC, La Paz.
- García, Alvaro, (coord.)
 2005 *Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política*. OXFAM, Diakonia, La Paz.
- García, Pedro
 2004 “Territorios indígenas: tocando a las puertas del derecho”, en A. Surrallés y Pedro García (editores) *Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*, Iwgia, Lima.

Lehm, Zulema

1999 *Milenarismo y movimientos sociales en la amazonía boliviana. La búsqueda de la Loma Santa y la marcha indígena por el territorio y la dignidad*, apcob, ciddebeni, OXFAM América, Santa Cruz.

Schavelzon, Salvador

2013 *El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Versión para el debate de la Democracia Intercultural*, Sifde, La Paz.

2012 *El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente*, Clacso, Cejis, Plural, La Paz.

Ticona, Esteban

2006 “La representación de los pueblos indígenas-campesinos en la política boliviana” en Zegada, María Teresa et.al. *La representación política en Bolivia. Tendencias y desafíos*, PNUD, Internacional IDEA, FBDM, La Paz.

UNIR, Fundación

2012 *Conflictividad y visiones de desarrollo: Recursos naturales, territorio y medio ambiente (2011-2012)*. Fundación UNIR, La Paz.

Zegada, María Teresa, Claudia Arce, Gabriela Canedo, Alber Quispe

2011 *La democracia desde los márgenes: transformaciones en el campo político boliviano*, Clacso, Muela del Diablo, La Paz.

Páginas web

(<https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/confederaci%C3%B3n-de-pueblos-ind%C3%ADgenas-de-bolivia-cidob-37-a%C3%B1os-defendiendo-y>).

Las organizaciones barriales en Bolivia. La acción colectiva urbana entre la desconfianza y el miedo

*Daniel E. Moreno Morales*¹

Resumen

Bolivia es un país que tiene una alta participación política en sus múltiples esferas, como el sector urbano, donde las juntas vecinales se convierten en espacios importantes de participación, especialmente en las ciudades, como revela la investigación mediante la aplicación de múltiples medidas estadísticas que muestran el campo de acción y el rol de la acción colectiva urbana.

La investigación muestra también que las organizaciones sociales de tipo vecinal son producto de una alta participación política de la ciudadanía, lo que apertura la posibilidad de incidencia de estos sectores en la política de forma más tangible.

Palabras Clave

Organizaciones vecinales y barriales, desconfianza, dinámica asociativa, juntas vecinales, participación, confianza, seguridad.

1. Introducción

Bolivia es un país cada vez más urbano, como dan cuenta los datos demográficos oficiales. Los bolivianos que viven en las ciudades representan una amplia mayoría

¹ Sociólogo por la Universidad Mayor de San Simón y doctor en ciencia política por Vanderbilt University. Investigador asociado de *Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública*. Contacto: Daniel.moreno@ciudadaniabolivia.org.

del total de la población nacional, y es, además, una mayoría que viene creciendo aceleradamente como resultado de la migración desde las áreas rurales. En contraste con esta realidad, las estructuras sociales de participación social en las cuestiones públicas del país bajo el modelo de gobierno del MAS son principalmente rurales, lo que genera una tensión creciente entre la sociedad civil urbana y el sistema político.

El mecanismo de participación “natural” de la sociedad urbana, en asuntos públicos, es uno que tiene base territorial: las organizaciones barriales o de vecinos, que en Bolivia se denominan “juntas vecinales”. Este artículo discute el rol de las organizaciones vecinales y barriales como actor de acción colectiva y movilización de la sociedad boliviana contemporánea. A través del análisis de información públicamente disponible, se presenta elementos que contribuyen a entender el lugar que tienen las organizaciones vecinales en el marco de una sociedad civil compleja e inusualmente activa, marcada por la presencia de movimientos sociales fuertemente articulados con el Estado. En el trabajo se plantea que los mecanismos de participación de la sociedad boliviana en las decisiones estatales se basan en un sistema de intercambio corporativo y clientelar articulado en torno a organizaciones rurales, las del llamado *pacto de unidad* del MAS, y que esto está relacionado tanto con la fragmentación como con una actitud potencialmente cada vez más reactiva de las organizaciones urbanas.

Luego de una caracterización teórica e histórica de las organizaciones vecinales y barriales en el país, y de un breve estado del arte de la producción académica sobre estas organizaciones, en el trabajo se analiza información estadística de encuestas de opinión pública sobre la participación de los bolivianos en organizaciones territoriales locales, tanto a nivel nacional como en las ciudades (que es por definición donde actúan las organizaciones vecinales). Posteriormente, se discute el vínculo entre las organizaciones vecinales y dos elementos que explican en buena medida la participación de los ciudadanos en las mismas: la confianza interpersonal y el temor a la delincuencia. La sección final del artículo plantea algunos de los desafíos que viven las organizaciones barriales durante el gobierno del MAS, los cuales están marcadas por la disyuntiva entre acceder al poder y mantener su independencia.

2. Las organizaciones barriales y vecinales en Bolivia: Una breve caracterización

Una de las características de la sociedad boliviana es su gran capacidad organizativa. Los bolivianos participan activamente de un conjunto de organizaciones de distinta

índole: agrupaciones religiosas, deportivas, culturales, sindicatos, agrupaciones gremiales, corporativas, cooperativas, comunales, de autoayuda, de gestión de recursos, barriales o vecinales. El repertorio de espacios de participación de los individuos en organizaciones de base es muy amplio.

El entramado organizacional boliviano es complejo e intrincado. Los denominativos que toman las formas organizativas varían de un lugar a otro, así como también cambian las estructuras de las organizaciones y sus funciones específicas. A menudo las organizaciones no funcionan como compartimientos estancos, separadas las unas de las otras, sino que los límites entre ellas suelen ser difusos, dada la similitud de sus integrantes o la confluencia de sus intereses o espacios de acción. Una organización puede cumplir distintas funciones, o puede haber una superposición de funciones de parte de organizaciones diferentes.

Distintos estudios comparativos dan cuenta que la sociedad boliviana tiene una dinámica asociativa fuerte, por medio de la cual sus ciudadanos participan más de distintas organizaciones sociales que los habitantes de muchos otros países (CIUDADANÍA 2018). Esto muestra que, al menos en lo que se refiere al componente organizativo (o asociativo), el capital social en Bolivia es alto en comparación a otros países de la región y del mundo.

En las ciudades bolivianas, las formas de organización social tienen que ver, principalmente, con la canalización de demandas sectoriales (zonales) hacia las autoridades locales. Se trata de organizaciones que buscan lograr la atención de necesidades o la implementación de mejoras en las zonas; y dado el ordenamiento jurídico e institucional boliviano, son necesidades que por lo general deben ser atendidas por el municipio. Estas son las juntas vecinales, juntas de vecinos u Organización Territorial de Base (OTB), por la denominación impuesta por la Ley de Participación Popular a mediados de la década de los 1990, pero que como organización social existen al menos desde inicios del Siglo XX (Galindo 2018).

A partir de este modelo genérico de organización territorial, funcionan un conjunto de otras organizaciones o funcionan las OTBs que rebasan la mera canalización de demandas hacia el Estado local. Estas funciones incluyen la seguridad ciudadana en los barrios, la gestión de servicios como el agua potable o la educación, las actividades deportivas o artísticas, o la reproducción socio cultural (por ejemplo, entre migrantes de comunidades rurales residentes en las ciudades (Calderón Szmukler 1999). Además, las OTBs son reconocidas mayoritariamente por la sociedad (Galindo 2016), e integran los Comités de Vigilancia a partir de los cuales se ejerce el control social en los municipios.

Por supuesto, las organizaciones urbanas tienen también un rol importante de movilización y acción política. Las organizaciones que cumplen todas estas funciones adicionales a la representación territorial existen ya sea de manera paralela a la organización territorial, con denominativos propios o inclusive reemplazándola; en otros casos, son funciones que asume la organización territorial por medio de sus secretarías o de sus miembros de base interesados en cada tema de manera específica.

Pero las organizaciones territoriales urbanas pierden relevancia bajo el nuevo ordenamiento jurídico boliviano, que inicia con la Constitución aprobada en 2009 y se consolida en este ámbito mediante la promulgación de la Ley Nro. 341 de Participación y Control Social, de 05 de febrero de 2013. Esta normativa quita a las organizaciones territoriales la centralidad de la participación a nivel local, reconociendo como actores válidos para plantear demandas y controlar la gestión pública a cualquier organización que tenga relación con el tema específico a tratarse. Las consecuencias de este cambio legal sobre la cantidad y la calidad de la participación social a nivel local no se han estudiado a profundidad; sin embargo, es evidente que el nuevo marco normativo ha desarticulado y contribuido a la fragmentación de la estructura organizativa de base territorial que había alcanzado titularidad con la Ley de Participación Popular.

En la actualidad, las organizaciones barriales están limitadas a actuar en el plano micro local. Su ámbito territorial es el barrio y sus integrantes son, por lo general, vecinos que comparten el espacio físico del barrio. Esto quiere decir que su ámbito de acción es limitado y el alcance de sus reivindicaciones es esencialmente local. Pero en algunas ciudades las juntas vecinales han conformado federaciones de juntas vecinales, a través de las cuales se ha ampliado su ámbito de acción a lo local e incluso, en momentos críticos, a lo nacional.

La Federación de Junta Vecinales de El Alto es el ejemplo más claro de consolidación de la organización vecinal de base territorial en una supraorganización con alcance municipal. La FEJUVE se forma en la década de los 1960, a partir de un Consejo de Vecinos que funcionaba formalmente desde el año 1957 (Galindo 2018). Esta organización adquiere relevancia a medida que el Municipio de El Alto crece, hasta sobrepasar en cantidad de población a la misma ciudad de La Paz. La FEJUVE canaliza la participación de vecinos de toda la ciudad de El Alto, en su gran mayoría migrantes del campo, quienes consolidan una identidad ciudadina a partir de la participación en las movilizaciones y actividades organizadas por la Federación de Juntas Vecinales. La FEJUVE ha mostrado una importante capacidad de movilizar a los habitantes de El Alto en el planteamiento de demandas

locales, pero dada su cercanía a la sede de gobierno, también ha tenido un papel importante en movilizaciones nacionales, como las de la “guerra del gas” de 2003 o las que se sostuvieron durante la crisis política de 2019.²

Las juntas vecinales del país se organizan también a nivel nacional en la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, CONALJUVE. Según una página web atribuida a la organización,³ esta organización fue fundada en 1979 y cuenta con personería jurídica reconocida a nivel nacional. En los hechos se trata de una organización con presencia esporádica en el ámbito nacional; es evidente que se trata de una organización precaria, con escasa capacidad de representación ciudadana, y con bajos niveles de consolidación institucional.

El ejemplo de la FEJUVE de El Alto es particularmente elocuente para mostrar esta potencialidad de escalabilidad de la acción colectiva urbana de lo local a lo nacional. Y la CONALJUVE, es quizás un ejemplo de las limitaciones que tiene la organización vecinal en Bolivia.

3. Las organizaciones sociales barriales bolivianas en la producción académica

La producción académica sobre las organizaciones barriales bolivianas es escasa. Si bien la veta investigativa sobre los movimientos sociales en general ha sido prolífica, las organizaciones urbanas han recibido significativamente menos atención. No han generado el mismo interés que las organizaciones campesinas e indígenas han despertado en los investigadores nacionales y extranjeros que estudian los procesos sociales y políticos del país, o el entusiasmo que despertaron décadas atrás la Central Obrera Boliviana o las organizaciones del sindicalismo minero.

Una de las vertientes para pensar en la organización urbana ha sido el estudio de temas regionales. La activación de demandas regionales en distintas zonas del país durante las décadas de 1970 y 1980 empezó a generar interés sobre las formas organizativas urbanas, que emergieron como actores relevantes en esa

2 Sobre el tema de la FEJUVE y su dinámica de acción ver, por ejemplo, el trabajo de Sian Lazar (Lazar, 2013).

3 La CONALJUVE no tiene una página web que pueda ser considerada oficial, pero sí cuenta actualmente con una página en Facebook. Uno de los sitios con información sobre esta organización parecería ser creación de la organización, aunque no puede certificarse (www.conaljuve.blogspot.com).

interpelación al Estado nacional (Calderón Laserna 1985; Laserna 1986). Y el papel de las juntas vecinales en la resistencia contra las dictaduras, particularmente en momentos críticos, también ayudó a poner algo de luz sobre estas formas de organización.

El proceso de regionalización iniciado a partir de estas demandas ciudadanas tuvo consolidación institucional por medio de la Ley de Participación Popular de 1994 (LLP). Esta Ley reconoció a los actores territoriales como base para la participación social en los espacios municipales, a los que además les transfirió recursos y responsabilidades de gestión. Además, se instituía el Comité de Vigilancia, una instancia de control ciudadano sobre la gestión municipal que le dio poder y proyección a las organizaciones vecinales. Con esto, las organizaciones territoriales urbanas, las juntas vecinales (y las comunidades y sindicatos campesinos en las áreas rurales), ganaban reconocimiento formal de parte del Estado como interlocutores en el proceso de desarrollo a nivel subnacional.

La regionalización y descentralización municipal de la participación popular le confirió a la reflexión sobre las organizaciones urbanas un nuevo *momentum*. La democracia boliviana se remozaba e incorporaba nuevos actores en un escenario también nuevo, el municipio; y si bien los efectos de la LPP se sintieron más fuertemente en las áreas rurales (donde lo municipal era una novedad), también generaron entusiasmo sobre sus posibilidades para dinamizar el espacio público y el ejercicio de ciudadanía en las ciudades del país.⁴

Una vertiente que se enfoca, y a menudo ensalza, su acción política en forma de resistencia popular ante los abusos, reales e imaginarios, del Estado, la sociedad, el capitalismo o el sistema (por ejemplo, (Achtenberg, 2009; Arbona, 2004; Dedicque Contartese, 2010). Esta es una lectura muchas veces naif y simplificada de la realidad, que glorifica la acción callejera de los movimientos sociales, independientemente de sus objetivos o de lo que en verdad logran.⁵

Otra, menor en términos de cantidad de publicaciones, se enfoca más bien en sus (dis)funcionalidades en la intermediación con el Estado y las instituciones para el acceso a servicios o la canalización de demandas específicas (Cabrera 2018). Las funciones de canalización de demanda para la gestión son el centro de atención aquí.

4 Sobre la Ley de Participación Popular y su efecto dinamizador sobre la participación social en los espacios urbanos ver, entre otros, (Rojas, 1996; SNPP, 1996, 1997).

5 Otros movimientos de acción colectiva son vistos con el mismo entusiasmo; por ejemplo, los que condujeron a la “guerra del agua” del año 2000 en Cochabamba (Kruse, 2005).

Quizás uno de los motivos que pueden explicar la escasa atención que han recibido las organizaciones urbanas, más allá de la ausencia del componente místico ancestral y casi esotérico que tienen los movimientos campesinos e indígenas, es que su misma relación con el Estado boliviano ha sido menos relevante. Salvo momentos históricos específicos (noviembre de 1979, octubre de 2003, octubre-noviembre de 2019), la gravitación de la acción colectiva urbana sobre la política nacional ha sido menos relevante que la de los movimientos indígenas y campesinos en lo que va de este siglo, o que la del proletariado minero en el siglo XX. El último acápite de este artículo explica esta idea con algo más de amplitud.

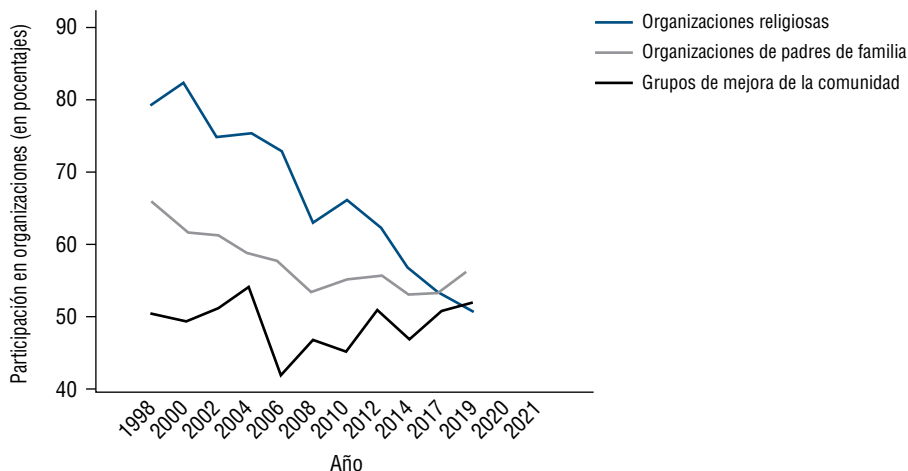
4. Participación en organizaciones locales

Las organizaciones barriales o vecinales pueden tener distintas formas y denominaciones variadas, aunque lo que las caracteriza es que son organizaciones con base territorial y que funcionan en espacios urbanos. Las organizaciones barriales, como espacio de asociación propio de las ciudades y que tiene una base territorial más o menos clara, interactúan y se mezclan con otras formas de organización, en una medida que depende de la heterogeneidad en la composición social de los barrios y de la riqueza del tejido social de los mismos.

Los datos de la encuesta de LAPOP de 2019 sugieren que la mayoría de los bolivianos participa de reuniones de alguna organización cuyos fines tienen que ver con el mejoramiento de la comunidad o barrio donde viven.⁶ Si bien la pregunta no refiere directamente a las Organizaciones Territoriales de Base o a las juntas vecinales, sí pregunta de manera genérica sobre las organizaciones que cumplen la función principal de éstas. Los resultados muestran que 3% participa de estas organizaciones más de una vez por semana, 35% lo hace una o dos veces por mes, y el 14% lo hace una o dos veces por año. En total, algo más de la mitad (52%) de los bolivianos participa al menos ocasionalmente de organizaciones de acción colaborativa a nivel local; este es un porcentaje que se ha mantenido relativamente constante a través del tiempo, como muestra el gráfico siguiente.

6 La pregunta empleada en la encuesta dice textualmente: *“Por favor, dígame si usted asiste a las reuniones de estas organizaciones: por lo menos una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, o nunca. ¿Reuniones de un comité o junta de mejoras para la comunidad? Asiste...”*. Se consideran las respuestas que señalan alguna participación (todas menos “nunca”).

Gráfico 1
Evolución de la participación en organizaciones locales en Bolivia, por año
(en porcentajes)



Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP.

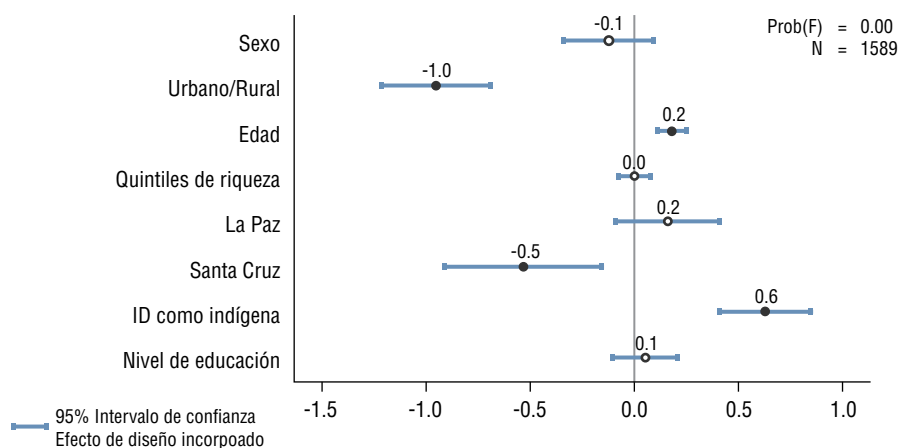
Para fines comparativos, el gráfico incluye además los porcentajes de participación en otras dos formas de organización comunes en el país: organizaciones religiosas y organizaciones de padres de familia. Esta comparación resulta útil para mostrar cómo la participación en este tipo de organizaciones ha venido variando en el tiempo (disminuyendo en el caso de las otras dos, pero manteniéndose estable en el caso de las organizaciones de ayuda a la comunidad).

¿Quién participa en las reuniones de estas organizaciones? Los datos de encuestas disponibles permiten identificar las características socioeconómicas que tienen una relación estadística con la probabilidad de que los individuos entrevistados declaren su participación en estas organizaciones. El gráfico siguiente⁷ muestra los resultados de un análisis de regresión múltiple logística que incorpora distintos factores, incluidos el sexo de la persona, el área de residencia (urbano en comparación con rural), la edad, el nivel socioeconómico medido por quintiles de riqueza, el nivel educativo, si la persona vive en los departamentos de La Paz

7 El gráfico representa los coeficientes de regresión, acompañados por su intervalo de confianza calculado considerando también el efecto del diseño muestral. Si las líneas horizontales de dichos intervalos (representadas en color celeste) no se cruzan con la línea roja de 0, entonces la variable tiene un efecto independiente sobre la probabilidad de participar en reuniones de organizaciones de mejora del barrio o la comunidad; si las líneas se cruzan, entonces la variable no tiene un efecto independiente y no se puede considerar un predictor estadístico de la participación en dichas reuniones.

o Santa Cruz (en comparación con el resto de Bolivia), si la persona se identifica como perteneciente a un pueblo indígena, y la aprobación del trabajo del Presidente de entonces (la encuesta se realizó el primer semestre de 2019, por lo que se trata de Morales), como proxy para la posición política de la persona.⁸

Gráfico 2
Resultados de regresión logística para participación en organizaciones de mejora de la comunidad



Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP.

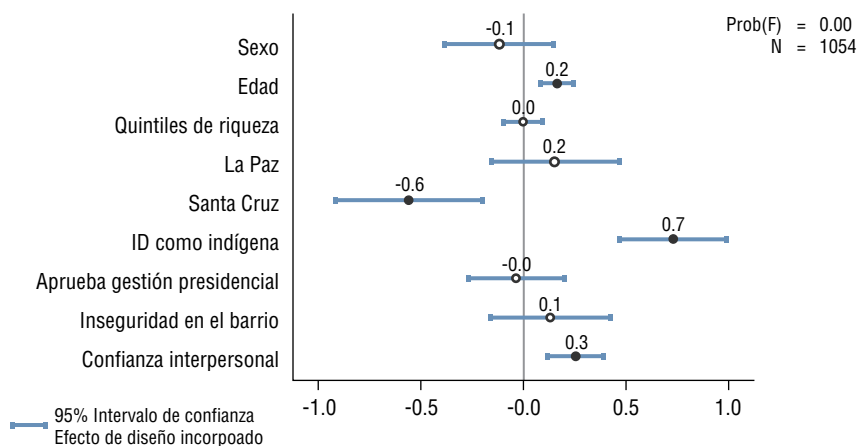
Como puede inferirse del gráfico del modelo estadístico, una vez que se controla por otros factores no existen diferencias entre hombres y mujeres en la participación en este tipo de asociaciones. Donde sí se evidencian diferencias estadísticamente representativas es en la comparación entre las áreas urbanas y rurales (la población que vive en áreas rurales tiene mayor probabilidad de participar de estas organizaciones que quienes viven en las áreas urbanas). La edad es otro factor significativo: las personas mayores participan más de estos espacios que los más jóvenes. El nivel socioeconómico no tiene ningún efecto, como tampoco tienen efecto vivir en el departamento de La Paz (en comparación con el resto del país) ni la aprobación de la gestión presidencial. En cambio, quienes viven en el departamento de Santa Cruz participan menos que los habitantes del resto del país de estos espacios, en los cuales también participan más indígenas que no indígenas.

8 Esta es una variable que, desde que el MAS asumió el gobierno en 2006, ha actuado como polarizadora de la opinión pública, distinguiendo claramente las opiniones sobre distintos temas por el nivel de aprobación de la gestión presidencial. Sobre el tema ver (Moreno Morales et al., 2010; Moreno Morales & Osorio Michel, 2022).

5. Participación en organizaciones locales en las áreas urbanas

Las organizaciones barriales son, por definición, una forma de organización urbana. Si bien el modelo de participación generado a partir de la Ley de Participación Popular reconocía Organizaciones Territoriales de Base tanto en las ciudades como en las áreas rurales, la asociación “de vecinos” o “barrial” existe solamente en las ciudades (en las áreas rurales las formas de organización territorial son indistintas del esquema organizativo sindical-campesino, que tiene una representación más clase que vecinal). Por tanto, para saber quiénes participan en estas organizaciones es necesario considerar sólo las áreas urbanas, como se lo hace en el análisis estadístico representado en el gráfico que sigue a continuación.

Gráfico 3
Resultados de regresión logística para participación en organizaciones de mejora de la comunidad en áreas urbanas



Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP.

Cuando consideramos solamente las áreas urbanas, los mismos factores que fueron identificados a nivel nacional aparecen como predictores estadísticamente significativos e independientes de otros factores en el modelo: edad (más edad, mayor participación en organizaciones barriales), región (con menor participación en Santa Cruz que en el resto del país) y pertenencia a un pueblo indígena (quienes se sienten pertenecientes participan más de estas organizaciones). Además, la especificación del modelo incluye otros dos factores: la percepción de inseguridad en el lugar de residencia, que no tiene un efecto independiente, y la confianza interpersonal (a mayor confianza, mayor participación en organizaciones de este tipo). Con esta información podemos delinear un poco

mejor el perfil de personas que participan en organizaciones barriales y tener mayores elementos para comprender las dinámicas asociativas de la población en los espacios urbanos de Bolivia.

Es particularmente relevante que la autoidentificación como perteneciente a uno de los pueblos indígenas del país tenga un efecto positivo tan fuerte en la participación en organizaciones sociales urbanas. Las organizaciones sociales de base étnico cultural en Bolivia son particularmente fuertes; los pueblos indígenas y las comunidades rurales tienen a lo comunitario como un elemento central de su existencia, mucho más que en los espacios urbanos y modernos de las ciudades. Este rasgo de la cultura política indígena parece trasladarse a las ciudades, donde los migrantes campo ciudad reproducen formas de organización que no corresponden directamente a los formatos de la organización indígena comunitaria, pero que reflejan una forma de entender la participación social basada en la acción comunitaria.⁹

También es un hecho relevante que los participantes de las organizaciones de ayuda o mejora del barrio no muestren una posición política clara a favor del gobierno del MAS. Durante sus años de gestión presidencial, el MAS ha procurado (y muchas veces logrado) cooptar a las organizaciones de la sociedad civil, aplicando mecanismos clientelares (y algunas veces coercitivos) para generar un modelo de representación político corporativista y clientelar.

Finalmente, el hecho de que la participación en organizaciones de ayuda a la comunidad sea menor en el departamento de Santa Cruz merece una discusión especial, particularmente si se toma en cuenta la magnitud de la movilización social que la ciudad de Santa Cruz vive los últimos años. Los cabildos o las protestas de octubre y noviembre de 2019, involucran la participación de cientos de miles de ciudadanos, en cifras que parecerían contradecir la información discutida aquí. Una explicación posible es que el actor movilizador no sean necesariamente las organizaciones territoriales locales o, sino que la movilización provenga de un actor con un ámbito de acción menos local-territorial (pero no menos urbano), como el Comité Cívico.¹⁰

9 Sobre el tema ver, por ejemplo, el trabajo pionero de Albo, Greaves y Sandoval sobre las organizaciones sociales de base indígena en la ciudad de La Paz (Albo et al., 1983).

10 Este es un tema que debería ser cubierto por un estudio específicamente enfocado en los procesos de movilización urbana en Santa Cruz de la Sierra.

6. Organizaciones barriales y (des)confianza interpersonal

En la sección anterior de este artículo se ha demostrado que existe una relación estadísticamente significativa y directa entre la confianza interpersonal y la participación en organizaciones de mejora de la comunidad, como las organizaciones barriales. De manera consistente con la teoría del capital social, las personas que confían menos en sus pares, en otros ciudadanos, tienden a participar menos de organizaciones como las vecinales o las que buscan la mejora de su comunidad. Al final, la participación en asociaciones voluntarias de la sociedad civil es parte de un conjunto de características ligadas al tejido social, a los vínculos significativos de las personas entre sí, al “capital” de relaciones interpersonales con que cuentan los sujetos y las comunidades.

Por lo anterior, tiene sentido que la confianza y el asociacionismo vayan de la mano: que las personas que confían más en otros ciudadanos sean también los que tienden a participar más en espacios colaborativos como los de las organizaciones barriales.

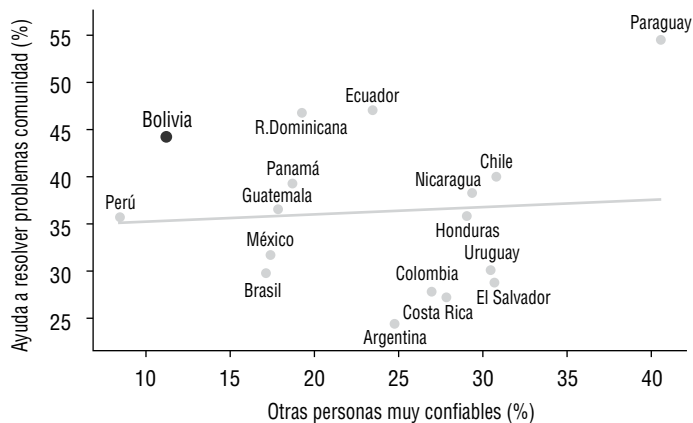
El vínculo entre confianza y asociacionismo es evidente a nivel individual (las personas que confían menos en otros ciudadanos participan menos de espacios asociativos como los de las organizaciones barriales). Sin embargo, la relación se complejiza cuando se cambia de nivel de análisis y se toma en cuenta los valores agregados a nivel país (los promedios nacionales). A este nivel, la relación entre las dos variables es menos clara: las sociedades que tienen niveles de confianza interpersonal altos no son necesariamente aquellas que muestran niveles de participación social más altos, particularmente cuando se considera a América Latina.

El gráfico que sigue representa los porcentajes de personas que, en la encuesta del Barómetro de las Américas de LAPOP de 2014 respondieron que encontraban que las personas de su barrio o comunidad eran “muy confiables” y que, al mismo tiempo, afirmaron que durante el último año habían realizado alguna acción o trabajo de mejora de su comunidad.¹¹

11 La pregunta sobre participación en la resolución de problemas de la comunidad dice “¿En los últimos doce meses usted ha contribuido para ayudar a solucionar algún problema de su comunidad o de los vecinos de su barrio? Por favor, dígame si lo hizo por lo menos una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces al año, ¿o nunca en los últimos 12 meses?”. La pregunta sobre confianza interpersonal tiene la siguiente formulación: “Abora, hablando de la gente de por aquí, ¿diría que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable?”

Gráfico 4

Porcentajes de participación en acciones de mejora local por confianza interpersonal, promedios nacionales en Bolivia y otros países de América Latina



Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP, 2014.

Como puede apreciarse, Bolivia tiene una proporción muy alta de personas que participa en acciones colaborativas para resolver problemas de su barrio o comunidad (45%, uno de los porcentajes más altos en América Latina). Pero al mismo tiempo, el porcentaje de personas que afirman que sus vecinos son muy confiables es de apenas 11%, el más bajo de la región después del Perú. En el otro extremo está El Salvador, país donde el porcentaje de personas que cree que sus vecinos son muy confiables es más alto (alrededor de un tercio de la población comparte esta opinión) mientras que sus niveles de participación en espacios organizativos locales son mucho más bajos que en Bolivia. La relación esperada entre asociacionismo y confianza interpersonal no se refleja con la misma claridad cuando se consideran en el análisis los datos a nivel nacional.¹²

7. La organización barrial como respuesta al miedo

Una de las razones por las cuales las organizaciones barriales interpelan a los ciudadanos es porque, para muchos, brindan una sensación de seguridad, particularmente en lo que se refiere a la seguridad ciudadana. La demanda por

12 Esta relación fuera de lo esperado no se limita a la variable de participación en actividades de mejora de la comunidad: algo similar sucede cuando se emplean otras medidas de asociacionismo, como la participación en organizaciones de ayuda a la comunidad discutida más arriba.

seguridad es una constante en ciudades de todo el mundo, y genera la aparición de organizaciones de distinta índole; el capital social expresado en su dimensión de asociativismo también es una respuesta al miedo y a la sensación de inseguridad.

La inseguridad es una preocupación creciente para los ciudadanos en toda América Latina. Es un tema que, por su saliencia y novedad, ha recibido la atención de investigadores. Y es que la percepción de inseguridad es cada vez más grande, y eso no parece tener relación directa con los indicadores que miden la criminalidad. Las personas en toda la región tienden a sentirse cada vez menos seguras aún cuando los indicadores de delincuencia se mantengan constantes (o inclusive cuando éstos descienden).

Esa sensación de inseguridad en Bolivia tiene que ver, además, con una profunda desconfianza ciudadana en las entidades estatales que deberían garantizar la seguridad de los vecinos: la Policía Nacional y el sistema de justicia. No es necesario abundar mucho sobre la escasa capacidad que tiene la Policía Nacional de Bolivia para garantizar la seguridad en los barrios de las ciudades del país y su presencia marginal; a este factor se suma la desconfianza que la mayoría de los ciudadanos tiene en la Policía, que viene de la mano de los índices de victimización por corrupción policial más altos del mundo.¹³

En cuanto al sistema de justicia, la situación es crítica. Las instituciones que lo conforman muestran señales de debilidad extrema, con sobrecarga de trabajo, financiamiento insuficiente, y sobre todo politización de su dirección, con una fuerte dependencia del poder ejecutivo. Esto ha hecho que el sistema institucional de administración de justicia sea, en la actualidad, terriblemente burocrático, ineficiente, corrupto y disfuncional. Los ciudadanos están al tanto de estas debilidades, y desconfían de las capacidades del sistema jurídico para impartir justicia, tanto en contra de los delincuentes como en la función preferente de garantía de derechos de las personas.¹⁴

13 La victimización por solicitudes de soborno que viven los ciudadanos bolivianos de parte de los policías es una de las más altas de América Latina y también una de las más altas del mundo (Moreno Morales al 2014). Esto viene de la mano de cifras de confianza ciudadana en la institución policial extremadamente bajas.

14 La situación crítica del sistema de administración de justicia en Bolivia se refrenda con percepciones ciudadanas sobre el sistema de justicia extremadamente bajas. Todos los indicadores comparativos internacionales muestran una profunda desconfianza e insatisfacción ciudadana con el sistema judicial. Sobre el tema, ver por ejemplo los datos del World Justice Project (www.worldjusticeproject.org); para un análisis contextualizado localmente ver (Schwarz al 2019).

Este conjunto de factores hace que los ciudadanos sientan miedo, ya sea real o ilusorio, ante la delincuencia. Como respuesta, los vecinos deciden organizarse en grupos de defensa y protección de sus barrios ante los riesgos percibidos de la delincuencia. Estas organizaciones varían mucho en su forma y sus métodos, abarcando desde funciones paralelas que cumplen las mismas organizaciones vecinales ya existentes hasta la conformación de brigadas de vigilancia, incluso armada, con estructuras casi paramilitares.¹⁵

En el caso de Bolivia, un tercio de los habitantes de las ciudades manifestaban haberse organizado con sus vecinos por miedo a la inseguridad, según datos de la encuesta del Barómetro de las Américas de LAPOP de 2014. No es una cifra menor, y es posible que se haya incrementado en el tiempo (2014 es la fecha más reciente para la cual se tienen datos públicamente disponibles para esta pregunta). Pero, además, era el dato más alto de toda América Latina; ningún otro país mostraba una respuesta asociativa tan grande como respuesta a la sensación de miedo generada por la inseguridad ciudadana en los barrios de las ciudades bolivianas.

De manera similar a lo discutido más arriba sobre la participación en organizaciones de ayuda a la comunidad, la participación en las organizaciones de defensa barrial ante la delincuencia está condicionada por la edad (las personas mayores tienden a participar más que los jóvenes), por el nivel socioeconómico (es mucho más frecuente entre personas con nivel socioeconómico más bajo), y por la autoidentificación como indígena (una vez que se controla por otros factores, la probabilidad de que una persona que se autoidentifique como indígena participe en una de estas organizaciones es el doble de la misma probabilidad para alguien que no es indígena). Además, la participación es ligeramente menor en Santa Cruz que en La Paz y Cochabamba, y es sustancialmente menor en las ciudades de los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca que en los departamentos del eje.

8. Organizaciones barriales en tiempos del MAS

Las organizaciones barriales y vecinales en Bolivia enfrentan un panorama particular en tiempos del gobierno del Movimiento al Socialismo, con una posición distinta y de menor importancia que la de otros movimientos sociales. Esto se da de manera paradójica en un momento de altísima urbanización de la población

15 Una de las manifestaciones de la presencia de estas organizaciones son los muñecos colgados en postes de barrios de todo el país, advirtiendo a los delincuentes sobre la acción de los ciudadanos organizados en su contra (esta acción es, por supuesto, el linchamiento).

boliviana. Y en esta paradoja parecen residir, además, los principales riesgos para la continuidad futura del gobierno del MAS.

Durante el “gobierno de los movimientos sociales”,¹⁶ la sociedad civil boliviana ha vivido un punto de inflexión en su relación con el Estado. En general, las organizaciones sociales bolivianas han tenido que enfrentar una elección: Mantener su autonomía como organizaciones independientes o establecer algún tipo de alianza con el Movimiento al Socialismo para acceder a los espacios de poder estatal. Pero esta disyuntiva está condicionada por la relevancia y el peso de la organización: mientras más votantes y más capacidad de movilización callejera tenga la organización, mayor habrá sido la tensión frente a esta disyuntiva (y mayor su fuerza a la hora de demandar espacios en el gobierno).

En la medida en la que el MAS consolidaba su hegemonía, la primera opción ha implicado para las organizaciones sociales un conjunto de riesgos, desde recibir la indiferencia de los interlocutores estatales hasta ser señalados públicamente como enemigos del proceso de cambio, con consecuencias violentas; en muchos otros casos, la estrategia del MAS ha sido la de generar liderazgos paralelos dentro de las organizaciones con dirigentes cercanos al gobierno, quebrando la unidad de la representación. La segunda opción, establecer pactos con el poder del MAS, ha sido más interesante para los dirigentes de muchas organizaciones; esto ha significado que la mayoría de las organizaciones sociales bolivianas han ido perdiendo gradualmente su independencia, colocando en distintos cargos en la gestión pública a su plana dirigencial y a algunos de sus miembros de base. En muchos casos, el nivel de dependencia de la organización social con respecto al Ejecutivo ha sido tan grande que algunas organizaciones se han convertido en una suerte de organismos paraestatales, parodia de sus objetivos iniciales.

A nivel local, muchas de las organizaciones vecinales han establecido alianzas con las fuerzas del partido en el municipio. Al final, es importante tener en cuenta que el MAS ha ganado elecciones en un número cada vez mayor de municipios en el país y las alianzas de estas organizaciones con el partido ganador no debería sorprender. En los casos en los que el MAS no gana el control del ejecutivo municipal, las juntas vecinales favorables a su posición se han convertido en grupos de presión callejera, y en algunos casos en grupos de choque [como en el triste ejemplo de la quema de la Alcaldía de El Alto durante la gestión de Soledad Chapetón (Galindo 2018)]. Dado el carácter local de las organizaciones vecinales, muchas de ellas

16 El MAS ha hecho un esfuerzo discursivo notable para posicionar la idea de que no se trata de un partido político, sino de una coalición de organizaciones sociales que gobiernan juntas. Sobre el tema ver, por ejemplo, (Zegada al 2011)

se han sumido en los mecanismos (institucionales y alternativos) de ejercicio del poder político a nivel municipal.

Así como responden a una lógica eminentemente local, el accionar de las organizaciones vecinales es también heterogéneo, y está sujeto a procesos que afectan a toda la sociedad, como el de la polarización política. En un contexto de simplificación de los activismos, las organizaciones vecinales asumen posiciones contradictorias; mientras que algunas son defensoras del gobierno del MAS, otras más bien son parte de las movilizaciones en su contra. Los momentos de crisis y movilización callejera en el país (como octubre y noviembre de 2019) han tenido a organizaciones barriales activamente involucradas en alguno de los dos bandos.

La organización nacional de las juntas vecinales, que podría jugar un papel articulador, la CONALJUVE es un actor débil. No cuenta con los números o la capacidad de movilización callejera de la Central Obrera o de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y tampoco cuenta con su organicidad: las juntas de vecinos responden en primer lugar a las dinámicas y las necesidades locales, no a las demandas ideológicas, de clase o étnico cultural más globales por las cuales se movilizan los entes campesinos u obreros. Como no están acostumbradas a actuar de manera orgánica bajo la línea vertical de las otras organizaciones no pueden responder masivamente a las consignas nacionales, lo cual los convierte en un actor de menor peso que el que tienen las otras organizaciones a nivel nacional.

La CONALJUVE ha podido negociar con el MAS espacios de poder en el gobierno. Algunos de sus dirigentes ocuparon cargos legislativos en el Senado (Efraín Chambi), o en diputados (Mario Mita), siempre desde la sigla del MAS. Pero se trata de una posición marginal, que resulta en pactos coyunturales y fuertemente dependientes de la figura del dirigente; más allá de esto, la CONALJUVE no forma parte del Pacto de Unidad ni es uno de los movimientos sociales con peso gravitante sobre las decisiones del gobierno nacional (los cuales son, además, principalmente rurales).

Pese a todas sus debilidades, las organizaciones barriales son la principal forma de organización en las ciudades de un país que ha pasado de ser eminentemente rural a concentrarse en las ciudades (y principalmente en las 3 grandes áreas metropolitanas del país, la de Santa Cruz de la Sierra, La Paz-El Alto y Cochabamba-Kanata). La Bolivia contemporánea es un país urbano, y además cada vez más urbano, con sectores medios crecientes que le dan a la sociedad una impronta distinta (diversa) a la que tienen los movimientos sociales de viejo cuño, rurales y más homogéneos en términos de su representación, y que son la base del Movimiento al Socialismo.

El comportamiento electoral en las ciudades bolivianas se ha mostrado cada vez más contrario al MAS. De manera sistemática, el MAS ha venido perdiendo en las áreas urbanas tanto en elecciones municipales como en elecciones nacionales, y los niveles de aprobación presidencial y de satisfacción con el trabajo del gobierno son también, en promedio, significativamente más bajos en las ciudades que en las áreas rurales. Pero más allá del ámbito electoral, las nuevas clases medias urbanas han demostrado que pueden convertirse en un actor con una fuerza callejera muy importante, comparable o incluso superior a la de cualquier de las organizaciones sociales del país. Las protestas en contra de la construcción de la carretera por medio del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécore en 2011 ya mostraban una capacidad de movilización urbana y clase mediera que sorprendió a muchos, y que se mostró con mucho más fuerza en las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019, que rechazaban unas elecciones con irregularidades demostradas y que llevaron a la renuncia de Morales.

No queda claro cuál fue el papel que tuvieron las organizaciones vecinales en las protestas de 2019.¹⁷ Tampoco es lugar de este trabajo discutir los méritos democráticos de sus métodos o de sus objetivos. Lo que sí es evidente es que se trató de una movilización social principalmente urbana, que tuvo como protagonistas a vecinos organizados a partir de su cercanía territorial, entre los cuales lo urbano representa un elemento discursivo e identitario relevante. Y se trata de una movilización que, desde las ciudades, representó un contrapoder frente al bloque gobernante del pacto de unidad y el MAS suficientemente poderoso para derrotarlo precisamente en el ámbito en el que el MAS se había mostrado invencible hasta entonces, el de la movilización callejera. Son, pues, organizaciones de vecinos en las ciudades de la nueva Bolivia urbana, las que pusieron en jaque y derrotaron al gobierno más poderoso de la historia reciente de Bolivia.

9. Conclusiones

Las organizaciones de la sociedad civil de representación territorial tienen un gran potencial de canalización de participación en las ciudades, donde se convierten en el recurso asociativo más importante a disposición de los ciudadanos. Sin embargo, tiene un carácter principalmente local que limita sus alcances y que dificulta su agregación en una forma de articulación más allá del espacio barrial.

17 Tampoco está claro cuál fue su papel durante los enfrentamientos de enero 2007 en Cochabamba o en las manifestaciones por la defensa del TIPNIS, pero es posible pensar en los hechos de 2019 como consecuencia de la acumulación de capacidad de movilización callejera de los actores urbanos a partir de esos y otros eventos específicos.

Este carácter local limita y condiciona el rol de actor relevante que podrían jugar estas organizaciones como en la política nacional.

A nivel local, las organizaciones barriales canalizan la participación ciudadana particularmente en lo que se refiere a la atención de demandas focalizadas en los barrios. El formato de Organización Territorial de Base de la Ley de Participación Popular se mantiene como el núcleo de organización y representación de las juntas vecinales. En algunos casos, y dependiendo de la dinámica política del municipio, las organizaciones vecinales se convierten en grupos de presión y hasta en grupos violentos que chocan con los manifestantes de otras organizaciones. En algunos municipios, y de manera muy evidente en el caso de El Alto, las organizaciones vecinales están agrupadas en una supra organización que funciona a nivel municipal y que tiene una capacidad de movilización social reconocida que rebasa lo puramente local (la FEJUVE), pero no puede decirse que esta sea la regla a nivel nacional.

Los niveles de participación de los ciudadanos en estas organizaciones son relativamente altos, si se consideran otros países de la región como comparación. Pero, además, son muy altos si se considera los niveles bajos de otra variable que define el capital social y que teóricamente debería ir de la mano de la participación en organizaciones voluntarias: la confianza interpersonal. Si bien existe una relación directa a nivel individual entre confianza y participación asociativa (las personas que confían más en los otros miembros de su comunidad son quienes más tienden a participar en organizaciones voluntarias). Esta relación no se evidencia cuando se consideran los valores promedios para Bolivia y otros países latinoamericanos. De manera paradójica, los niveles de participación de los bolivianos en asociaciones de todo tipo son altos, al mismo tiempo que los promedios de confianza interpersonal son muy bajos. La explicación de esta desviación en la relación esperada debería recibir atención específica en el futuro.

Es particularmente relevante el hecho que las personas que se autoidentifican como indígenas tengan una mayor probabilidad de participar en organizaciones de la sociedad civil que sus pares bolivianos que no comparten este sentido de pertenencia. Y esto sucede no solamente en las áreas rurales, donde las organizaciones campesinas e indígenas con tradicionalmente fuertes y bien estructuradas, sino también en las ciudades. Este dato sugiere que la población indígena del país tiene un capital asociativo más alto que el resto de la población (y esa también podría ser una de las explicaciones para la desviación de los promedios nacionales en la relación esperada entre confianza y participación). Los indígenas urbanos participan de las juntas vecinales y las organizaciones barriales más que los no indígenas.

También se ha visto que muchos vecinos participan de la organización local como una reacción de protección conjunta contra los riesgos reales o percibidos de la delincuencia. La sensación de inseguridad que se expande por las ciudades (en Bolivia y en muchos otros países) genera como respuesta una acción de organización social para la defensa. Esta es una forma de activación del capital social como respuesta a una situación de emergencia percibida por parte de los ciudadanos y, si bien puede tener manifestaciones extra-legales o hasta violentas en la conformación de grupos vigilantes, es una respuesta que muestra la riqueza asociativa de la sociedad civil boliviana.

Las organizaciones vecinales no son un actor preponderante en la dinámica política nacional durante el gobierno del MAS. El peso de actores principales recae sobre otras organizaciones nacionales, principalmente rurales. Esto no quiere decir que estén del todo excluidas de la dinámica política nacional: los principales dirigentes de la CONALJUVE han sido electos en distintas ocasiones como legisladores por la sigla del MAS, aunque esto parece depender más de la habilidad de la persona que de una relación estable entre el partido y las organizaciones barriales. Con todo, la evidencia indica que el MAS no ha logrado (o quizás no se lo ha propuesto por motivos ideológicos) controlar las organizaciones vecinales de la misma manera que controla las otras organizaciones, y ésta pueda ser una causa de una debacle del partido que empiece en las ciudades (como sucedió el año 2019).

La existencia de las organizaciones de vecinos puede representar una oportunidad para mejorar las condiciones de ejercicio democrático en una Bolivia que es cada vez más urbana. Su accionar sobre los temas de preocupación local permite la participación del ciudadano en asuntos de interés de su barrio, dinamizando las potencialidades que tiene el nivel local para el ejercicio ciudadano. Y dado que orgánicamente las federaciones y confederaciones de juntas vecinales tienen una estructura vertical débil, es más difícil que sean manipuladas por los liderazgos nacionales. Pero su carácter local también hace que sean débiles casi por naturaleza, y que sea posible que los dirigentes sean cooptados por las dinámicas políticas locales pequeñas que se dan a nivel municipal, subsumiendo la labora de representación y canalización de demanda a la negociación de intereses individuales.

Bibliografía

- Achtenberg, E. S. J.
2009 Community Organizing, Rebellion, And the Progressive State: Neighbourhood Councils in El Alto, Bolivia. In D. Fasenfest (Ed.), *Engaging Social Justice*.

- Albo, X., Greaves, T., & Sandoval, G.
1983 *Chukiyawu. La cara Aymara de La Paz*. CIPCA.
- Arbona, J. M.
2004 Los límites de los márgenes. Organizaciones políticas locales y las Jornadas de Octubre de 2003 en El Alto, Bolivia. *Nueva Sociedad*, 197.
- Cabrera, J. E.
2018 Fragmentação urbana através de redes de água: o caso de Cochabamba, Bolívia. *Territorios*, 39.
- Calderón, F., & Laserna, R.
1985 *El poder de las regiones*. CERES.
- Calderón, F., & Szmukler, A.
1999 *La política en las calles : los conflictos*. CERES.
- Deledicque, M., & Contartese, D.
2010 Movimientos sociales en Bolivia. las juntas vecinales de El Alto entre la institucionalidad y la rebelión. *LabBoratorio*, 23.
- Galindo, M.
2018 *Descriptorios del Estado Plurinacional de Bolivia (2009-2017)*. CEBEM.
2016 *La participación ciudadana y el control social*. CEBEM.
- Kruse, T.
2005 La Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas. In E. de la Garza Toledo (Ed.), *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*. CLACSO.
- Laserna, R.
1986 El movimiento vecinal en la coyuntura democrática. *Estudios Sociológicos*, 4(12).
- Lazar, S.
2013 *El Alto, Ciudad Rebelde*. Plural editores.
- Moreno Morales, D. E., Córdova Eguívar, E., Rodríguez, B., Michel, D. O., Vargas V., G., & Schwarz Blum, V.
2014 *Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014: Hacia una democracia de ciudadanos*. Ciudadanía-LAPOP.
- Moreno Morales, D. E., Córdova Eguívar, E., Schwarz Blum, V., Seligson, M. A., Vargas V., G., & Villarroel N., M.
2010 Cultura Política de la Democracia en Bolivia, 2010. In *Consolidación Democrática en las Américas en Tiempos Difíciles*. Ciudadanía-LAPOP.
- Moreno Morales, D. E., & Osorio Michel, D.
2022 ¿Legitimidades fragmentadas? Apoyo a la democracia en la región andina. *Colombia Internacional*, 110, 51-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.7440/colombiaint110.2022.03>
- Putnam, R.
1993 *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. The American Prospect.

Rojas, G.

1996 *La Participación Popular: Avances y obstáculos*. UIA/SNPP - Grupo DRU.

Schwarz, V., Arequipa, M., Choque, M., Córdova, E., Monasterio, I., Moreno, D., Soto, D., Osorio, D., Vargas, G., Villanueva, A., & Zuazo, M.

2019 *20 años de cultura política en Bolivia*. Ciudadanía / ASDI. [https://www.ciudadaniabolivia.org/sites/default/files/archivos_articulos/Cultura Política de la Democracia en Bolivia 20 años.pdf](https://www.ciudadaniabolivia.org/sites/default/files/archivos_articulos/Cultura%20Politica%20de%20la%20Democracia%20en%20Bolivia%2020%20años.pdf)

SNPP, S. N. de P. P.

1997 *El pulso de la democracia. Participación ciudadana y descentralización en Bolivia*. Nueva Sociedad.

1996 *Apre(he)ndiendo la Participación Popular*. SNPP.

Zegada, M. T., Arce, C., Canedo, G., & Quispe, A.

2011 “La democracia desde los márgenes: transformaciones del campo político boliviano”. CLACSO.

Informes y documentos en línea

CIUDADANÍA

2018 *Encuesta Mundial de Valores en Bolivia 2017*. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y CIUDADANIA. [https://www.ciudadaniabolivia.org/sites/default/files/archivos_articulos/Encuesta Mundial de Valores en Bolivia 2017_0.pdf](https://www.ciudadaniabolivia.org/sites/default/files/archivos_articulos/Encuesta%20Mundial%20de%20Valores%20en%20Bolivia%202017_0.pdf)

El Comité Cívico Pro Santa Cruz en su Momento Histórico: Capital Simbólico y Rol Contestario

*Diego Aguilera de Urioste*¹

“En la historia del desarrollo de Santa Cruz hay que destacar tres sucesos capitales: la creación de YPF, la ley de regalías del 15 de julio de 1938 y la fundación del Comité Pro Santa Cruz”.

Dionisio Foianini Banzer*
Ideólogo fundador de YPF

Resumen

La investigación profundiza sobre los principales elementos que convirtieron al Comité Cívico Pro Santa Cruz en un actor político relevante en la coyuntura nacional, el sistema político y como generó ese rol preponderante en la toma de decisiones nacionales, a través de una revisión histórica de distintos periodos del comité, los cuales profundizan la narrativa de su desarrollo así como las funciones e hitos que permitieron al comité ocupar un espacio a nivel nacional como también las perspectivas a futuro del comité.

Palabra clave

Comité Cívico, reivindicación, desarrollo cruceño, crisis.

1. El Comité Cívico Pro Santa Cruz: Introducción necesaria

La Real Academia de la Lengua Española, define “Comité” como un grupo de personas encargadas de un asunto, especialmente si lo hacen en representación

¹ Abogado por la Universidad Privada de Santa Cruz, Maestría en ciencias sociales en la Universidad Toulouse II. Asociado en CRF Rojas Abogados y Docente de la Universidad Católica

de una colectividad. Por su lado, el ordenamiento jurídico boliviano hace una breve referencia a los Comités sin personería jurídica reconocida, entendidos como entidades organizadas para cumplir un fin determinado. De manera general, los Comités son temporales, toda vez que son constituidos para cumplir un fin determinado y logrado el objetivo se desintegran.

Santa Cruz a lo largo de su historia republicana ha tenido varios Comités ad hoc, como el Comité Pro-Ferrocarril de 1925, el Comité Reloj Santuario de la Virgen de Cotoca de 1949 (Peña P. 2011) o recientemente el Comité pro-Puente Bicentenario que conecta a Santa Cruz con Porongo y el radio de expansión del área metropolitana.

Contrario a esta lógica temporal, el Comité Pro Santa Cruz (en adelante el Comité) llegó para quedarse. Fundado hace más de 70 años, en lugar de perder vigencia, afianza su protagonismo en la vida política departamental con significativos niveles de influencia en transformaciones políticas e institucionales durante las primeras dos décadas del nuevo siglo. Tal como se analiza en el presente texto, provisto de un Capital Simbólico no menor –en términos de Bourdieu–,² el Comité ha sabido adaptarse a los tiempos y lograr el reconocimiento en el departamento de Santa Cruz. Sus demandas han ido mutando de acuerdo a la necesidad del momento conforme al peso específico que ha ido ganado el departamento en el contexto nacional.

De hecho, el Comité es una de las instituciones más representativas del departamento cruceño así como el promotor de cambios trascendentales tanto para el departamento como para el país. La presente investigación, pretende identificar y analizar los factores que explican la preminencia del Comité entre los ciudadanos cruceños. En otras palabras, procura responder a la pregunta de cómo es que un órgano colegiado cuyo presidente es elegido con algo más de 200 votos de delegados institucionales tiene la capacidad de convocar a Cabildos multitudinarios como los realizados a lo largo del presente siglo.

Adicionalmente, el texto se refiere a las circunstancias de su fundación a su composición, a las instituciones que lo conforman, así como a la dinámica de su funcionamiento. Un acápite se centra en los hitos históricos que colocaron al Comité como actor colectivo protagonista durante el siglo XXI. Finalmente, a modo de

2 Bourdieu se refiere al “prestigio, carisma y encanto” como formas de capital simbólico... Al igual que el carisma, el capital simbólico se basa en la creencia... La creencia es la alquimia que produce la magia social del capital simbólico (Fernandez, 2013). Este concepto contribuye a caracterizar la influencia del Comité en el presente texto

cierre, se identifican los nuevos desafíos que plantea la Bolivia contemporánea al Comité del departamento cuyos indicadores arrojan niveles de crecimiento y desarrollo significativos en el país.

Con este propósito se ha procedido a la revisión bibliográfica y hemerográfica minuciosa y realizado entrevistas a personalidades que nos permitan conocer criterios diversos para comprender la trayectoria y las perspectivas de esta institución cruceña al margen de la cual no sería posible comprender la realidad cruceña hoy en día.

Estudiar al Comité es pertinente, dada la importancia que reviste el departamento de Santa Cruz de la Sierra donde es referente indiscutible. En la actualidad Santa Cruz, como departamento, aporta más del 30% del Producto Interno Bruto Nacional, alberga a cerca del 30% de la población del país, merced a procesos de migración en algunos casos planificados y las más de las veces espontáneos. Recauda cerca del 40% de los Impuestos Nacionales y produce cerca del 70% de los alimentos que se consumen en el país. De ser un departamento que en menos de 70 años pasó de tener 200 mil habitantes a un estimado de 3 millones en la actualidad. Si como ciudad capital no contaba con servicios de agua potable ni pavimento a mediados del siglo pasado, hoy es una de la metrópolis de mayor crecimiento en el corazón de Sudamérica. Paradójicamente, a pesar de su creciente gravitación en la vida nacional siempre ha tenido una dinámica de persistente confrontación con el nivel central del Estado, siendo el Comité, el actor y un portavoz clave de las demandas cruceñas.

2. Antecedentes, fundación e hitos de una historia de luchas regionales

El Comité Cívico Pro Santa Cruz nace a la vida un 30 de octubre de 1950, en el Salón de Actos de la Universidad Gabriel René Moreno. Su creación, fue iniciativa de los ejecutivos de la Federación Universitaria Local (FUL), a la cabeza de Hernando García Vespa y Hugo Lijerón Jordán en su calidad de presidente y secretario de esa instancia universitaria. Fue la FUL la que invitó a distintas entidades y “hombres notables”. Ya entonces se instaba a contar con un ente colegiado apolítico que canalice y represente los intereses de Santa Cruz. La propuesta era:

Crear un organismo que, ajeno a las contingencias políticas y superiores a las diferencias políticas, tenga por norte la defensa de nuestros derechos y sirva de acicate para que los poderes públicos cumplan con los deberes contraídos con Santa Cruz. (García Vespa H., 2004 pp7)

Antes de revisar y analizar pormenores de la génesis, evolución y legitimación del Comité es necesario entender la historia de Santa Cruz durante la primera mitad del Siglo XX. A partir de ello, no hay equívoco en afirmar que la historia contemporánea de Santa Cruz está estrechamente ligada a la historia del Comité.

Desde la fundación de la República, Santa Cruz fue una región olvidada por el poder geopolítico de la minería de occidente del país, cuya hegemonía dominó la economía y la política boliviana. Con un Estado débil e impotente de sentar presencia en tan vasto territorio, el departamento de Santa Cruz, al igual que el oriente del país, estuvo marginado. Se mantuvo aislado, en un país desarticulado, carente de vías de comunicación y postergado en su desarrollo hasta la primera mitad del Siglo XX. Si bien es cierto que durante el Siglo XIX se registraron movimientos iniciados desde Santa Cruz que cuestionaron su participación dentro del Estado Boliviano, estos tuvieron una repercusión efímera en la política nacional para convertirse en parte de la memoria larga de las luchas reivindicativas del pueblo cruceño. Es el caso de la revolución de los domingos, y el movimiento federalista e igualitarista liderado por Andrés Ibáñez entre 1975 y 1976 del siglo XIX.

Fue a inicios del Siglo XX que, mediante el Memorándum de 1904 evacuado por la Sociedad de Estudios Geográficos de Santa Cruz, se propone el rol protagónico de esta región dentro del territorio boliviano. El Memorándum interpeló a las élites políticas del momento, proponía como tesis central el “mirar hacia el Oriente” dada su importancia geográfica y condiciones naturales.³

Planteaba desarrollar una economía alternativa a la economía minera de occidente.⁴ El Memorándum reclamaba la construcción del ferrocarril

...porque tenemos derecho a pedirlo, no hacemos una amenaza subversiva, no pedimos a nuestros compatriotas que nos traigan el progreso, el progreso vendrá paulatinamente y obtendremos con nuestros esfuerzos. (Ibid)

Resalta este último párrafo de este histórico documento, en él se hace referencia al convencimiento que el desarrollo de esta región se dará de manera endógena, es decir desde adentro, a partir del esfuerzo propio de la población. A la par que

3 “Una larga y dolorosa experiencia de más de 70 años, nos ha persuadido de que los pueblos occidentales de la región andina, cuyos intereses son más o menos solidarios entre sí, no toman en cuenta los intereses y el progreso de los pueblos orientales” (Memorándum de 1904 Citado en Peña P, 2011)

4 “los pueblos del interior son los mercados obligados y naturales de los productos del oriente, ya no tienen allí competidores, sino los similares extranjeros de Chile y Perú, a quienes los gobiernos por medio de inconsultos han concedido privilegios y franquicias tales, que han expatriado de las plazas del interior a los artículos nacionales de Santa Cruz” (Ibid)

los reclamos cruceños no hacían eco en el resto de país, ni en los gobiernos de turno, fue germinando el sentimiento de recelo hacia el Estado y la convicción de que las soluciones tenían que ser “hechas en casa”.

Se forjó así la conciencia colectiva de contar con instituciones propias que resuelvan las demandas de la región. Una de las primeras instituciones que responden a esta necesidad fue el Comité de Obras Públicas, creado en 1931. Institución que, junto con el Comité Pro Santa Cruz, serán vitales para el desarrollo del Departamento.

En ese momento, el reclamo cruceño no fue acompañado con una respuesta favorable de las élites políticas y económicas dominantes de la época, no obstante la idea fue tomando cuerpo. Entre las iniciativas a destacar, se tiene el diagnóstico que realizó el Plan Bohan en 1942, cuyas propuestas calaron profundo, destacando entre ellas la importancia de construir la carretera Santa Cruz-Cochabamba.

Durante el periodo de la revolución nacional del 52, Santa Cruz vivió una nueva etapa, marcada por un lado, por una política estatal decidida a desarrollar el oriente del país conocida como *“la marcha hacia el oriente”* y por otro, por una permanente tensión con el gobierno del nacionalismo revolucionario. De manera simultánea a la revolución nacional, Santa Cruz se conectó tanto con el interior del país, a través de la carretera Santa Cruz-Cochabamba como con Argentina a través de tramo ferroviario Santa Cruz-Yacuiba y Brasil mediante el ferrocarril Santa Cruz-Corumba. (Traverso C., 2022)

Es durante ese mismo periodo que se funda el Comité Pro Santa Cruz. Cabe subrayar que, en la propuesta de creación del Comité, suscrita por los autores mencionados, se evidencia el convencimiento respecto a la necesidad de contar con una institucionalidad que garantice la correcta inversión de los recursos públicos para mejorar y promover el desarrollo humano en Santa Cruz. Así también, se reconoce que la llegada de los ferrocarriles y de la carretera a Cochabamba representan una oportunidad de desarrollo y al mismo tiempo genera una externalidad en cuanto a la migración de compatriotas desde el interior del país.

Nuestro departamento y nuestra ciudad tienen que afrontar desde ahora serios problemas que se le presentan, tanto en el orden económico como en el orden moral. La llegada de los ferrocarriles de Corumbá y Yacuiba, la conclusión de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la celebración del IV Centenario de la fundación de nuestra ciudad, el remodelamiento urbano urgido por el Plan Ivanissevich, las obras públicas de alcantarillado y pavimentación de nuestro pueblo, la imperiosa necesidad de dotarlo de servicios de agua y luz, en cuanto se refiere a la ciudad, y la urgencia de estudiar un plan de colonización y otro de migración con referencia

al departamento en general, sin contar los múltiples problemas de las capitales provinciales y localidades importante de nuestra circunscripción, son otros tantos imperativos que recibimos nosotros los jóvenes, y que esperamos que tendrán eco en todos aquellos ciudadanos a quienes nos dirigimos en esta oportunidad (García Vespa H., 2004 pp9)

Ya desde sus inicios, el Comité demostró amplitud para abarcar y acoger la mayor cantidad de sectores que representen a la sociedad cruceña. La propuesta o invitación fundacional de la FUL, arriba mencionada, fue enviada a la Universidad Cruceña, a la Cámara Departamental de Comercio e Industria, a la Alcaldía de Santa Cruz, al Círculo de Abogados, a la Jefatura del Distrito Escolar, Aéreo Club Oriental, a la Sociedad Benéfica 21 de mayo, Sociedad de Artesanos 24 de Septiembre, así como a otros cruceños notables de la época (García Vespa, 2004)

La idea fue bien acogida entre los sectores que conformaban la sociedad cruceña y un 30 de octubre de 1950 fue creado el Comité Pro Santa Cruz y elegido primer presidente, el industrial Ramón Darío Gutiérrez. De principio, solo 26 instituciones conformaron el Comité.

Producto de la llegada de los ferrocarriles y de la carretera a Cochabamba, sumados a los recursos hidrocarburíferos de la región se creó gran expectativa y el convencimiento de que el tiempo de Santa Cruz había llegado. Situación que explica por qué el objetivo principal del Comité era *“el engrandecimiento moral y material del departamento, y del país”*. Se evidencia entonces que las acciones del Comité estaban enmarcadas en asegurar que los recursos que pertenecían a Santa Cruz sean correctamente invertidos en la región auspiciando su desarrollo.

El 10 de enero de 1951, apenas seis meses después de su fundación, el Comité llamó a un Cabildo Abierto para reclamar la entrega de 20 millones de bolivianos por concepto de obras públicas, entre otras demandas, como las de acceso a servicios de luz, agua y alcantarillado que serían una constante en su relación conflictiva con el Estado. Según estimaciones, participaron unas 20 mil personas de una ciudad que no sobrepasaba los 60 mil habitantes. No solo se tomó la determinación de acatar un paro cívico de 24 horas, sino que se recuperó una centenaria práctica cruceña de participación y acción colectiva. (Peña, 2011)

Fue una de las primeras movilizaciones promovidas por el Comité, a partir de la cual es posible identificar tres rasgos distintivos en su accionar: El primero, la persistente tensión con el centralismo estatal; el segundo, la adopción del Cabildo y los paros como principales herramientas de lucha regional y modalidades de articulación y participación y , finalmente, el tercero, la determinación, visión y

convicción de la apuesta del liderazgo cívico con miras al desarrollo del departamento de Santa Cruz .

2.1. Luchas Cívicas del 11% y Capital Simbólico

Se entiende al Capital Simbólico como el prestigio, honor y legitimidad que tiene un agente dentro de un Campo Social. En palabras más sencillas es el reconocimiento social que la sociedad otorga a una institución o a un individuo. Partiendo de esa definición, si hubo un momento en la historia en la cual el Comité galvanizó su legitimidad ante los cruceños son las luchas cívicas de 1957-1959 a la cabeza del Dr. Melchor Pinto Parada. Para ese entonces, el Comité había ido incrementando su representación y las instituciones que conformaban el Comité aumentaron de 26 a 38.

En un nuevo capítulo de enfrentamiento con el Estado, el Comité reclamaba al gobierno la promulgación de la ley interpretativa al Código del Petróleo ya que el contenido del Código Davenport generaba confusión en cuanto a la aplicación del 11% de regalías petroleras correspondiente a los departamentos productores. El referido porcentaje había sido instituido durante el gobierno de German Busch en 1938.

El Comité, convencido que los recursos provenientes de los hidrocarburos eran fundamentales para financiar el desarrollo de Santa Cruz, capitaneó la causa. El Doctor Pinto Parada, en una actitud desafiante con el gobierno del presidente Siles confiscó la maquinaria con la que se había construido el oleoducto Camiri-Santa Cruz y fue entregada al alcalde de la ciudad para que sea destinada al arreglo de las calles de la urbe. La respuesta del Gobierno fue declarar Estado de Sitio en el departamento de Santa Cruz (Peña P., 2011).

La actitud autoritaria del gobierno fue como echar gasolina al fuego. Esta provocación a la naciente institucionalidad cruceña, tuvo como efecto el incremento de los sectores que conforman el Comité de 38 a 86, entre ellos el Comité Cívico Femenino y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) , asumido como “el brazo armado del Comité” (Peña P., 2011) A partir de ese entonces, tanto al UJC como el Comité Cívico Femenino actúan de manera inseparable en las jornadas de lucha reivindicativa de los cruceños. Durante este periodo se dio nacimiento a los Comités Cívicos provinciales, ampliando el radar institucional del Comité a todo el Departamento. Es importante resaltar este hecho, porque aporta con otro rasgo distintivo del Comité, su presencia en el territorio departamental y por ende en las provincias cruceñas, al extender su influencia mas allá de los límites de la ciudad capital. De hecho, los entes Cívicos Provinciales hacen parte de la actual directiva

Las negociaciones con el presidente Siles fueron entabladas directamente con el Comité Pro Santa Cruz reconociendo de esta manera su legitimidad y ascendencia en el Departamento. El 12 de diciembre de ese mismo año se firmó el Decreto Supremo mediante el cual se reconocía el valor del 11% de las regalías en favor de los departamentos productores, sin embargo, las tensiones y los enfrentamientos con el gobierno duraron hasta 1959. Las luchas cívicas de entonces estuvieron marcadas por sangre y luto, ya que costaron la vida a varios jóvenes unionistas.

La obtención de los recursos correspondientes a las regalías petroleras fue una victoria sobre la cual la institucionalidad cruceña proyectó y edificó su desarrollo. Los recursos provenientes del 11% fueron canalizados principalmente a través del Comité de Obras Públicas, de cuyo seno nacieron las cooperativas cruceñas que aseguraron el acceso a servicios básicos a la ciudad capital y a todo el departamento. Una combinación de factores contribuyó a estos logros, la importancia de contar con una institucionalidad local eficiente y la disponibilidad de un importante caudal de recursos públicos. Con ello, se sentaron las bases del desarrollo cruceño, dotando al departamento de la infraestructura necesaria para que posteriormente el sector privado asuma el rol protagónico en la dinamización de la economía departamental.

Las batallas libradas en esa época hacen parte de la memoria cruceña y de la narrativa épica del departamento, pues a partir de ellas fue posible arrancar al centralismo, los recursos necesarios para financiar el desarrollo cruceño.⁵ Con el tiempo, la conquista del 11% de regalías no solo benefició a Santa Cruz sino a todos los departamentos productores de hidrocarburos

La lucha por las regalías significó el convencimiento entre las clases medias y políticas cruceñas, que entendieron que el futuro de Santa Cruz dependía de los cruceños y no de los gobiernos nacionales de turno. La conciencia para sí de una noción de sociedad regional se había consolidado, marcando un punto de no retorno en el ejercicio de la ciudadanía y de un nuevo tipo de política: la regional. (Traverso 2022 pp 97)

Una vez consolidados los logros de las luchas cívicas y sentadas las bases del desarrollo regional, el país entró en el periodo de gobiernos militares (1964-1982) en los cuales el Comité tuvo una participación moderada y en algunos casos colaborativa a los gobiernos militares de turno (Peña, P. 2011) Durante este periodo, el

5 El reconocimiento a sus protagonistas es inocultable. El Doctor Melchor Pinto Parada lleva una avenida en su nombre ubicada en la zona este de la Ciudad. Similar situación con los unionistas Jorge Roca y José Coronado cuya inmortalidad está asfaltada en la avenida que llega al Río Piraí. Por su lado, Elffy Albrecht, fundadora del Comité Cívico Femenino tiene su monumento ubicado en la Av Monseñor Rivero.

Comité, formaba parte de los directorios del Comité de Obras Públicas (Traverso, A., 2022) fue acompañando, desde su rol, la puesta en marcha del denominado “modelo de desarrollo cruceño” ineludible en el debate contemporáneo. En el epílogo del ciclo de gobiernos de facto y de la dictadura banzerista y, tras una accidentada transición política, en octubre de 1982, se dio la recuperación de la Democracia en Bolivia. La causa democrática también formó parte de las demandas del Comité. A partir de ello, la década de los 80 y años subsiguientes el principal tema que convocó al Comité girarían en torno a la reforma descentralizadora, cuyo alcance será desarrollado en el cuarto acápite del presente texto.

3. Estructura, Naturaleza y Composición del Comité

El funcionamiento del Comité está regulado por el Estatuto Orgánico, cuya última enmienda fue aprobada mediante Asamblea Extraordinaria el 28 de mayo de 2011. Se rescata del mismo las siguientes disposiciones.

Primero, que Comité se reconoce a sí mismo como el organismo cívico de mayor jerarquía, representativo de todos los sectores sociales del departamento, apartidista y sin fines de lucro (art 2); y segundo, el reconocer como parte de sus principales objetivos son los de promover la unidad departamental, la democracia, la autonomía y el sistema productivo del departamento; la protección del medio ambiente a través del desarrollo sostenible; preservar los valores morales y la identidad regional, así como los valores usos y costumbres de los pueblos indígenas de Santa Cruz (art 3).

Está conformado por instituciones de todo tipo que son consustanciales de la realidad cruceña, entre las que se pueden destacar las cooperativas de servicios básicos como Saguapac, CRE y Cotas, la Universidad Gabriel René Moreno, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, la Federación de Empresarios Privados, la Federación Universitaria Local, la Cámara Agropecuaria del Oriente, la federación de trabajadores gremiales, la asociación de venta de refrescos 25 de abril, Federación de Maestros Urbanos, Colegio de Arquitectos, Colegio de Abogados, Federación de profesionales, Central Obrera Departamental, Federación de Fabriles, Federación de Transportistas, Federación de Juntas Vecinales, y pueblos indígenas del oriente boliviano entre una larga lista de instituciones.

Debido al incremento de las instituciones que hacen parte del Comité, el artículo 6 del Estatuto establece que estas son agrupadas en sectores y cada sector es a su vez representado por un director que conforma el Directorio del Comité (ver cuadros en anexo). Asimismo, el estatuto dispone que cualquier institución que

quiera ser afiliada debe solicitar su incorporación al directorio acompañando su personalidad jurídica, una vez aprobada su incorporación, esta pasa a formar parte del sector que le corresponde (Art 8).

En términos jerárquicos, el órgano supremo de decisión del Comité es la Asamblea de la Cruceñidad;⁶ las asambleas pueden ser ordinarias y/o extraordinarias. En las ordinarias se elige al Presidente y sus Vicepresidentes, se aprueba al Tribunal de Honor y otros temas relacionados al funcionamiento corriente el Comité (aprobación de memoria anual, balances financieros etc). Así como asuntos de interés general. En las Asambleas Extraordinarias se tratan temas relacionados a la modificación de los estatutos o disposición de bienes. (Art 18 y 19).

Un escalón más abajo en la jerarquía del Comité se encuentra el Directorio, encargado de la representación y administración del Comité. Está conformado por el presidente, dos vicepresidentes y los directores de los sectores mencionados líneas arriba. Los periodos de mandato tanto del presidente los vicepresidentes y los directores tienen una duración de dos años. Para acceder a estos cargos se deben cumplir con ciertos requisitos, entre los que resaltan el de contar con al menos 25 años. En el caso particular del presidente y los vicepresidentes, la edad mínima requerida es de 35 años y al menos 15 años de residencia en el departamento.

Al ser una institución cívica no pueden postular a los cargos dirigentes de partidos políticos o que ostenten algún cargo jerárquico en la administración estatal ya sea del nivel central o de las entidades territoriales autónomas. Pese a esta disposición que marca una distancia respecto al ámbito político institucional, el Comité Cívico ha sido la palestra que ha posibilitado el salto, con relativo éxito, al espacio de la competencia política y electoral a varios de sus expresidentes. Como se verá a lo largo del texto, sobran los ejemplos, de candidatos electos a cargos legislativos y a la gobernación cruceña.⁷ Paradójicamente, es la trayectoria en el Comité y no necesariamente el partido político el que transfiere y arroja de legitimidad a estas personalidades.

Otra de las particularidades que tiene el Comité es que uno de los requisitos para postular a los cargos directivos es haber nacido en Santa Cruz o ser hijo de cruceños, además de residir en el Departamento al menos 10 años. Disposición que contrasta con la realidad cruceña ya que se calcula que Santa Cruz alberga la

6 Ver conformación en Anexo.

7 Desde la apertura democrática destacan algunos nombres: Oswaldo Gutiérrez, Carlos Dabdoub, Jorge Landivar, Percy Fernández, Freddy Terrazas, Germán Antelo, Rubén Costas y Luis Fernando Camacho.

segunda población de residentes de todos los departamentos.⁸ A pesar de ello, el Comité mantiene relaciones de coordinación con las asociaciones de residentes de los demás departamentos, quienes participan activamente en las actividades que lleva adelante el Comité. El Directorio, puede conformar Comisiones especiales para temas específicos, tal es el caso de la Comisión que fue creada para labrar el camino de las Autonomías.

En cuanto a su financiamiento, el Comité se solventa en base a los aportes de cada Institución afiliada de acuerdo a su capacidad. Además de donaciones y contribuciones especiales. Según información proporcionada por el presidente en ejercicio del Comité, el presupuesto mensual no supera los sesenta mil bolivianos y cuyos recursos provienen de los aportes que realizan las instituciones que conforman el Comité. Los aportes son voluntarios, cada institución aporta de acuerdo a su realidad y capacidad. Cuenta con un edificio propio a escasas cuadras del monumento al Cristo Redentor.

Se comenta que los grupos de poder económico en Santa Cruz son quienes ostentan el control real y efectivo de las definiciones de Comité Cívico. Se han referido a estos grupos de interés como “logias cruceñas”. no se ha encontrado infografía que sustente o desmienta de manera confiable, estas afirmaciones.⁹ En todo caso, es difícil pensar a un comité cívico carente de tensiones y pugnas de poder. Su trayectoria inicial anclada en la importancia del peso del Comité de Obras Públicas que dio origen a las Cooperativas de servicios e implicó la movilización de recursos financieros, los que son ingrediente que abonan el terreno para hacer de estas instituciones espacios de disputa en los que confluyen múltiples intereses. A lo largo de su historia, las tensiones y defensa de intereses sectoriales corporativos han sido puestas en evidencia con distinto grado de visibilidad e intensidad. No obstante, como se demuestra en las siguientes líneas las divergencias quedan en segundo plano cuando el Comité plantea la defensa de los intereses sean coyunturales o estructurales para Santa Cruz.

A lo largo de siete décadas, el Comité ha funcionado y construido una institucionalidad apegada a su propio marco estatutario y a la legislación nacional pertinente. En ese periodo han tenido 33 presidentes, el último, Fernando Larach Santistevan fue electo el 11 de febrero de 2023 Lo acompañan en su Directiva, Stello Cochamandinis (1er vicepresidente) y Leonardo Martínez (2do vicepresidente). No se presentaron ni habilitaron otros contendores. Esta

8 Con excepción de La Paz cuya segunda población de residentes está en El Alto.

9 Ver el libro de Reymi Ferreira titulado “Las Logias en Santa Cruz” (1994), no obstante sus afirmaciones no han sido sustentadas.

directiva, tendrá bajo su responsabilidad de encarar los desafíos del movimiento cívico en un nuevo tiempo.

4. El Comité, incidencia política y acción colectiva durante el S. XXI

A inicios del siglo XXI, el Comité recupera la vitalidad y se convierte en uno de los principales actores que inciden en la política nacional. Los multitudinarios Cabildos convocados por el movimiento cívico cruceño serán en adelante la principal herramienta de movilización, protesta y la consiguiente legitimación de sus demandas.

Entre el año 2000 y 2005, el país experimentaba una crisis de económica y de gobernabilidad que derivó en una crisis de Estado. Es un momento en el que afloraran y visibilizan “Una serie de fracturas que cuestionan al Estado desde distintas dimensiones, y propugnan su transformación mediante la acción colectiva de sus sujetos”. (Zegada, et all 2011) Esta crisis estatal develó a su vez factores de larga data como la exclusión de los pueblos indígenas en la participación de la cosa pública y el territorial, la crítica al centralismo estatal que históricamente habría obstaculizado el desarrollo de los demás departamentos. A estos factores o “tensiones históricas irresueltas” se sumaron problemas más inmediatos y a externalidades como resultado de las reformas económicas liberales de los años 90.

Las reformas económicas iniciadas a partir de la promulgación del DS 21060 en 1985 liberaron la economía y reformaron al Estado que transmutó de un Estado productor y actor principal de la Economía a un Estado regulador.¹⁰

Las reformas llamadas estructurales y políticas de ese decenio no resolvieron los problemas seculares de la nación y por el contrario en algunos casos éstos se agudizaron. Las reformas económicas generaron el despido de miles ex trabajadores de Estado, especialmente del sector minero estatal para su reubicación en otros sectores de la economía en su mayoría informal, teniendo como efecto la

10 “Bajo este nuevo modelo, el papel de Estado se redujo a regular el funcionamiento del mercado y proteger los intereses de los actores socioeconómicos brindando certidumbre y seguridad para la inversión privada, bajo el supuesto de que a partir de reglas e incentivos claros, el sector privado asumiría la responsabilidad de la reconversión productiva mediante la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías de producción, y por esa vía, aumentar la productividad y la competitividad de las exportaciones, generando de esta manera, suficiente riqueza para dinamizar la economía interna y mejorar los ingresos de la población”. (Zegada et all 2011)

emergencia de nuevos actores sociales que de cierta manera se veían excluidos en el diagrama de un Estado Liberal de Derecho.

La crisis de representatividad del Estado no solo se hizo evidente para con los actores sociales, sino también se manifestaron en tensiones regionales, en particular la de Santa Cruz. Las reformas neoliberales eliminaron todo atisbo de planificación regional que tan influyente fue para el desarrollo cruceño (Traverso, 2022) sin embargo, durante este periodo, la iniciativa del desarrollo local fue asumida por el sector empresarial cruceño que, merced a las reformas económicas de la década del noventa, aumentaron su capacidad productiva y en consecuencia su ámbito de influencia.

Ciertamente, entre 1990 y 2003 algunas empresas privadas cruceñas fueron adquiridas y/o fusionadas por empresas multinacionales, lo que potenció su crecimiento, beneficiando a las empresas tanto en el incremento de capital como en las buenas prácticas empresariales. A manera de ejemplo el Grupo Santander adquirió el Banco Santa Cruz, Kimberly Clark adquirió la fábrica de papel de la familia Kuljis, el Grupo Gloria se hizo del paquete accionario de la Planta Industrializadora de Leche a los productores lecheros,¹¹ la Sociedad Aceitera del Oriente fue adquirida por la multinacional ADM (Seoane 2021, 174-77).

Durante ese periodo, a iniciativa del Banco Mundial se materializó el programa de Tierras Bajas del Este (Traverso, 2022) lo que impulsó la siembra de soya en el departamento y dinamizó considerablemente la agroindustria cruceña. Dado su carácter exportador, la economía del Departamento creció considerablemente lo que se reflejó en su mayor contribución económica y participación a escala nacional. Lo que permitió el crecimiento de su economía y con ello la migración interna hacia el departamento para convertirse a la fecha en el departamento más poblado del país. Estos dos factores han generado un incremento considerable en su capacidad de influencia respecto a las decisiones de la vida política nacional. No menos importante señalar es que el crecimiento sostenido de la economía durante los “50 gloriosos” –años–¹² permitió que Santa Cruz valide su “modelo de desarrollo” entendido como un modelo capitalista, basado en la propiedad privada, explotación de recursos naturales sostenibles principalmente la agroindustria, el acceso a créditos, innovación y servicios como una alternativa al modelo tradicional extractivista que caracterizó la economía boliviana a lo largo de su historia republicana.

11 Originalmente la PIL pertenecía CORDECRUZ, con las reformas neoliberales fue cedida a los productores y a la iniciativa privada.

12 valga la analogía con los “30 gloriosos” del Plan Marshal.

4.1. Revigorización del Comité, Primer Cabildo y Visión País

En el contexto de la crisis de estado antes señalada, en octubre de 2003 se produjo la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y con ello el cambio de paradigma del Estado. Carlos Mesa asumió la Presidencia del Estado, sin contar con una Bancada que lo respalde en el Órgano Legislativo, a ello se sumaba el descrédito de los partidos políticos tradicionales. Estos eventos marcaron el fin de ciclo democrático conocido como la “democracia pactada”.

Con la pérdida de legitimidad de los partidos políticos y la falta de representación en el parlamento, el debate migró a las calles y a las organizaciones sociales. Por un lado, estaban las organizaciones sociales que habían suscitado la caída del presidente Sánchez de Lozada que pretendían la “nacionalización” de la política de hidrocarburos y la reforma de la constitución (conocida como la “Agenda de Octubre”) mientras que, desde Santa Cruz, el Comité, aprovechando el descrédito de los partidos políticos retomó y reforzó su rol de representación de la sociedad cruceña al canalizar la demanda de reestructuración del Estado, a través del reconocimiento de las autonomías departamentales (denominada “Agenda de Junio”)

Debido a la crisis de 2003 el Comité multiplica su capacidad de incorporar temas en la agenda pública y gana espacio como referente político a nivel nacional. (Molina, et al., 2008)

Durante este periodo de reacomodo y recuperación de su capital político, el Comité gestaría uno de los hitos que han marcado su historia y redireccionado el rumbo de las transformaciones políticas en el país, a través de la implementación de elección directa de Prefectos de Departamento. En este periodo se van instalando las narrativas de visión de país. El Comité, a través de manifiestos públicos comienza a pronunciarse sobre la coyuntura nacional reclamando un nuevo modelo de Estado basado en el reconocimiento de un régimen de autonomías departamentales.

Bolivia ha vivido momentos de crisis profunda producto de la frustración derivada de un sistema de gobierno centralista, inoperante y corrupto que arrastra desde la fundación de la república y que no ha dado respuesta a un pueblo que permanece en la miseria, el atraso y la injusticia social. (manifiesto del Comité Pro Santa Cruz 17 de octubre de 2003, citado en Molina., 2008)

La incorporación de las autonomías en la agenda política nacional puede ser interpretada desde varios enfoques. Entre ellos como una interpelación al modelo centralista de Estado que tuvo como resultado el aislamiento histórico del departamento y otras regiones, pero también puede ser entendido como una defensa

a su “modelo de desarrollo” ante la amenaza una nueva ola recentralizadora y estatizadora promovida por la Agenda de Octubre.

Bajo esa ruta crítica, el primer paso para dar viabilidad a las Autonomías en Bolivia era contar con que el máximo representante político del departamento sea elegido entre sus habitantes, y para ello, la Asamblea de la Cruceñidad convocó al primer Cabildo de este siglo que se realizó el 22 de junio de 2004. Contó con una participación multitudinaria que se calcula entre 150 a 300 mil personas. En respuesta a la propuesta de los “10 Mandamientos” del Movimiento al Socialismo (MAS), que para entonces ya había logrado aglutinar y canalizar las demandas de la Agenda de Octubre, el Cabildo propuso “La Autonomía y las 11 tareas”. Su orador fue el entonces presidente el Comité, Rubén Costas Aguilera. Un líder que venía con una trayectoria dirigencial de los sectores productivos cruceños como la Federación de Ganaderos o la Federación de Productores de Leche.

El Postulado del Comité reflejaba una visión de país alternativa a la perfilada por los sectores sociales alineados a la Agenda de Octubre, hacía fuerte hincapié en las Autonomías Departamentales reclamando la realización de referéndum nacional.¹³

Si bien se habían realizado gestiones para garantizar una participación multitudinaria, (Molina., 2008) la asistencia al Cabildo sobrepasó las expectativas. Hasta la fecha Santa Cruz no había presenciado una aglomeración de personas de esas dimensiones. Este primer Cabildo fue, sin lugar a duda, el punto de partida de las gestas cívicas del nuevo siglo. Sirvió también para renovar la vigencia del Comité Pro Santa Cruz y dotar de legitimidad a la causa autonómica, causa que posteriormente sería robustecida de legalidad a través de un referéndum.

4.2. Del Segundo Cabildo al Cabildo del Millón: Elección de Prefectos y Autonomías

A seis meses del primer cabildo, las tensiones entre el gobierno del presidente Mesa y Santa Cruz no habían bajado, por el contrario, la promulgación de un decreto supremo que pretendía subir el precio del diésel, carburante esencial para la economía cruceña, fue el catalizador para que el Comité convoque a un nuevo cabildo el 28 de enero de 2004. Unos cuantos días antes, el Comité había convocado a la sociedad civil a acatar un paro cívico que sirvió de termómetro para medir la capacidad de reacción de la ciudadanía ante la convocatoria del Comité.

13 “Hemos venido a proponer un nuevo contrato social, a plantear una Bolivia productiva y con nueva agenda. Que no sea la de octubre que está vinculada a la violencia y los bloqueos sino a la de las autonomías y el trabajo” (Discurso de Ruben Costas citado en Molina, 2008)

En vísperas del Cabildo, el gobierno no solo abrogó el decreto supremo que incrementaba el precio el diésel, sino que promulgó la ley Interpretativa del Artículo 109 de la Constitución Política del Estado, 6 de julio de 2005 en la cual se establecía la elección mediante sufragio universal de los prefectos para que estos a su vez sean designados por el presidente. Además de disminuir la tensión existente, conllevaron cambios en la estructura de poder político y territorial en el país.

Según estimaciones, el Cabildo del 28 de enero de 2005 sobrepasó los 350 mil participantes. Con Rubén Costas como orador principal, el Comité aprovechó la legitimidad del Cabildo para instalar la Asamblea Provisional Autónoma para:

Asegurarse que tengamos reformas constitucionales que ratifiquen las autonomías, asegurarse que, mediante referéndum previo, todo departamento sea libre de llevar a la práctica la voluntad autónoma de sus pueblos, sin imposiciones extrañas. Fiscalizarlo y asegurarse de que podamos elegir a nuestras autoridades departamentales. Y lo más importante, la Asamblea Provisional Autónoma deberá pactar con los poderes del Estado la transferencia de competencias y recursos a favor de la Prefectura. De esta manera se inicia la organización, la vida misma del Gobierno Departamental. (Discurso de Rubén Costas Citado en Traverso, 2022 pp 329)

De esta manera, el Comité opta por la vía de la legalidad y de la legitimidad para incorporar las Autonomías y propiciar la reforma del Estado Boliviano. Bajo los lineamientos del Comité, el conjunto de instituciones cruceñas se movilizó para registrar las 450.000 firmas requeridas para obligar al Estado central a realizar un Referéndum sobre las Autonomías Departamentales.

En un contexto político de inestabilidad, en junio de 2005, Carlos Mesa renuncia a la Presidencia sucediéndolo Eduardo Rodríguez Veltzé, quien llama a elecciones anticipadas ese mismo año. En las elecciones nacionales, presidenciales y legislativas, salió victorioso Evo Morales Ayma con el 53% de los votos, mientras que, de manera inédita se eligieron por primera vez a los Prefectos por la vía democrática. En Santa Cruz salta de la palestra del Comité hacia las esferas políticas Rubén Costas, siendo elegido prefecto con más del 40% de la preferencia electoral. Con la elección de los prefectos, el Comité ratifica su ascendencia en el departamento e irradia su influencia en todo el país.

A partir de este momento, ambas visiones de país –aquella emergente de la agenda de octubre y la de junio– se revisten de legitimidad otorgando el respaldo electoral a sus líderes. Sin embargo, las tensiones entre agendas contrapuestas persistirían para trasladarse al seno de la Asamblea Constituyente. El debate se

entrampó en torno a la conformación de dos bloques hegemónicos, por un lado, la llamada “media luna” conformada por los departamentos que optaron por la Autonomía (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) y por otro lado los departamentos que rechazaron esta forma de organización territorial del Estado (La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Oruro). En este escenario nacional se puso en evidencia la irradiación de la demanda territorial alineadas en torno a la demanda autonómica y con ello la capacidad que tiene el Comité para promover cambios en la estructura nacional.

La agenda trazada por el Presidente Mesa y llevada a cabo durante el primer mandato de Morales fue impulsar la Asamblea Constituyente que tiene por misión producir una reforma total de la Constitución y por ende del Estado Boliviano. El 6 de marzo de 2006, el presidente Morales promulgó la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. Paralelamente, se llevó adelante el Referéndum Autonómico.

En la conformación de la Asamblea Constituyente el MAS ratificó su fuerza política conquistando 137 de los 255 votos mientras que en el Referéndum Autonómico los cuatro departamentos de la denominada “Media Luna” la inclinación por el “SI” en cuanto a la pregunta de migrar a un régimen autonómico fue también ampliamente mayoritaria, entre el 58 y el 74 % (Zegada 2011).

Aunque el MAS había logrado asegurarse la mayoría en la Asamblea Constituyente no le alcanzaba para garantizar los 2/3 necesarios para la votación e impulsar la reforma de Estado. En medio de las tensiones y crispaciones sociales que rodeaban la gestación de la nueva Constitución, el Comité reforzado por la legitimidad de los prefectos elegidos democráticamente, propugnó la realización simultánea de Cabildos en los cuatro departamentos en los que había ganado la Autonomía.

El 15 de diciembre de 2006, se realizó el Cabildo del Millón, denominado así porque se estimó la participación de un millón de personas sumados los Cabildos en las 4 regiones. Fue la ocasión de demostrar la musculatura y capacidad de convocatoria de la ciudadanía en Santa Cruz cuyo principal eje aglutinador es el Comité.

La masiva asistencia en los Cabildos es demostración del respaldo a la visión de país gestada desde Santa Cruz, a partir de su modelo de desarrollo.¹⁴ El Comité,

14 Según Fernando Prado, el Modelo de Desarrollo Cruceño tiene cuatro etapas: la primera con Andrés Ibañez y su modelo federal, la segunda es durante el periodo de la goma un modelo exportador, la tercer etapa es de la planificación del Comité de Obras Públicas y finalmente

conformado en buena medida por las instituciones de los sectores productivos de Santa Cruz, hace de aglutinador para constituirse en interlocutor válido de las demandas cruceñas.

Finalmente, en 2009 con turbulencias de por medio, la nueva Constitución es aprobada por el congreso y ratificada por la ciudadanía con el 61% de los votos. No obstante, el reconocimiento constitucional de las autonomías, el gobierno impulsó la defenestración de los prefectos que conformaban la media luna, mediante una arremetida judicial, lo que permitió al MAS ampliar su capacidad de maniobra y el radio de influencia de su proyecto país. Con un gobierno de talante centralizador, la Autonomía, fue obstaculizada e inviabilizada a partir de leyes recentralizadoras que van a quitar competencias a los gobiernos departamentales.

Cabe resaltar que las turbulencias que mediaron la aprobación del nuevo texto constitucional no fueron menores. Un año antes, además de la toma de la prefectura de Pando, el gobierno llevó adelante una arremetida contra la dirigencia cruceña mediante un proceso judicial denominado “Caso Terrorismo”, cuyo principal denunciante era el Ministerio de Gobierno. Mucha tinta ha corrido respecto a este bullado caso, lo cierto es que este proceso judicial ralentizó, en buena medida, la capacidad de influencia de la dirigencia cívica cruceña.

Es así que, durante el periodo comprendido entre la promulgación de la constitución en 2009 hasta el referéndum de Febrero del 2016 y de mayor presencia hegemónica del MAS, el Comité cumplió un rol de resistencia a las arremetidas del gobierno del MAS convertido partido dominante del sistema político en el país cuyas pulsiones recentralizadoras y regresivas de los avances autonómicos prometidos por el nuevo orden constitucional.

En este periodo hegemónico y de auge del MAS, los indicadores económicos del Estado Plurinacional fueron positivos, la balanza comercial internacional era favorable lo que le permitió al Estado aumentar sus Reservas Internacionales Netas y con ello estabilizar la moneda local. En un contexto de superávit económico, las políticas sociales del modelo económico del MAS, inclinado en incentivar la demanda interna¹⁵ tenía la habilidad de “poner plata en los bolsillos” de la gente.

el modelo liberal exportador globalizado, es fruto de una importante formación de capital regional local y externo, y de elevado nivel tecnológico, en un largo proceso acumulativo. Es el modelo vigente.

15 Traducida en la transferencia de bonos, el aumento progresivo del salario mínimo o un segundo aguinaldo de navidad para los trabajadores, entre otras medidas redistributivas del excedente con alto impacto social y político.

Esto se tradujo en sucesivas victorias electorales del MAS en los comicios del 2009 y del 2014. Con resultados ampliamente favorables que superaron el 50% de la votación, se legitimaron las acciones del gobierno que amplió su margen de acción al garantizar la mayoría calificada de 2/3 de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y con ello, asegurando el control de los demás órganos del Estado. Sumado a esto, la comunidad internacional miraba con buenos ojos el gobierno de Evo Morales en Bolivia, al referirse en los reportes internacionales al “Milagro Económico Boliviano”.

Durante este periodo, la población reacciona apáticamente a las iniciativas del Comité, en parte porque los líderes cívicos no tienen la capacidad de generar el entusiasmo y el efecto contagio en la ciudadanía, en parte porque los resultados de luchas cívicas de la autonomía donde la participación de la ciudadanía fue masiva no fueron los esperados, por dos razones, entre otras. Por un lado, porque el Gobierno de Morales y con ello su propuesta de país, se encontraban en la época de mayor apogeo, merced al buen momento de la economía nacional y al respaldo electoral, inédito en la historia democrática nacional. Además, del contexto favorable, su impulso autoritario logró neutralizar las voces de los liderazgos cruceños, a partir del abusos y la violencia política que rodeo el controversial caso del Hotel de las Américas.

En este contexto, el Comité, que compartía entonces su espacio de representación e interlocución de los intereses cruceños con Gobernación consolidada tras la reforma autonómica, tiene una participación localista con demandas regionales y coyunturales. A modo de ejemplo, cabe señalar la defensa compartida del campo gasífero de Incahuasi, que estaba en disputa con el departamento de Chuquisaca. Así también lleva adelante acciones en defensa de la democracia y denuncia las arbitrariedades del llamado caso terrorismo.

Por otra parte, las demandas cruceñas encuentran en la Gobernación un espacio que las canalice y represente. La Gobernación, a diferencia del Comité hace parte integral del Estado, se vio fortalecida a partir del respaldo ciudadano a la gestión de Rubén Costas, Gobernador del Departamento por tres gestiones consecutivas llegando a superar el 60% de la preferencia electoral. El Capital Político de Rubén Costas y de Demócratas en Santa Cruz le permiten convertirse en el principal portavoz de los intereses cruceños contrarios al Movimiento al Socialismo. El gobierno, a pesar de estar en el auge de su popularidad no puede penetrar esta región.

4.3. Crisis poselectoral del 2019 y cambio de actores políticos

En febrero de 2016, el Gobierno de Evo Morales convoca a un Referéndum mediante el cual se consulta a la población la posibilidad de habilitar la candidatura

presidencial del binomio Evo/Álvaro para un tercer periodo consecutivo, (prohibido por la Constitución de 2009). En la lucha contra el intento de perpetuarse en el poder por parte del MAS, el Comité retoma impulso y acompaña a las plataformas ciudadanas que cobran protagonismo y se suma a la campaña para impedir la reforma de la Constitución y consecuente habilitación del binomio. En ese momento, los partidos políticos optan por tomar un rol secundario, ante el anti-partidismo tan arraigado y ceden el espacio de participación a la ciudadanía organizada en plataformas que junto al movimiento cívico ponen a prueba su capacidad de movilización y acción política.

Realizado el referéndum de 21 de Febrero (21F) la opción del “NO” se impone con el 51% de los votos cerrando el candado de una nueva postulación del entonces presidente Morales. Sin embargo, desoyendo a la voluntad popular, el MAS, a través de sus parlamentarios realiza una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional TCP, requiriendo una interpretación de la Constitución que permita la habilitación de la candidatura del binomio Evo/Álvaro. Para ese entonces, el órgano judicial ya estaba cooptado por el Gobierno y el TCP emite la Sentencia Constitucional 84/2017 que habilita nuevamente el binomio Evo/Álvaro para las venideras elecciones de 2019.¹⁶

El referéndum del 21F marcó un hito en cuanto a la polarización política del país. Por un lado, se encontraba la ciudadanía que intensifica sus manifestaciones contra el gobierno ante la vulneración de la voluntad popular expresada por más de la mitad de la población; y por otro las fuerzas conformadas por organizaciones sociales que habían dado el respaldo mayoritario e incondicional al MAS desde 2006 y hacia parte de su “núcleo duro”.

Fue en ese escenario que, en octubre de 2019 se llevaron adelante las elecciones generales, la ciudadanía había tomado las elecciones como un nuevo 21F, al optar por respaldar mayoritariamente al candidato opositor a Evo Morales mejor posicionado en las encuestas. Finalizada la votación, el conteo rápido evidenció que la diferencia del 10% entre Evo Morales y Carlos Mesa era muy estrecha, abriendo la opción a una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas.

16 La decisión adoptada por el aparato gubernamental, indignó a una buena parte de la población que entendió que la soberanía de los ciudadanos, como elemento esencial de un régimen democrático, había sido sobrepasada. Para ese entonces, el superávit comercial se había esfumado, las mega obras para industrializar el gas no estaban dando réditos, debido a que estaban sobredimensionadas o no contaban con estudios de factibilidad y por el contrario se habían destapado varios casos de corrupción. Todas estas acciones condensan un denominador común: el abuso de poder, cuya cúspide es precisamente el sobreponerse a la voluntad popular a través de la Sentencia Constitucional 84/2017.

Una vez confirmada la tendencia de los resultados del conteo rápido, el Tribunal Supremo Electoral decide interrumpir súbitamente la transmisión de resultados preliminares provocando la molestia de una población desconfiada con la transparencia del proceso electoral. Reanudado el conteo, El Órgano Electoral que ya acarreaba cierto descrédito oficializa el resultado y declara ganador al binomio Evo/Álvaro en primera vuelta. Las protestas y denuncias de “fraude” comenzaron a calentar el ambiente poselectoral.

Esta decisión fue determinante para que el Comité Pro Santa Cruz, convoque a una Asamblea de la Cruceñidad que decretó realizar, primero una vigilia y luego un paro cívico indefinido hasta que no se garantice la realización de una segunda vuelta.

Ante los indicios de fraude electoral, El 22 de octubre de 2019, los organismos cívicos de todo el país decidieron llevar adelante un paro indefinido. La respuesta de los habitantes de Santa Cruz fue aplastante apropiándose de las calles y organizando puntos de bloqueo en cada rotonda de la ciudad, conformando especies de republiquetas que controlaban el paso de los transeúntes.

Ya bastante se ha escrito sobre lo acontecido durante los eventos que desencadenaron la renuncia y salida de Evo Morales. Sin embargo, para los efectos de la presente investigación, se hará énfasis en cuatro acontecimientos que se consideran vitales para el desenlace de este crítico momento de la historia democrática:

El primero es la participación protagónica del presidente de Comité Cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho¹⁷ y de su par en el Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari. Camacho ya había cobrado cierta notoriedad previo a las elecciones al convocar a un Cabildo (otra vez multitudinario) en defensa de los bosques de la Chiquitanía.¹⁸ Los Comités Cívicos de todo el país trabajaron de manera conjunta asumiendo la defensa del voto.

La participación del binomio Camacho-Pumari fue determinante porque su imagen denotaba unidad nacional frente a una causa común. Desde su sitial cívico

17 Un Líder de matiz populista, con tradición familiar dentro del activismo cívico en Santa Cruz. Camacho realizó una carrera institucional dentro del Comité, en su juventud fue Presidente de la Unión Juvenil Cruceñista y previo a ser presidente del Comité, ejerció la segunda vicepresidencia durante la gestión de Fernando Cuellar.

18 Para ese entonces la Chiquitana estaba sufriendo unos incendios que amenazaron con deforestar su cobertura boscosa poniendo en peligro a los animales que habitan la zona.

mostraban una actitud netamente apartidista revistiendo la lucha como ciudadana. La participación escenográfica de Camacho¹⁹ mantuvo a la ciudadanía motivada y firme en las calles.

El segundo elemento fue la participación estelar de la ciudadanía, principalmente en las capitales de departamentos, la que, en rechazó a la manipulación de votos, se apropió de las calles en señal de protesta llevando adelante un paro cívico que duró 21 días. Durante estos 21 días, principalmente en el departamento de Santa Cruz, hubo un cese de actividades que evidenció la abrumadora determinación de la ciudadanía de hacer respetar el voto ciudadano. Ante esta situación el Ex presidente Morales opta por desacreditar la protesta ciudadana²⁰ y denunciar lo que él consideraba un Golpe de Estado.

Un tercer elemento a considerar en este evento es que la comunidad internacional asume la postura de exigir transparencia en el conteo de votos. Por primera vez, desde su asunción del Poder, la narrativa había puesto a Evo Morales en el papel de antagonista, o al menos “bajo sospecha”.

Ante esta situación, el presidente Morales optó por solicitar oficialmente a la Organización de Estados Americanos que efectúe una Auditoría a las elecciones. La propuesta fue aceptada por el organismo interamericano luego de acordar el carácter vinculante del mismo. Mientras se llevaba adelante la auditoría, la gente se mantuvo en las calles. La renuncia de uno de los Vocales del TSE aumentó la desconfianza sobre la transparencia del proceso electoral.

Por su lado se evidencia una escalada en las demandas cívicas, a inicios del paro cívico la consigna inicial era garantizar la realización de la segunda vuelta electoral, conforme fueron transcurriendo los días y caldeándose los ánimos la premisa fue realizar nuevas elecciones para finalmente reclamar la renuncia del presidente Morales.²¹

Un cuarto acontecimiento que fue vital para el desenlace de este momento fue el desconocimiento de las fuerzas del orden al mandato gubernamental. El 8 de noviembre de 2021 la policía nacional toma la decisión de amotinarse, por otra

19 Entre los que se puede mencionar los discursos diarios que daba a los pies del Monumento al Cristo con la puesta en escena de las tarimas, las jornadas de oración, su visita a La Paz con la Carta de Renuncia del Presidente o inclusive su vestimenta fueron elementos que hace parte de la política del espectáculo de Luis Fernando Camacho.

20 El Presidente de mofa de las “pitas” con las que la ciudadanía sale a bloquear y en su lugar les ofrece “enseñar a bloquear”.

21 El 1ro de noviembre, en medio del paro indefinido se lleva adelante un Cabildo Nacional en el que se resuelve solicitar la renuncia del presidente Morales para dar fin a la crisis política.

parte, las Fuerzas Armadas manifiestan que no están dispuestas a salir a reprimir al pueblo. En estas circunstancias Evo Morales se encuentra desprovisto de una de las principales prerrogativas que tiene un Presidente, cual es el control sobre la Policía y la Fuerzas Armadas. Restándole la posibilidad de ejercer el poder a través de la coerción.

Finalmente, el 10 de noviembre se emite el Informe de la Auditoría de la OEA concluyendo que hubo irregularidades en las elecciones de 2019. Esto motivó a que incluso organizaciones sociales afines al Gobierno, como la Central Obrera Boliviana, se sumen al pedido de renuncia del presidente Morales quien finalmente accede al clamor ciudadano renunciando y ausentándose del país, dejando un vacío de poder.

La sumatoria de los acontecimientos durante esta crisis dieron cuenta, primero que las protestas ciudadanas asumieron carácter contrahegemónico –en sentido de Gramsci– a la estrategia prorroguista instaurada por el gobierno del Movimiento al Socialismo y el renovado rechazo a su visión país en el seno de la sociedad cruceña. En la calle, espacio “privilegiado como “campo de lucha” por el MAS, ganó terreno y se instaló como *sentido común* la concepción de ilegitimidad de todo intento de continuidad de Morales. En esas circunstancias, el ex Presidente no pudo recurrir a los dispositivos de dominación estatal, ante la inacción y desacato de las fuerzas del orden a la orden presidencial.

Para la gente que salió a las calles en defensa de su voto, la renuncia y exilio de Morales fue percibido como una victoria pacífica y ciudadana. Sin lugar a dudas fue en el departamento de Santa Cruz donde la protesta tuvo el mayor acatamiento de la población.

La lucha cívica de los 21 días muestra a un Comité Pro Santa Cruz llevando adelante un discurso nacional que le permitió trascender los límites departamentales. Con la particularidad que la actuación personal del presidente del Comité tuvo un respaldo inédito en el resto de los departamentos. El Comité caracterizado por tener una narrativa regional en esta oportunidad abrazó y acompañó un sentimiento compartido a nivel nacional que hacía parte de una movilización en las calles que a diferencia de otros momentos de “estallido social” en el pasado, tuvo una cobertura antes no vista. (Brockmann, E. 2020)

4.4. 2022: Paro de los 36 días y Cabildo del 13 de noviembre

Para el año 2022, la situación política cambió radicalmente, tras la anulación de las elecciones del 2019 y la convocatoria a las elecciones del 2020, el MAS

retoma el Gobierno a la cabeza de Luis Arce Catacora. En Santa Cruz, en las elecciones de gobernadores, alcaldes y otras autoridades subnacionales realizadas el 2021, Luis Fernando Camacho, emulando a Rubén Costas pasa del Comité a la Gobernación. A pesar de que el MAS retoma el Poder, Santa Cruz se mantiene impermeable al Movimiento al Socialismo, se evidencia un cambio de actores en ambos escenarios. Por su lado, el Comité es presidido primero por Rómulo Calvo y luego por Fernando Larach.

Desde la ciudadanía se percibe una sensación de desaliento en virtud a que la lucha de los 21 días había sido desaprovechada, no obstante, queda latente el convencimiento que la movilización ciudadana hace retroceder al poder autoritario.

En ese contexto, antecedido por paros intermitentes suscitados entre julio y agosto de ese año, que lograron hacer retroceder al gobierno en cuanto a la promulgación de unas Leyes que afectaban principalmente a los sectores de la economía informal, el Comité lleva adelante una nueva ofensiva contra el Estado central exigiendo la realización del Censo de Población y Vivienda para el año 2024.²²

El paro se inició en octubre de ese mismo año y tuvo una duración de 36 días. El más largo registrado hasta la fecha. El Comité llama a un paro indefinido sin haber calibrado bien sus fuerzas. La postura del Comité Cívico va a tener una respuesta masiva en el departamento de Santa Cruz. Sin embargo, no se percibe un efecto contagio en el resto de los departamentos, toda vez que no se cumplen los elementos descritos en el acápite anterior.

La demanda del Censo en 2024 no tiene el respaldo nacional proyectado, en virtud a que existe la susceptibilidad que algunos departamentos, en lugar de verse beneficiados se verían perjudicados con una nueva medición poblacional. Debido a que todo censo conlleva resultados cuyos efectos se traducen en la redistribución de escaños parlamentarios y la reasignación de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria. Se evidencia entonces que la demanda del Comité Cívico tiene un carácter principalmente regional.

La respuesta del gobierno fue esperar el desgaste de la movilización, bajo el supuesto de que el Paro Cívico esta vez no había traspasado los límites regionales. La población cruceña, obstinada, se mantuvo firme en su protesta e insistió en el paro a pesar de que la medida no estaba dando los resultados esperados y sobre

22 Inicialmente la consigna desde Santa Cruz era que el Censo debía realizarse en 2023, sin embargo, técnicamente era muy difícil sustentar esta premisa.

todo ante una sensación que la dirigencia cívica tampoco sabía cómo reencauzar sus medidas de protesta.

La singularidad que tuvo este paro de 36 días se dio cuando la Asamblea de Cruceñidad determinó convocar a un nuevo Cabildo del cual saldría la nueva hoja de ruta de las acciones a seguir. La respuesta de la población sorprendió, ya que contó con la participación ciudadana que sobrepasó la de los anteriores Cabildos. Se puede decir que ha sido el Cabildo que más asistencia ha tenido a lo largo de la historia nacional. Esta participación le dio el respaldo anímico necesario para que la medida del paro se extienda por unos días hasta la aprobación de una ley de fija el censo para 2024. No obstante, el resultado final no fue proporcional al enorme sacrificio que realizó la ciudadanía.

Esta movilización dejó como resultado otras definiciones importantes por su alcance. El Cabildo determinó masivamente que se revise, en el marco de la legalidad, la futura relación política de Santa Cruz con el Estado y de llevar adelante un referéndum revocatorio al mandato del presidente Arce.

Los resultados de este paro y cabildo evidencian dos cosas: El primero es el apoyo inequívoco y multitudinario que tiene el Comité en Santa Cruz expresado en la asistencia masiva a los cabildos convocados. Se puede decir que desde Santa Cruz se percibe convencimiento generalizado que los sacrificios individuales van a repercutir favorablemente en lo colectivo. El Comité ha confirmado una vez más, la capacidad de canalizar la representación de amplios y plurales sectores de la población en el departamento.

Un segundo aspecto se relaciona a que si Comité pretende llevar acciones de impacto nacional no debe asumir que ese respaldo multitudinario se irradie ipso facto al resto de los departamentos. De hecho, las consignas deben tener alcance nacional o ser complementarias al interés de otras regiones, tal como sucedió durante el paro de los 21 días. Esa es la disyuntiva en la cual el Comité se encuentra y que será revisada en el acápite siguiente.

5. Presente y futuro del Comité: Desafíos en un contexto adverso

Con la misión de cumplir con las tareas encomendadas en el Cabildo, en febrero de 2023 Fernando Larach Santisteban sucede en la presidencia a Rómulo Calvo. El Mandato del nuevo presidente fenece en febrero de 2025 año en el cual se conmemora los 200 años de la fundación del país.

Para llegar al bicentenario, el Comité pretende llevar una agenda de trabajo denominada “Cambiar el País” cuyo eje central hace referencia a empoderar a las regiones achicando la administración central. Para ello, será necesario concretar un Pacto Fiscal que reasigne los recursos del Estado en favor de las regiones. “Se está trabajando en una propuesta de pacto fiscal” sostuvo el presidente del Comité en la entrevista personal de fecha 3 de mayo 2023.

El Comité debe cumplir también con los mandatos que dejó el Cabildo, entre ellos insistir en la reforma judicial, demandar la amnistía de los presos políticos y gestionar la unidad de la oposición para las elecciones venideras. La propuesta del Comité es que la unidad de la oposición se debe lograr en base a un proyecto político y no a un caudillo, es por ello que el proyecto “Cambiar el País” plantea el ambicioso objetivo de constituirse en el eje central a través del cual logre la convergencia unitaria de una alternativa opuesta viable al proyecto político del MAS.

Independientemente de los mandatos heredados del Cabildo y de la agenda de trabajo de esta nueva directiva, el Comité responde también a temas coyunturales, al momento en que esta investigación fue escrita, los temas en la agenda política nacional eran el traspaso de la administración los fondos de capitalización individual la Gestora pública, el racionamiento de la gasolina y el diésel y la falta de dólares en la economía nacional.

Sin embargo, más allá de los temas y objetivos señalados, la entidad cívica se encuentra en una disyuntiva frente a los desafíos que entraña el nuevo milenio. Evidentemente, la Santa Cruz de 1950, época en la cual nace el Comité no es la misma de la Santa Cruz del año 2023. El rol protagónico que tiene el departamento dentro del país hace que sus demandas, sean o no regionales, tengan mayor repercusión nacional que en el pasado. Esta es una situación paradigmática para el Comité, ya que su esencia fue siempre velar por los intereses cruceños, a partir de una retórica y lógica contraria al Estado centralista. Así, por ejemplo, dentro de las tensiones y disyuntivas que tiene el Comité está la de definir si se mantendrá como una institución que defienda los intereses exclusivamente de Santa Cruz o si asume una posición de visión país para lo cual debe velar porque los intereses cruceños sean complementarios a los intereses de los demás departamentos.

A manera de dar un ejemplo, el mandato del Cabildo del 13 de noviembre del 2022 insta revisar la relación de Santa Cruz con el Estado cuyo resultado se prevé sea impulsar la propuesta federal. Esta propuesta podrá tener una aceptación nacional en tanto y en cuanto se tenga la capacidad de que los intereses cruceños sean complementarios con los intereses nacionales. El debate en torno a la propuesta federal es y será intenso. Para ello será imprescindible evaluar el proceso

de construcción del modelo de Estado con Autonomías constitucionalizado el 2009 y su postergación sistemática, entre otros temas, así como la viabilidad de la propuesta federal para el país que refleje el Censo 2024.

Otro de los desafíos que tiene el Comité tiene que ver con la necesidad de entender a la Santa Cruz actual, que alberga la mayor cantidad de migrantes de todos los departamentos, y donde simultáneamente germina una ciudadanía más moderna, diversa y cosmopolita. En síntesis, una Santa Cruz de clases medias a la que Manuel Suarez denomina el *Cruceñismo Sociológico*.

Siguiendo con la idea de Manuel Suárez, son tres elementos los que caracterizan la cultura del Cruceñismo Sociológico:

1. La cultura del capitalismo popular, basado en la creencia de los valores ligado al individuo, al acceso masivo de propiedad privada y de la sociedad abierta.
2. La cultura de la descentralización, ligada al recelo del gobierno centralista y “acaparador del poder” y;
3. La cultura de los valores republicanos, cuya apuesta política por la tradición democrática y liberal.

En otras palabras, el Comité está frente al desafío de pasar de representar una identidad local tradicionalmente confrontacional con el Estado a otra ampliada que represente los nuevos valores ligados al cruceñismo cosmopolita.

La proyección futura del Comité dependerá de la capacidad de representar los valores que engloba la noción ampliada del cruceñismo sociológico y poder encontrar espacios de irradiarlos en el ámbito nacional .

Otro de los grandes desafíos que tiene el Comité es saber que acciones tiene pensado realizar para contrarrestar los permanentes ataques que Santa Cruz ha venido sufriendo por el gobierno del Movimiento al Socialismo, como la detención del gobernador del departamento o la sentencia condenatoria en contra de Rómulo Calvo.

6. Conclusiones: a modo de cierre

El aislamiento que sufrió Santa Cruz durante más de siglo y medio de historia republicana un recelo hacia el Estado y un convencimiento de contar con una institucionalidad endógena encargada de promover su desarrollo. En ese contexto

nace el Comité Pro Santa Cruz que, haciendo eco del sentimiento cruceño de la época tuvo una actitud beligerante con el Estado central. Sus actuaciones permitieron acceder a los recursos necesarios para financiar el desarrollo de Santa Cruz. Estos acontecimientos fueron bien aprovechados por la narrativa cruceña que se encargó de reforzar ese sentimiento anti Estatal imperante en Santa Cruz.

La política cruceña a partir de 1950 hasta 2006 va a estar marcada por la reivindicación de la identidad cruceña (entendida desde el antagonismo entre lo oriental y lo occidental) y los derechos de Santa Cruz, en ese contexto el Comité va a acaparar la representación política de Santa Cruz, inhibiendo la aparición de la clase propiamente política, paradójicamente desde el seno Comité, que tiene un carácter apolítico ha sido una fuente inagotable de políticos cruceños, como Rubén Costas o Luis Fernando Camacho como los ejemplos más notables.

Por otro lado, los recursos provenientes de los hidrocarburos sumados, entre otros factores, al desarrollo de la institucionalidad cruceña, formaron un círculo virtuoso que permitió a Santa Cruz convertirse en el departamento más próspero del País. Esto permitió validar el “modelo de desarrollo cruceño” como una alternativa al modelo extractivista de la economía nacional. Sumado a este crecimiento económico sostenido se da el fenómeno de la migración interna que va a auspiciar una sociedad abierta desde Santa Cruz.

Durante el siglo XXI gracias a su influencia y peso específico dentro del país, Santa Cruz busca tener una mayor participación política dentro del Estado, sin perder su esencia, impulsando la implementación de las autonomías departamentales. Las autonomías departamentales también pueden entenderse como una defensa al modelo de desarrollo cruceño –o en todo caso a los valores que representa– ante una visión de país centralizadora y estatizadora. Para ello, se ha servido de la legitimidad de su Comité que hace las veces de interlocutor válido de los intereses de Santa Cruz.

La consolidación de Santa Cruz como una sociedad de clases medias ha favorecido la maduración del individuo que se identifique como un *ciudadano* a partir de una concepción individual por encima de lo colectivo/corporativo. Esta aparición de la ciudadanía es un nuevo factor que da fuerza y legitimidad a los cabildos convocados por el Comité. La fuerza del Comité en la Santa Cruz actual esta marcada por el apoyo masivo de esa ciudadanía a las reivindicaciones promovidas desde el Comité.

Desde Santa Cruz, a partir de la bandera de la Autonomía, entendida como una defensa a su modelo de desarrollo se ha logrado adoptar una posición

contrahegemónica a la visión de país del Movimiento al Socialismo. La migración acelerada hacia el departamento ha legitimado las reivindicaciones cruceñas, en ese sentido, el Comité ha cumplido la función de un poder contrahegemónico al contrarrestar el poder hegemónico y el proyecto país del Movimiento al Socialismo. El Movimiento al Socialismo no ha logrado conquistar Santa Cruz, porque no ha podido quebrar, representar o canalizar los valores del cruceñismo sociológico.

Bajo esa lógica, el Comité ha tenido fases de repliegue/contención en los momentos de mayor fortaleza y capital político del Movimiento al Socialismo y de avance en los momentos cuando la legitimidad del gobierno central ha sido cuestionada y las reivindicaciones del Comité han tenido la capacidad de traspasar las fronteras regionales. El repunte del Comité se verá entonces en la medida que estos dos últimos postulados se cumplan.

Bibliografía

- Brockmann, Erika
2020 “Tentativa de toma gradual del poder: Prorroguismo fallido y transiciones”. En *Crisis y cambio político en Bolivia Octubre y noviembre de 2019: La democracia en una encrucijada*, editado por F. Mayorga, 29-60. Bolivia: CESU/OXFAM.
- Claros, Luis, y Vladimir Díaz
2020 *Crisis Política en Bolivia 2019-2020*. Bolivia: Bolivia Plural Editores.
- Fernández, José M.
2013 “Capital simbólico, dominación y legitimidad. Las raíces weberianas de la sociología de Pierre Bourdieu”. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Sociología. V 98/1 (2013): 33-60.
- García Vespa, Hernando
2014 *Fundación del Comité Santa Cruz*. Bolivia Ed. Universitaria.
- Molina, Carlos Hugo, ed.
2008 *El Movimiento Cívico frente al proceso de descentralización y autonomía (1994-2006)*. Santa Cruz-Cochabamba: Ed. El País.
- Peña Hasbun, Paula, ed.
2011 *La Permanente construcción de lo cruceño, un estudio sobre la identidad de Santa Cruz*. Ed. Universitaria.
- Oporto, Henry, ed.
2021 *El Capital Constructivo, la inversión extranjera en Bolivia*. Fundación Milenio.

Traverso, Ana Carola

2022 El Proyecto Cruceño, historia, región y desarrollo. Santa Cruz: Ed. Biblioteca del Museo de Historia de la UAGRM.

Suárez, Manuel

“Meditación en torno a Santa Cruz”. N° 46.

Zegada, María Teresa, Claudia Arce, Gabriela Canedo y Alber Quispe

2014 La Democracia desde los márgenes, transformaciones en el campo político boliviano. Bolivia Ed. Muela del Diablo.

Entrevista:

Larach Santistevan, Fernando. Entrevista personal. 3 de mayo de 2023, presidente del Comité Pro Santa Cruz (2023-2025).

Recopilación hemerográfica:

Página Siete. Recopilación hemerográfica entre el 20 de octubre de 2019 al 11 de noviembre de 2019.

ANEXO 1

Sectores Institucionales que conforman el Comité

N°	Sector	Cantidad de Miembros
1	Instituciones Agropecuarias	6
2	Instituciones Artesanas	1
3	Instituciones Campesinas	2
4	Instituciones Cívicas Femeninas	13
5	Instituciones de Comparsas Cruceñas	1
6	Instituciones Cooperativas	4
7	Instituciones Culturales y Artísticas	6
8	Instituciones Deportivas	11
9	Instituciones Educativas y de Investigación Científica	4
10	Instituciones Empresariales	13
11	Instituciones de Estudiantes Universitarios y Centros Internos	6
12	Instituciones de Pueblos Indígenas	5
13	Instituciones de Fraternidades Cruceñas	15
14	Instituciones Gremiales	9
15	Instituciones Juveniles y estudiantes de secundaria	4
16	Instituciones de Personas de la 3er edad, mutuales y ex combatientes	15
17	Instituciones de Profesionales de nivel medio	3

N°	Sector	Cantidad de Miembros
18	Instituciones de Profesionales de nivel superior	15
19	Instituciones de Personas con discapacidad	1
20	Instituciones de Trabajadoras a sueldo	12
21	Instituciones Sociales y servicio a la comunidad	20
22	Instituciones de Transportistas	6
23	Unión Juvenil Cruceñista	1
24	Instituciones Vecinales	1
Total		174

Instituciones Provinciales y Subcomités que conforman el Comité

N°	Asociación de Comités Cívicos Provinciales de la Cruceñidad
1	Asociación de Comités Cívicos Provinciales femeninos
2	Comités Cívicos de cada provincia
3	Comités Cívicos Femeninos de cada provincia
4	Comités Cívicos de cada sección de provincia
5	Subcomités Andrés Ibañez
6	Subcomité Villa Primero de Mayo
7	Subcomité Pampa de la Isla

ANEXO 2

Miembros que conforman la Asamblea de la Cruceñidad

N°	Presidente, y los dos vicepresidentes del Comité
1	Ex presidentes del Comité
2	Un director por cada sector institucional
3	Seis delegados por cada sector institucional
4	Presidente de cada una de las intuiciones cívicas provinciales y de los subcomités de las ciudadelas
5	Presidente del Comité Cívico Femenino
6	Presidente de la Unión Juvenil Cruceñista ("UJC")
7	Miembros fundadores del Comité y de la UJC

La región que grita el Estado que no oye Potosí y el Comité Cívico potosinista

*Franz Flores Castro*¹

Resumen

El trabajo busca dar cuenta de las relaciones entre la región potosina y el Estado central durante las dos primeras décadas del siglo XXI, tomando al Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) como caso de estudio. Para este fin, en la primera parte, desarrollo un breve acercamiento teórico centrado en la noción de clivaje territorial. Posteriormente, presento algunos antecedentes históricos sobre COMCIPO para luego pasar a exponer las acciones colectivas y fuertes protestas dirigidas por COMCIPO para revertir la situación de pobreza y marginación del departamento entre 2000 y 2021.

¿Por qué, una región que realiza largas protestas y contundentes paros no puede conseguir cambiar su situación de postergación? ¿Qué papel juegan las elites políticas en el desarrollo de la región?

Palabras clave

Las palabras clave son: identidad, clivajes, actores políticos, regiones periféricas.

1. Clivaje territorial y regionalismo

Un clivaje es una división estructural en la vida social en torno a la que se construye una identidad y un discurso que organiza la competencia y disputa política. En

¹ Economista, Magister en Ciencias Política, con mención en Estudios Bolivianos. Docente en la Pontificia Universidad San Francisco Xavier.

la sociedad se dan varias líneas división, pero ellas solo derivan en clivaje cuando los actores, por un tiempo relativamente largo, emiten discursos y construyen organizaciones alrededor de estas divisiones, es decir dan “una expresión política organizada a lo que, de otro modo, serían creencias incipientes y fragmentarias de algún grupo social” (Kriesi 1998, 167).

Uno de los clivajes es el territorial o centro-periferia en relación con la distribución territorial del poder. La aparición del mismo es coetáneo al proceso de construcción del Estado que, en su objetivo de ampliar su poder a lo largo y ancho del territorio, va anexando regiones que antes se desenvolvían bajo otro orden político. Esto ha dado lugar fuertes resistencias de las regiones periféricas que defienden tener una identidad y una configuración política distinta a la del centro estatal. Allí donde el Estado pudo controlar eficazmente a las periferias, la distribución territorial del poder fue centralista; en cambio, allí donde las regiones fueron capaces de generar esquemas de resistencia efectiva se dio un arreglo más descentralista (Rokkan y Urwin 1982).

Ahora bien ¿Qué elementos se necesitan para que un espacio periférico construya regionalismo? podríamos señalar tres: a) un conjunto de *percepciones* que señalan las diferencias socioeconómicas entre una regiones y otras; b) Las *explicaciones* que identifican las causas y la perpetuación de la diferencias percibidas; y las c) *aspiraciones* que como un conjunto de metas y objetivos, buscan cambiar la situación, movilizan la acción y devienen en acción política organizada (López-Aranguren 1995).

Las instituciones regionalistas, las que liderizan los reclamos, varían en su forma: en algunos casos pueden aparecer en forma de partidos regionales; en otras, como organizaciones de la sociedad civil (clubes de beneficencia, centros culturales, etc) y, en otros, como grupos que controlan las instituciones políticas locales (universidad, municipio, gobernación). Lo importante, empero, es que en la periferia aparezca un actor y un liderazgo donde “la región se exprese y se configure como actor social y político capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones locales” (Burbano de Lara 2016, 26).

Un aspecto que se debe remarcar es que detrás del juego regionalista se encuentran actores políticos y económicos con intereses específicos. La lucha regionalista si bien moviliza un discurso regional que se dice apolítica, apartidaria y carente de ambiciones personales o de partido político, los que la liderizan, sus elites, tienen intereses propios. Puede darse el caso, que el actor más importante manipule y active las aspiraciones de desarrollo de una región para oponerse a un gobierno o una ideología dominante.

Como veremos, para el caso potosino, el discurso regionalista legitima las movilizaciones de COMCIPO, pero vehiculiza notablemente los objetivos del sindicato minero en el periodo que va desde 1952 hasta 2010; y de los grupos opositores antiMAS desde el 2010.

2. COMCIPO, algunos antecedentes históricos

Siempre es bueno mencionar que la disputa centro-periferia, o regional ha estado presente en la historia de Bolivia. Es cierta la conocida afirmación del historiador cruceño Jose Luis Roca que la lucha en Bolivia no era de clases sino de regiones (Roca 1980). Esto pasa por la enorme debilidad con la que nace el Estado boliviano. En 1825 teníamos un estado endeudado, con poca capacidad de llegada a su inmenso territorio y donde, en rigor, el Estado no impuso autoridad estatal sino que, hasta bien entrado el siglo XX, negoció su estatalidad con las oligarquías mineras.

El dominio del centro estatal boliviano tuvo a las minas potosinas como primer objetivo. Eran ellas, finalmente, las que proveían recursos al estado central tanto que “los ingresos mineros dieron vida al Estado boliviano durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX” (Barragán 2009, 48). Por tanto, los esfuerzos para expandir el dominio territorial sobre los centros mineros –Oruro y Potosí– tuvo más fuerza que en otras regiones. La presencia de la burocracia es demostrativa de este hecho: para 1827 Potosí recibía la mayor cantidad de recursos (14%) y en 1883 el 6% del presupuesto, después de La Paz que recibía el 10% (Barragán 2009, 42). Esto explica el temprano dominio del Estado sobre la periferia potosina.

Este proceso tomó impulso con la Revolución Nacionalista de 1952. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) portaba un proyecto de capitalismo agrarista (Zavaleta 1963) cuya base de financiamiento fueron los recursos económicos producidos en las minas, favoreciendo de manera notable el desarrollo de Santa Cruz.

Naturalmente que la política pro-cruceña del MNR despertó inquietud y preocupación en la población potosina.² Las percepciones eran que Potosí estaba cada vez más retrasado en relación con otros departamentos, que no recibía del Estado

2 Las demandas potosinas eran captación y servicio de agua potable, alumbrado y energía eléctrica, pavimentación y alcantarillado, participación en los impuestos de la minería, creación de una agencia del Banco agrícola e incorporación de Potosí en los planes de diversificación económica (Flores 2022, 54).

los suficientes recursos para su desarrollo. Que, en concreto no estaba tomado en cuenta en los planes de diversificación productiva que encaraba el MNR acorde con el plan Bohan de 1944. En diversas demandas, Potosí trató de mostrar que no solo tenía recursos minerales, sino también una apreciable riqueza animal y vegetal. En su altiplanicie andina se podía producir papa, en sus valles como Cotagaita y Tupiza una enorme variedad de frutas y verduras.

En la historia la identidad de Potosí tiene una fuente inagotable. La existencia de Villa Imperial de Potosí es anterior a la república y tiene un pasado de esplendor patentizado en sus calles, iglesias y museos y donde se ha configurado un conjunto de costumbres y folklore distintas de otras regiones. Tiene una historia, sobre todo colonial, que aún hoy es objeto de estudio académico.

Empero, si bien este pasado deviene en un legítimo orgullo de todo potosino, también es factor de agravio, porque este esplendor no sirvió para nada. Ya sea en la colonia como en la república, la actividad minera, más allá de templos religiosos, edificios y casas, no dejó nada perdurable en la región que no sea pobreza y ausencia de perspectivas de desarrollo. Los mineros que llegaron a Potosí, fueron los únicos beneficiados con su riqueza: llegaron, explotaron y se fueron de la ciudad dejando una estela de pobreza y de sobreexplotación de su fuerza de trabajo nativa. Ello refuerza el agravio de no ser un departamento tomado en cuenta por la política estatal y, como era el caso en 1952, por el Plan nacional de desarrollo impulsado por el ministerio de planificación a cargo de Walter Guevara Arce.

Este conjunto de elementos históricos, culturales y folklóricos crean un sentimiento de identidad muy fuerte entre los potosinos al punto que son la base para la aparición de una comunidad política significativa que deviene en regionalismo.

Las explicaciones para esta situación de abandono y pobreza varían. Una de ellas era la codicia de los mineros privados, que explotaban las riquezas minerales potosinas mientras las vetas eran generosas y los precios de los minerales altos; y las abandonaban cuando llegaba la época de las bajas cotizaciones. También tenía que ver con el Estado, que no entregaba regalías (impuestos ideados originalmente para compensar el daño al medio ambiente), en la cantidad y la oportunidad como para encarar proyectos de desarrollo productivo. En un plano comparativo, se decía que Santa Cruz, con su regalías petrolíferas del 11% había logrado encarar procesos de desarrollo de manera directa, o bien ellas sirvieron como contraparte para inversiones ya sean privadas o públicas.

La otra explicación tenía que ver con la característica psicosocial. Se afirmaba que el potosino era indiferente, apático, carente de cariño a su tierra, que no reclamaba

o que no sabía hacerlo con efectividad y oportunidad, que era impasible ante la codicia de los mineros y la indiferencia de los sucesivos gobiernos.

Este conjunto de percepciones deviene en aspiraciones. Ellas tienen que ver con aspectos económicos y sociales, como ser tomados en cuenta por los gobiernos en sus planes de desarrollo con la construcción de plantas de fundición de minerales (zinc, plata, plomo). También lograr encadenamientos productivos que hagan que Potosí no solo exporte materia prima sin mayor valor agregado, sino que pueda exportar metales y productos de consumo final. En el plano social, se pedía mejoras en la oferta estatal de servicios de salud y la construcción de caminos carreteros que, se decía, servirían para mejorar los flujos turísticos, sobre todo a la capital del departamento.

La otra aspiración es concientizar a la población, de tal modo que se pueda conformar una institución cívica cuyo fin central sea ser el portavoz por los derechos de Potosí, formada por gente apolítica e idónea y que no tenga otro interés que los “sagrados intereses de este terruño mil veces bendito”, como se decía entre la gente potosina.

Consecuentemente, en 1955 se organizó el Comité para la Defensa de los Intereses de Potosí (CODEIPO) que no tuvo mayor repercusión salvo generar malestar al gobierno de Hernán Siles (1956-1960), por parte de los partidarios de la corriente a fin a Juan Lechín (dirigente vitalicio de la Central Obrera Boliviana). Años más tarde, en 1959, en pleno régimen político militar se organizó la Unión Cívica Potosinista bajo la divisa de pedir la instalación de una planta de fundición de zinc que, aprobada por gobierno de Alfredo Ovando, en realidad nunca se construyó.

En los años setenta, la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) suprimió el juego político en todo el país, prohibiendo los sindicatos mineros, los partidos políticos y cualquier tipo de organización que estuviera bajo sospecha de ser subversiva. Pese a ello, Banzer toleró la existencia de los Comités Cívicos, ya que le parecían políticamente inocuos al estar dirigidos por las elites económicas de cada región, como era el caso de Santa Cruz.

En este contexto, en agosto de 1975 se creó el Comité Cívico Femenino de Potosí, compuesto por mujeres de la clase media. Planteó al gobierno demandas como la construcción de una planta de fundición de zinc, la vinculación caminera, la edificación de centros de salud y un aeropuerto. Finalmente, el 2 de agosto de 1976 se constituyó COMCIPO, que es como lo conocemos hasta hoy (Flores 2022).

De pronto, ante la ausencia de un sistema de partidos políticos y con las dirigencias sindicales bajo censura, COMCIPO no sólo fue un espacio que agregaba las demandas de la población potosina sino un medio idóneo para presionar al gobierno. Pero esto no pudo ser posible del todo.

Percibidos de la legitimidad de COMCIPO, tanto el sindicato minero como los grupos de izquierda, tomaron el control de la entidad cívica, alejando, en realidad a quienes había sido sus fundadores, y la utilizaron para fines políticos: entre 1978 y 1985 personajes afines al sindicalismo y a las corrientes de izquierda fueron electos en los principales cargos departamentales como la Prefectura y la Corporación de Desarrollo de Potosí (CORDEPO) que para 1978 recibió la extraordinaria suma de USD 6.5000.000 (Roca 1980, 258), sin que hubiera mayores cambios en el desarrollo del departamento. Con la complicidad de la dirigencia se dio paso a cuestionables proyectos como la planta de fundición de plomo y plata de Karachipampa que, a la postre fue fuente enriquecimiento ilícito para los militares y de empleo para los militantes de izquierda.

En suma, en 1985, se cumplen todos los aspectos propuestos por López-Aranguren para la formación de un regionalismo en Potosí: hay la percepción de desigualdad, existe una explicación para la misma y esto se convierte en objetivos que son llevados por COMCIPO que, desde su creación, se convierte en una de la más poderosas y representativas de la región, más que cualquier partido político. Empero, las aspiraciones y demandas no son logradas. Pese a la fuerza de las protestas y a la legitimidad de COMCIPO la postergación continúa. Entre 1952 y 1985, los indicadores de pobreza potosina no hacen otra cosa que subir, relegando aún más al departamento.

3. Potosí en el periodo neoliberal

Cuando llega el neoliberalismo a Bolivia, Potosí es altamente afectado por las políticas implementadas por el presidente Paz en 1985. El Decreto Supremo 21060 (en realidad una programa económico y político), establecía la reducción del aparato burocrático público y el cierre de las minas de Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Estas medidas supusieron una grave afectación a la economía potosina puesto que se dispuso el despido de miles de trabajadores de la estatal que, sin opción de trabajo, tuvieron que salir del departamento.

En Potosí se planteaban dos explicaciones para esta situación. Una de ellas era que Potosí no había intentado salir de la monoproducción minera, quedando sin posibilidades de diversificación productiva por culpa del modelo estatista de 1952.

La otra, decía que se había instalado un modelo económico neoliberal que era fatal para los intereses de las regiones pobres como Potosí. La primera postura era defendida por la empresa privada y la segunda por las corrientes de izquierda y sindicales del departamento.

Para los sectores privados, más inclinados a la ideología liberal, lo que correspondía era promover el libre mercado, fomentar el ingreso de capitales extranjeros a la región y apoyar los procesos de descentralización administrativa. Para los sectores de izquierda, en cambio, lo que tocaba era luchar contra el neoliberalismo, el ingreso de capitales extranjeros y cualquier forma de descentralización del Estado.

Con todo, si algo unía a ambas tendencias era su crítica al sistema de partidos vigente. Para ellos, los partidos políticos sólo eran un receptáculo de personas carentes de representatividad y de legitimidad. Tanto los senadores y diputados no eran elegidos por capacidad propia sino por “colgarse” de la postulación presidencial. A esto se añadía el poco cariño a su tierra natal. Era público que muchos de ellos ni siquiera tenían domicilio en Potosí. El caso más elocuente era el de Mario Mercado Vaca-Guzmán que llegó a ser senador por Potosí, siendo él paceño de nacimiento y, para mayor dato, dueño del club de fútbol de La Paz, el Bolívar. Lo mismo se podía decir de Óscar Bonifaz y Luis Ossio.

Las personas que apoyaban la línea liberal eran pocas. Eran un pequeño grupo de mineros chicos de cierta formación académica, dueños de ingenios mineros, gerentes de una fábrica de sodas y cervezas y propietarios de negocios de mediano tamaño. En cambio, en el otro grupo, estaban mineros o exmineros de la COMIBOL, autoridades y dirigentes de la universidad estatal Tomás Frías, un numeroso contingente de cuentapropistas e informales y las juntas vecinales.

Este segundo grupo fue el que tomó las riendas de COMCIPO y le imprimió su sello a sus demandas y acciones. Apenas se supo del despido de los trabajadores de la COMIBOL con la llamada relocalización, COMCIPO se alineó militantemente a detener esta política. Más adelante, exigieron la puesta en funcionamiento de la planta de fundición de plomo y plata de Karachipampa, una factoría que no tenía posibilidad alguna de funcionar por ser contaminante y carecer de insumos, pero que, por muchos años, fue el caballo de batalla de COMCIPO. Por último, en 1993, durante el gobierno de Jaime Paz, COMCIPO convocó a bloqueos de calles y huelgas para impedir la llegada de la transnacional Litchco a Potosí para explotar los recursos del salar de Uyuni, pese a que el contrato cumplía con todas las exigencias de la entidad cívica. El elemento común a estas acciones colectivas era luchar contra el neoliberalismo, de ninguna manera por los intereses de Potosí.

4. COMCIPO en el proceso de cambio

A inicios del siglo XX, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) y Evo Morales aparecen como los agentes del cambio político en el país, Potosí se encontraba en las peores condiciones económicas y sociales de todos los departamentos del país. La tasa de crecimiento de la población entre los censos de 1992 y 2012 era de apenas 1,1; la pobreza llegaba al 79,7% del total de habitantes y un 70% de su gente tenía insuficiencia educativa. En el plano económico los datos eran igual de dramáticos: la contribución del departamento al PIB nacional apenas llegaba al 5% y el PIB per cápita de Potosí era de USD 489, cuando a nivel nacional esta cifra llegaba a un promedio de USD 1002.

Era lógico que la gente viera con esperanzas un nuevo gobierno que prometía ser la contracara de los anteriores del MNR, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) o Acción Democrática Nacionalista (ADN). En las elecciones presidenciales y legislativas de 2002, el MAS había logrado ser la primera mayoría en el departamento con el 27,2% de los votos. Para las elecciones de diciembre de 2005 esta votación subió al 57,8%. Quizá para buena parte de la ciudadanía la llegada de Morales al poder era una ventana de oportunidad para lograr atención y desarrollo.

Sin embargo, para quienes estaban en la dirección de COMCIPO, el MAS era una esperanza real para lograr restablecer la COMIBOL y consiguientemente el control estatal del espacio minero. Por ello se sumaron entusiastas al proceso político del MAS, apoyando todas sus acciones de oposición. Entre 2002 y 2005, COMCIPO realizó marchas en apoyo a los cocaleros del chapare, rechazó la propuesta de Santa Cruz de autonomías departamentales y apoyó una Asamblea Constituyente.

Para COMCIPO, uno de los causantes de la postergación y la pobreza de Potosí, eran los cooperativistas mineros (en realidad, sus grandes enemigos), que cancelaban cantidades ínfimas de dinero por el arrendamiento de las vetas mineras y pagaban pocos impuestos. Además, contribuían al deterioro del cerro Rico, explotándolo sin pausa ni límite. El 1 de octubre de 2006 Morales visitó la sede cívica, ahí los dirigentes aprovecharon para pedir una ley especial para preservar el cerro Rico, un nuevo código de minería y la refundación de COMIBOL, Además, demandaron que el 50% de los recursos que aportaban las cooperativas vayan a obras de desarrollo departamental.

Empero, para Morales la nacionalización de la minería, no era una prioridad como si lo eran los hidrocarburos. En noviembre de 2006 Philip Goldberg el embajador de los Estados Unidos declaró, en los salones de la prefectura de Potosí, en un tono

de advertencias, que su país tenía invertido en el departamento la suma de USD 1000 millones. Santos Ramírez, Presidente de la Cámara de senadores, se encargó de tranquilizar al embajador señalando que esas inversiones no serían afectadas, ya que el proceso de cambio no podía ir separado de los recursos extranjeros.

La suma de USD 1000 a los que aludía el embajador norteamericano se destinaron en la inversión y puesta en marcha de megaproyectos mineros. Entre 2007 y 2008 en el sudeste potosino se había desarrollado el proyecto San Cristóbal; en la ciudad de Potosí, el proyecto San Bartolomé; y en Tasna el proyecto San Vicente que lograron, juntos, producir la cifra record de 300 tmf de plata que colocó a Potosí como las productoras más grandes del mundo (Díaz 2017).

Tampoco estaba dentro de las prioridades de Morales el afectar los intereses de los cooperativistas mineros (CM) más aún cuando ellos ya habían sido aliados de primer orden en su camino al poder. Además los CM habían logrado importantes espacio de poder dentro del MAS: la bancada parlamentaria del partido contaba con representantes de las CM y uno de sus dirigentes fue ministro de minería en el primer gobierno de Morales. Por si esto fuera poco, los CM detentaban una gran fuerza electoral junto a una efectiva capacidad de movilización en calles y caminos. Entre 2006 y 2008 Morales trató de controlar en algo a los CM sin éxito alguno. De esta manera, las prerrogativas y el tratamiento especial, que los CM lograron en los gobiernos del MNR, ADN y MIR no cambiaron en el nuevo gobierno de izquierda.

Entre tanto, en la ciudadanía potosina crecía el sentimiento de postergación y abandono por parte del gobierno de Morales. Tomaba cuerpo la sensación que nada se hacía para detener el deterioro económico y perspectivas de vida de la región. Crecía la preocupación de que el periodo de bonanza minera, producto de los altos precios de los minerales, no estaba siendo aprovechado por Potosí.

5. 2010 el año del cambio en COMCIPO

Para 2010 los indicadores económicos no podían ser más preocupantes. El censo de población y vivienda de 2012 señaló que la población de Potosí había crecido a un ritmo de 6,7% cuando en los departamentos prósperos este indicador llegaba a los 35,2 en Santa Cruz, a 20,7% en la Paz y a 17,2 en Cochabamba (INE, 2019: 35). La diversificación productiva prometida por Morales estaba lejos de ser concretada. En el mismo año, el 41,3% del Producto departamental estaba concentrado en la minería a mucha distancia del 4,3% de participación de las industrias manufactureras y del 1,9% de la actividad turística (Ferrufino, Eróstegui

y Gavincha, 2011, 44). Lo que reflejaba la absoluta desarticulación de la minería con otros sectores. La industria manufacturera representaba solo el 3% de todo el país, con el añadido que producía casi exclusivamente para el mercado potosino. Al mismo tiempo, en 2009, Potosí solo había recibido el 6,4 % de la inversión pública para salud y seguridad social del total nacional y el 5,5% para saneamiento básico (Ferrufino, Eróstegui y Gavincha 2011, 60).

Estaba claro que la bonanza minera no generaba grandes cambios en la situación de la región que, en realidad, mostraba abandono y pobreza. En otros términos, los potosinos podían constatar objetivamente que su riqueza no cambiaba para nada su situación y perspectivas de vida. Cuando se iniciaba el proyecto en el cerro Rico los representantes de las transnacionales prometieron la instalación de una industria de platería ornamental, apoyo al turismo, programas de asistencia social en salud y educación, que beneficien a mineros cooperativistas y la población local (Madrid y Camacho, 2003: 87). Hasta el día de hoy nada de esto se ha cumplido.

El año 2010 asumió la directiva de COMCIPO Celestino Condori, un personaje contrario al MAS. Él casi de inmediato convocó a una huelga de 24 horas enarbolando varias demandas añejas como la construcción de un aeropuerto, la puesta en marcha de un hospital de tercer nivel, una fábrica de cemento, la puesta en funcionamiento de Karachipampa, el freno al deterioro del cerro Rico, la industrialización del Salar de Uyuni y la definición del tema de las aguas del río Silala, entre las más relevantes. El gobierno señaló que podía atender las demandas pero de ninguna manera aceptar la movilización, a la cual tildaba de reaccionaria, derechista y digitada por partidarios contrarios a Morales como Alianza Social (AS) del exalcalde René Joaquino.

La huelga iniciada el 29 de julio, terminó 19 días después en una mesa de negociación efectuada en la vecina ciudad de Sucre, consiguiendo solo promesas de cumplimiento del gobierno en los puntos planteados por COMCIPO. Sin embargo, la comitiva negociadora a su llegada a Potosí fue recibida por una festiva multitud que les agradecía por haber recuperado la dignidad.

Cinco años después, en 2015, se realizó otra movilización de similares características. La misma se prolongó por 29 días con bloqueo de calles y caminos que mantuvieron aislada a la región. Empero, el punto de presión al gobierno no estuvo en Potosí sino en la ciudad de La Paz, donde se realizaron marchas que intentaban día a día ingresar a plaza Murillo lugar del despacho presidencial. Luego de una violenta marcha donde mineros cooperativistas de base causaron zozobra al hacer estallar cachorros de dinamita, el gobierno aceptó entrar a la negociación. Finalmente, a fines de julio de 2015 se dio fin al conflicto, nuevamente con solo

promesas del gobierno. La numerosa cantidad de movilizados potosinos que estuvieron en las jornadas de lucha en La Paz, volvieron a Potosí donde gozaron de un recibimiento de héroes. La gente los abrazaba, los santiguaba, los aplaudía, les daba comida y les agradecía por haber recuperado, otra vez, la dignidad potosina.

De esta manera, se dejó de lado la postura que afirmaba que la postergación de Potosí se debía a la apatía e indiferencia de los potosinos. Las dos huelgas, las marchas y ayunos; el apoyo que los residentes potosinos en La Paz habían brindado a los marchistas que llegaban de Potosí, demostraron que lo que menos existía en los potosinos era indiferencia con la suerte de su región. Al contrario, habían desafiado al gobierno abusivo de Morales, no aceptando sus presiones y combatiendo en las calles y caminos para hacer oír su voz.

A partir de ese momento, toda la explicación sobre la situación de Potosí, tuvo como exclusiva referencia al gobierno del MAS. Si se daba un retraso económico y social, si no existía diversificación económica ni productiva, si las obras estaban mal ejecutadas, si se saqueaba nuevamente los recursos naturales potosinos, si se permitía la destrucción del cerro Rico, si había contaminación y desorden en la ciudad, todo esto se debía al gobierno del MAS. Era un discurso que ya se manejaba antes, pero que ahora formaba parte del sentido común.

Este razonamiento naturalmente que negaba los avances en desarrollo que se habían tenido en el departamento, radicalizaba a la dirigencia de COMCIPO que, de ser un actor que buscaba o que debía buscar el desarrollo del departamento, pasó a oponerse en bloque y sin mayores datos a todas las políticas del MAS.

6. COMCIPO y la caída del gobierno de Morales

En 2016 fue un año clave para la política boliviana. El 21 de febrero se realizó un referendo constitucional para consultar sobre un cambio que permita la habilitación de Morales y García a una nueva postulación. El proceso se realizó en un ambiente de polarización con un gobierno cuya vocación reeleccionista le era cada vez más difícil de justificar y un conjunto de partidos, movimientos cívicos (entre ellos COMCIPO), y organizaciones ciudadanas a los que unía la consigna de no permitir, decían, el prorroguismo de Morales. Realizado el conteo de los votos, ganó la opción del No con el 51,34% de los votos frente al 48,66 del Si (OEP 2021).

Los resultados de esta consulta mostraron la fractura entre Potosí y el MAS puesto que a nivel departamental ganó el No con un 53,26 % de los votos frente a un

46,74% por el Si. La otrora plaza fuerte del masismo se debilitaba. Se debe hacer notar que el respaldo al No se centró en la ciudad de Potosí, donde el respaldo al No llegó al 85,87% de los votos y el apoyo a la opción oficialista del Si al 14,13% (OEP 2021).

Para retomar el esquivo respaldo en Potosí, el MAS trató de mostrar justamente aquello que COMCIPO se empeñaba en desconocer. Se embarcó en dos proyectos destinados a mostrar que la industrialización y el desarrollo económico eran más que solo palabras. Con una inversión de USD 241 millones creó la Empresa de Cemento de Bolivia (ENCEBOL) que según los anuncios gubernamentales tendría una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas anuales, de lejos la cementera más grande del país. La factoría empezó a instalarse en la región de Chuitara a 7 Km. de la Villa Imperial. En 2018 Morales anunció que la obra tenía un avance de 45% además que su mercado estaba asegurado puesto que el gobierno había decidido utilizar el producto de ENCEBOL en todos los proyectos camineros del país.

El segundo proyecto fue la industrialización del salar de Uyuni. En 2017 se creó la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en reemplazo de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), con la finalidad de que el Estado controle toda la cadena productiva. A finales de 2018, con una inversión de USD 188,1 millones el gobierno emplazó en Llipi, al sur del salar de Uyuni, una planta de cloruro de potasio con capacidad de producir 350 toneladas de fertilizantes al año.

Aunque estas obras generaban mucha expectativa en la población potosina, las mismas eran rechazadas por COMCIPO que denunciaba que ENCEBOL no logró producir y colocar en el mercado ni una sola bolsa de cemento y tampoco la planta de cloruro de potasio ha logrado, con sus ventas, recuperar la millonaria inversión realizada.

Más temprano que tarde el gobierno tuvo que afrontar el problema de la explotación y daño del cerro Rico causada por el trabajo de los Cooperativistas. Los problemas de contaminación, de explotación laboral y de labor en zonas no autorizadas continuaban como al inicio de la gestión de Morales. Además que este tema era motivo de convocatoria de los cívicos a marchas y huelgas.

Los CM habían avanzado en sus ambiciones mineras sin prisa ni pausa. Al terminar el siglo XX las cooperativas ya tenían bajo su dominio cuatro importantes zonas alrededor del cerro Rico: Huajcachi, Santa Rita, Diablo Norte y Diablo sudeste que a su vez estaban arrendadas a siete grandes cooperativas mineras como Reserva

Fiscal, Rosario Ltda, Diez de noviembre Ltda, Villa Imperial Ltda, Compotosí Ltda, 27 de marzo Ltda. Estas zonas mineras contienen pallacos y sucus que son plastos que se originaron en la cumbre del cerro Rico y que contienen plata y estaño de baja ley (Madrid y Camacho 2003, 57).

Más tarde, estas zonas fueron subarrendadas a la empresa norteamericana Coeur d'Alene por la Cooperativa Reserva Fiscal a la que después se sumaron otras. En el primer trimestre de 2003 se firmó un contrato de riesgo compartido que dio lugar a la creación de la empresa Manquiri, para explotar pallacos, sucus, escombros, y desmontes ubicadas en torno al Cerro Rico en un radio de 8 kilómetros. Luego se supo que el monto que obtuvieron los cooperativistas por entregar los desmontes del cerro Rico a la transnacional llegaba a US\$ 5,9 millones más un pago de un dólar por tonelada de desmontes que entregaban los cooperativistas, cuando en el mercado su valor llegaba a los 30 centavos de dólar.

La relación de los cooperativistas con la ciudad de Potosí está llena de tensiones y contradicciones. Son acusados permanente por la prensa local de trabajo irracional y causa de múltiples derrumbes en el cerro con consecuencias sobre la forma cónica de la montaña (Cruz y Absi 2005, 91). Con frecuencia, COMCIPO ha demandado la paralización en el cerro o ha denunciado el trabajo cooperativo en zonas prohibidas por el riesgo de desplome. En el extremo, algunas instituciones han pedido la militarización del cerro para impedir el trabajo en la montaña. La respuesta de la cooperativas siempre ha sido de rechazo, acompañando la misma con protestas y bloqueos más el pedido de renuncia de los dirigentes cívicos.

Sin embargo, en realidad, el asunto es más complejo de lo que parece, porque el trabajo en el cerro rico de Potosí es vital para la economía local. El ingreso monetario de la ciudad de Potosí, generado por su explotación es el salario de muchos potosinos y no únicamente el ingreso de aquellas personas y factores que intervienen en el circuito que se inicia con la extracción de las cargas mineralizadas del Cerro (Ferrufino, Eróstegui y Gavincha, 2011, 128).

En septiembre de 2010, el gobierno anunció estudios para encontrar yacimientos alternativos para el trabajo de los cooperativistas así como medidas que limitaran la salida de carga y la cantidad de jornaleros en los yacimientos. Se pensó como una alternativa que las zonas mineras de Challajtiri, Visitas y Carma fueran yacimientos donde los mineros del Cerro Rico se trasladarían para continuar con su trabajo.³

3 El Potosí, "Se pondrá límites a la explotación minera en el cerro rico de potosí" 28 de septiembre de 2017

Sin embargo, el efecto de esta iniciativa fue contrario del esperado. Aparecieron fuertes resistencias de los comunarios de las zonas citadas a la decisión gubernamental. Algunas comunidades campesinas reclamaban su derecho a ser ellos los que exploraran los yacimientos ubicados en su territorio, a la vez que otras denunciaban el deterioro medioambiental por el trabajo minero. Los comunarios de Challajtiri, provincia Antonio Quijarro, decidieron bloquear el acceso al yacimiento lo que despertó el enojo de los cooperativistas que señalaron amenazantes: “bien clarito estamos indicando: si tiene que correr sangre, va tener que correr”.

Claramente la estrategia gubernamental no daba resultado. Es más, no es errado pensar que los planes de reubicación de los trabajadores del cerro Rico hayan sido, en realidad, pretextos de los cooperativistas para obtener más yacimientos manteniendo intactos los de la montaña.

Mientras todo esto pasaba, a fines de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional daba luz verde a la repostulación de Morales y García Linera alegando defensa de los (sus) Derechos Humanos. Esto incrementó la polarización política e hizo que las acciones tanto del gobierno como de la oposición estuvieran signadas por estar a favor o en contra de la ambición de Morales de quedarse en el poder por cinco años más.

COMCIPO, como era previsible, se alineó militantemente en todas las movilizaciones en contra del gobierno, organizó varias marchas contra la repostulación de Morales, bajo el rótulo de defensa de la democracia y el voto ciudadano.

El 29 de junio se realizaron las elecciones para renovar la directiva de COMCIPO, donde fue elegida la fórmula encabezada por Marco Pumari, pero con un enorme ausentismo en la votación, ya que fue elegido con 89 votos de todas las organizaciones afiliadas a COMCIPO 66 representantes no fueron a votar.⁴

En los meses siguientes, Marco Pumari continuó con la línea de su antecesor Jhonny Llally de ahondar la polarización y, aunque el 31 de julio se llegó a realizar una reunión en la que tanto el gobernador Juan Carlos Cejas como el nuevo presidente de COMCIPO llamaban a trabajar unidos por Potosí, esto no evitó que el 6 de agosto (fecha de nacimiento de la República de Bolivia en 1825) COMCIPO llevara a cabo un desfile de homenaje paralelo al organizado por el oficialismo, cuyo único fin era echar a perder la llegada de Morales a Potosí.

4 El Potosí, “Pumari se impone en una elección con elevado ausentismo” 31 de julio de 2018.

A esas alturas, COMCIPO ya estaba plenamente articulada a los comités cívicos contrarios al gobierno, que anunciaron en septiembre de 2018 “resistencia civil a que Evo se repostule”. En ese contexto, COMCIPO participó a fines de año de una marcha hacia La Paz, demandando el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero y determinando una huelga de 24 horas. Todas estas movilizaciones no estuvieron libres de controversias y quejas de los ciudadanos de la Villa imperial, por el modo con la que actuaban los miembros del comité de movilizaciones de COMCIPO que, blandiendo palos y chicote, obligaban al cierre de negocios y oficinas, lo que finalmente también despertaba el rechazo en la población que, con mercados cerrados, compraba los productos a precios más caros de lo habitual.

Para detener el deterioro político del MAS en la ciudad de Potosí, desde instituciones como la gobernación se realizaron anuncios sobre las ventas de la planta de potasio, sobre los avances en la construcción del aeropuerto, respecto de la finalización de la construcción de una fábrica de clavos o el estudio de un teleférico.

No obstante, poco a poco el tema de la explotación del litio en el salar de Uyuni empezó a copar la agenda regional. En agosto de 2019 el gobierno anunció que había llegado a un acuerdo para la explotación de litio entre YLB con la empresa alemana ACY Systems para la instalación de una planta de producción de metales catódicos y baterías de ion-litio a partir de la salmuera residual. Además, YLB celebró otro contrato con el consorcio chino TBEA-Baocheng para construir plantas industrializadoras de litio en los salares de Coipasa y Pastos Grandes (Sánchez, 2020). Según los anuncios del gobierno, las inversiones tanto de la parte boliviana como de la firma alemana y el consorcio chino llegarían a los USD 4500 millones (Fundación Solón 2019, 2).

No obstante para COMCIPO todo era objeto de sospecha y crítica. A principios de 2019, COMCIPO hizo conocer críticas sobre plazo extenso de la concesión (70 años), la exclusividad dada al concesionario para exportación al mercado europeo, el no pago de regalías por productos industrializados y la ausencia de un real proceso de industrialización que generase fuentes de trabajo y desarrollo regional para el departamento.

Con todo, COMCIPO centró su atención en el monto de recursos que recibiría el departamento por concepto de regalías. Esto pasaba porque el gobierno se apresuró en señalar, sin mayores explicaciones y detalles, que este porcentaje llegaría al 3%, lo que encendió todas las alarmas de varios actores de la sociedad civil potosina, que consideraban que esto era injusto puesto que los departamentos productores de hidrocarburos recibían el 11% de regalías. Naturalmente que tanto la producción de carbonato de litio como de hidróxido de litio no

son comparables a la de hidrocarburos, pero esa fue la interpretación de los dirigentes cívicos, misma que extendida a toda la población tuvo una gran capacidad de movilización.

Este tema copó completamente el espacio público con varias instituciones y personas demandando una distribución de los beneficios favorable a Potosí. De alguna manera el litio es considerado por los potosinos como un segundo cerro Rico y como tal existe el temor de que sea explotado sin que la región reciba nada a cambio. Este asunto tiene una enorme capacidad de convocatoria y de movilización como ya se vio en 1993 cuando se impidió a toda costa la celebración de un contrato con una empresa extranjera para la explotación del litio de Uyuni.

Más tarde, COMCIPO elevó sus pedido de regalías al 50% y convocó a un paro de 24 horas primero, y luego de 72 horas. Ante esto el gobierno, desplegó la misma estrategia aplicada en las huelgas de 2010 y 2015, vale decir negarse a dialogar con COMCIPO. El canciller Diego Pary indicó que el accionar de COMCIPO era político y que solo dialogaría con los sectores sociales. En efecto, a mediados de agosto de 2019 los ministros recibieron a una delegación de movimientos sociales potosinos afines al MAS en la Casa grande del pueblo donde se les informó sobre los alcances y beneficios del proyecto para la región.

Como para contrarrestar el efecto de la medida cívica, el gobierno presentó el primer auto que utilizaba litio potosino y se informó del acuerdo entre YLB y la empresa Quantum para producir autos eléctricos en Uyuni.⁵

Finalmente, el 9 de octubre, a 11 días del verificativo electoral presidencial, se inició la huelga general indefinida con bloqueo de las garitas de acceso a la ciudad y cierre de instituciones públicas y privadas. Además, que se suscribió un convenio entre el Comité de Defensa de la Democracia (CONADE) y COMCIPO para que la exigencia potosina sea parte del pliego de demandas del cabildo paceño.

Ante este extremo, el gobierno a través de su ministro Juan R. Quintana invitó a COMCIPO a una reunión para analizar el Decreto Supremo 3738. COMCIPO sin tomar en cuenta la invitación de Quintana resolvió radicalizar la huelga instruyendo el bloqueo de caminos, la toma física de la empresa minera Manquiri y de instituciones estatales.

5 El Potosí, “Presentan primer auto potosino que utiliza litio del salar de Uyuni” 2 de octubre de 2019.

También se determinó que COMCIPO solo aceptaría dialogar con el presidente, pedido que, dados los antecedentes, fue sorprendentemente aceptado por Morales. Empero esta reunión realizada el 12 de octubre no logró nada efectivo, en realidad solo incentivó aún más la radicalidad de la institución cívica que llamó a un cabildo por el federalismo y los beneficios del litio. En el mismo se resolvió pedir la abrogación del Decreto Supremo 3738, apostar por un sistema federal, mantener la huelga y pedir “voto castigo para Evo y Álvaro”. Estaba claro que la movilización cívica derivó en una postura política claramente contraria a la continuidad de Morales en el poder.

Dos días antes del verificativo electoral, la ciudad de Potosí mantenía los bloqueos a la vez que realizaba marchas cada vez más numerosas. Es el momento en el que toda iniciativa de parte de las autoridades locales del MAS para dar solución al tema del litio es rechazada por entidad cívica completamente embarcada en plantarle férrea oposición al MAS.

Finalmente, el 20 de octubre se realizaron las elecciones generales mismas que se desarrollaron en un ambiente de fuerte polarización, de descrédito del Tribunal Supremo Electoral y de la aparición de nuevos candidatos opositores. Aunque no se tienen datos oficiales de las elecciones dado que las mismas se anularon, las noticias que se divulgaron por los medios de comunicación señalan que en casi todas las mesas de la ciudad de Potosí la opositora Comunidad Ciudadana (CC) venció al MAS.

Inmediatamente conocidos los resultados, COMCIPO salió a denunciar fraude y las movilizaciones dejaron de ser pacíficas. El 21 de octubre se produjo el incendio del edificio del Tribunal Electoral Departamental y, dos días después, los dirigentes cívicos determinaron la continuación de la huelga por el “litio y la democracia”. Para ese momento la ciudad de Potosí ya llegaba a los 11 días de huelga.

Los días posteriores son de radicalización de las medidas y la masificación del paro que, literalmente, es total en la urbe potosina. Desde las filas opositoras se abonaba la idea de fraude, señalando que el recuento de votos se realizó en la ciudad de Lllallagua en medio de una fuerte presión de los movimientos sociales afines al MAS.

En todo caso, la polarización había llegado a tal extremo que en la noche del 25 de octubre y luego que un grupo de bloqueadores afines a las demandas de COMCIPO fueran atacados en la zona de Cantumarca, “decenas de fogatas se encendieron en una vigilia cuyo propósito no declarado era evitar una probable “invasión” de habitantes de algunos de los municipios vecinos afines al MAS”.

Otro resultado de la tensión política fue que el 29 de octubre los cooperativistas mineros *de base*, decidieron plegarse las movilizaciones. En una reunión, donde se notó la ausencia de los dueños de minas e ingenios, los peones, los que trabajan en la roca, decidieron salir a las calles en una marcha para defender la democracia, aunque aclararon que ella no estaba articulada ni a la opositora Comunidad Ciudadana (CC) ni a COMCIPO que, a su juicio, solo habían llevado a la convulsión social, al enfrentamiento.

Asistieron a la marcha aproximadamente 15 mil cooperativistas de base que rebasaron la decisión de sus dirigentes: la concentración que estaba prevista ser llevada a cabo en el atrio de la basílica Catedral por presión de la bases fue trasladada al “puente de la dignidad” ubicado en la avenida Tinkuy. Ya en el evento Carlos Porco presidente de FEDECOMIN fue abucheado por la multitud que le pidió su renuncia. Finalmente, luego de encendidos discursos se demandó la anulación de las elecciones, pidiendo se convoque al plazo más breve posible a una nuevos comicios al tiempo que aseguraban que el pueblo potosino debería “sentirse resguardado (sic) por todas las cooperativas mineras”. Aunque no hubo nada oficial, la postura de las bases cooperativistas era trasladarse a la ciudad de La Paz para reforzar el pedido de renuncia de Morales.

Para intentar detener las movilizaciones el 4 de noviembre el gobierno cedió al pedido de COMCIPO de abrogar el decreto 3738 que creaba la empresa mixta entre YLB y ACI Systems de Alemania. Demasiado tarde, la huelga se mantuvo. Comcipo a esas alturas estaba completamente articulado a las fuerzas opositoras.

El 8 de noviembre COMCIPO decidió respaldar la iniciativa de instituciones de Sucre que bajo el liderazgo del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier de Sucre, docentes de la Federación de Profesores del área Urbana de Chuquisaca, miembros de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca y otras plataformas ciudadanas se organizan para ir a La Paz. De Potosí parten 8 buses que junto a los de Sucre conformando la denominada “caravana del sur”. Luego de que a lo largo del trayecto enfrentan bloqueos y amenazas y actos de hostilidad, deciden pernoctar en la ciudad de Oruro.

En la madrugada del 9 de noviembre la caravana de buses sale de Oruro y a todo lo largo de su trayecto fueron encontrando bloqueos y escollos a su paso. Alrededor de las 10 de mañana la caravana llegó a Vila Vila donde se dieron fuertes enfrentamientos con los pobladores del lugar. Más tarde, la violencia subió de tono cuando empezaron a llegar personas ajenas al lugar que emplearon gases lacrimógenos y dinamita contra la caravana.

Una vez que se conocieron los dramáticos hechos en Vila Vila, cooperativistas mineros de FEDECOMÍN adelantaron la partida de la caravana en medio del llanto, bendiciones y aplausos de la ciudadanía potosina, a las 12:30 horas salieron setenta buses con dos mil quinientas personas que también incluían miembros de organizaciones sociales de Potosí, Chuquisaca y Tarija (GIEI 2021, 155).

La caravana luego de sortear varios puntos de bloqueo y pasar por caminos difícilmente transitables por efecto de daños por dinamita que tenía la intención explícita de detenerlo, fue emboscada en zona de Playa Verde (Challapata-Huancane) con disparos de armas largas, producto de lo cual fueron heridos de gravedad cinco mineros, mismos que al ser auxiliados por las ambulancias continuaron siendo objeto de impactos de bala. Este situación solo se detuvo con la intervención de la Fuerzas Armadas que escoltó a la caravana potosina hasta la ciudad de Oruro donde pasó la noche. (GIEI, 156-159).

El 10 de noviembre de 2019, Morales y García, en medio de la convulsión social, huérfanos del respaldo de la COB, las Fuerzas Armadas y de las fuerzas del orden, desde el Chapare anunciaron su renuncia a la presidencia y vicepresidencia del Estado, saliendo posteriormente del país rumbo a México.

En suma, el año 2010 marca un profundo viraje en COMCIPO: de ser una institución articulada al gobierno del MAS, pasa a ser su más férrea opositora al punto que, con sus movilizaciones contribuye a la salida de Morales del poder. COMCIPO, esta vez en manos de actores de oposición, ya no buscó la negociación o la búsqueda de alternativas para mejorar los proyectos de desarrollo, sino que se opuso en bloque a toda iniciativa del gobierno, tildándola de engañosa, distractora y solo destinada a saquear aún más los recursos potosinos. Se impone una lógica radical del *todo o nada*, que en realidad, terminaba por afectar aún más la posibilidad de mejorar las perspectivas de desarrollo.

Además, llega a tal punto el extravío de COMCIPO que empieza a articular sus acciones con actores de oposición, sobre todo con el Comité Cívico Pro Santa Cruz, dañando fuertemente su legitimidad y representatividad. Polariza a una sociedad que lo que necesitaba, en realidad, era abrir espacios de diálogo para mejorar, en el caso del litio, las condiciones de arribo al salar de Uyuni de las transnacionales, sin cuya inversión y tecnología es simplemente imposible aprovechar sus recursos.

Todo esto explica que, ante las elecciones nacionales previstas para 2022, COMCIPO se haya convertido en apéndice de Creemos, el partido político del líder cruceño Luis F. Camacho. El expresidente de COMCIPO Marco Pumari lo acompañó como candidato a la vicepresidencia.

Esto afectó fuertemente a COMCIPO. Su cercanía a la gestión de Jeannine Añez y la candidatura vicepresidencial de Pumari, había minado su credibilidad. El 10 de diciembre de 2021 fuerzas policiales tomaron los predios de la entidad cívica, apresaron a Pumari y el dirigente cívico Juan Carlos Manuel se declaró en la clandestinidad.

7. Conclusiones

COMCIPO es una institución que se desarrolla alrededor del clivaje centro-periferia. Es decir sobre una identidad territorial fuerte, recursos mineros apetecidos por el centro, y una institución sólida. Lo que construye su regionalismo es la constatación es que Potosí tuvo un pasado esplendoroso y fue el sostén de la economía boliviana pero que esta riqueza no le sirvió para su desarrollo. Potosí históricamente es uno de los departamentos más pobres del país, con un crecimiento poblacional muy bajo en relación a los departamentos del “eje central” como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, situación que, paradójicamente, se mantiene o incluso empeora cuando la región mejora en sus niveles de exportación de minerales.

La explicación para este estado de cosas está relacionada con varios factores como ser: la acción de los sucesivos gobiernos que no han dado a Potosí la atención que se merecía, la apatía de los potosinos que no saben o no quieren reclamar, con la calidad de los políticos que solo piensan en sus intereses personales o los de su partido político; y con los empresarios extranjeros que solo llegan a explotar sus riquezas sin dejar nada a cambio.

Esto genera un conjunto de aspiraciones que tienen que ver, en lo central, con la realización de proyectos de desarrollo, como plantas de fundición de minerales, construcción de caminos, de un aeropuerto, de un hospital o de una fábrica de cemento, entre otras.

Empero, este hecho no ha servido para cambiar las condiciones de desarrollo de Potosí. En efecto, el departamento pese a sus largas movilizaciones activadas por COMCIPO, desde su creación, no ha logrado más que promesas de los sucesivos gobiernos, independientemente del tinte ideológico de cada uno de ellos.

Una robusta información empírica indica que esto ocurre porque todas las dirigencias de COMCIPO han sabido mover más y mejor el discurso de la identidad potosina (somos ricos pero pobres a la vez) pero no necesariamente en articulación a los intereses regionales. La orientación antineoliberal de los dirigentes entre

1982 y 2010 impidió el arribo de una empresa extranjera para que explotase el litio; y la orientación antiMAS de los dirigentes entre 2010 y 2019 sirvió para hacer oposición al gobierno. Todos los dirigentes plantean fuertes críticas a los gobiernos de turno, pero queda claro la utilización política de la palestra cívica.

Por otro lado, COMCIPO es, con mucho, la institución más representativa de la región. Esta representatividad se da a pesar de que COMCIPO carece de legitimidad de origen. Desde su nacimiento sus dirigencias han sido elegidas por representantes de instituciones y no por la propia población. Con frecuencia, la dirigencia de COMCIPO ha sido nombrada por no más de 60 personas. No obstante, eso no ha sido obstáculo para que COMCIPO se haya convertido en la punta de lanza de largas movilizaciones en todos los gobiernos desde 1978.

El repertorio de acciones de COMCIPO, han ido variando con el tiempo. Ellas siempre empiezan con la realización de un consejo consultivo de instituciones que, en largas jornadas debate en torno al pliego petitorio al gobierno y las medidas a adoptar. Ellas, de forma escalonada incluyen un plazo de días para esperar la respuesta del gobierno central o la presencia de algún ministro o incluso del presidente.

La movilización también implica la autoorganización de la ciudadanía. La huelga va junto con marchas y cabildos, la mayor parte de ellas pacíficas. También es acompañada por una cadena radial y televisiva denominada “Alonso de Ibáñez” que agrupa a la casi totalidad de los medios de comunicación que permanentemente emiten música potosina y dan a conocer las noticias del desarrollo del conflicto y naturalmente todos los comunicados de COMCIPO. También, cada barrio se autoorganiza en los momentos más hondos del conflicto, su misión es hacer cumplir las determinaciones de COMCIPO (cierre de negocios y tiendas) o de enviar delegados del barrio a los bloqueos de caminos, cuando se requiere. Aunque menos frecuente, la huelga de hambre también compone este repertorio de movilizaciones. En la huelga de 2010 que duró 19 días, habían 120 piquetes y más de mil ayunadores en toda la ciudad.

Los partidos políticos no son las instituciones que agregan y canalizan las demandas de la población. Este vacío es cubierto por COMCIPO que recoge las aspiraciones potosinas, las agrupa en un orden de prioridades y las presenta al gobierno central en un pliego petitorio que da inicio a la negociación. Colabora con esta representatividad, el hecho que COMCIPO se presenta como una entidad que no tiene color político y no responde a los intereses de grupo o persona en particular sino a los de la región. Aunque esto a la luz de los hechos es muy discutible, al final sigue siendo una relevante fortaleza.

Pese a todos estos datos el gobierno insiste en debilitar COMCIPO y en desconocer su representatividad, suponiendo que con eso va a eliminar la protesta. Es un error. Finalmente COMCIPO ante la ausencia de canales de expresión de la población, en una entidad que puede contener y organizar la protesta que, de otro modo, sería caótica y violenta.

Hoy Potosí pasa por una profunda crisis institucional, mayor aún que la nacional. Su gobernador tiene numerosas evidencias de ser un corrupto apañado por el poder central. El alcalde va siendo juzgado por violación y los partidos políticos, incluido el MAS, carecen de capacidad de representación. En estas condiciones la posibilidad de nuevas huelgas y conflictos están presentes.

Bibliografía

- Barragán, Rossana
2009 “Hegemonías y ejemonías: las relaciones entre el Estado central y las regiones (Bolivia, 1825-1952)”. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 3: 39-51.
- Burbano de Lara, Felipe
2014 *La revuelta de las periferias. Movimientos regionales y autonomías políticas en Bolivia y Ecuador*. Quito: FLACSO Ecuador.
- Bonifaz, Gustavo, y Jean-Paul Faguet
2022 “Political cleavages in motion: Bolivia in 2021”. *Revista de Ciencia Política (Santiago)* 42 (2): 175-202. <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-090x2022005000116>.
- Cruz, Pablo y Pascale Absi
2005 “Patrimonio, ideología y sociedad: miradas desde Bolivia y Potosí”. *T'inkazos. Revista Boliviana de Ciencias Sociales*, Número 19: 77-96.
- Díaz, Vladimir
2017 “Ganancia, salario y renta en el sector minero en Bolivia durante el gobierno del MAS (2006-2015)”. *Reporte Anual de Industrias Extractivas*, editado por Carlos Arze, 39-65. La Paz: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
- Ferrufino, Rubén, Rodolfo Eróstegui y Marco Gavincha
2011 *Potosí, en cerro nuestro de cada día*. La Paz: LABOR.
- Francescone, Kirsten
2017 “La perspectiva potosina sobre la política nacional del gobierno del MAS”. *Latin America Studies Association Annual Conference (Lima)*, 30 de abril de 2017.

- 2015 “Cooperative miners and the politics of abandonment in Bolivia”.
The Extractive Industries and Society, número 2: 746-755.
- Ferrufino, Rubén et al.
- 2011 El Cerro nuestro de cada día. Relevancia económica en la región y
ciudad capital. La Paz: LABOR.
- Fundación Solón
- 2019 “Litio boliviano ¿industrialización o extractivismo?” Boletín Tunupa.
La Paz: Fundación Solón.
- GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)
- 2021 Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos
humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de
2019 (<https://bit.ly/3PDcTx1>).
- Flores, Franz
- 2022 El esplendor inútil, Potosí y el Estado central. Quito: FLACSO.
- Kriesi, Haspeter
- 1998 “The Transformation of Cleavage Politics: The 1997 Stein Rokkan
lecture”. European Journal of Political Research 33: 165-185. <https://doi.org/10.1023/A:1006861430369>.
- Lopez-Aranguren, Eduardo
- 1995 “Las dimensiones de la conciencia regional y nacional”. Revista Reis.
<https://doi.org/10.2307/40183863>.
- Madrid, Emilio y Natalia Camacho
- 2003 Negociación y toma de decisiones para comunidades mineras de
Potosí. La Paz: CEPROMIN.
- OEP (Órgano Electoral Plurinacional)
- 2021 “Atlas Electoral Plurinacional”. Base de datos (<https://bit.ly/35NiXye>).
- Rokkan, Stein, y Derek Urwin
- 1982 The Politics of Territorial Identity. Londres: Sage.
- Roca, José Luis
- 1980 Fisonomía del regionalismo boliviano. La Paz: Los Amigos del Libro.
- Sanchez, Agustina
- 2020 “Detrás del Golpe: la industrialización del litio en Bolivia” <https://www.clacso.org/detras-del-golpe-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia/>.
- Zavaleta, René
- 1963 “Soberanía significa industria pesada”. En Estado nacional o pueblo
de pastores, 7-26. La Paz: Burilo.

Redes sociales como un nuevo escenario de la democracia en Bolivia

*T'ikita Wara*¹

Resumen

El trabajo apunta a hacer una descripción de los activismos ciudadanos digitales durante los conflictos políticos en Bolivia. Una mirada reflexiva de las movilizaciones ciudadanas con los jóvenes como protagonistas que apuntan a protestas pacíficas cuyos principios se basan en el respeto y la tolerancia. Se abordan momentos de indignación nacional: como la defensa del TIPNIS, el incendio de la Chiquitania y la crisis política del 2019, coincidentes con la expansión de las redes sociales que en su desarrollo constituyen una herramienta de levantamientos ciudadanos organizados. La desinformación a consecuencia de la saturación de contenidos en redes sociales e intereses políticos.

Palabras clave

Ciberactivismo; democracia; redes sociales; activistas digitales.

1. Introducción

En un análisis sobre la dinámica de la política contemporánea el escritor Francisco Cabañas hace referencia a la incertidumbre en la democracia como carácter de la misma, ésta devenida por consecuencia de gobiernos que, en forma sistemática, proporcionan a la población temor y duda en los procesos democráticos y las

1 T'ikita Wara: Lirio Valeria Fuentes, Socióloga y Comunicadora Social. Creadora de Quechua-Chic.

problemáticas inherentes (Cabañas 2015). Durante las dos últimas décadas los conflictos políticos en Bolivia han derivado en explosiones sociales que vendrían a ser la demostración fáctica de una democracia debilitada y sin credibilidad; por un lado, el extremo desgaste institucional que ha generado reticencia en los agentes sociales, y por el otro la excesiva polarización política y social.

Entendiendo que la democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, las masivas movilizaciones en demanda de respeto al voto, control electoral, derecho a la información, y denuncias por abusos sindicales, fraudes electorales, violación a la libertad de expresión, acoso y violencia política evidencian el continuo quebrantamiento democrático y la indignación masiva en las diferentes esferas sociales profundizando de manera sistemática la crisis política y debilitamiento de la democracia en el estado.

Frente al común de manifestaciones ciudadanas demandando derechos democráticos, febrero del 2016 marcó un antes y un después en cuanto a la forma de organización colectiva. El entonces presidente Evo Morales pretendía abrir una cerradura legal que le prohibía acceder a una nueva postulación, es así que el 21 de febrero de 2016 la población boliviana asiste a las urnas del Referendo Constitucional y de reelección presidencial cuyo objeto fue el de consultar a la población sobre la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, lo cual habilitaría la reelección presidencial y vicepresidencial por dos veces consecutivas. Tal consulta incluía una disposición transitoria que consideraba como primer mandato el año 2015 y como segundo mandato el 2020, para esta ocasión la mayoría de los votantes rechazó la modificación propuesta, validando de forma legal la prohibición constitucional a la cuarta reelección de Evo Morales, tal hecho se consideró una victoria democrática nacional.

Pues bien, para ese entonces se apreciaban ya formaciones de movimientos ciudadanos, en su mayoría jóvenes, con presencia en entornos digitales². De esta forma las campañas de difusión e información respecto a temas políticos y sociales ganaban independencia de los medios tradicionales de comunicación masiva y se establecían como espacios de discusión y organización ciudadana en temas como el Referendo Constitucional, y problemáticas medioambientales como la defensa del Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS).

2 Si bien la generatividad de las redes sociales en Bolivia data entre el 2008 y 2011 para el 2016 había llegado a una etapa de diversificación y expansión con tráfico fluido en redes sociales como Facebook y gradualmente Twitter, sobre todo en áreas urbanas. (Jordán, 2018, pp. 299-317)

La voluntad nacional fue clara “NO a la modificación constitucional y NO a la reelección de Evo Morales”. En este punto, en medio de una vertiginosa susceptibilidad institucional, con antecedentes de violencia política, persecución a discrepantes de la ideología de gobierno considerados opositores y a indígenas, adjunta vulneración a derechos humanos, así como declara el Informe Defensorial respecto a la violación de los derechos humanos en la marcha indígena del 2011³, el Tribunal Constitucional Plurinacional emite una sentencia constitucional que habilita a que Evo Morales pueda ser reelegido de manera indefinida, a pesar de las restricciones establecidas en la Constitución Política del Estado, basándose en el derecho político como un derecho humano. Tal sentencia, además, declaraba inconstitucional artículos y apartados de la Ley de Régimen Electoral que hasta entonces garantizaban y resguardaban un estado de derecho ya desquebrajado.

Las concentraciones ciudadanas en el eje central del país se fueron masificando los meses siguientes, asimismo el surgimiento de plataformas ciudadanas en las redes sociales mostraba un nuevo escenario de organización y protesta transversal

3 *“15 Las acciones policiales realizadas el 25 de septiembre del año en curso, violaron el derecho a la integridad personal, en su dimensión física al golpear brutalmente a hombres, mujeres, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, así como madres de lactantes, de donde resultan desgarradoras declaraciones, que evidencian como las de aquel niño asfixiado por los gases botaba espuma por la boca, mientras que una niña de once años fue golpeada, amordazada, detenida arbitrariamente y trasladada mientras se encontraba inconsciente. Que dichas agresiones, fueron realizadas en un acto de total desproporción del uso de la fuerza y menosprecio por la humanidad de la gente (...). Todos estos actos ejecutados por la Policía desde un abuso de poder en la línea de producir daño psíquico, destruir y reducir la autoestima, así como menoscabar su dignidad, estaban dirigidas a desvalorizar a sus víctimas. Resaltando que en algunos casos la violencia psicológica ejercida en ellos los dejaría con graves secuelas en el tiempo (...).*

16. (...) se mantuvo niños lactantes sin comer por más de cuatro horas; se empujó y golpeó a marchistas sin importarles además que algunos estuviesen heridos, se les despojó de prendas de vestir, mientras los detenidos estaban indefensos y neutralizados. Lo que se traducen inequívocamente en tratos crueles, inhumanos y degradantes que violan el derecho a la integridad. Así como en actos de tortura de aquellas personas que por su condición se encuentran en situación de vulnerabilidad como los niños, niñas y mujeres, más si éstas últimas se hallaban en estado de gestación o eran madres de niños lactantes y por lo que el Estado vulneró el derecho a la integridad reconocido en diversos Instrumentos Internacionales de los Derechos Humanos, como el Art. 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Art. 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el Art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Art. 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Arts. 1, 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además de la violación de los Arts. 15 y 114.I de la Constitución Política del Estado (...)

17. (...) De esta forma, las acciones estatales vulneraron el derecho a la libertad de locomoción en su componente de libertad de tránsito, establecido en el Art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Art. 12 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; Art. 22 de la Convención de Americana de Derechos Humanos y el Art. 21.7, de la Constitución Política del Estado”. (Bolivia: Defensoría del Pueblo Estado Plurinacional de Bolivia, 2011)

a las formas de manifestación convencionales en el país; bloqueo de caminos, marchas, paros. Plataformas como Bolivia Dijo No; Resistencia Ciudadana; Generación 21; SOS Bolivia lideradas principalmente por jóvenes comenzaron a ser espacios de canalización para el descontento popular masivo que había iniciado como una exigencia al respeto de los resultados electorales del 2016 y ya daba indicios de una pulseta territorial simbólica y política desde las redes sociales haciendo frente a medios de comunicación masiva progubernamentales, información dirigida y discursos gubernamentales con elevados niveles de polarización en su narrativa.

Con la percepción de un consenso democrático roto, el concepto de democracia se torna abstracto tanto para las instituciones, para la dinámica interna de la sociedad, que, si bien desde la sociología no sugiere la rigidez institucional para cualificar la democracia sino también otras formas de ejercicio de poder y gobernabilidad propias de una cultura y dinámica política, y para el propio estado. Todavía se maneja el criterio de que democracia es mayoría y viceversa, la coacción social, en esta etapa promovida por el gobierno, que refiere “si no estás a mi favor entonces estás en mi contra” parece ser el principal eje bajo el cual se expone y romantiza lo colectivo, lo popular. El binarismo enaltecido y reforzado por estas narrativas tensionan más aún este espectro al que la población se aferra en búsqueda de democracia.

Frente a la pulseta política y social en el país, la sociedad civil se manifestaba de diferentes formas, por un lado, su organización a través de los sindicatos y movimientos sociales le permitía llevar sus puntos de vista a espacios de decisión conjunta, por otro, espacios como las tradicionales tertulias radiales y televisivas le resultaban cómodas para emitir criterios propios en los diferentes medios de comunicación. Es para inicios del 2000 que empiezan a germinarse las redes sociales virtuales, sin embargo, en Bolivia el uso de estas cobraría popularidad años más tarde⁴. En este sentido, la emergencia de los blogs permitiría manifestaciones juveniles desde el internet para abordar problemáticas políticas, sociales y culturales en el país, expresiones que tradicionalmente pertenecían a voces adultas. Durante las próximas dos décadas el uso de los entornos virtuales atravesaría transformaciones significativas hasta alcanzar dinámicas digitales de organización y toma de decisiones de gran escala, pues, el resonar de inestabilidad política que marcó el inicio de la década del 2000 retornaría al país veinte años después con tecnología en la mano de una juventud más politizada.

4 En Bolivia, el número de usuarios de internet ha dado un salto importante entre el 2000, y 2015. Del 6% de habitantes que utilizaba Internet a más del 50% de la población que accede a la red. (CEPAL 2016)

Es a partir de tres iniciativas que se estudiará el activismo ciudadano digital como forma de organización y manifestación de la sociedad civil boliviana: 1) “Mundo al Revés”, espacio virtual de discusión a través del blog, 2) Ríos de Pie; movimiento ciudadano pro derechos humanos y medio ambiente, y el 3) Colegio Abierto de Filosofía que a sí mismo se considera como una asociación libre y circunstancial de individuos con espíritu crítico. La dos últimas con fuerte presencia en Facebook y Twitter; redes sociales populares en Bolivia durante los últimos cinco años.

Los puntos expuestos muestran que la escalada de conflictos en Bolivia daba lugar a nuevas formas de manifestación, que, desde lo digital, se resguardarían en lo masivo, pero también en lo anónimo como características de esta nueva identidad colectiva que, a su vez, generaría sentimiento de pertenencia sin cumplir con una estructura jerárquica. En algunos casos los nombres propios se omitirían y se convertirían en bandera de causas comunes. Es a partir de estas alternativas emergentes que se estudiarán los activismos ciudadanos digitales en su recorrido por diferentes periodos de conflicto haciendo una descripción de los hitos o picos que marcaron a cada movimiento ciudadano, sus formas de organización, su planteamiento como alternativa diferente a lo tradicional, su alcance y vigencia. Para el caso aplicaremos el concepto de “ciberactivismo” de Ugarte (2007) que describe tal como la estrategia del cambio en la agenda pública a través de medios electrónicos.⁵ El ciberactivismo como concepto fue evolucionando con el avance de las redes sociales y su uso en la agenda política de la sociedad civil.

2. Mundo al revés, la iniciativa bloguera

Bolivia vivió la transición del activismo tradicional que se manifestaba en mítines, concentraciones, marchas, a nuevas formas de expresión a través de las redes sociales, éstos se establecerían como ciberactivismos. Para Quintana y Tascón⁶ existen niveles que definen un ciberactivismo efectivo: un nivel de carácter organizativo en el que el ciberactivismo no tiene jerarquías y es de manejo libre. Por otro lado, el carácter narrativo que ayuda a crear una identidad colectiva y sentido de pertenencia sea efímero o por el tiempo que dure la acción. Tal es el caso actual de los hashtags utilizados en Twitter y posteriormente en Facebook.

El inicio del ciberactivismo se da con los blogs, que cobraron popularidad la primera década del 2000, y en su proceso demuestran la espontaneidad y libertad con

5 De Ugarte, El poder de las redes (Madrid, Cobre, 2007), pp 85.

6 Mario Tascón y Yolanda Quintana, Ciberactivismo: las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas (Madrid, Catarata, 2012), pp 255.

la que podías navegar, opinar y relacionarte con otras personas de interés común conformando comunidades virtuales de abordaje político, social y cultural. Es en este contexto que en 2006 emerge “Mundo al Revés”, una iniciativa dirigida por Sebastián Molina⁷ que fue de las pioneras en consolidar una comunidad virtual a través del blog en el país, con ejes de discusión sobre los aconteceres sociales y políticos.

Mundo al Revés representaba una alternativa de discusión y diálogo juvenil inicialmente en la internet, se gestaba como un espacio de inclusión ciudadana cuya propuesta se basaba en los principios de tolerancia y respeto. En esta coyuntura las divisiones regionales en el país eran tema de agenda pública, las mismas estaban sujetas a discursos políticos, algunos de carácter partidario, que preponderaban la polarización tanto por el gobierno como por diversos movimientos sociales que respondían a intereses variados. Se avizoraba gradualmente no solo opiniones diversas, sino también ataques, amenazas, amedrentamientos y acusaciones que se integraban en las discusiones dentro de los portales de blogs.

(...) creemos que todas las posiciones son válidas en tanto enriquezcan el debate y no atenten contra la vida o fomenten a la violencia. No vamos a cuartar la expresión. En cualquier democracia normal un espacio como “mundo al revés” será entendido hasta como necesario. (Molina 2007).⁸

Según Molina, en una entrevista para el Diario Crítico (España), el blog Mundo al Revés contaba con mil doscientos usuarios fijos diariamente, aunque en momentos “pico” como en los sucesos que se vivieron en enero del 2007 en Cochabamba⁹ la suma incrementaba. En el encuentro internacional de Blogs celebrado el año 2006, se realizó un debate sobre el impacto de estas iniciativas participativas en América Latina, en Bolivia mundo al revés se consolidaba como un espacio de activismo ciudadano que coincidía con iniciativas similares que buscaban la inclusión ciudadana juvenil y la expresión de una ciudadanía más participativa.

Son muchos los escenarios de discusión de mundo al revés. Principalmente, hay un debate sobre Bolivia, permanentemente se habla sobre los cambios sociales y políticos, que en muchos aspectos consideramos extraordinarios para la historia futura del país. Muchos jóvenes hemos acompañado los procesos de cambio, compartiendo, debatiendo, tensionándonos desde los escenarios de la Internet, tocando los temas del mundo fáctico de Bolivia. Molina.

7 Sebastián Molina fue un joven cruceño poeta y emprendedor.

8 Molina, Sebastián. 2004. Entrevista con el líder de “Mundo al revés”. Diario Crítico, 12 de febrero.

9 Enfrentamientos violentos entre movimientos sociales pertenecientes al gobierno y afines al prefecto Manfred Reyes Villa. (Los Tiempos 2021)

3. Movimientos ciudadanos en resguardo del medio ambiente y los derechos humanos; Ríos de Pie

Un tema fundamental de debate y continuo cuestionamiento político hacia el gobierno fue la defensa del medio ambiente, éste debido a las contradicciones estatales entre el discurso y el accionar político respecto a reservas naturales en el país como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la intención del gobierno de construir una carretera que atravesase el parque nacional atentando no solo flora y fauna del territorio, sino también la forma de vida de los indígenas que habitan el lugar. Sin duda ese momento de conflicto sería el inicio de un camino para el activismo digital enfocado en la preservación del medio ambiente transversal al respeto de los derechos humanos en el proceso de precautelar y reconstituir los principios democráticos ya desgastados durante la segunda década del siglo XXI.

El conflicto en defensa del TIPNIS, que provocó la represión violenta a indígenas, suscitado Chaparina en septiembre del 2011 cuando efectivos de la Policía Boliviana intervinieron la marcha indígena que se trasladaba desde Trinidad hasta la sede de gobierno en contra de la construcción de una carretera que atravesaría el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure marca un punto de inflexión en el uso de las redes sociales siendo uno de los primeros eventos de ciberactivismo en Bolivia. Fotografías y testimonios sobre aquella masacre se difundían en las redes sociales con estas interrogantes “*¿Cómo es posible que un nuevo modelo de Estado plurinacional, que inicia su construcción, haya actuado tan despiadadamente contra los pueblos indígenas amazónicos? ¿Cómo explicar esta acción cuasi criminal de fuerzas del orden del nuevo Estado Plurinacional?*”.

Es a partir de entonces que, de manera acelerada, se incrementa el número de usuarios de redes sociales con fines de activismo; campañas de difusión y apoyo a los marchistas empiezan a cobrar popularidad a través de Facebook. Para este momento, las redes con discursos medioambientales constituidos previamente migraron al ámbito virtual y de cierta forma orientaron la presencia y discusión de medio ambiente en la internet, particularmente las redes sociales.

El descontento general en Bolivia por las contradicciones gubernamentales, amedrentamientos y acoso político a la sociedad civil era la olla a presión que necesitaba poco para detonar, otra vez, en una crisis política que le costaría al gobierno no solo la silla presidencial, sino también el desmoronamiento de las instituciones y el resquebrajamiento de la sociedad y el estado. Después del rechazo nacional a la modificación de la Constitución Política del Estado que permitiría

una nueva reelección del Presidente, los ciberactivismos conectaron usuarios de todo el país cuyo interés común radicaba en exigir el respeto a sus derechos humanos y políticos.

¿Qué sucede entonces? En agosto del 2019 las alarmas por los incendios forestales en la Chiquitania movilizan a la población,¹⁰ inicialmente la de Santa Cruz. Inmediatamente movimientos ciudadanos se ocupan de la difusión e información de lo que acontecía en el bosque chiquitano. Un movimiento que cobró relevancia por su orgánico desempeño en las redes sociales y su capacidad de alcance y conexión con la población joven fue Ríos de Pie,¹¹ que inicialmente surge con la intención de abordar problemáticas sociales desde la “no violencia” para la defensa de los derechos humanos y defensa del medio ambiente.

Nosotros teníamos la intención de ser un grupo ciudadano juvenil, sabíamos que las redes sociales son un medio dirigido a jóvenes y además era de acceso gratuito, no teníamos recursos. Queríamos informar en un lenguaje que nuestros contemporáneos pudieran entender. (Ballivian 2023)¹²

Actualmente Ríos de Pie es un movimiento ciudadano con elevada presencia y tráfico en las redes sociales, cuenta con aproximadamente 100 mil seguidores en Facebook, 17 mil en Instagram y 14.237 en Twitter creando contenido con frecuencia enfocado en una vida libre de violencia, actividades altruistas y sobre todo la defensa del medio ambiente, en este punto solicitando mayor compromiso con las Áreas Protegidas que todavía corren riesgo. Para Ballivián el incendio de la Chiquitania marcó un antes y un después en la ciudadanía organizada, las redes sociales ya no eran sólo un medio donde las personas emitían comentarios y reacciones virtuales, la gente ponía su tiempo y su cuerpo en acción.

Bajo los principios de unidad, organización y disciplina comenzaron a organizarse distintos grupos, en su mayoría universitarios, quienes garantizaban una comunicación orgánica y de información transparente que, según Ballivián, era contradictoria a la información que se emitía desde el gobierno incluso en entrevistas internacionales. Es importante recalcar en esta parte que los incendios del 2019 generaron masiva participación y compromiso de jóvenes voluntarios en las diferentes regiones del país, varios de éstos adscritos a movimientos ciudadanos que por la coyuntura tenían elevado tráfico de información mas no un listado riguroso de sus miembros, así como se indicó en párrafos anteriores una

10 Los incendios ocurridos en 2019 quemaron más de 2 millones de hectáreas de bosque chiquitano en Bolivia.

11 <https://www.facebook.com/RiosDePie/>

12 Carolina Ballivian, miembro de Ríos de Pie, contacto personal, Mayo del 2023.

de las cualidades del ciberactivismo es la de autoorganizarse sin la necesidad de una planilla de control.

Es en este sentido que durante una entrevista al entonces Ministro de Defensa, Javier Zavaleta voluntarios lo increpan cuando él declara que los incendios habían disminuido considerablemente, los voluntarios critican su versión y la califican de mentirosa pues ellos habrían pasado por los lugares de incendio que según las declaraciones de la autoridad éstos ya habrían sido sofocados.

El Ministro de Defensa decía que los incendios se controlaron en 85% y era mentira porque nosotros estábamos en llamas junto con los bomberos (...) La ventaja de movilizarnos desde las redes sociales con información transparente y fluida fue que eso cortó la dependencia de que traten de explicar desde arriba lo que estaba pasando. Ballivian.

Ríos de Pie, que a sí mismo se califica como movimiento ciudadano de amigos organizados recuerda lo relevante que fue la Chiquitania para consolidarse como causa común en la coyuntura del 2019, hecho que sentó presencia en todo el país sin intereses políticos partidarios pese a ser franco de ataques y amenazas mediáticas por parte de activistas que respondían a la línea del gobierno.

Luchamos por un país que tenga libertad y democracia, soñamos con una Bolivia que tenga un gobierno transparente y sin corrupción, queremos un país en el que todos y todas las bolivianas tengan seguridad, se respete el medio ambiente y nuestros recursos naturales. (Jhanisse Vaca).

La intención de este movimiento ciudadano no es mantenerse en el ciberactivismo, su interés primordial es hacer de la comunicación digital una herramienta para llamar a la acción, activar a la ciudadanía a que salga a las calles de manera pacífica y sin violencia a manifestarse cuando sea necesario, a ser solidarios cuando la situación lo requiera. Los amigos universitarios que en 2019 se organizaban en centros de acopio y apoyo a los bomberos que sofocaban los incendios ganaron experticia en comunicar ideas, hacer frente a amenazas y exigir las demandas precisas, aún trabajan y promueven la preservación del medio ambiente y las áreas protegidas pese a que hasta ahora el gobierno no se ha manifestado al respecto y muestra evidente desinterés en profundizar la prevención de futuros incendios.

Los grupos se convirtieron en grupos de rotonda, ya las organizaciones estaban consolidadas. Durante meses estábamos bajo constante ataque y recibíamos amenazas directas, aprendimos a manejar estrés provocado por un gobierno nacional poderoso en su momento (...) La organización durante los incendios, nos permitió identificar

las debilidades de una organización y después, los mismos grupos se convirtieron en ollas comunitarias para los bomberos que aún sofocaban los incendios. La continuidad fue natural.¹³

4. Crisis política del 2019 e iniciativas digitales de crítica; Colegio Abierto de Filosofía

El desastre ambiental se presentó de cara a las elecciones nacionales del 2019, la población estaba indignada, una serie de hechos desde el 2016 enardecían a la ciudadanía, y el incendio en el país no parecía ser solo de carácter ambiental pues masivas manifestaciones y plataformas ciudadanas se organizaban nuevamente para protestar y hacer frente a un gobierno catalogado como ineficiente, mentiroso, inconstitucional y antidemocrático. Muchos jóvenes voluntarios comenzaron a dividir sus jornadas entre centros de acopio y control electoral sin prever, probablemente, que esa labor se extendería por veintiún días más¹⁴ y que daría, eventualmente, un giro a la historia política boliviana haciendo fugaz favor a la democracia en el país.

Es entonces que, como forma de ataque desde el gobierno central, empiezan a pensarse nuevas catalogaciones para los movimientos ciudadanos, se los acusa de terroristas y de presuntamente querer gestar un golpe de estado. Universitarios y jóvenes, cuyas ramificaciones de causas se habían entrelazado en defensa de la democracia y el medio ambiente fueron acusados de golpistas y con ello todo el aparato del estado montó una serie de acusaciones que orillaban en el meme.¹⁵

El 2019 el entonces ministro de gobierno empieza a hacer una serie de acusaciones con dibujos y tabas de pizarra indicando que nosotros somos grupos imperialistas que queremos desestabilizar al gobierno. (Ballivián).

Durante los veintiún días de la llamada Revolución de las Pititas la polarización se condensaba en el país mientras las redes sociales mostraban realidades que los

13 Dentro de los movimientos ciudadanos amigos mencionan a Alas Chiquitanas, Me Comprometo, Jóvenes por la Libertad, Sos Chiquitania, entre muchos otros cuyo registro de voluntarios y activistas es incontable debido a la fluidez de sus participaciones.

14 Los jóvenes que salieron a las calles terminaron siendo claves, la generación millennial, que tiene como característica la aversión al poder, y lo que los moviliza son la libertad de expresión, la trata y tráfico de personas, la violencia contra la mujer y el medioambiente. Se manifestó contra el abuso de poder y esa molestia vino arrastrándose desde el referéndum del 21F. (Correo del Sur 2019)

15 Entendemos al meme como el texto, imagen, vídeo u otro elemento que se difunde rápidamente por internet, y que a menudo se modifica con fines humorísticos.

medios de comunicación no mencionaban. La caída del presidente autoritario Evo Morales estuvo marcado por un movimiento a la batuta de jóvenes que paralizó el país desde el manejo de redes sociales y la organización espontánea y colaborativa.

A la par, activismos contrarios a los mencionados cobraron fuerza en las plataformas de internet, muchos de carácter simbólico con enfoques políticos regionalistas y étnicos, en algunos casos defendiendo posturas gubernamentales. Para este entonces ya se había confirmado la existencia de guerreros digitales; grupos organizados y sustentados con recursos del estado cuyo rol era el de defender al gobierno, en muchos casos emitir mensajes violentos contra opositores, periodistas y, en este caso, activistas mediáticos.

En este periodo también cobraron protagonismo activismos ciudadanos conformados por periodistas e intelectuales independientes comprometidos en combatir la desinformación y promover la tolerancia y el análisis crítico en un país ya carcomido por la ira e indignación masiva. Desde el análisis filosófico sobre el conflicto a través de literatura política y sociológica el Colegio Abierto de Filosofía¹⁶ presentaba una alternativa diferente para abordar la crisis. Esta iniciativa con transmisiones semanales por Facebook abordaba las problemáticas coyunturales a través de los libros: Desde Alicia en el País de Las Maravillas hasta las obras de Hannah Arendt para permitirnos entender a profundidad las razones de cada conflicto social. Una iniciativa que, para el contexto, rompía con los esquemas de activismo, pues no se centraba en llamar a la acción, sino a la reflexión y la crítica.

El Colegio Abierto de Filosofía con aproximadamente 50mil seguidores en Facebook también se mantiene activo al igual que Ríos de Pie, ambos comparten los principios de tolerancia, no violencia y respeto a la democracia. Hasta hoy sus contenidos todavía mantienen la esencia que les dio popularidad en la crisis del 2019, el compromiso con una sociedad más democrática y educada no se pierde en la fugacidad del hecho.

Nos consideramos colectivos no políticos, pero con influencia crítica, la idea de hacer los streamings era para poder verter nuestros criterios sin que nos censure un medio de comunicación. Queríamos dejar de depender de los medios tradicionales. (Canseco 2023)¹⁷

Con el interés de democratizar la opinión, este grupo de activistas, en su mayoría docentes jóvenes apuestan en crear contenido en un formato digerible para su

16 https://www.facebook.com/colegioabiertodefilosofia/?locale=es_LA

17 Andrés Canseco es docente y miembro del Colegio Abierto de Filosofía.

público que oscila entre los 20 y 30 años. Comprenden que, aunque hay conceptos y definiciones que pueden parecer obvios todavía son desconocidos para mucha gente, de esta manera pretenden mejorar sus formas en la distribución de la información comprendiendo el minucioso manejo que se debe hacer del lenguaje al momento de involucrarse en la academia para no confundir a los receptores.

Existen diversas formas de contribuir a la democracia, en este caso se lo hace desde la visión crítica y la provocación a la profundización académica con apertura para formar comunidades plurales.

El Colegio Abierto de Filosofía no tiene una visión ideológica, el mismo nombre permite que asistan y expongan personas de diversas tendencias. Eso genera inquietudes y cuestionamientos donde la gente rastrea ciertas tendencias políticas ideológicas que por el contexto político del país terminan anclándose a las discusiones del CAF, sin embargo, nosotros abordamos temas desde la estética la ontología hasta la política sin caer en la ideología o el partidismo (...) Creemos que hay diferentes formas de aportar a la democracia y nosotros lo hacemos desde la crítica y la búsqueda de la pluralidad. Canseco.

Al navegar entre los ciberactivismos citados se nota la presencia de picos de tráfico; es decir que en diferentes periodos sus contenidos fueron masivos y hasta virales, se pueden mencionar en ambos casos, por ejemplo: El incendio de la Chiquitania, el fraude electoral y la agitación ciudadana, la cuarentena y recientemente la persecución y detención de autoridades como el Gobernador de Santa Cruz y Marco Pumari. Estos picos se explican porque han sido eslabones de la cadena de conflictos políticos en el país, pero, además nos muestra que probablemente la ciudadanía joven confía menos en los medios de comunicación tradicional y acude a las redes sociales para verificar las noticias.

En la época del primer gran paro nos animamos a hacer cosas que no hacíamos antes, cuando llegó la cuarentena comenzamos a producir espacios de intercambio de opiniones con proyección internacional. Después nos dimos cuenta que la gente veía videos que habíamos dejado en la web dos años atrás, la ventaja de las redes es que hasta el momento trasciendes de lo fugaz. Canseco.

La CAF con algunos de sus integrantes de tendencia liberal, no pretende ganar más seguidores o imponer a sus miembros compartir contenidos que no sean compatibles con sus formas de pensar, asumen esto como un reto para ganar expansión, hecho que aún no es de su interés pleno, pese a esto también han sido observados y atacados por activistas y periodistas a favor del gobierno, un detalle interesante es la respuesta del público a su contenido, pues, según Canseco, a varios receptores les ha tocado esconder los videos de su ordenador y hacer sigilosos

cumplidos por la calidad de su contenido, con el temor de ser descubiertos en sus fuentes laborales que bajo esas premisas se asume que parte del público de la CAF trabaja en instituciones públicas.

De los activistas digitales desprenden variedad de ramajes, algunos quieren crecer en seguidores, otro más alcance de reproducciones, algunos buscan ambos y hay otros a quienes les interesa netamente el contenido, ahora bien, Andrés Canseco nos propone la interrogante “¿*Qué les das a tus seguidores?*”. Nos detenemos en este punto para analizar la magnitud de influencia que tienen las plataformas ciudadanas al concentrar entre sus redes sociales a más de diez mil personas que recibirán las notificaciones de sus próximas publicaciones o se extrañarán de no tener más novedades de aquellos activistas que en otrora se encontraban muy dinámicos, comprometidos y con esperanza de cambio.

5. Conclusiones

Los conflictos políticos en el país durante los últimos veinte años denotan un fuerte arraigo simbólico que define el camino político y marca la agenda social en el estado, si bien lo simbólico conforma parte del bagaje cultural desatando admiración en cumbres internacionales, dentro del país propicia espacios de enfrentamiento violento entre sectores polarizados.

A la expansión de redes sociales como herramientas para el ciberactivismo se ha incorporado un fenómeno corrosivo para la construcción de la confianza y democracia social. La proliferación de páginas, grupos, hilos de opinión y memes durante los conflictos hizo que la desinformación cale sin anestesia en las sensibilidades de la ciudadanía que mientras era víctima de bulos y desinformación también reproducía lo mismo en sus entornos virtuales. Tanto el gobierno nacional como los departamentales, medios de prensa y activistas digitales fueron parte activa de la desinformación difundiendo, intencionalmente o no, contenidos sensibles referidos a los momentos de crisis.

El periodo post electoral convirtió a Bolivia en un escenario conflictivo donde la desinformación cundió en redes sociales e incluso llegó a salir desde el poder. En 11 días, desde el 28 de octubre y hasta el 7 de noviembre de 2019, dos autoridades de Gobierno y dos medios del Estado presentaron imágenes y videos sacados de contexto. En todos los casos utilizaron los materiales para acusar a la oposición y a sus líderes. (Bolivia Verifica 2019).

Pese al arduo trabajo de equipos periodísticos como Bolivia Verifica y Chequea Bolivia por combatir la desinformación, éstas se han multiplicado haciéndonos

a todos responsables de reproducirla incluso sin darnos cuenta. Si bien las redes sociales tienen la ventaja de generar autoorganización y no ser estrictas en su regulación, su uso irresponsable representa un peligro para la convivencia social.

La producción de desinformación sigue de cerca las coyunturas específicas de la opinión y la agenda públicas. En momentos electorales, es claro su uso como parte de las campañas políticas, pero tiende a mezclarse con temas sociales que son las preocupaciones más centrales de la población. La crisis política y social de octubre y noviembre de 2019 desató una nueva dinámica de desinformación donde convergieron la desinformación política con la social, que es uno de los factores que para nosotros explica la agudeza de la crisis, que trascendió las esferas mediáticas para llegar a las esferas barriales y hasta interpersonales. Esta desinformación no es atributo distintivo de una sola tendencia política, sino más bien parte ya de las estrategias políticas, al igual que lo fue en su época la guerra sucia más analógica. En ello, la desinformación visual es la dominante. (Ojeda y Peredo 2020).

Como ejemplo de la desinformación emitida y difundida por el aparato estatal se tiene el caso de un video manipulado que presentó el ex vicepresidente Álvaro García Linera en octubre de 2019. Se trató de un video compuesto de fragmentos de otros en el que se observaba violencia. Al final del video se ve a un hombre con el rostro ensangrentado, con este material el ex vicepresidente acusó al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de impulsar actos violentos:

Estoy muy dolido por esas imágenes. Estoy muy angustiado, pero tiene un culpable, esta sangre de ese maestro tienen un nombre: es Carlos Mesa: niños maltratados, mujeres de pollera insultadas y agredidas por tener pollera, gente de pueblo agredida e intimidada. Él es el culpable, él es el responsable. Alvaro García Linera.¹⁸ (Chequea Bolivia 2019).

Después, durante la conferencia, un periodista le hizo notar que ese extracto corresponde a 2008. En efecto, las imágenes corresponden a hechos que se registraron para un documental en 2008 denominado “La Derecha no Pasará”, en el audiovisual original se relata las agresiones en Santa Cruz durante las discusiones de autonomías departamentales por las que pasó el país. Como consecuencia de la desinformación mediática comenzó a formarse un concepto sobre la otredad identificando al “otro” como el malo o la representación de lo dañino. Este criterio penetró en cada uno de los ciudadanos a punta de información manipulada, discursos de odio de diferentes sectores, posverdad y violencia sistémica.

18 En conferencia de prensa el 28 de octubre de 2019, el ex vicepresidente del Estado utilizó varios videos para graficar la violencia desatada en las calles debido a la crisis en el país por las denuncias de un posible fraude electoral. Chequea Bolivia advierte que se trata de información engañosa.

Ahora bien, en diferentes trabajos de la literatura nacional actual se ha señalado con particular énfasis a la sociedad civil organizada como responsable de diferentes hechos violentos acontecidos, éstos últimos durante la crisis política y social de octubre y noviembre del 2019, catalogándola de racista, clasista, golpista y separatista. Es preciso recordar que estos criterios resultan convenientes y hasta aplaudidos para algún grupo de académicos en un estado en el que se condena a quien interpela la corrupción y la violación de los derechos humanos si el acusado se adscribe a una nación indígena. En este punto el discurso en beneficio de los indígenas, que atravesó procesos durísimos de constitución y validación en un país con antecedentes discriminatorios, parece haberse convertido en un panfleto para validar acciones violentas, avasallamientos, persecución y por otro lado, es una ficha eficiente para burlar a la justicia, bajo el coro de “discriminación”. Estos anuncios dejaron de ser suposiciones para la ciudadanía, pues con las redes sociales resultaba difícil sostener los guiones y narrativas que el gobierno brindaba en los medios de comunicación. Audios filtrados, acciones ilícitas y declaraciones descabelladas de autoridades afines al gobierno, incluso el presidente,¹⁹ eran inmediatamente subidas a Facebook y Twitter para su inmediata verificación.

A lo largo de las entrevistas realizadas y conversaciones con diferentes grupos ciudadanos se percibe resistencia a ser catalogados como movimientos políticos, puesto que por costumbre se sataniza el carácter político dentro de la manifestación ciudadana propiciando la invalidación de demandas al ser expresadas por movimientos ciudadanos organizados. El temor de estos movimientos a ser vinculados con entornos partidarios limita el alcance de acción. Sin embargo, es importante reconocer que no todo movimiento político tiene que ser partidario y que definitivamente toda acción que busca defender una causa y exige sus derechos mediante la organización y comunicación, es una acción política.

Los ciberactivismos han marcado una forma diferente de organizarse y hacer política, en Bolivia los jóvenes usuarios de redes sociales han trascendido a la historia con la movilización de los 21 días. Sin embargo, es momento de preguntarse si los activismos digitales son coyunturales o marcan agenda de gestión política y social. La crítica inicial a éstos fue que no contaban con propuestas políticas para el país, probablemente no era ese el rol de los movimientos ciudadanos que se atestaron en redes sociales. Entonces ¿cuál es el rol de los ciberactivismos en política para este inicio de década?

19 Después de filtrarse un audio del ex presidente Evo Morales ordenando a Yucra que con bloqueos se realicen cercos y que no se permita la entrada de comida a las ciudades las pericias avalan la fidelidad del audio. Visto en https://eldeber.com.bo/pais/tres-pericias-avalan-que-evo-morales-instruyo-cercar-ciudades_189182

Bibliografía

AGETIC

2018 “Estado TIC”. En *Estado de las Tecnologías de Información y Comunicación*, 17-113. La Paz: AGETIC.

Bolivia Verifica

2019 “Desinformación desde el Gobierno”.

Cabañas, Francisco

2015 *La democracia incierta*. Buenos Aires: SB Editorial.

CEPAL

2016 *Estado de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe*. Santiago: Naciones Unidas.

Chequea Bolivia

2019 “*chequeabolivia.bo*”. 28 de octubre. <https://chequeabolivia.bo/garcia-linera-utiliza-un-video-antiguo-para-mostrar-hechos-de-violencia-actuales> (último acceso: 18 de 6 de 2023).

Correo del Sur

2019 “Paso a paso, los 21 días de la caída de Evo”. *Correo del Sur*, 17 de Noviembre.

Defensoría del Pueblo Estado Plurinacional de Bolivia

2011 “Informe defensorial respecto a la violación de los derechos humanos en la marcha indígena”. Bolivia.

Gaceta Oficial Estado Plurinacional de Bolivia

2018 “Decreto Presidencial 3738: Crea la Empresa Pública YLB ACISA-E.M., de tipología Empresa Mixta y aprobar sus Estatutos, en el marco de la Ley N° 466, de 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública”.

Jordán, Wilfredo

2018 *Estado Tic: Estado de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia*. Bolivia: AGETIC.

Los Tiempos

2021 “Cochabamba recuerda su peor enero”. *Los Tiempos*, 10 de enero.

Ojeda, Alex, y Valeria Peredo

2020 “Convergencia entre desinformación política y social en el conflicto”. En *Temas Sociales* 46, 98-126.

Quintana, Mario Tascón y Yolanda

2012 *Ciberactivismo: las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas*. Madrid: Catarata.

Ugarte, David de

2007 *El poder de las redes: Manual para personas, colectivos y empresas abocadas al ciberactivismo*. Madrid: cobre.

Jóvenes en Red - Caracterización de su accionar político

*Alejandro Carvajal*¹

Resumen

El artículo indaga en profundidad, los principales espacios que permiten la participación política de los jóvenes, específicamente sobre las formas organizativas que posibilitan un espacio juvenil, entre ellas la RELIDD, REDMUN, Estudiantes por la Libertad, Desafíos ODS, REDAMPIC y PBACC, como redes que se han mantenido a través del tiempo como espacios alternativos frente a los partidos u organizaciones políticas, sociales y otras de tipo más convencionales.

Estas organizaciones aun tienen un largo proceso de maduración y de fortalecimiento que permita una incidencia mas profunda en el sistema político debido a que su campo de acción se reduce a la cooperación o integración con gobiernos locales.

Palabras clave

Formas organizativas, jóvenes, redes de jóvenes, cambio.

1. Introducción

Bolivia retornó a la Democracia en el año 1982, han transcurrido cuarenta y un años desde aquel hecho y diferentes etapas se han vivido en el país. Cada etapa

1 Realizó sus estudios universitarios en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Boliviana. Dedicado a la formación de jóvenes en Democracia y Desarrollo y la investigación socio-política en diferentes organizaciones no gubernamentales.

tuvo sus propios actores, agendas y características, tras estas cuatro décadas tenemos una generación que ha transcurrido toda su vida bajo la democracia. Otra, se encuentra en el fenómeno de urbanización del país, 70% de la población se encuentra en las ciudades capitales y ciudades intermedias. Y la tercera, que interesa indicar en función a los intereses del presente trabajo, es que los niveles de formación educativa han crecido exponencialmente.

El presente artículo está centrado en indagar una de las formas organizativas a la que acuden para articularse una cantidad de jóvenes bolivianos que han crecido en democracia. En el inicio de la pesquisa se identificaron nueve redes de jóvenes. Una vez identificadas se evaluaron sus características y se decidió quitar del seguimiento a dos de ellas. La primera debido a que su vinculación con una entidad de la cooperación internacional la hacía dependiente de sus lineamientos y financiamiento; la segunda, debido a que sus principales finalidades no estaban vinculadas a la búsqueda de un cambio socio-político, sino que se perseguían espacios de intercambio cultural entre jóvenes de Bolivia y jóvenes de Alemania.

De acuerdo a las características mencionadas, la pregunta que guió el artículo fue: ¿Cómo, las redes juveniles identificadas, desarrollan acciones o actividades que persiguen cambios socio-políticos? Y para responder a la misma es necesario hacer un repaso de las condiciones sociales y políticas que rodean sus posibles acciones.

2. El contexto de la democracia participativa

Las cuatro décadas, desde el retorno de la democracia, pueden ser divididas en dos etapas políticas: la primera, marcada por el neoliberalismo y la marcada influencia de los principales partidos tradicionales –ADN, MNR, MIR– y el surgimiento de partidos que surgían desde lo local –CONDEPA, UCS, NFR–; la segunda, con la hegemonía del MAS en el poder y el protagonismo de organizaciones sociales. Uno de los procesos socio políticos en esta transición del poder está vinculado a la organización de la sociedad civil y cómo ésta se encuentra representada políticamente.

En el año 1994, ante el inicio del debilitamiento de la democracia representativa que trajo la democracia pactada, porque los partidos políticos no llegaban a tener una legitimidad lo bastante consolidada para obtener y mantenerse en el poder, se promulgó la *Ley de Participación Popular* que descentralizaba el país y abría un nuevo escenario de “negociación política” en los municipios. Tras ello, las organizaciones territoriales de base cobraron protagonismo político hasta la

llegada de la *Ley de Participación y Control Social* en el año 2013, momento en el que la ampliación de las posibilidades de participación disminuyó su influencia.

Por lo tanto, en las urbes, la década 1994-2013 estuvo dominada por la representación vecinal, obteniendo la hegemonía del proceso de construcción y satisfacción de demandas. Su poder fue maximizado por la posibilidad de bloquear gestiones municipales a través del uso del espacio de los Comités de Vigilancia, lo cual influyó para que las autoridades locales persiguieran cooptar a las dirigencias.

Paralelamente, el proceso de urbanización trajo el crecimiento de estructuras organizativas como los gremios de comerciantes o los sindicatos de transporte, las cuales ingresaron en el escenario de la negociación política local a partir de la promulgación de la Ley de Participación y Control Social. De esta forma, en la actualidad, los alcaldes deben realizar su gestión pública teniendo la anuencia de asociaciones, gremios, sindicatos y juntas de vecinos, así las organizaciones territoriales han pasado a ser uno más de los múltiples actores.

En tanto que en el escenario del gobierno central, el MAS tiene mecanismos para incorporar a las organizaciones en el aparato estatal, en momentos de elecciones se visibilizan las negociaciones y demandas de las organizaciones por obtener espacios parlamentarios y luego por canjear los réditos políticos en instancias ministeriales. En el año 2009, a tres años de gestión, se vislumbraban este tipo de prácticas:

Lo que hizo el MAS, ya en el momento de elaborar las listas a diputados y, luego, para assembleístas o representantes en la Asamblea Constituyente, fue configurar una red de alianzas bastante amplia, con varios núcleos corporativos de la sociedad civil, sobre todo, en el campo de las organizaciones laborales y populares. En este sentido, quiero recalcar que la base político electoral del MAS es una red de alianzas corporativas con núcleos importantes de la sociedad civil; continúa en nuevas condiciones, algunas prácticas ya desplegadas previamente por el sistema de partidos. Cuando se restaura el sistema de partidos y, sobre todo, cuando se amplía el ámbito de la ciudadanía electoral a través de la municipalización, hay un primer momento en que los partidos llevan o importan los candidatos desde las ciudades que son definidos en las direcciones de los partidos. En un segundo momento las instancias de la sociedad civil más importantes en algunos territorios, es decir, juntas vecinales, gremios, sindicatos, estructuras comunitarias, negocian con los partidos la inclusión de los representantes que ellos han escogido en sus listas. (Tapia, Luis 2009, 126)

En aquel conjunto de organizaciones, una de las poblaciones que queda fuera de escena la constituyen los jóvenes. Y su marginación política nace de dos

condicionamientos propios: primero, los jóvenes no son propietarios de vivienda en la mayoría de los casos, lo cual no hace posible su participación activa en las directivas de las juntas vecinales debido a restricciones de sus propios estatutos; segundo, los jóvenes en su mayoría no poseen los “medios de producción”, lo cual no los habilita para formar parte de gremios o sindicatos.

Entonces surge la pregunta de cuáles fueron los espacios de participación política que tenían los jóvenes en el pasado. El movimiento estudiantil estaba compuesto por aquellos estudiantes adscritos a la FES (Federación de estudiantes de Secundaria) y los que se encontraban en las universidades. Dadas las características de los jóvenes a los que se realiza el seguimiento, el punto de reflexión está vinculado al espacio universitario. En este sentido, es importante conocer la situación actual de la realidad universitaria:

Los primeros años del siglo veintiuno (2001-2012) han sido de fuertes tensiones y movilizaciones sociales, cambios y transformaciones con una elevada participación de los movimientos populares urbanos y rurales, trabajadores, comerciantes, indígenas, campesinos, originarios, vecinos y sus organizaciones gremiales y sindicales enfrentando el proyecto neoliberal; en tanto que el movimiento universitario y las universidades públicas y autónomas sólo de manera colateral y secundaria acompañaron esta intensa dinámica de la sociedad frente al orden estatal. La fuerte vinculación de la otrora alianza obrero-campesina-universitaria se diluyó en los veinte años de neoliberalismo (1985-2005) y no consiguió volver a articularse plenamente en los años de reformas sociales y económicas del proceso del nacionalismo indígena-campesino de los años 2006 al 2012.

La despolitización y la crisis en las universidades, la baja participación y presencia crítica frente al neoliberalismo generó una convivencia pacífica gobierno-universidad, no afectándose mutuamente. El aislamiento académico, la carrera profesionalista, las prácticas funcionales al orden establecido fueron acompañados con la masificación, la baja en la calidad de la formación, la gremialización docente y la burocratización, el clientelismo y el prebendalismo estudiantil en las estructuras internas de la universidad, hechos que distorsionaron el sentido del cogobierno. (Paz Rada 2023)

Dentro de este fenómeno de despolitización de las universidades también se encuentra la ampliación del sistema universitario y la irrupción de la educación universitaria privada.

Al parecer, el único canal directo para llegar a representar o ser parte de las instancias gubernamentales pasa por adscribirse a los espacios de jóvenes directamente gestionados por el MAS, allí se encuentran las juventudes del MAS o grupos como Columna Sur. Haciendo notar que los jóvenes que pertenecen a estas instancias se

encuentran alineados y no necesariamente ideológicamente marxistas, por escribir un adjetivo, sino que se trata de jóvenes identificados con el liderazgo de Evo Morales o con el slogan del “proceso de cambio” tal y como lo relataba Adriana Salvatierra, quien llegó a ser presidenta del Senado, en una entrevista televisiva.²

Además, se debe añadir que la presencia de los jóvenes en dichos espacios tampoco garantiza una real incidencia en las esferas de poder o una real introyección de sus demandas como sector dentro del proyecto o de políticas públicas:

La presencia y las consignas de los jóvenes que pertenecen a este sector de la juventud se presentan claramente, si bien son componente importante para el sustento del partido, también están actuando con el propósito de influir en leyes, tratando de agruparse para tener cuotas en las instituciones del Estado y de esa forma dar consistencia al “proceso”. Pero aquí hay un límite en su reflexión y su acción, ya que no se están preguntando para qué están tratando de llegar a ese espacio de poder y si es que su presencia en dicho espacio implica una reforma en la manera de hacer política. Es evidente que la presencia juvenil en las esferas gubernamentales, simbólicamente es importante, pero el hecho de la presencia no es suficiente, por lo que se conoce, carecen de una estrategia de llegada a un lugar que históricamente ha marginado a ese sector de la sociedad, una estrategia que no los fagocite. (Carrasco Michel 2014)

A ello, se debe sumar la crisis de los partidos políticos, la cual en una de sus manifestaciones tiene la falencia estructural de sus militantes y por la tanto la poca o nula formación de sus cuadros políticos. Al respecto la misma cooperación internacional focalizó el problema e intentó fortalecer el sistema a través de promover espacios de incidencia de la juventud dentro de los partidos políticos:

Como los jóvenes, las mujeres y los indígenas son los sectores más marginados por las organizaciones políticas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está llevando adelante el programa “Fortalecimiento Democrático de las Organizaciones Políticas de Bolivia”, indica su coordinadora, Gabriela Canedo. “Lo que queríamos hacer era incentivar a que los partidos tomen en cuenta en sus estructuras a los jóvenes y así lograr la democratización interna”, sostiene la gestora en Política de Género, Jóvenes e Interculturalidad. (Ruiz s.f.)

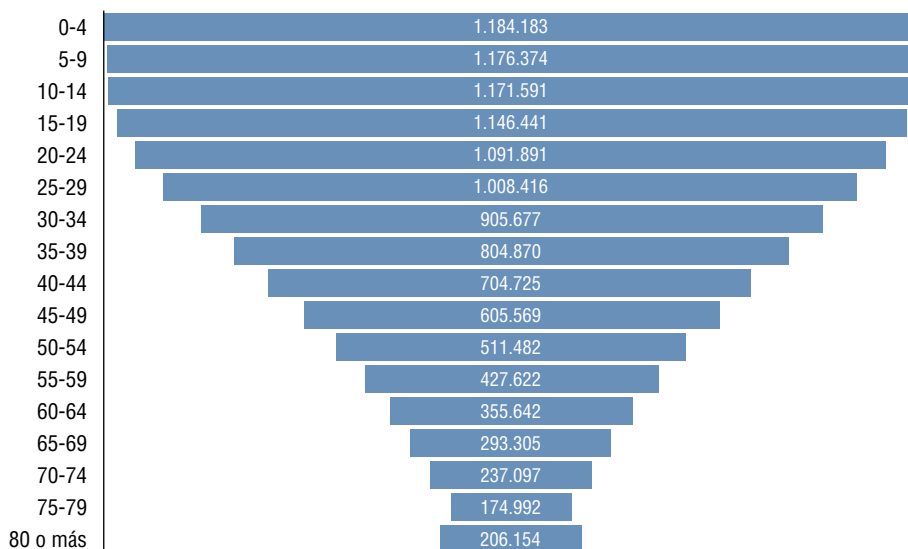
Con todo lo mencionado, se puede observar que los jóvenes de las ciudades no tienen espacio en las instancias políticas y/o sociales que funcionan como mecanismos de representación o de negociación de intereses.

2 Cfr. <https://www.facebook.com/ATBDigital/videos/2290574894334265>

3. Los jóvenes y su participación política

La incorporación de los jóvenes es fundamental porque no se puede ignorar el conjunto que representan en el total de la población. Según las proyecciones del INE para el año 2022 la población que se encuentra entre los 20 a 29 años es de 2,100 millones de habitantes, lo cual representa un 17,5% de la población total del país (12.006.031 Habitantes). La distribución por edades de este grupo poblacional es la siguiente:

Cuadro 1
Pirámide poblacional de Bolivia - Proyección al 2022



Los datos que se observan permiten realizar agrupaciones poblacionales que permiten observar los grupos poblacionales. En primer lugar, se tiene el total de la población que se puede considerar como la cual tiene posibilidades de participación política suma 8.473.883 habitantes. Si dividimos a dicha población en tres secciones: jóvenes, adultos y adultos de la tercera edad tendríamos las siguientes cifras:

- Jóvenes, 15 a 29 años: 3.246.748 - 38,31%
- Adultos, 30 a 64 años: 4.315.587 - 50,92%
- Adultos mayores, 65 en adelante: 911.548 - 10,75%

Pese a esta realidad demográfica y con las limitaciones de participar en organizaciones que sí tienen influencia directa sobre las esferas de poder, la juventud

boliviana no ha podido involucrarse en la política nacional. Además de las explicaciones dadas, el Proyecto Celaju realizó una evaluación de las capacidades de los movimientos juveniles y entre las razones que encontró podemos citar algunas conclusiones del estudio realizado en 2005:

El gran obstáculo es que no tienen la capacidad de organizarse corporativamente de manera que puedan hacer sentir a todos (Estado y Sociedad) su presencia y a partir de ello asuman su rol en el desarrollo de su comunidad. Esta dificultad, que impide que puedan unirse corporativamente es debido a la poca participación, al individualismo o a la búsqueda de intereses particulares, carencia de objetivos comunes, concretos y materiales; y a la competencia que existe entre los diferentes líderes, ya que es más fácil pensar en el “yo”, que en el “nosotros”. Los intentos de jóvenes por salir a la palestra pública y política son a partir de pequeños grupos y que no tienen continuidad en esa su labor (Alfaro 2005, 16).

En el mismo estudio, se cita que existen un sinnúmero de organizaciones juveniles de alcance local, en distintas zonas o barrios existen grupos dedicados al arte, a la cultura, a la cohesión barrial, etc. Pero su incidencia no va más allá de sus zonas, su capacidad organizativa está limitada a espacios pequeños.

En paralelo, los jóvenes, a partir de la globalización y el fenómeno de la interconectividad de lo virtual, han ido tejiendo nuevos lazos e incentivando nuevas iniciativas. Éstas también vienen cargadas de demandas no tradicionales, demandas que no responden a necesidades directas e inmediatas, algo que en la política tradicional es lo habitual cuando las organizaciones sociales interactúan con el Estado en la búsqueda de la satisfacción de sus intereses.

...buena parte de los jóvenes introduce nuevas demandas de reconocimiento, equidad y participación, generando orientaciones y formas culturales de hacer política novedosa. Esta “nueva politicidad” se basa no ya en grandes épicas o relatos, sino en acciones específicas, locales y de resultados concretos. La calidad del medio ambiente es un tema cada vez más valorado, junto con la educación y la tecnología. Asimismo, las nuevas demandas culturales de gran parte de los jóvenes buscan articular identidades múltiples con derechos individuales y colectivos. (Calderón 2012, 15)

Pero además de las nuevas tecnologías los imaginarios y representaciones sobre las instituciones han mutado:

Dentro de este contexto, diversos autores (Duschatzky 2002, Reguillo 2000, Svampa 2005) coinciden con la idea de que las generaciones actuales procesaron de manera singular los cambios sociales, económicos, políticos y culturales de fines de siglo en el marco del capitalismo global y la postmodernidad, cuya principal expresión

ha sido la pérdida de legitimidad y control de las instituciones que caracterizaron hasta entonces al mundo moderno, como la escuela, el trabajo, los partidos políticos. (Patricia Acevedo, Luis Arévalo, Susana Andrada 2013, 3)

Así, los jóvenes en la actualidad son parte de esta nueva politicidad, no tradicional que maneja una nueva agenda y que no persigue la vinculación directa a en instituciones o instancias tradicionales. Sobre esta misma perspectiva se han sumado Ignacio Zuasnabar e Inés Fynn que realizaron una investigación denominada “¿Qué sienten los jóvenes latinoamericanos sobre la política?”. Entre las conclusiones de sus hallazgos se puede observar que

A partir de este concepto de erosión del capital social, se plantea la existencia de procesos de desafección política (...) que afectan a las sociedades en su conjunto, pero que «resalta[n] y se destaca[n] en el mundo juvenil, básicamente por considerar que el sistema político no los representa y no incorpora sus intereses» (Sandoval y Baeza, 2010: 265). Se trata, entonces, de una situación de desencanto con lo público que implica un distanciamiento, acompañado por una pérdida de confianza en las instituciones políticas. (Ignacio Zuasnabar, Inés Fynn 2017, 29)

Es a partir de esta realidad que se comprendió que abordar la temática de Redes de Jóvenes y sus acciones políticas no podía enmarcarse en las teorías de la acción política o aquellas ligadas a los movimientos sociales. Lo más cercano a explicar qué es lo que hacen y generan los jóvenes a través de sus actividades en red podría explicarse a través de una descripción de quienes la componen y qué hacen.

4. La caracterización del trabajo en Red

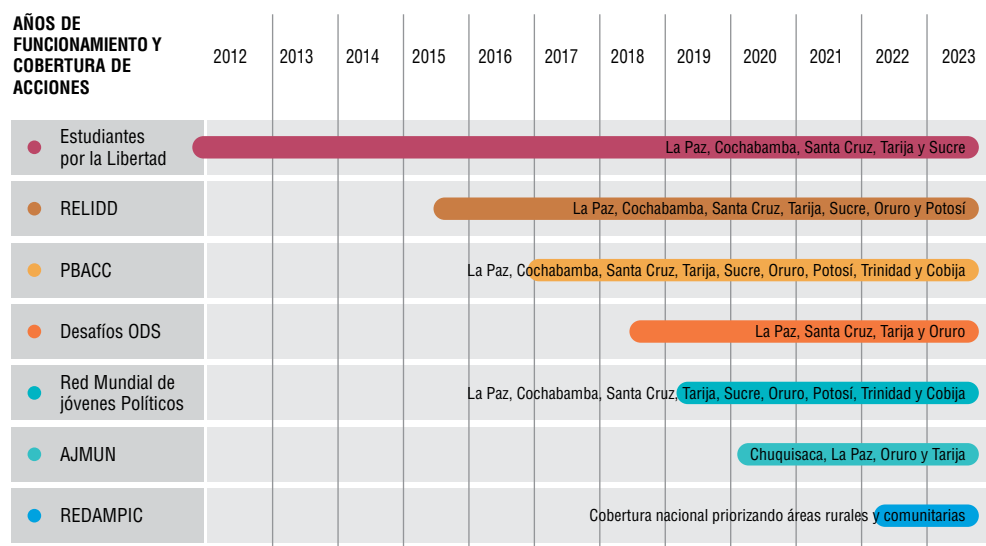
Una de las primeras dificultades en el desarrollo de la investigación tiene que ver con el actual uso del término red, los ejercicios de búsqueda que conectan las palabras jóvenes y redes desvían el tema de atención y lo vinculan hacia el uso y el aprovechamiento que hacen los jóvenes de las redes sociales existentes en la web.

Una segunda dificultad contextual que también tiene que ver con los nuevos entornos culturales está vinculada al concepto de Networking, el mismo está relacionado con las redes de contacto que se forman para aprovechar la diversidad de formaciones profesionales y de alguna manera conformar un staff de trabajo flexible que permite que las personas se aglutinen en cuanto se requiera la presentación o formulación de una propuesta.

De esta forma, la manera tradicional de conformación de una Red se daría en la figura de un encuentro de personas con intereses afines que pretender articular acciones aprovechando el alcance que podrían tener en sus respectivos espacios (llámese organizaciones de jóvenes en este caso) para consolidar procesos de mayor impacto.

5. Redes de jóvenes identificadas

La investigación se ha centrado en indagar las características de siete redes de trabajo de jóvenes cuya finalidad es generar condiciones para cambios socioculturales o proponer cambios políticos. Para delimitar el campo de investigación, se han eliminado aquellas redes que se pueden visibilizar con otras perspectivas o intereses.



5.1. Objetivos de las redes

Luego de la definición de las características y contexto que rodea a los jóvenes que pertenecen a las Redes exploraremos las características de cada una de ellas.

La recolección de datos respecto a los objetivos institucionales se realizó mediante formulario, la intención fue contar con sus puntos de vista respecto de sus organizaciones de primera mano. A partir de ellos, se ha intentado enmarcar el ámbito temático que reúne a cada una de las Redes a las que se hacen seguimiento. En

adelante esto nos permitirá observar cuán centrados se encuentran en sus objetivos o cuán dispersas se pueden observar sus actividades.

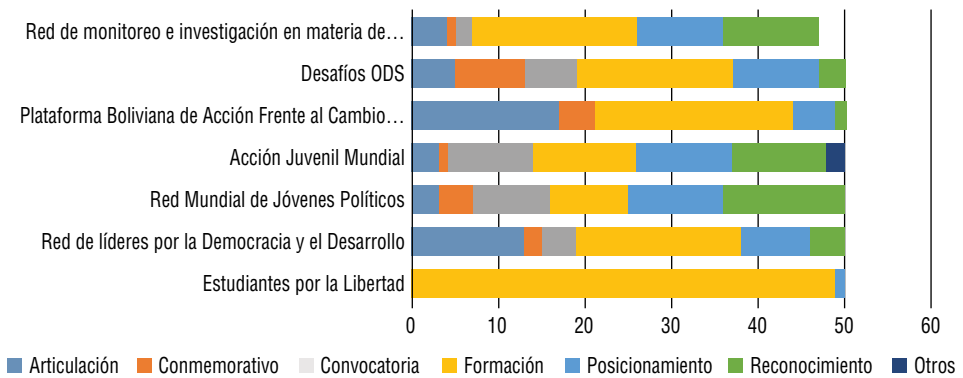
Política	Desarrollar las habilidades de liderazgo de aquellos que apoyan la libertad	Estudiantes por la libertad
	Fortalecer las capacidades de liderazgo y empoderamiento de la juventud para convertirlos en agentes de cambio	Red de líderes por la democracia y el Desarrollo-RELIDD
	Defender, promover y garantizar la democracia; con decisiones políticas que promuevan una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico y de los procesos de mundialización.	Red mundial de jóvenes políticos-REDMUN
Desarrollo	Contribuir a la agenda de Desarrollo Sostenible de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la información, difusión, y acción.	Desafíos ODS
	Implementar decisiones públicas y políticas para promover una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico en pro del Desarrollo Humano,	Acción Juvenil Mundial-AJMUN
Medio Ambiente y Derechos Humanos	Promoción, defensa y protección del derecho a un medio ambiente sano, limpio y sostenible y los derechos de los pueblos indígenas y el pueblo afroboliviano en Bolivia.	Red de monitoreo e investigación en materia de derechos humanos para un ambiente sano-REDAMPIC
Medio Ambiente	Generar procesos de educación, sensibilización ambiental promoviendo la investigación científica y la difusión de la información en acciones de lucha contra el cambio climático y problemáticas ambientales.	Plataforma Boliviana de Acción frente el Cambio Climático-PBACC

La clasificación nos muestra cuál es ámbito de intereses que tiene cada red, es importante tener en cuenta esta división debido a que uno de los primeros hallazgos es que las redes se articulan en función de intereses sobre las temáticas comunes. Al encontrar temáticas en común, las redes empiezan un proceso de alianzas que les posibilitan tener mayor apoyo en las regiones donde quizás no tienen suficientes recursos humanos o no tienen poder de convocatoria. Además, la articulación de redes resulta atractiva en el momento de la búsqueda de financiamientos para los procesos o actividades que tienen planificados encarar.

5.2. Acciones de las Redes

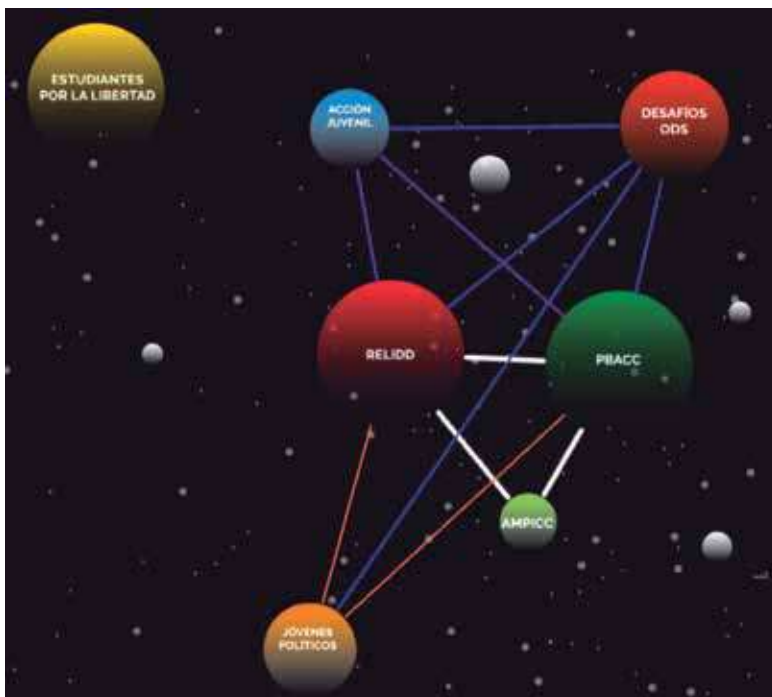
Para realizar un trabajo comparativo entre las acciones desplegadas por las Redes se acudió a sus medios de comunicación. Como se conoce, los jóvenes acuden a sus redes sociales para realizar el trabajo de divulgación de sus actividades, y aunque el ingreso de Instagram y TikTok tiene bastante fuerza, la herramienta privilegiada para comunicarse sigue siendo Facebook. Por ello, se ha realizado un conteo, clasificación y análisis de las 50 últimas publicaciones posteadas en sus respectivas páginas oficiales.

Tipos de actividad realizada según post publicados en Facebook



5.2.1. Acciones posibles gracias a la articulación

Un aspecto importante para la realización de actividades se encuentra en la articulación que pueden generar las redes de jóvenes con tres tipos de instancias: instancias estatales, instancias de la sociedad civil o cooperación, otras redes. Por medio del siguiente gráfico se ha intentado expresar el grado de articulación entre las redes identificadas en el trabajo:



El monitoreo realizado a los post publicados en redes sociales nos muestra que la coordinación con instancias estatales es poca. En el mejor de los casos las redes muestran un trabajo coordinado con gobiernos locales para actividades puntuales, la realización de algún espacio de formación o capacitación o el impulso a través de su participación en actividades de sensibilización vinculadas sobre todo al cuidado del medio ambiente: jornadas de limpieza en lógica de voluntariado o acciones de visibilización de la problemática como el día del apagón.

Otra forma detectada de articulación con instancias estatales se encuentra a través de la participación dentro de los espacios institucionalizados para la participación de los jóvenes. Los dos espacios que han sido identificados en el monitoreo de actividades han sido la participación en cumbres juveniles municipales o los concejos municipales de la juventud. Al respecto, un joven de 25 años de la ciudad de El Alto que ha estado vinculado al trabajo desde las redes jóvenes y organizaciones con su municipio nos mencionaba:

...en el ámbito de la participación y el control social, donde se tiene la representatividad de los jóvenes, se tienen los concejos municipales de la juventud según la norma, denominada Ley de la Juventud (...) si bien estos espacios son coordinados generalmente por las unidades o direcciones de la juventud, según la denominación que tengan desde el ejecutivo municipal, son los jóvenes quienes tienen que elegir a sus representantes y según la normativa para pertenecer a estos espacios es necesario formar parte de una organización juvenil. (ERM 2023)

Si bien el entrevistado mencionó otras instancias y espacios a nivel departamental y nacional, los mismos no fueron observados dentro de las publicaciones compartidas en redes sociales. El último apunte que hay que hacer al respecto es que este tipo de actividades de incidencia no representan más del 5% de acciones realizadas por redes, lo cual es una muestra de la poca incidencia que tienen en el ámbito político institucional.

En tanto que la coordinación con ONG's o cooperación está vinculada a la búsqueda de apoyo en las iniciativas que puedan generarse en las redes. El apoyo puede vehiculizarse mediante la obtención de presupuestos para gastos menores (generalmente destinados a cubrir materiales, refrigerio, obtener un espacio físico).

En otro aspecto de la articulación se encuentra la vinculación existente entre redes y con organizaciones juveniles. Antes de realizar la descripción es necesario reparar en que la Redes se nutren en un 90% de jóvenes que tienen una vinculación con sus propias organizaciones locales. Esto implica que detrás de una red existe un entramado mayor de organizaciones de jóvenes de alcance local. Esto les permite:

ampliar la capacidad de convocatoria para las actividades; fortalecer el equipo que estará a cargo de la organización y ejecución de las mismas.

Respecto al poder de la articulación podemos citar el testimonio de una joven de 29 años que se encuentra vinculada con organizaciones y redes hace diez años, cuando ella menciona que la motivación para pertenecer a una red es *“Ejercer mi ciudadanía de una manera más activa, apoyar causas en colectivos porque tiene más fuerza y resonancia que hacerlo de manera individual”*. (JSJ 2023)

Un segundo hecho que es necesario mencionar se encuentra en las posibilidades de articulación que existen y permiten que las redes realicen un trabajo en conjunto. La composición de las redes hace que entre ellas existan integrantes que estén vinculados a dos redes al mismo tiempo o que hayan formado parte de una antes de formar parte de la otra, este aspecto se podrá observar en la identificación del trayecto de los jóvenes líderes. Por otro lado, existen historias en el origen mismo de las redes que las hacen más cercanas unas a otras:

- La PBACC y la RELIDD son redes que nacieron desde la iniciativa de jóvenes formados por las mismas instancias. Dichas redes se conformaron luego de un proceso de formación impulsado por una organización de la sociedad civil y una instancia de la cooperación alemana. Este origen hace que sean afines y que varios de sus miembros hayan transitado en dichos espacios de formación.
- REDAMPIC, la red de jóvenes más nueva dentro de las identificadas para este estudio, surge a partir de la motivación de miembros de la PBACC y RELIDD que encontraron una motivación particular que no estaba siendo atendida por las redes de mayor antigüedad. Este hecho posibilita que el nacimiento de esta tenga el apoyo necesario mediante su articulación.
- El caso particular está representado por la Red de Estudiantes por la libertad que en sus redes no registra ninguna actividad de articulación con otras redes. Al respecto la interpretación de esta singularidad fue preguntada a una joven quien nos mencionó que la característica de ser una red de formación académica política la hace distinta a otras redes, además de que la mencionada posee fondos necesarios para la realización de todas sus actividades, lo cual influye en que no necesite articularse con otras para la realización de sus actividades. (Cfr. VQ 2023)

5.2.2. *¿Cómo convocan las redes?*

Las redes de jóvenes requieren integrantes que se comprometan a brindar su tiempo y capacidad para las diferentes actividades. Por ello, se acude a diferentes

estrategias que permiten “reclutar” nuevos componentes. La pesquisa realizada a sus páginas de facebook permitió identificar distintas estrategias que posibilitan la llegada de jóvenes a las redes:

- Convocatorias abiertas son utilizadas por ejemplo por la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Acción Juvenil Mundial y Desafíos ODS. Las redes publican sus convocatorias con enlaces de inscripción solicitando el envío de sus hojas de vida para una evaluación. Este tipo de convocatoria funciona en la lógica de voluntariado y permite llegar a un mayor número de integrantes. Además dichas convocatorias se realizan por ciudades, es así que los post de convocatoria representan un número mayor en comparación a otras redes.
- En el caso de PBACC y RELIDD estas organizaciones se alimentan de espacios de formación que son convocados previamente, dichos espacios funcionan como una especie de tamis que hace que quienes “vencen” aquellos procesos de formación puedan formar parte de las redes. Cómo se observó, la REDAMPIC emerge en parte de estas iniciativas y también adopta este tipo de convocatoria. Por esta situación pueden llegar a poseer un número menor de integrantes frente a las redes de convocatoria más abierta. Estas convocatorias tienen carácter nacional.
- El proceso de Estudiantes por la Libertad incluye un proceso que implica: inscripción, entrevistas, capacitación y luego selección de integrantes. Este proceso a diferencia de los otros se da de manera Regional (en este caso Latinoamérica), se nos informó que en el caso de Bolivia en la face de inscripción participan al menos entre 90 a 120 jóvenes, de los cuales llegan a ser seleccionados en promedio un número de 25 personas al año.

5.2.3. Formación, la mayor preocupación de las Redes

Tal como lo muestra el cuadro, las actividades de formación son aquellas que ocupan el mayor tiempo de los integrantes de las redes. Ahora bien, es necesario hacer un apunte sobre el tipo de acciones que han sido agrupadas en el ámbito de la formación, porque las mismas pueden tener carácter de proceso de transformación más allá del conocimiento (formación), adquisición de conocimientos y habilidades particulares (capacitación), iniciativas vinculadas a compartir datos y conocimientos concretos (información) y espacios destinados al análisis o el debate (reflexión).

El peso de la formación en las redes puede observarse en líderes que, al responder a la pregunta ¿Cuál fue principal intereses para participar de una organización o red de jóvenes?, mencionaron: “*Aprender, desarrollar nuevas habilidades*” (BPH

2023); “Tener más posibilidades de acceder a una beca académica” (YGS 2023); “El fortalecimiento de habilidades y la identificación con los valores y objetivos de la organización” (EP 2023).

a) Formación

Se han visibilizados el impulso de programas de formación concretos que son realizados en articulación con instancias de la sociedad civil y/o la cooperación. Esta característica quizás se deba a que dichos procesos son más largos y complejos, por ello se requiere de una mayor cantidad de recursos económicos para llevarlos adelante. Aunque esta característica fue superada en parte debido a la llegada de la pandemia y la extensión de experiencias pedagógicas virtuales, hecho que disminuyó costos. Las iniciativas de formación en las redes tienen un promedio de duración mayor a seis meses.

Algo que puede definir a la formación es que la misma persigue una especie de inducción al compromiso de los objetivos que se persiguen. De esta forma, cada Red y los programas de formación adyacentes que las conforman o definen logra la familiarización con la terminología y la forma de entender y comprender las temáticas que se abordan. No se utiliza la palabra ideologización porque la misma estaría anclada a posicionamientos políticos ajenos a los intereses de los jóvenes.

Dicho de otra forma, por el tipo de contenido que se observó en los post de sus páginas está dirigido a que los y las jóvenes se comprometan con acciones dirigidas a: desarrollo sostenible; democracia; medio ambiente y cambio climático; derechos humanos; cultura de paz; feminismo, etc. El único caso en el que las actividades de formación podrían calificarse como la formación de una posición política es aquella que lleva adelante la Red de Estudiantes por la Libertad, colectivo que asume el liberalismo o “libertarianismo” como horizonte político deseado.

Finalmente, el apunte que se hace necesario es que las Redes y la pertenencia a ellas funcionan como un criterio de selección de líderes para iniciativas de las organizaciones no gubernamentales o de la cooperación. Se ha conversado con jóvenes que a partir de su pertenencia a redes han logrado ingresar a iniciativas de formación diversas. Y de la misma forma se ha conversado con funcionarios de dichas instancias, quienes han afirmado que sus procesos de formación “escogen” jóvenes líderes que puedan generar cambios que desean, para saber quiénes son líderes uno de los criterios comunes es su militancia activa y visible dentro de partidos políticos u organizaciones sociales pero además también se toman en cuenta a jóvenes que están vinculados a las redes.

Las diferentes conversaciones y monitoreo de páginas mencionaron algunos espacios de formación impulsados por ONGs y cooperación que tuvieron una importante presencia de jóvenes vinculados a las redes identificadas en este análisis descriptivo. Así podemos mencionar los siguientes: *Programa Protagonistas* de la Coordinadora de la Mujer y la Fundación Idea; Campus Konrad Adenauer Stiftung *Constructores de Paz*; *Red plurinacional de jóvenes hacia la reconstrucción del tejido social* del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; *Construyendo paz con igualdad* de ONU Mujeres;

b) Capacitación

Los espacios de capacitación se pueden dar en una Red en un promedio de una vez por año, éstos pueden tener en promedio una duración tres meses como máximo. Allí se pretende que los integrantes de la Red y/o personas externas adquieran algún tipo de conocimiento práctico. Se ha podido observar que no todas las redes a las que se ha realizado el monitoreo poseen este tipo de actividad pedagógica, sólo mitad de ellas publicitó o informó sobre este tipo de espacios.

Aquellos temas que se han podido ver son: uso de terminología o conceptos ligados a cambio climático o medio ambiente; conocimiento sobre administración pública a través del manejo del contenido de la Ley SAFCO; manejo de técnica legislativa para incidencia legislativa ciudadana.

Un aspecto interesante entre las iniciativas de capacitación se encuentra en la aplicación de las metodologías de simulación. Dentro de estos espacios se puede mencionar una experticia desarrollada por la PBACC, red que utiliza una metodología de simulación de las NNUU para generar un espacio de negociación sobre temas medioambientales. Dicha experticia los ha convertido en la Red que se encarga de realizar simulaciones desde donde participar como jóvenes en los espacios LCOY³ y de allí surgen los representantes del país para participar de la Climate Change Conference of Youth la cual por ejemplo en el año 2022 se realizó en Egipto.

Una temática donde organizaciones de la sociedad civil como Construyendo Redes y la Alianza OCD Bolivia impulsaron liderazgos aprovechando a líderes de redes fue un curso llamado: *Revalorizando el Rol de la Asamblea Legislativa*, donde

3 “La Conferencia Local de la Juventud sobre Cambio Climático en Bolivia (LCOY Bolivia) tiene como objetivo construir de manera inclusiva y participativa la Declaratoria Climática Nacional de las Juventudes bolivianas, un documento que contendrá la visión de los jóvenes de todo el país con relación a la problemática del cambio” (PBACC 2023).

los participantes aprendían sobre técnica legislativa a través de la metodología de simulación parlamentaria.

c) Información

Las actividades de información son actividades puntuales y específicas donde las Redes pretenden que la población conozca de manera puntual algunos aspectos de los temas que son de interés de las redes. En muchas ocasiones la línea entre la sensibilización y la información es muy delgada, mediante estas actividades a veces se consiguen ambos objetivos y en otras se persigue uno de ellos.

Para realizar el traspaso de información a la población las redes utilizan distintas herramientas y metodologías:

- **Conversatorios:** La llegada del COVID impulsó la programación de espacios virtuales de información, así las redes pueden convocar de forma abierta a que otros jóvenes o la población en general participen de sesiones zoom o puedan observar transmisiones en línea a través de sus páginas de facebook.
- **PodCast:** Otra de las herramientas de tecnología abierta que se observa que las redes están empezando a utilizar son la producción de audios que pueden ser escuchados en línea en cualquier momento. Esta herramienta requiere de un mayor proceso de producción por lo cual es la que menos se observa en el monitoreo de sus páginas. Son dos redes las que han incursionado en este ámbito, RELIDD y PBACC.
- **Reels o videos cortos:** Siguiendo la tendencia de utilización de herramientas tecnológicas las redes de jóvenes generan videos cortos de explicación sobre algún tema específico. Aunque esta herramienta es de menor producción, en cuanto al tiempo y esfuerzo necesarios, se trata de instrumentos que no están siendo utilizados de forma continua.
- **Infografías:** Se trata de diseños realizados mediante programas abiertos y en línea que permiten explicar algún tema o asunto de manera sintética y con una dinámica visual ágil y atractiva para los jóvenes. Esta herramienta es común entre las redes y es utilizada tanto para informar sobre las propias características de las organizaciones como temas sobre los cuales las redes quieren que la población en general tenga conocimiento.

d) Reflexión

Las actividades que se pueden introducir en la categoría de espacios de reflexión poseen la característica de ofrecer diferentes versiones respecto a una problemática,

generar el debate entre posiciones respecto a un tema, posibilitar el intercambio de conocimientos y reflexiones propias a partir de un hecho, tema o asunto. Al respecto se han observado tres formas utilizadas por las redes:

- Algunas redes generan concursos de debate como una forma de impulsar el conocimiento sobre algunos temas o desde la intención de potencializar sus liderazgos, estos debates incluso llegan a darse en espacios de elección de representantes locales o nacionales. La metodología del debate también es utilizada invitando a personas externas a las redes, expertos académicos o especialistas según áreas para que la confrontación de ideas sea un momento de aprendizaje para quienes asisten.
- Las redes también organizan foros o paneles de forma presencial o virtual, estos espacios también permiten que el intercambio de ideas amplie el conocimiento y/o posicionamiento respecto de alguna problemática. Estos mecanismos son utilizados generalmente como una reacción a la coyuntura, sobre todo en las redes de características o finalidades políticas, organizándose los espacios para analizar, evaluar y dialogar sobre temas de interés actual.
- Finalmente, una nueva herramienta pedagógica que al parecer está empezando a ser muy explotada en Bolivia y en las redes a las que se hizo el seguimiento es la organización de Clubes de Lectura. La red que más utiliza esta herramienta son los Estudiantes por la Libertad, al tratarse de una red que persigue la formación político académica de sus miembros y la expansión del liberalismo o libertarismo parece que estos espacios de convocatoria abierta sirven muy bien para que después los jóvenes se enteren de la existencia de la red y quieran participar de ella de forma más comprometida luego.

5.2.4. Qué significa posicionar la Red

Todas las Redes de jóvenes en general persiguen ampliar su cobertura y generar un mayor impacto, para ello es necesario visibilizar la importancia de la Red en la sociedad y en el ámbito de los intereses de los jóvenes. Las redes dedican una cantidad importante de su tiempo, sobre todo cuando tienen poco tiempo de existencia o presencia en el país, para informar a otros jóvenes sobre sus logros.

Es muy importante “publicitar” algún convenio generado con instancias públicas, las que se visibilizan más son las actividades que se realizan en coordinación con los municipios; por otro lado, es imprescindible que ante cualquier reconocimiento (se han detectado hasta tres reconocimientos otorgados por la Cámara de Diputados y varios por los municipios que reconocen sus acciones) el mismo sea posteado en la página oficial.

Otro ámbito que es necesario que los jóvenes conozcan es cómo los integrantes de las redes participan de espacios organizados por otras instancias (estatales, de la sociedad civil, cooperación o universidades). Esto resulta muy atractivo para que una mayor cantidad de jóvenes observe cómo se abren oportunidades de inserción laboral, relacionamiento público, redes de contactos.

De la misma forma, el posicionamiento de cada una de las Redes funciona efectivamente para que las mismas se conviertan en una “fuente confiable” de recursos. Ante un escenario en el que el empleo para los jóvenes es escaso, y ante las exigencias de experiencia profesional, las redes y organizaciones de jóvenes para muchos se convierten en los primeros antecedentes de sus hojas de vida. Esta pertenencia y compromiso activo en redes, como se verá en el siguiente punto, significa que otras instancias tomen en cuenta a jóvenes cuyo compromiso voluntario y/o iniciativa propia de autoformación granjeen posibilidades de becas o participación en otros programas de formación y/o intercambio internacional.

Ante la pregunta de si su pertenencia a redes influyó en oportunidades laborales o académicas a las que tuvo acceso, algunos entrevistaron dijeron:

“Al ser miembro de la RELIDD y la PBACC las fundaciones patrocinadoras me dieron la oportunidad de optar por consultorías cortas” (YGS 2023); “Si, no contaba con experiencia laboral como solo con pasantías y peso mucho la experiencia que el voluntariado me dio” (AG 2023); “Si, por que las organizaciones, junto a las redes sociales ayudan a visibilizar tu capacidad y compromiso” (JSC 2023); “Sin duda fue así, desde la primera organización en la que estuve fui incorporando habilidades técnicas y de liderazgo que encaminaron mi desarrollo profesional. Mi trabajo actual está dedicado a trabajar con organizaciones de NNAJ”. (EP 2023)

5.2.5. El necesario reconocimiento

Ligado al anterior aspecto, las redes trabajan mucho sobre la imagen de sus líderes. Al contrario de algunas afirmaciones teóricas que manifiestan que las redes rompen con estructuras jerárquicas e instituyen relaciones horizontales, todas las redes monitoreadas poseen niveles donde se eligen representantes nacionales, embajadores departamentales, coordinaciones nacionales y/o departamentales, etc. Esto demuestra que la institucionalización de las estructuras jerárquicas también se repite en las redes de jóvenes.

Dichas estructuras siempre son “publicitadas” en post que mencionan el fin de una gestión y el inicio de una nueva, dichos post visibilizan con nombre, apellido e imagen a los jóvenes que componen las diferentes “directivas” de las redes.

Es necesario apuntar que como se dijo anteriormente, las redes constituyen las primeras experiencias de liderazgo y al mismo tiempo trabajo operativo, logístico, organizativo para los jóvenes, quienes adquieren experiencia en la realización de actividades. La realización de acciones también implica que los jóvenes que pertenecen a directivas ingresen en el mundo de las relaciones institucionales, porque deben “tocar puertas” de diferentes instancias estatales, civiles o de cooperación para obtener el apoyo necesario. De allí surge una especie de reclutamiento de los mejores cuadros, éstos reciben ofertas tanto para trabajar en diferentes instancias como para formar parte de estructuras de organizaciones sociales o de partidos políticos.

Es así que uno de los comunes indicadores de las ONGs y la cooperación internacional en los informes de resultados suele incorporar la contabilidad y/o sistematización sobre cuántos jóvenes formados llegan a ocupar puestos de autoridades o funcionarios públicos con puestos de decisión.

6. ¿Quiénes son los jóvenes de las redes?

Entre los hallazgos realizados durante las conversaciones, encuestas y monitoreo de redes sociales se encuentran las características que poseen los integrantes de las redes. Las mismas permiten conocer qué tipo de jóvenes y qué sector de la población habita estos espacios y, desde allí, conocer cuáles son los intereses y los beneficios que se obtienen al trabajar en redes.

- Una de las principales características de las redes es que sus componentes son mujeres, haciendo un promedio entre las respuestas de 19 líderes se obtuvo que el 65% de integrantes activos son mujeres frente a un 35% de varones. El dato llama la atención a primera vista, pero si se lo compara con las estadísticas del INE respecto de los Alumnos titulados en la Universidad Pública según sexo en el año 2021 existirían 31.728 titulados en el sistema universitario público, de los cuales 12.741 (40,15%) son varones y 19.057 (60,06%) son mujeres. Cfr. (Instituto nacional de estadísticas 2023)
- El segundo es que la totalidad de integrantes de las redes poseen una formación universitaria o se encuentran en plena carrera. Algunos realizando una segunda carrera a nivel de licenciatura, otros realizando estudios de postgrado.
- La tercera característica es que quienes están activos en las Redes se encuentran entre los 21 a 29 años de edad. Jóvenes de menor edad pueden estar viviendo sus primeras experiencias dentro de organizaciones juveniles

o voluntariados, estos espacios les permitirán que luego conozcan las redes y se interesen en pertenecer a ellas.

- Un cuarto dato importante, porque es necesario de mencionar en la medida que las redes requieren el compromiso de sus integrantes y, por lo tanto, la disponibilidad de tiempo necesaria, es que ninguno de los 19 líderes con quienes se tuvo contacto ha conformado una familia o se encuentra en situación de convivencia o matrimonio. Esto puede explicarse por dos motivos: las responsabilidades de un hogar pueden estar enfrentadas al trabajo voluntario; los proyectos de vida de los jóvenes de las redes, acotando que dicho término ha empezado a ser utilizado por los jóvenes hace unos seis u ocho años como máximo, están planificando mayores logros académicos y/o profesionales.
- Por otra parte, se puede decir que la presencia de las redes es urbana y por lo tanto casi todos sus integrantes residen en las ciudades capitales de departamento. Poco a poco, parece ser gracias a los avances de la interconectividad digital se están abriendo espacios en el área rural y con poblaciones indígenas, un ejemplo es la REDAMPIC sobre la cual tendrá que verse su sostenibilidad en un futuro.

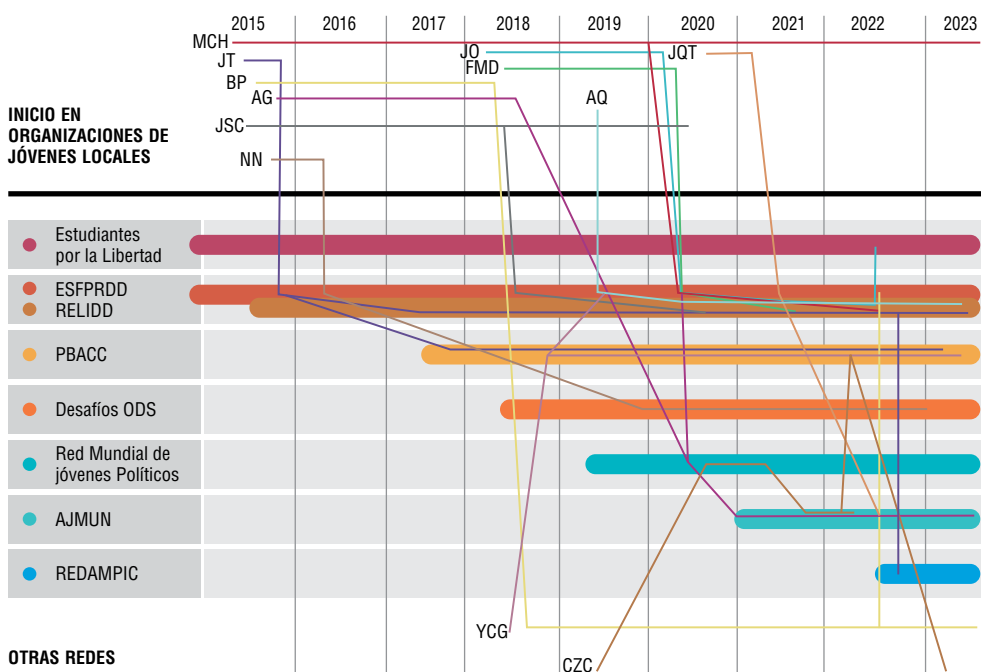
Todas las características objetivas citadas forman parte de una base material de condiciones propias que tienen quienes integran las redes, éstas se entrelazan con fenómenos o problemáticas que también determinan una situación generacional.

- Son jóvenes que no conocen otro gobierno más que todos los periodos donde el MAS gobernó, exceptuando el corto periodo de tiempo de Jeanine Añez. Lo que también significa que siempre vieron y vivieron la polarización política que asumió dos bandos, quienes apoyaban al partido en función de gobierno y quienes lo rechazaban.
- Todos viven la necesidad apremiante del empleo y se enfrentan a un contexto de flexibilización laboral y precarización del trabajo. Así esta necesidad es algo que los une. La ampliación de la profesionalización en Bolivia los enfrenta a un mercado laboral que no requiere tantos profesionales y la competencia para obtener puestos de trabajo es mucho más competitiva.
- Al ser un grupo que se ha formado, además de la universidad, en distintos espacios de alternativos poseen intereses y conocimientos de temáticas vinculadas al desarrollo, la democracia, cultura de paz, medio ambiente. Porque las mismas responden a las agendas priorizadas por la cooperación.

7. La interconectividad de los jóvenes y las redes

Durante el desarrollo del texto, el lector pudo observar que las redes identificadas se articulan entre sí. También se mencionó que las mismas se convierten en una fuente de identificación de líderes que responden a convocatorias abiertas, seleccionados por su pertenencia a redes, o son captados de las mismas redes mediante invitaciones de representación.

Entre las preguntas cerradas de las entrevistas que se realizaron existía una que indicaba lo siguiente: Podrías señalar las organizaciones y redes a las cuales perteneciste. Debido a la formulación de sus respuestas, no se pudo reconstruir su trayectoria en organizaciones y redes en todos los casos; sin embargo, tenemos ejemplos de diez líderes sobre los cuales se han diagramado unas “líneas de vida en organizaciones y redes”.



El cuadro nos permite observar los siguientes aspectos:

- La mayoría de los integrantes de redes, antes de su ingreso, pertenecía a otras organizaciones locales que se tomarían como la primera etapa de formación de su liderazgo.

- Existen jóvenes líderes que han formado parte de la fundación de nuevas redes a partir del fortalecimiento de su liderazgo.
- El promedio de su vinculación en los espacios de jóvenes es de ocho años. En el caso de quienes comenzaron en una edad que rondaría los 18 años, y actualmente están a punto de cumplir 29, han estado vinculados a organizaciones y redes durante una década.
- La pertenencia a una red u organización no es sinónimo de exclusividad, los jóvenes pueden ser parte de hasta tres espacios de jóvenes cuando el tiempo se los permite.
- Parece existir un salto entre pertenecer a organizaciones locales y el momento de ingresar a redes. Cuando se da el ingreso a redes, al parecer, existe un abandono de sus organizaciones locales en la mayoría de los casos. Aparentemente se privilegia la pertenencia a organizaciones con un mayor alcance territorial.

8. El rol de la cooperación

Durante el texto se ha mencionado el apoyo que reciben las redes de jóvenes de parte de las agencias de cooperación o de ONGs para la realización de sus actividades. En este sentido hay que evidenciar algunas formas de trabajar de las agencias de la cooperación y/u ONGs.

En primer lugar, existen programas de formación vinculados directamente a formar a jóvenes en la lógica de agentes de cambio. Ello significa apostar a la formación de jóvenes asumiendo que este trabajo será replicado en diferentes espacios y a través de sus actividades. Se trata entonces de programas que tienen un proceso de selección con un currículo académico de acuerdo a las líneas temáticas que sigue cada agencia o cooperación.

En segundo lugar, están los espacios de sensibilización donde se convoca a jóvenes de distintas organizaciones y redes para tener momentos en los cuales se generen agendas de trabajo que comprometan a los jóvenes en distintas actividades que son impulsadas por las propias agendas de la cooperación.

Estas apuestas pueden ser observadas en estas palabras:

La consolidación de la agenda de desarrollo e inversión social debe asumir que el futuro de América Latina depende en buena medida del insoslayable compromiso con el presente y futuro de los jóvenes. Por esta razón será determinante para el

progreso de la región contar con agentes de cambios preparados y con las habilidades necesarias para que sus propuestas de acción tengan una real incidencia en la calidad de vida de los latinoamericanos (Cooperación Andina de Fomento 2017)

Como marco general de los programas de la cooperación que se vinculan con los jóvenes como un sector priorizado se puede citar uno de los objetivos del Programa UNFPA que es reconocido en convenio con el estado boliviano para el periodo 2013 – 2017: “*b) ampliar los medios de acción de las mujeres indígenas, los adolescentes y los jóvenes para que ejerzan sus derechos humanos*” (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 2013, 218). En consecuencia, no se debe olvidar que la formación de líderes forma parte de la tradición de las agencias de cooperación y ONGs, la formación de líderes indígenas no se puede comprender sin la intervención de largos procesos dados en la década de los años 80’ y 90’ en nuestro país; por otro lado, también están los propios procesos de impulso a instituciones de vinculadas a las luchas de género.

Una explicación consecuente es la necesidad de potenciar los liderazgos de poblaciones vulnerables, en este caso de la juventud que en la actualidad no ha logrado obtener, por las dificultades y contexto político abordados en el texto, frente a los avances históricos de los pueblos indígenas o las mujeres en la conquista de sus derechos.

De esta forma la identificación de la acción que tiene la cooperación internacional y las ONGs con los jóvenes puede tomarse desde una doble perspectiva: otorgar el protagonismo en la generación del desarrollo y potencializar la acción de defensa de sus derechos. En paralelo, obviamente la cooperación impulsa una agenda de desarrollo que muchas veces forma parte de acuerdos internacionales y bajo esta impronta la formación que otorga y el apoyo a iniciativas que ofrece se encuentra vinculado a las temáticas propias de dicha agenda.

9. Conclusiones

Resultado del análisis realizado al trabajo que realizan las redes de jóvenes, la identificación de las características de quienes conforman las redes, además de una descripción del contexto político que rodea sus posibilidades de participación política, se pueden obtener algunas conclusiones.

- a) La participación política de los jóvenes, que no pertenecen a estructuras partidarias que tienen bastante descrédito para ellos, está limitada a las posibilidades locales que les brindan los espacios de cumbres juveniles, concejos

municipales de la juventud y asambleas departamentales de la juventud. Allí es donde pueden insertar sus demandas. Paralelamente, debido a sus características tampoco pueden formar parte activa o dirigencial de espacios como juntas vecinales, sindicatos o gremios, lo cual limita su participación.

- b) El contexto educativo amplió la profesionalización, aunque la misma no les parece suficiente en función de sus intereses alternativos. La conformación de organizaciones locales y redes amplía sus posibilidades de formación. En el caso de las redes estudiadas, las mismas permiten ampliar sus conocimientos y prácticas en lo que respecta a agendas de largo plazo como ser: medio ambiente, desarrollo, democracia, derechos humanos, género y cultura de paz, entre las que se han podido observar. Para ello acuden a una amplia gama de metodologías de formación que les permiten lograr sus objetivos. Resulta importante concebir la formación como una acción política.
- c) En razón de las limitaciones económicas, es necesario recordar que otro tipo de organizaciones de adultos tienen mecanismos para la recaudación de fondos, los recursos económicos necesarios obligan a que los jóvenes acudan a apoyos de la cooperación y ONGs para la realización de sus actividades. Esto implica también que la agenda de actividades tenga interconexión con los ámbitos temáticos priorizados por la cooperación. Bajo esta misma necesidad, las redes de jóvenes acuden a generar convenios con las instancias gubernamentales sobre todo locales; los espacios con instancias del Estado central son mucho más reducidos, aunque a veces se logran apoyos puntuales de los ministerios.
- d) Las mismas razones económicas, impulsan a que los jóvenes realicen acciones de incidencia política dirigidos hacia el cambio socio-culturales en las temáticas ya mencionadas, acudiendo a herramientas digitales gratuitas como la producción de videos, reels, podcast u otros.
- e) La conformación de redes se convierte en el mecanismo por el cual pueden interconectarse con “los otros”. Todas las redes identificadas tienen un alcance territorial de, al menos, cuatro departamentos en los casos de menor tiempo de constitución. Esta conexión con la diferencia regional se convierte en un buen espacio para trabajar la cohesión social. La pertenencia y actividad en redes también les permite conocer otras iniciativas de jóvenes a las cuales se adscriben, en muchos casos se observa dobles o triples pertenencias a redes de jóvenes.
- f) La características de intercambio de miembros entre redes, por otro lado posibilita la articulación entre las instancias. Esto se hace necesario en función de aunar esfuerzos por objetivos comunes, ya que las actividades requieren la participación comprometida de varias personas y el intercambio práctico de las capacidades personales.

- g) La propia diversidad existente entre los miembros de las redes en un contexto de polarización crea la necesidad de no abordar o tomar posturas políticas de apoyo o rechazo al gobierno, debido a que ello significaría un peligro para la estabilidad de la propia red. Así, las temáticas que se manejan se pueden concebir como aglutinadoras. Solamente se han identificado dos redes, de las siete estudiadas, que poseen una posición política manifiesta; en el caso Estudiantes por la Libertad su formación y acción está dirigida a fortalecer y expandir el liberalismo; mientras que la Red Mundial de Jóvenes Políticos, es afín a los mismos objetivos pero con temáticas como la despatriarcalización o desconolización, temáticas muy cercanas a las posturas del partido en función de gobierno.
- h) Llama la atención la amplia participación de mujeres frente al número de integrantes varones en las redes. Como se observó el fenómeno de formación universitaria transita las mismas características. Esta característica también impulsa a que parte de las agendas temáticas estén vinculadas a las reivindicaciones de género. Aunque el término empoderamiento ya forme parte de un léxico del pasado, parece adecuado afirmar que las mujeres, desde el ejemplo de su pertenencia y liderazgo en sus respectivas redes, han tomado este tipo de organizaciones y de allí podrían surgir cambios importantes.
- i) Finalmente, si se toma en cuenta el tiempo que les ha llevado a las organizaciones indígenas o de mujeres tomar protagonismo en la vida política del país y asumir representación política propia, aunque la misma también requiere de crecimiento y consolidación; se puede afirmar que el movimiento juvenil está en pleno proceso de maduración y poco a poco encuentra resquicios para su participación y protagonismo.

Bibliografía

AG

2023 Entrevista de Alejandro Carvajal. (27 de 4 de 2023).

AJMUN, Acción Juvenil Mundial

2020 *Página de Facebook*. 27 de Agosto de 2020. <https://www.facebook.com/profile.php?id=100064605197411> (último acceso: 4 de Junio de 2023).

Alfaro, Ariel

2005 *Organizaciones y Movimientos Juveniles en la Ciudad de La Paz - Estudio de Caso en Bolivia - Evaluación de las Capacidades Institucionales de Organizaciones y Movimientos Juveniles en la Región Andina*. La Paz: Proyecto Celaju - Banco Mundial - UNESCO.

Bolivia, Estudiantes por la Libertad

2013 *Página de Facebook*. 13 de Julio de 2013. <https://www.facebook.com/EstudiantesPorLaLibertadBolivia> (último acceso: 2023 de Junio de 10).

Bolivia, Red mundial de Jóvenes Políticos

2019 *Página de Facebook*. 29 de Mayo de 2019. <https://www.facebook.com/profile.php?id=100068961168270> (último acceso: 2023 de Mayo de 30).

Bolivia, REDAMPIC

2022 *Página de Facebook*. 29 de Septiembre de 2022. <https://www.facebook.com/redampic.bolivia> (último acceso: 5 de Junio de 2023).

BPH

2023 Entrevista de Alejandro Cavajal. (26 de 4 de 2023).

Calderón, Fernando

2012 *América Latina y El Caribe: Tiempos de cambio. Nuevas consideraciones sociológicas sobre la democracia y el desarrollo*. Buenos Aires: FLACSO.

Carrasco Michel, Daniela

2014 “CLACSO”. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20140605122129/informefinal.pdf> (último acceso: 3 de Junio de 2023).

Climático, Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio

2018 *Página de Facebook*. 3 de Enero de 2018. <https://www.facebook.com/pbacc.bolivia> (último acceso: 2023 de Mayo de 25).

Cooperación Andina de Fomento CAF

2017 22 de Febrero de 2017. <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2017/02/la-formacion-de-jovenes-lideres-impulsa-el-desarrollo-de-america-latina/> (último acceso: 10 de Junio de 2023).

Desarrollo, Relidd - Red de Líderes por la Democracia y

2017 *Página de Facebook*. 4 de Enero de 2017. <https://www.facebook.com/RELIDDBO> (último acceso: 9 de Junio de 2023).

EP

2023 Entrevista de Alejandro Carvajal. (28 de 4 de 2023).

ERM

2023 Entrevista de Alejandro Carvajal. (3 de 5 de 2023).

Ignacio Zuasnabar, Inéz Fynn

2017 “¿Qué sientes los jóvenes latinoamericanos sobre la política?” *Dialogo Político*.

Instituto nacional de estadísticas

2023 <https://www.ine.gob.bo/index.php/universidades-publicas/> (último acceso: 6 de 5 de 2023).

JSC

2023 Entrevista de Alejandro Carvajal. (27 de 4 de 2023).

- JSJ
2023 Entrevista de Alejandro Carvajal. (27 de 04 de 2023).
- Merayo, Eliza Hernández
2011 “El compromiso cívico y político de los jóvenes”. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 05 2011.
- Ministerio de Planificación del Desarrollo
2013 *La cooperación internacional en Bolivia 2013*. La Paz: MPD.
- ODS, Desafío
2019 *Página de Facebook*. 16 de Mayo de 2019. <https://www.facebook.com/desafioods.bo> (último acceso: 2023 de Mayo de 27).
- Patricia Acevedo, Luis Arévalo, Susana Andrada
2013 “Jóvenes y acción política. Una revisión entre el ‘idealismo y la apatía’”. *Perspectivas y debates actuales a 30 años de la democracia*. Córdoba.
- Paz Rada, Eduardo
2023 “SciELO-Bolivia”. 1 de Junio de 2023. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29152017000100004 (último acceso: 3 de Junio de 2023).
- PBACC
2023 *Página Facebook LCOY*. 3 de 5 de 2023. https://www.facebook.com/Lcoy.Bolivia/?locale=es_LA (último acceso: 3 de 5 de 2023).
- Ruiz, Daniel Cotillas
2023 “Nodo Común”. s.f. <https://nodocomun.org/procesos/jovenes-por-bolivia/#> (último acceso: 3 de Junio de 2023).
- Tapia, Luis
2009 “Representación, participación y democratización en las relaciones Estado-sociedad civil en Bolivia”. En *La “Nueva Izquierda” en América Latina*, de VARIOS, 119-130. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2009.
- VQ
2023 Entrevista de Alejandro Carvajal. (3 de 5 de 2023).
- YGS
2023 Entrevista de Alejandro Carvajal. (26 de 4 de 2023).

Movimientos ambientalistas del Siglo XXI en Bolivia

*Rocío Estremadoiro Rioja*¹

Resumen

Este capítulo hace un breve esbozo de los movimientos ambientalistas en Bolivia en el Siglo XXI en el marco de diferentes hitos históricos y acontecimientos políticos importantes que se dieron entre el 2000 y 2023. Se considera a movimientos ambientalistas urbanos y a movimientos ambientalistas indígenas en su defensa de áreas protegidas bolivianas.

Palabras clave

Movimientos ambientalistas urbanos, áreas protegidas, pueblos indígenas, hitos históricos y políticos.

1. Introducción

Este capítulo hace un breve esbozo de los movimientos ambientalistas del Siglo XXI en Bolivia en el marco diferentes hitos históricos y acontecimientos políticos importantes que se dieron en el lapso de tiempo estudiado (2000-2023) y que

¹ Socióloga, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca (USAL), con una Maestría en Estudios Latinoamericanos cursada en la misma universidad. Docente de pregrado y postgrado, investigadora independiente y creadora del Colectivo “No a la tala de árboles en Cochabamba”.

Quiero agradecer a las siguientes personas por su apoyo y ayuda a esta investigación con entrevistas y/o información: Javier Molina, María Lohmann, Oscar Olivera, Eliana Torrico, Cecilia Chacón, Nazareth Flores, Alex Vilca Limaco, Javier Bellot, José Jordán, Tatiana Borda, Darling Camacho.

contextualizan la emergencia y actividad de estos movimientos. Se considera a movimientos ambientalistas urbanos y a movimientos ambientalistas indígenas en su defensa de áreas protegidas bolivianas.

Para la realización de este estudio he recurrido a instrumentos de investigación cualitativos: Revisión bibliográfica, hemerográfica y documental, entrevistas abiertas y semiestructuradas a actores/as claves y observación participante.

2. Hitos históricos importantes

2.1. La crisis política de inicios de siglo

A inicios del siglo XXI en Bolivia se gestaron una serie de movilizaciones populares que tuvieron epílogo el 2003 con la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esa dimisión presidencial simbolizaba la ruptura del sistema de partidos que hasta entonces era multipartidista fragmentado y mantenía la estabilidad de los gobiernos mediante coaliciones partidarias. Igualmente, el diseño institucional boliviano y el modelo económico neoliberal fueron cuestionados. Finalmente, con las elecciones del 2005 cambió el sistema de partidos de fragmentado a predominante con el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) y se dio lugar a un intento de transformaciones estructurales con una nueva Constitución Política del Estado refrendada el 2009.

Lo interesante parte de las movilizaciones que rompieron el sistema que duró de 1982 al 2003 se refirieron a temas ambientales. Ya en 1990 se generó una movilización indígena de tierras bajas con profundos reclamos ambientalistas, la Marcha por el Territorio y la Dignidad que también cuestionó el sistema político y el modelo económico.

Diez años después en Cochabamba (ciudad que siempre ha tenido problemas y desigualdad con el acceso al agua) se dio en concesión a una empresa privada extranjera el servicio público de agua y alcantarillado, se buscaba privatizar el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA).² La concesión favoreció a la empresa estadounidense Bechtel³ que creó el consorcio “Aguas del Tunari”.⁴

2 Medida que correspondía al modelo institucional y económico vigente en ese tiempo que promovía el “achicamiento” del Estado y la privatización de los servicios públicos

3 Empresa principalmente constructora que para ese entonces tenía concesiones en el servicio de agua en Asia, Australia, Europa Central, Reino Unido, Estonia y Ecuador. (Kruse 2005, 128).

4 Consorcio conformado por “una empresa económicamente controlada por capitales estadounidenses, administrativamente manejada por gerentes ingleses en consorcio con ingenieros

Entre las principales medidas que ejecutó el consorcio estuvo el exorbitante aumento de las tarifas de SEMAPA entre un 50% a 250% (Kruse 2005, 144), lo que dio lugar a una movilización de pobladores de la ciudad de Cochabamba que fue masiva y que duró de enero a abril de 2000.

Además estaba la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado de finales de 1999 que privilegiaba las concesiones monopólicas de grandes empresas en detrimento de los usos colectivos y comunitarios del agua (por ejemplo, del sector de los regantes, protagonistas decisivos de las movilizaciones) que existían precisamente por la escasez y desigualdad del acceso al agua en Cochabamba.

Todo ello se puso en cuestionamiento con la “Guerra del Agua” que luego de semanas de movilizaciones y una dura represión del gobierno, logró la rescisión del contrato con Aguas del Tunari y la reformulación de la Ley 2029 (Kruse 2005, 150; entrevista a Oscar Olivera, mayo de 2023).

Al calor de las movilizaciones nació la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida conformada principalmente por la Federación de Regantes (FEDECOR), profesionales del Comité de Defensa del Agua, la Central Obrera Departamental (COD), fabriles, universitarios y otros sectores de clases medias y populares, organismo que hasta hoy es recordado como referente de una movilización ambiental popular, horizontal y combativa (Entrevista a Oscar Olivera, mayo de 2023). Recalcar que también formaron parte de la Guerra del Agua sectores afines a los partidos alternativos a la política partidaria “tradicional” que en ese entonces estaban naciendo, incluido el mismo MAS, por lo que el “derecho al agua” sería parte de las demandas que se imprimieron (en letra) en la nueva Constitución boliviana.

La significación de la Guerra del Agua es muy bien resumida por uno de los líderes de la Coordinadora del Agua y la Vida, Oscar Olivera, que resaltó una movilización horizontal y sin estructuras burocráticas que materializó un ejercicio democrático desde abajo que asumía al agua como parte del territorio, el bien común y además como un ser vivo. Añadió que la Guerra del Agua dejó una agenda ambiental que no lograron materializar los gobiernos del MAS pero que fue retomada por movimientos ambientalistas posteriores y que es posible enfrentar los problemas ambientales y los efectos del cambio climático desde abajo, desde la autoorganización de la gente. (Entrevista a Oscar Olivera, mayo de 2023).

españoles e italianos, con una participación minoritaria de empresarios bolivianos (varios de ellos con notorios lazos con el mundo político) y con residencia legal en una casilla postal en Ámsterdam”. (Kruse 2005, 142).

En cierto sentido, la autoorganización horizontal de la Guerra del Agua, fue replicada por movimientos ambientalistas posteriores, aunque con demandas y movilizaciones más modestas.

2.2. La Asamblea Constituyente y la nueva Constitución Política del Estado

La reforma más profunda de los gobiernos del MAS fue el intento de “refundación” del Estado boliviano con una nueva Constitución. Así, el 2006 se instaló la Asamblea Constituyente y uno de los temas más demandados en ese espacio fueron los relacionados con la defensa y protección del medioambiente, reclamos que principalmente partieron de los pueblos indígenas de tierras bajas que años antes habían puesto en el tapete público la defensa ambiental y la problemática de la tierra y territorio con la marcha de 1990. Recordar que Confederación de Indígenas de Bolivia (CIDOB) era parte importante del Pacto de Unidad.⁵

La nueva Constitución trajo transformaciones importantes en el diseño institucional boliviano, especialmente a través de un modelo de Estado unitario con autonomías. En cuanto al tema de la protección y defensa ambiental, hay varios artículos en la nueva Constitución boliviana y que generaron y generan una Estructura de Oportunidades Políticas para movimientos ambientalistas del presente y que profundizaron cambios institucionales anteriores como la Ley de Medio Ambiente (Ley 1333) de 1992.

Entre los apartados más relevantes al respecto, se reconoce a la “Madre Tierra” o “Pachamama” como sujeto de derechos en los Principios, Fines y Valores del Estado y se refuerza el planteamiento de una vida armoniosa con la naturaleza (Art. 8). En el Artículo 9, se confiere como fin y función esencial del Estado: “la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”. (Art. 9. Inciso 6. CPE). Entre los derechos económicos y sociales, se establece el derecho al medioambiente que especifica:

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades

5 El Pacto de Unidad agrupaba a distintas organizaciones indígenas y campesinas del occidente y oriente del país, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIQB-S), la CIDOB, entre otras organizaciones. Con el desgaste progresivo del MAS y las contradicciones de sus políticas, el Pacto de Unidad se fragmentó entre los afines al MAS y los críticos a sus gobiernos, especialmente después de los conflictos relacionados al empecinamiento gubernamental de construir una carretera que vulnera el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), asunto que trataré más adelante.

de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente.

De la misma forma, se consignan los deberes de “Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones” y “proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos”. (Art. 108. Incisos 15 y 16. CPE).

Adicionalmente, resaltar que el postulado del “vivir bien” como uno de los ejes del Estado plurinacional y mencionado en la Constitución, supuestamente se adscribe a una relación con la naturaleza que se aleja del tradicional utilitarismo extractivista y la reconoce como ente vivo integral.

Estos apartados de la Constitución permiten la legalidad y mayor legitimidad de movimientos en defensa y protección del medioambiente en Bolivia y que se fueron multiplicando desde la segunda década del siglo XXI, en parte debido a las contradicciones de gobiernos que se dicen protectores de la “Pachamama”, pero cuya práctica continúa siendo extractivista y desarrollista.

2.3. Entre la retórica y la praxis

Allende de las secciones de la Constitución boliviana en defensa y protección del medioambiente, hay que reconocer que en otras partes del texto se mantiene la lógica extractivista y desarrollista característica de un país que se acostumbró a su papel de productor de materias primas y recursos extractivos y que en su cultura política alberga un pensamiento de origen decimonónico que asume como “progreso” el sometimiento irresponsable de la naturaleza.

Conformemente, en la Constitución aún se rescata la comprensión de la naturaleza como “recurso natural” y continúa primando el objetivo de su “aprovechamiento” e “industrialización” en especial en los apartados de “Recursos Naturales”, “Hidrocarburos”, “Minería y Metalurgia” y “Recursos Forestales”.

Todo ello se traduce en políticas públicas que de forma indistinta realizó y realiza el MAS en sus gobiernos y los regímenes de la inestable oposición partidaria, en ambos casos la lógica desarrollista y extractivista perdura.

Justamente, varias políticas públicas y proyectos de inversión pública que implicaron la vulneración del medioambiente por parte de los gobiernos del MAS y/o municipios y departamentos gobernados por el MAS o la oposición partidaria, han significado una reacción defensiva que hizo nacer a nuevos movimientos ambientalistas que surgieron a partir de la segunda década del siglo XXI.

2.4. El desgaste del sistema

En relación al tema ambiental, el primer conflicto grande que hubo al respecto con los gobiernos del MAS fue el que se produjo por el intento gubernamental de construir una carretera que atravesase el patrimonio natural Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), vulnerando un espacio donde se asientan más de una sesentena de comunidades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Yuracaré y Chimán.

Se puede decir que con el asunto del TIPNIS se dio la primera gran ruptura entre los gobiernos del MAS y pueblos indígenas que ellos decían representar y reconocer, lo que trascendió al Pacto de Unidad que empezó a resquebrajarse y más aún cuando en septiembre de 2011 fue duramente reprimida la octava marcha de indígenas del TIPNIS que iban hacia La Paz en protesta por la construcción de la carretera.

El 2016 fue otro año importante respecto al resquebrajamiento de la legitimidad del MAS y sus gobiernos. El 21 de febrero de 2016 se realizó la consulta vinculante en la que se preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con una reforma constitucional que permitiera la repostulación del binomio presidencial Morales-García Linera, evento promovido, organizado y auspiciado por los aparatos gubernamentales que no esperaron que en los resultados se impusiera el “No”.

Los días siguientes al corolario desfavorable para las aspiraciones del MAS, autoridades y funcionarios desconocieron los resultados y recurrieron a una serie de estratagemas y argucias argumentativas y legales para insistir en la repostulación presidencial. En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó la repostulación de la dupla presidencial y el 2019 se presentó a las elecciones nacionales.

El desconocimiento del juego que el mismo gobierno promovió, generó rechazo ciudadano y se conformaron los “movimientos 21 F” que generaron cierta convocatoria canalizando el descontento por los gobiernos del MAS a partir de paros y concentraciones masivas, y de interpelaciones mediáticas mediante la consigna “Bolivia dijo no”. (Estremadoiro 2018, 53).

Entre estos movimientos también estaban algunos que recogían el discurso y la agenda ambientalista ante el evidente extractivismo y desarrollismo que continuaba con los gobiernos del MAS. El punto culminante del descontento en ese sentido fue con unos terribles incendios que se propagaron en la Chiquitanía el 2019.

Cada año en Bolivia se realizan los “chaqueos” o la ignición intencional de bosques para habilitar su uso para ganadería, agricultura, pastoreo y/o loteamientos. En ese marco, es vulnerable por ejemplo el Parque Nacional Tunari en Cochabamba y varios puntos en los Departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Si bien son millones de hectáreas las que se incineran cada año en Bolivia sin que exista una política pública que haga algo serio y sostenible al respecto, el 2019 hubo incendios especialmente catastróficos en la Chiquitanía boliviana.

Desde finales de julio de 2019, se calcula que se quemaron más de 3,6 millones de hectáreas de bosque chiquitano (Paredes 2021) de las 6,4 millones del territorio nacional (CEDIB 2020, 8), murieron millones de animales (CEDIB 2020, 11), hubo 4.472 familias afectadas, 161 familias damnificadas, 96 comunidades afectadas (CEDIB 2020, 12) y el incendio llegó a las áreas protegidas Área Natural de Manejo Integrado San Matías, Ñembi Guasu, Otuquis (CEDIB 2020, 11) y Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucabaca (Paredes 2021).

La respuesta de los gobiernos fue negligente, tardía e insuficiente:

La tardía reacción al incendio forestal, la emisión de permisos de quema hasta el 10 de agosto, la ampliación del plazo de planes de desmonte y quemas emitido el 27 de agosto, la reducción de las multas por quemas a partir de la Ley 741 y la falla en los controles de los chequeos ilegales son las irregularidades que la ABT cometió y que, según expertos, agravaron la situación en las zonas afectadas por el fuego. La institución estatal reaccionó tarde al incendio forestal, ya que los primeros focos de calor fueron reportados, a fines de julio e inicios de agosto, en Roboré, San Rafael, San Miguel, San Ignacio y San Matías. (CEDIB 2020, 20).

Por ello, cuando se gestó la crisis política de fines de 2019 que terminó con la renuncia de Evo Morales, García Linera y otras autoridades importantes del gobierno nacional, una de las banderas que decían albergar parte de las movilizaciones que generaron ese desenlace, fueron los incendios de la Chiquitanía.

No obstante, bajo el gobierno de Añez no mutaron mucho las políticas desarrollistas y extractivistas y en 2020 no faltaron incendios y “chaqueos” en la misma Chiquitanía y otras zonas y lo propio el 2021 y 2022 con la vuelta del MAS al gobierno nacional.

Es que si algo en común tienen los gobiernos del MAS y los gobiernos de la oposición partidaria (que controlan algunas gobernaciones y municipios), es la persistencia de la lógica y las prácticas extractivistas y desarrollistas en sus políticas públicas, además de gestiones públicas que dejan mucho que desear en cuanto a planificación, pertinencia y buena fe en temas ambientales.

Ese escenario allanó el camino para el surgimiento de nuevos movimientos ambientalistas.

3. Movimientos ambientalistas urbanos

3.1. El surgimiento de nuevos movimientos ciudadanos urbanos

Ante la concentración del poder que sobrellevaba la hegemonía partidaria del MAS, el desencanto que van sembrando sus gobiernos, y el raquitismo de la oposición partidaria, a partir de la segunda década del siglo XXI iniciativas ciudadanas han surgido a título de “colectivos”, “plataformas”, “movimientos”, etc., generalmente de carácter urbano. Estos organismos se han fortalecido y han ampliado su alcance gracias a las redes sociales, mecanismos comunicativos relativamente libres, de fácil y masivo acceso y que difícilmente pueden ser subyugados por intereses políticos, corporativos, etc. por su intrínseca e incontenible pluralidad de contenidos. (Estremadoiro 2018, 50-51).

Estas organizaciones enuncian diversidad de ideologías, proyectos, propuestas, discursos, fines, mecanismos de acción, etc. Los hay feministas, defensores de derechos de las diversidades sexuales y grupos étnicos, temáticos, culturales, reivindicativos de contenidos coyunturales, ligados a proyectos político-partidarios e intereses gremiales. Y, por supuesto, ambientalistas.

Lo positivo de este fenómeno es que pareciera que las y los bolivianas/os han decidido ejercer ciudadanía activa en base a las oportunidades políticas que el sistema democrático faculta, ello a partir de la incidencia política y la acción directa. En algunos casos, por la acción de estas organizaciones se han logrado cambios en el diseño institucional o por lo menos se han introducido temas de discusión y deliberación en la agenda pública y mediática. No deja de ser notable que el contrapeso faltante en un contexto de hegemonía partidaria, en cierto sentido, lo hayan ejercido estos movimientos, no solamente por su todavía imberbe influencia en la toma de decisiones y políticas públicas, sino porque se traducen en articuladores de discursos y sentidos alternativos.

De todas maneras, parte de estos movimientos también tienden a ser cooptados y/o funcionalizados ya sea por el mismo MAS o por una oposición partidaria moribunda que encontró un poco de nuevos bríos en algunos de estos entes.

A continuación, se revisará movimientos referidos específicamente al tema ambiental.

3.2. Los árboles y áreas verdes en la agenda pública y mediática

Tanto los gobiernos del MAS y los de la oposición partidaria (Departamentos, municipios) comparten nociones de “progreso” y “desarrollo” ancladas en el siglo XIX y en base a un ideal urbanístico positivista que enaltece las deforestadas “selvas de cemento”.

Este imaginario deviene de lo que Marcos Kaplan (1968, 171) llamó “dualismo estructural”, una configuración territorial desigual donde las urbes latinoamericanas se constituyeron en un polo unidimensional de desarrollo, toma de decisiones y oportunidades, en detrimento de otras regiones y comunidades rurales donde se concentraba la fuerza de trabajo indígena y afrodescendiente en base a modos de producción feudales y/o esclavistas.

Las estructuras antes descritas tienen una expresión ideológica dominante que justificó el orden social desigual. Lo “blanco” fue relacionado con la “civilización”, mientras lo indígena/afrodescendiente con la “barbarie”, a su vez aquello se traspolaba a la dualidad varón-mujer, el primero vinculado a la razón (por tanto, a la “civilización”) y la segunda a las “emociones” y “sentimientos” (por tanto, a la “barbarie”). A la par, lo urbano representaba a la “civilización” y lo rural a la “barbarie”, lo que incluye la naturaleza. La dualidad se condensa en “civilización” = “blanco” /varón/urbe/tecnología versus “barbarie” = indígena/afrodescendiente/mujer/rural/naturaleza. Este pensamiento explica en parte los tradicionales racismo y sexismo en América Latina, pero igualmente las nociones de “progreso” y “desarrollo” que conllevan aversión urbana contra la naturaleza.

En Bolivia este imaginario es evidente en la conciencia colectiva y en la cultura política. Los árboles, las reservas naturales cercanas a las zonas pobladas, las áreas verdes, los bosques urbanos son vistos con desconfianza.

Esto se refleja en el hecho de que el impacto ambiental de los proyectos de inversión pública pocas veces es tomado con la seriedad institucional y profesional que se requiere. En consecuencia, las ciudades bolivianas hoy se encuentran

alarmantemente deforestadas⁶ y siguen ese camino hasta las comunidades y áreas protegidas rurales.

Sin embargo, si bien parece que una mayoría de bolivianos/as comparte la traumática aversión cultural a la naturaleza antes descrita, la situación ambiental crítica de las ciudades conllevó a una reacción de algunos ciudadanos/as que se organizaron en defensa de los árboles y de las áreas verdes urbanas, convirtiéndose en colectivos ambientalistas que lograron presencia mediática, cierta legitimación social e influencia indiscutible (en base a presión) en la gestión pública.

La primera de esas iniciativas germinó en Santa Cruz de la Sierra en 2012 con el “Colectivo Árbol-No a la tala de árboles urbanos en Santa Cruz”. Según una de sus fundadoras, Eliana Torrico, nació por una “autoconvocatoria ciudadana” en el Facebook que reunió a personas alarmadas por la creciente tala de árboles en la ampliación de calles y calzadas en la ciudad. Pasaron de las palabras al “activismo de calle” al que luego sumaron alianzas estratégicas con otras organizaciones e instituciones y la educación técnica sobre árboles urbanos (Entrevista a Eliana Torrico, abril de 2023), consolidándose como un ente influyente en la presión del gobierno municipal y en la toma de decisiones públicas, ello a fuerza de pura legitimidad social ya que el Colectivo Árbol ni siquiera está institucionalizado con Personería Jurídica.

Entre los logros más importantes del Colectivo Árbol está el haber sacado de la invisibilidad pública a los árboles urbanos: “Los árboles urbanos antes eran invisibles”. Y haber empoderado al ciudadano/a con información, educación, incidencia para que proteja y cuide “su árbol” y fiscalice a la gestión municipal. (Entrevista a Eliana Torrico, abril de 2023). Asimismo, son referente de otros movimientos similares que se dieron en otras ciudades de Bolivia y artífices de una ley municipal de protección al arbolado urbano cruceño promulgada el 2015 y que por primera vez estableció multas frente a la tala de árboles en Santa Cruz. De esa manera, combinaron “el activismo de calle con el activismo legal”.⁷

-
- 6 Un ejemplo es el caso de la ciudad de Cochabamba. El 2017 el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) en el “Plan maestro de forestación y reforestación para el Municipio de Cochabamba”, realizó un diagnóstico sobre la situación de cobertura arbórea y áreas verdes en el municipio. En él se establecieron datos preocupantes en cuanto a la cobertura arbórea de la ciudad de Cochabamba y la presencia de áreas verdes. Se detalló el alto índice de deforestación de la ciudad que apenas alcanza un 2,58% de cobertura arbórea y una densidad media de árboles por calle de 0,031 árboles/m. A esto hay que sumarle que apenas existen 893 hectáreas de áreas verdes en el municipio que tiene 13854,44 hectáreas. Pero de las 893 hectáreas de áreas verdes solamente 104,48 serían de áreas verdes arboladas, la mayoría de las “áreas verdes” son canchas de cemento o tinglados (GAMC, 2017: 9, 12-13).
- 7 Ver: <https://colectivoarbol.org/>; Entrevista a Eliana Torrico, abril de 2023

Aparte de actividades educativas e informativas, han impedido varias talas de árboles o conseguido que se re diseñen proyectos de inversión pública si significaban el sacrificio de árboles, como la ampliación de la calzada del Tercer Anillo, una reforma al zoológico municipal que colocaba cemento en detrimento de árboles, el proyecto de hacer una infraestructura de zoológico en el Jardín Botánico restando área verde, entre otros.⁸

Sobresalió el caso de la “Quinta Municipal” o la construcción de un mega edificio de predios municipales en un parque, proyecto que lograron frenar por muchos años a pesar de los intereses inmobiliarios que involucraba. Incluso recurrieron a una Acción Popular que perdieron frente al gobierno y por ello se terminó construyendo el predio, pero después de muchos años de pelea y bajo el manto del repudio social.⁹

La estructura organizativa del Colectivo Árbol se asemeja a la horizontalidad propia de los organismos en los que funcionan mecanismos de la democracia directa y admiten no responder a una ideología política que vaya más allá de la defensa concreta de los árboles, áreas verdes y otras expresiones naturales.

Otro colectivo grande con características similares al Colectivo Árbol de Santa Cruz, es el conformado en Cochabamba en 2016, el Colectivo No a la tala de árboles en Cochabamba.

Al igual que en Santa Cruz, se gestó a través de la convocatoria de un grupo público en el Facebook que en pocos días congregó a miles de personas. De la convocatoria virtual se pasó a la acción directa y a la toma de espacios públicos en los que se realizaban reuniones públicas de deliberación y en las que se encaminaron medidas de protección a los árboles, desde letreros artesanales a incidencia política de más complejidad y alcance.

Entre los hitos más significativos del Colectivo No a la tala de árboles en Cochabamba está el que lograron colocar a los árboles urbanos en la agenda pública y mediática cochabambina, al punto de que se incrementó la aparición de otras organizaciones más pequeñas con la temática de los árboles, se posicionó como tema en las universidades y centros educativos, se multiplicaron las plantaciones y hasta medios de comunicación tradicionales cochabambinos toman a los árboles como uno de sus temas prioritarios.¹⁰

8 Ver: <https://colectivoarbol.org/>; Entrevista a Eliana Torrico, abril de 2023.

9 <https://colectivoarbol.org/>; Entrevista a Eliana Torrico, abril de 2023.

10 <https://www.facebook.com/groups/noalatalacochabamba>; Entrevista a Rocío Estremadoiro, abril de 2023.

Adicionalmente, fueron el puntal de la presión ciudadana que permitió la promulgación de una ley de protección de los árboles en el municipio de Cochabamba el 2017 y que se encaminen procesos legislativos similares en otros municipios.¹¹

Aparte de salvar varios árboles en calzadas públicas, han logrado que se rediseñen algunos proyectos de inversión pública para proteger árboles, tal fue el caso del puente Huayna Kapac que se rediseñó para respetar a un molle de decenas de años.¹²

Entre otras medidas, estuvo el intento de impedir que se construya un patinódromo para los Juegos ODESUR en una laguna emblemática de Cochabamba, consiguiendo un alto apoyo social para esta causa (Entrevista a Rocío Estremadoiro, abril de 2023). Sin embargo, al igual que lo sucedido con el Colectivo Árbol de Santa Cruz, recurrieron a instancias legales con una Acción Popular que perdieron frente al gobierno municipal.

Otro hito fue la construcción de un distribuidor vehicular en la zona de la Quintanilla que implicaba el sacrificio de decenas de árboles. Acá el Colectivo se alió con ciudadanos/as autoconvocados y otras organizaciones y también mezclaron acciones directas y medidas legales. Finalmente, se interpuso una medida cautelar que obligó al gobierno municipal a realizar un proceso profesional de trasplante de los árboles que hizo que sobreviviera un 74,19 % de ellos, aunque murieron varios molles.¹³

Un caso sonado fue el impedimento de la construcción de un centro de convenciones que el gobierno municipal de Cochabamba quería emplazar en un museo de historia natural que cuenta con una amplia área verde. Acá también fueron importantes las alianzas con otras organizaciones e instituciones (incluyendo el propio museo) y la incidencia política que se realizó ante gobernación y gobierno nacional para que cumplan el deber de resguardar el museo.¹⁴

Resaltar que en cuanto la estructura organizativa y la ideología, la situación del Colectivo No a la tala de árboles en Cochabamba es semejante a la del Colectivo Árbol de Santa Cruz: Una estructura horizontal-deliberativa más propia de las democracias directas, una composición social principalmente de clase media, un alcance de acción muy concreto que se resume a la protección de los árboles, áreas

11 <https://www.facebook.com/groups/noalatalacochabamba>

12 <https://www.facebook.com/groups/noalatalacochabamba>

13 <https://www.facebook.com/groups/noalatalacochabamba>

14 <https://www.facebook.com/groups/noalatalacochabamba>

verdes y otras expresiones naturales, el no abordaje de temas sociopolíticos más amplios y la no institucionalización al tampoco contar con Personería Jurídica.

Lo destacado es que estos colectivos urbanos contra la tala de árboles se replicaron también en otras ciudades de Bolivia como La Paz, Oruro, Villamontes con estructuras organizativas y alcances parecidos (Entrevista a Eliana Torrico, abril de 2023), aunque todavía con influencia y logros más modestos.

En La Paz, no obstante, vale subrayar que a raíz de una incidencia ciudadana más dispersa y la voluntad política de algunas/as representantes institucionales como la ex concejal Cecilia Chacón, recientemente se aprobó normativa para la protección de árboles urbanos. (Entrevista a Cecilia Chacón, abril de 2023).

Otro caso interesante a distinguir es el de la plataforma Tunari Sin Fuego (TSF) también en Cochabamba. Cochabamba es una ciudad que colinda con un área protegida nacional, el Parque Nacional Tunari (PNT) que constantemente es avasallado. Además, cada año el PNT sufre de intensos incendios que claramente son provocados. La respuesta institucional frente a esta problemática es pobre e insuficiente. Es por ello que nace TSF como forma de respuesta ciudadana ante la negligencia ambiental institucional.

Uno de los fundadores de la plataforma, Javier Bellot, indicó que esta organización nació de la fusión de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (en la que él era presidente) y algunas miembros del Colectivo No a la tala de árboles en Cochabamba¹⁵ y que después se fueron sumando más instituciones y organizaciones, incluyendo las institucionales, con la idea de generar respuesta más rápida frente a los incendios en el PNT. (Entrevista a Javier Bellot, abril de 2023).

Para ser más efectivos, conformaron un grupo de WhatsApp en el que incluyeron al propio Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), a los bomberos, SAR, grupos de voluntarios, alcaldías, gobernación, FF.AA., prensa, etc. para que se enfrenten las emergencias de incendios con mayor rapidez y eficiencia. Todo ello logró que la respuesta ante los incendios se haga en minutos (lo que antes tardaba horas) y que se prevenga que los incendios no pasen a mayores cuando se registra un foco de calor en el PNT. (Entrevista a Javier Bellot, abril de 2023).

Al igual que los colectivos urbanos protectores de árboles, TSF no abraza temas ideológicos más allá de lo concerniente a la protección del PNT y la respuesta

15 Bellot detalló a Mónica Wormald, Janeth Gómez, Tatiana Borda y Darling Camacho.

ante incendios. La plataforma se cohesiona en base a una estructura horizontal y “acción ciudadana multiactoral”. (Entrevista a Javier Bellot, abril de 2023).

3.3. Las bicicletas toman las ciudades

“Masa Crítica” es un movimiento de ciclistas a nivel internacional que se ha ido replicando en varias partes del mundo, incluyendo ciudades de Bolivia desde el Siglo XXI. Su objetivo central es promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y reducir la presencia del automóvil. (Entrevista a Javier Molina, abril de 2023).

Se han constituido Masas Críticas en Santa Cruz, La Paz, Sucre, Tarija, Oruro y Cochabamba, siendo en esta última ciudad donde está el colectivo más grande e influyente: Masa Crítica Kanata.

A finales de la década de 2000 se fundó Masa Crítica Cochabamba. Durante muchos años Masa Crítica Cochabamba se limitó a realizar paseos y caravanas de un grupo reducido de amigos, hasta que en 2014 se utilizaron redes sociales para promover el movimiento. Ello resultó en caravanas más numerosas, pasando de un promedio de 20 a 400 personas. Pasaron a llamarse Masa Crítica Kanata (MCK). (Entrevista a Javier Molina, abril de 2023).

Entre los hitos más importantes de MCK, está la redacción, aprobación y promulgación de la Ley Municipal de la Bicicleta del 2017. Dicha ley contempla la creación del Comité Municipal de la Bicicleta, organismo en el que participa la sociedad civil y las autoridades municipales para definir políticas públicas a favor de los ciclistas y del uso de la bicicleta.¹⁶

Al mismo tiempo, el movimiento logró presionar para que se construyeran tres nuevos kilómetros de ciclovías y la ampliación de la ciclovía en el eje este-oeste que atraviesa la urbe. Esto permitió la implementación de tres kilómetros adicionales y en un tramo estratégico con alto impacto en la movilidad dentro del centro de la ciudad.¹⁷

También hay otros colectivos de ciclistas más pequeños en Bolivia que tienen logros en incidencia política ambiental. Es el caso de varios colectivos ciclistas en Tarija (Masa Crítica, Bikers, Chura Bici, Urban Bike, Nulo, Juventud Unida, Dely

16 <https://www.facebook.com/MasaCriticaKanata/>. Entrevista a Javier Molina, abril de 2023.

17 <https://www.facebook.com/MasaCriticaKanata/>, Entrevista a Javier Molina, abril de 2023.

Dance, Acción Juvenil, Ala Bicla y la Asociación BMX Tarija) que consiguieron la promulgación de una Ley de Uso de las Bicicletas el 2018.

Masa Crítica y otros colectivos (Bicis de Montaña Bicisur, Los Huanca, Alpaz Ciclistas de Altura, MTB Rodadas, The Bikers, Ciclistas en Cadena) en La Paz se movilizaron por la aprobación de un Manual del Ciclista Paceño y desde el 2021 están presionando al gobierno municipal para la promulgación de una Ley Municipal del Ciclista, más aún por atropellamientos de ciclistas que se dieron recientemente.¹⁸ En Sucre, la Masa Crítica de esa ciudad ha logrado la construcción de ciclovías¹⁹ y en Santa Cruz, el colectivo de ciclistas Metro y Medio actúa para promover la bicicleta como medio de transporte cotidiano y consolidar un metro y medio de distancia entre los vehículos motorizados y las bicicletas para garantizar el respeto al transporte a pedal y el derecho a la vida e integridad física de los ciclistas.²⁰

3.4. Organizaciones protectoras de animales

Otro tipo de organizaciones vinculadas a la defensa ambiental que se multiplicaron en el Siglo XXI son las “animalistas” o defensoras de los derechos de los animales. El animalismo es una doctrina que reivindica los derechos de los animales como seres vivos en contra del especismo²¹ y cada vez tiene más adeptos/as a nivel mundial. En Bolivia hay varias de estas organizaciones que han surgido en los últimos años. Algunas se dedican mayormente a la protección de animales domésticos como perros y gatos, otras se centran en el resguardo y rescate de animales silvestres y las más grandes pueden abarcar ambos temas. Las hay en todos los Departamentos del país, por cuestiones de espacio solamente tomaré a algunas por su trayectoria y grado de influencia.

Amor Por Los Animales Bolivia (APLAB) es una organización sin ánimo de lucro que emergió en la ciudad de La Paz el 2009 pero que tiene alcance en todo Bolivia. Su principal objetivo es la “búsqueda de mejores días para los animales”. Financian sus actividades a través de donaciones que solicitan a la población y también con el apoyo de reconocimientos internacionales.²²

18 <https://www.erbol.com.bo/medio-ambiente/un-ciclista-una-vida>, <https://anabolivia.org/colectivos-esperan-aprobacion-de-una-ley-municipal-del-ciclista/>

19 (https://correodelsur.com/local/20201120_inaugurada-la-nueva-ciclovía-de-la-ciudad.html)

20 <https://anabolivia.org/colectivo-metro-y-medio-exige-respeto-y-consideracion-a-la-vida-e-integridad-de-los-ciclistas/>

21 Nociones culturales que sitúan al ser humano como “excepcional” y superior frente a otros seres vivos. El especismo suele negarles a los animales facultades como la consciencia, la inteligencia, los sentimientos, etc. que se asumen como exclusivamente humanas.

22 <https://www.facebook.com/Aplabolivia.org/>

En varias de sus actividades se ha recurrido a la acción directa, la denuncia y a la incidencia política. Por ejemplo, el 2022 realizaron un velorio simbólico de protesta por noventa animales que murieron en el zoológico de La Paz Vesty Pakos debido al mal cuidado y alimentación. Lanzaron un programa de ayuda a las aves urbanas con profesionales ambientales; anillaron a las palomas residentes en La Paz para “un control ético de la población de esta especie”, y realizaron marchas y movilizaciones contra el maltrato animal, el tráfico de vida silvestre, etc. El trabajo de cabildeo ha significado que la organización tenga permanente contacto con las instituciones gubernamentales para asegurar el cumplimiento de las normativas que protegen a los animales y la profundización y ampliación de las mismas.²³

Otros ejemplos de organizaciones animalistas urbanas es la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Animales ADDA-Bolivia pero que específicamente se dedica al resguardo, rescate y rehabilitación de perros y gatos en Cochabamba, y la Asociación Huellitas que sigue el mismo fin en La Paz.

Según la activista y ex Concejal de La Paz, Cecilia Chacón, es en esta ciudad donde se ha visto más intensamente la masificación y movilización de grupos animalistas, generándose movilizaciones animalistas en las que participaron varios de los colectivos con ese alcance, lo que allanó el camino para que el 2018 se promulgue la Ley 700 Para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato. Lo mismo sucedió con normativas municipales que también se dirigieron contra el maltrato de animales. (Entrevista a Cecilia Chacón, abril de 2023).

En el resto de Bolivia, especialmente en las ciudades grandes, se han visto movilizaciones animalistas similares, en especial cuando hay un hecho de maltrato animal que se viraliza en redes y medios de comunicación y hoy son uno de los principales mecanismos de presión para el cumplimiento de la Ley 700.

Por otra parte, realzar la labor de grupos de rescate y rehabilitación de la vida silvestre, por ejemplo, está la Comunidad Inti Wara Yassi que con tres santuarios acogen a animales silvestres rescatados: “Actuamos como custodios de estos animales, dado que el Gobierno no tiene las herramientas ni los recursos para hacerlo”.²⁴ Otros refugios destacados son el Parque de Aves Agroflori situado en Cochabamba que se especializa en el rescate de aves, y Senda Verde en La Paz

23 <https://www.facebook.com/Aplabolivia.org/>; <https://www.youtube.com/watch?v=uprKVm-INu0>

24 <https://www.intiwarayassi.org/es/our-work/rescate-cuidado-y-rehabilitacion-de-fauna-silvestre/>

que se centra en el rescate de animales silvestres sometidos al tráfico de especies, siendo que albergan en sus instalaciones a 800 animales de sesenta y cinco especies de mamíferos, aves y reptiles.²⁵

Al igual que el resto de los colectivos urbanos estudiados, los movimientos animalistas no dicen abrazar una ideología específica, lo que une a esas organizaciones son acciones concretas y delimitadas en la defensa y protección de animales: “No hay una agenda ideológica definida ni se discuten temas políticos explícitos”. (Entrevista a Cecilia Chacón, abril de 2023). Lo mismo ante cualquier militancia político partidaria, aunque como en el caso de APLAB, Senda Verde o la Comunidad Inti Wara Yassi, se trabaja en coordinación y presión frente a las instituciones públicas para asegurar el cumplimiento de la legislación protectora de animales y las políticas respectivas.

3.5. Logros y limitaciones de los movimientos ambientalistas urbanos

Posiblemente el logro más importante de los colectivos ambientalistas urbanos bolivianos del Siglo XXI es haber colocado en agenda pública, política y mediática temas innovadores y en cierto sentido ignorados por movimientos ambientalistas anteriores. Los colectivos ambientalistas urbanos del Siglo XXI, al ser más concretos y casi “desideologizados”, se enfocaron en asuntos más modestos que, por ejemplo, la toma de poder, realizando incidencia política desde la micropolítica y un ejercicio ciudadano activo para influir en sus zonas de su alcance. Salieron a la palestra los árboles, las bicicletas, las áreas verdes urbanas, la convivencia con los animales y otros seres vivos y hoy esas cuestiones no pueden ser eludidas por la administración pública ni la agenda mediática.

Han tenido éxito en la incidencia en políticas públicas, de su trabajo han emergido leyes, normativas en todos los niveles del Estado, se han generado nuevas políticas públicas, otras se han modificado o frenado.

Otro logro tiene que ver con la proliferación y multiplicación de colectivos ambientalistas urbanos en todo Bolivia. En cierto sentido, los colectivos ambientalistas urbanos del Siglo XXI han puesto “de moda” el ambientalismo, han conseguido reproducir su narrativa, sus imaginarios y simbolismo en nuevas generaciones.

No obstante, también existen limitaciones. Si bien la ausencia de una agenda ideológica o relacionada con objetivos de toma del poder les ha dado independencia partidaria y frente a los gobiernos, ello también ha significado que su accionar

25 <https://es.mongabay.com/2019/07/bolivia-senda-verde-refugio-animales-video/>

tienda a ser muy coyuntural e inmediatista, algunos de estos colectivos, especialmente los más pequeños, pueden desaparecer una vez atendida una demanda concreta por la que se han movilizad.

Al mismo tiempo, la inconsistencia ideológica y la comodidad histórica de la clase media se traduce muchas veces en inacción sostenida y constante de una mayoría de miembros de los movimientos, siendo que al final se sostienen por la actividad de pocos/as de sus integrantes, lo que fomenta el caudillismo, termina siendo insostenible a largo plazo y contribuye a la poca longevidad de estas organizaciones.

Conjuntamente, el hecho de que sean organizaciones voluntarias perjudica la continuidad de su desempeño. Las actividades de incidencia política, acción directa, difusión, educación requieren de recursos económicos y humanos que generalmente son donados por los miembros activos de los colectivos. Y, siendo la mayoría de clase media, los recursos económicos son muy limitados y los recursos humanos no siempre disponen del tiempo necesario para el activismo voluntario. Ello es un obstáculo para que consoliden resultados sostenibles para sus causas. No obstante, su independencia posibilita la libertad de pensamiento y acción.

Por otra parte, eso de no llevar una ideología o agenda política definida suele ser motivo para la no existencia de un proceso de formación política en los colectivos y puede ser causa de fragmentación cuando se trata de ubicarse en un contexto político más complejo o de crisis. En la práctica y por su pertenencia a una clase media urbana, ello puede arrastrar a estos colectivos a posiciones conservadoras. O se da el escenario de ser subsumidos por los gobiernos, partidos políticos, ONG, etc.

Adicionalmente, en la retórica de activistas ambientales urbanos a veces se vislumbran ciertas dosis de eco-fascismo, o sea clasismo, castismo, racismo, machismo y otras expresiones de pensamiento de tinte gamonal que aún perduran en la clase media y cultura política boliviana, por ejemplo, cuando se atribuye la destrucción de las áreas verdes a personas “ajenas” a la propia pertenencia, “culpando” de ello a sectores populares o de otras zonas o departamentos menos favorecidos. Ello se intensifica con un fenómeno preocupante relacionado a la preservación y ampliación de áreas verdes urbanas: la gentrificación o el encarecimiento de los terrenos y viviendas por la cercanía de un área verde, lo que expulsa de la zona vecinos/as no suficientemente pudientes y la convierte en un “barrio exclusivo” con tendencia a cerrarse.

Respecto a la funcionalización de los movimientos ambientalistas urbanos por gobiernos o partidos políticos, los intentos en ese sentido son recurrentes, utilizando colectivos o líderes ambientalistas para lavar su imagen. Así, no escasean

las autoridades y militantes partidarios/as meticulosamente fotografiados/as plantando árboles, manejando bicicleta, sosteniendo algún animalito, aunque sus políticas públicas reales representen todo lo contrario. Otro tema es el intento de cooptación de los movimientos por los partidos políticos y así activarlos cuando se denuncia la depredación del opositor partidario, pero callarlos cuando se trata de los gobiernos de su filiación.

4. Movimientos ambientalistas indígenas y la defensa de áreas protegidas

El primer hito importante en la lucha ambiental por parte de movimientos indígenas bolivianos fue la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, antesala de los cambios constitucionales a favor de los derechos indígenas y del medioambiente consagrados en la actual Constitución boliviana. De acuerdo al dirigente indígena Alex Vilca Limaco, la marcha de 1990 también allanó el camino para la creación de nuevas áreas protegidas y las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), consolidación de su territorio para varios pueblos indígenas y la aprobación de la Ley de Medioambiente de 1992. Pero, paradójicamente, esos logros quedaron trancos durante los gobiernos del MAS quedando en extrema vulnerabilidad por las actividades extractivistas que continuaron en sus territorios. (Entrevista a Alex Vilca Limaco, mayo de 2023).

En consecuencia, de las 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución por lo menos 18 están en riesgo de exterminio físico y cultural por el avasallamiento de su territorio con proyectos de grandes infraestructuras como carreteras y represas, exploración y explotación hidrocarburífera y minera, y el agronegocio, lo que incluye la afectación de áreas protegidas que confluyen con los territorios indígenas. (Entrevista a Alex Vilca Limaco, mayo de 2023).

4.1. La defensa del TIPNIS

El primer caso relevante de los movimientos ambientalistas indígenas es el articulado contra la construcción de la carretera por el TIPNIS desde la segunda década del Siglo XXI. El movimiento en defensa del TIPNIS marcó un antes y después en el apoyo de los pueblos indígenas al MAS y sus gobiernos, además de haber iniciado una mayor consciencia ambientalista que se trasladó a las urbes y clases medias bolivianas.

Después de varias marchas y movilizaciones en defensa del TIPNIS lideradas por las organizaciones indígenas del lugar, el punto culminante fue el 2011 cuando se

realizaba la octava marcha hacia La Paz y que recibió una dura y abusiva represión en Chaparina.

Lo ocurrido en Chaparina generó más apoyo civil al movimiento en defensa del TIPNIS, por lo que por esa presión, en un inicio, consiguieron la aprobación de la Ley 180 que declaraba la intangibilidad del TIPNIS. Pero el gobierno no se quedó quieto y organizó a los “indígenas” colonizadores y coccaleros del trópico de Cochabamba en el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) que abogaron por la carretera, junto con propiciar la división de las comunidades indígenas que velaban por el TIPNIS. Se planteó la intangibilidad como sinónimo de no mover ni una rama en el TIPNIS, lo que perjudicaba las actividades productivas y de sobrevivencia de los indígenas del TIPNIS. El resultado final fue la anulación de la Ley 180 y la aprobación de otra donde se autorizaba la realización de una consulta previa no vinculante. (Entrevista a Nazareth Flores, mayo de 2023; entrevista a María Lohmann, abril de 2023).

Se realizó la consulta a los pueblos Moxeño-Trinitario, Yuracaré y Chimán el 2011, pero a juicio de las organizaciones indígenas que defendían el TIPNIS, no fue una consulta libre, de buena fe e informada. (Entrevista a Nazareth Flores, mayo de 2023).

Los indígenas del TIPNIS siguieron en pie de lucha, por eso el gobierno ya no fue tan bullicioso en su empecinamiento con la carretera que siguió avanzando silenciosamente con la construcción de puentes, habilitación de sendas y adelantos en varios tramos, junto con la división y cooptación de las comunidades indígenas mediante prebendas y el amedrentamiento constante a los/as dirigentes indígenas. Otro problema recurrente es el intento de cooptación y funcionalización de los movimientos en defensa del TIPNIS por la oposición partidaria en sus rencillas con el MAS, pese a todo ello, los movimientos se mantienen en su independencia partidaria y frente a las instituciones del poder. (Entrevista a María Lohmann, abril de 2023).

Las organizaciones indígenas en defensa del TIPNIS continúan articuladas y han buscado alianzas con movimientos ambientalistas indígenas de otras zonas, colectivos urbanos y apoyo de organismos internacionales defensores de derechos indígenas, humanos y ambientales. Con ese fin el 2017 se creó el Movimiento por la Dignidad en Defensa del TIPNIS y el 2022 se consolidó el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) que apunta a la aprobación de una ley nacional para constituir un gobierno indígena de los pueblos Trinitario, Ignaciano, Movima, Chimán y Yuracaré.

Una de las últimas medidas por los/as defensores/as del TIPNIS fue la interpelación a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que

visitó Bolivia en marzo de 2023, denunciando que sigue avanzando la carretera y persiste la descomposición del tejido comunitario y organizativo de los indígenas del TIPNIS y el TIM. (Cauthin 2023).

De acuerdo a la dirigente indígena Nazareth Flores, la lucha por el TIPNIS continuará a pesar de los avances de la carretera, porque la defensa del TIPNIS es también la punta de lanza para resguardar otras áreas protegidas vinculadas a los pueblos indígenas. (Entrevista a Nazareth Flores, mayo de 2023).

4.2. Los intentos de construcción de represas hidroeléctricas Chepete-El Bala y Rositas

Otros movimientos indígenas ambientalistas contra grandes infraestructuras que pretenden afectar su territorio son los referidos a las represas hidroeléctricas.

El proyecto para construir las represas Chepete y El Bala en inmediaciones del Parque Nacional Madidi y la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pílon Lajas afectaría a unos 5000 indígenas de las etnias Mosestenes, Chimanes, Lecos, Tacanas, Uchupiamonas, Esse Eja. El proyecto data de la década de 1950 y fue retomado por los gobiernos del MAS el 2016 a través de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).²⁶ Está conformado por dos hidroeléctricas sobre el río Beni: una en la angostura del Chepete, 70 km aguas arriba de Rurrenabaque, y una segunda se encontraría cerca a la angostura de El Bala, 13,5 km aguas arriba.²⁷ Estas infraestructuras inundarían varias poblaciones y territorios forestales valiosos en fauna y flora (teniendo en cuenta que el Madidi es uno de los territorios más eco diversos del mundo):

Dentro de las áreas inundadas por el Chepete y El Bala estarían 3.214 habitantes y en las áreas colindantes a los embalses 1.950. En total deberían ser relocalizadas 5.164 personas, en su absoluta mayoría indígena-campesinos. Esta cifra equivale a toda la población que vive de manera permanente en la ciudad de San Buenaventura. En el área existen 424 especies de flora, 201 especies de mamíferos terrestres, 652 especies de aves, 483 especies de anfibios y reptiles y 515 especies de peces. Las fichas ambientales no precisan que especies podrían desaparecer para siempre ni cuantos ejemplares de cada especie serían afectados.²⁸

Otros aspectos no contemplados por las fichas ambientales de los proyectos, según denuncia la Fundación Solón, son la deforestación de unas 100 mil hectáreas

26 <https://www.ende.bo/noticia/noticia/57>

27 <https://fundacionsolon.org/2017/05/10/el-caso-del-chepete-y-el-bala/>

28 <https://fundacionsolon.org/2017/05/10/el-caso-del-chepete-y-el-bala/>

de bosques, las toneladas de explosivos para las construcciones, la afectación a los ecosistemas de los ríos, la inundación de patrimonios arqueológicos y la afectación a las actividades eco turísticas de la zona a las que se dedican las comunidades indígenas desde hace años mediante la administración comunitaria de eco albergues.²⁹

Por eso, las organizaciones de los pueblos indígenas mencionados han encabezado la oposición a dichos proyectos. Mediante la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuhichi y Quiquibey, desde finales del 2016 que han realizado vigiliias en la zona para evitar la entrada de maquinarias e insumos y así impedir los estudios que requieren las obras. Se pudo postergar el avance de obras (Entrevista a Alex Vilca, mayo de 2023), no obstante, desde finales del 2021 que se denuncia que ENDE ha retomado las operaciones en la zona.³⁰

Otro caso emblemático más de represas hidroeléctricas es el de Rositas, un proyecto sobre el río Grande en su cruce con el río Rositas dentro del municipio de Cabezas, en Santa Cruz, y que contempla siete mega hidroeléctricas. Data de la década de 1960, fue impulsado en los 70 y retomado el 2012 por los gobiernos del MAS. Recalcar que también es una de las banderas de “desarrollo” de los gobiernos departamentales y municipales cruceños opositores al MAS que siempre salen al frente a favor del proyecto. Inclusive en el gobierno de Áñez hubo el intento de retomar el proyecto con el aplauso de las autoridades cruceñas.³¹

Según un informe a diseño final sobre proyecto presentado el 2017 por la empresa española Eptisa (contratada por ENDE), se estima que las hidroeléctricas provocarían una inundación de 449 kilómetros cuadrados, afectando a tres áreas protegidas bolivianas: el Parque Nacional-Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñaño; Área Natural de Manejo Integrado Río Grande-Valles Cruceños, y la Reserva Municipal de Parabanó,³² he impactaría directamente a más de quinientas familias de catorce comunidades indígenas y campesinas de cuatro municipios, así como a TCOs guaraníes: Capitanía Kaaguasu y Iupaguasu. Las comunidades indígenas totalmente afectadas por la inundación serían Tarendá Nuevo y Yumao, habitadas por más de 200 familias.³³

29 <https://fundacionsolon.org/2017/05/10/el-caso-del-chepete-y-el-bala/>

30 <https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/ende-retoma-construccion-de-las-represas-chepete-bala-y-la-amazonia-nuevamente-bajo-amenaza-412443>

31 <https://cbe.com.bo/noticia/reconsideran-obra-rositas-la-polemica-represa-de-la-muerte;>
<https://fundacionsolon.org/2021/01/16/documentos-hidroelectrica-rositas/>

32 <https://cbe.com.bo/noticia/reconsideran-obra-rositas-la-polemica-represa-de-la-muerte>

33 <https://fundacionsolon.org/2018/07/18/hidroelectrica-rositas-ni-consulta-previa-y-ni-accion-popular/>

Debido a eso las comunidades guaraníes de la zona se organizaron en el Comité en Defensa de la Tierra y Territorio el 2018 y en demanda al Estado boliviano para que por lo menos realizara la constitucional consulta previa a los pueblos indígenas afectados por el proyecto, desembocando ello en una Acción Popular de las comunidades guaraníes Tatarenda Nuevo y Yumao contra el Estado boliviano para frenar las acciones administrativas y jurídicas de la hidroeléctrica mientras no se cumpla con la consulta previa. Después de vueltas donde la acción judicial circuló por varios juzgados y de evidenciar la desigualdad de condiciones entre las comunidades y los representantes del Estado (los indígenas se presentaron con un abogado frente a siete de ENDE y la Procuraduría General del Estado), la Acción Popular fue desestimada con el argumento de que no había un proyecto como tal sino solamente una idea, por lo que no correspondía la consulta previa.³⁴

De todas maneras, el 2018 el gobierno y ENDE discontinuaron el proyecto. El entonces Presidente Ejecutivo de ENDE, Joaquín Rodríguez, indicó que “el denominado sueño cruceño se está postergando debido a las protestas sociales”.³⁵

Las organizaciones indígenas ambientalistas consideran este hecho como un logro de los guaraníes, aunque continúan en vigilancia permanente. (Entrevista a Alex Vilca Limaco, mayo de 2023).³⁶

4.3. La defensa de Tariquía

Respecto a la temática de explotación hidrocarburífera posiblemente el caso más notable es el de La reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.³⁷

El 2007 el gobierno aprobó decretos supremos declarando a los bloques San Telmo y El Astillero como áreas reservadas de interés hidrocarburífero a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El 2014 modificó el

34 <https://cbe.com.bo/noticia/reconsideran-obra-rositas-la-polemica-represa-de-la-muerte;>
<https://fundacionsolon.org/2018/07/18/hidroelectrica-rositas-ni-consulta-previa-y-ni-accion-popular/>

35 <https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20181004/ende-suspende-proyecto-rositas-rechazo-comunidades>

36 <https://www.laregion.bo/como-las-comunidades-enfrentan-la-amenaza-latente-de-proyecto-hidroelectrico-rositas/>

37 Aunque hay otros casos como el de la Capitanía Takovo Mora donde se pretendía realizar actividad hidrocarburífera y que significó el reclamo de organizaciones indígenas guaraníes que exigieron la consulta previa. Con ese motivo, los aparatos del gobierno ejercieron una dura represión y flagrante violación de derechos humanos contra las protestas indígenas en agosto de 2015. Ver: <https://ipdrs.org/noticias-bolivia/que-pasa/4521-bolivia-concluyen-que-se-vulnero-derechos-en-takovo-mora>.

plan de manejo de Tariquía reestructurando zonas de protección internas para dar cabida a los proyectos petroleros. (Campanini 2023). El 2015 el gobierno aprobó el Decreto Supremo 2366 que abrió la posibilidad de realizar actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, especialmente apuntando a Tariquía. El 2017 ya tenía licencias ambientales en el bloque San Telmo y en bloque Churuma y se agilizaba otro trámite de licencia ambiental para la perforación de dos pozos.³⁸ El 2018 aprobó las leyes 1049 y 1059 de exploración y explotación hidrocarburífera en Tariquía a cargo de la empresa brasilera PETROBRAS, YPFB Chaco y REPSOL.

Por un tiempo, los proyectos se suspendieron por el rechazo de las comunidades campesinas e indígenas y se anunció la ejecución de una consulta previa. El 2021 se denunció que se reiniciaron las actividades hidrocarburíferas en el lugar, el 2022 se advirtió de la incursión de tractores para abrir caminos para la maquinaria petrolera y el 2023 inició la perforación del pozo Astillero-X1 por YPFB Chaco (Campanini 2023).

De terminar de gestarse la explotación hidrocarburífera en Tariquía se afectaría a alrededor de 300 familias, la exploración petrolera vulneraría su medio de subsistencia mediante la producción agropecuaria ecológica, especialmente de miel.³⁹ Teniendo en cuenta además que en Tariquía hay reservas de gas de esquisto, más conocido como shale gas y que daría paso al fracking, un método ecológicamente muy invasivo y destructivo y que requiere de ingentes cantidades de agua. De las 246.870 hectáreas que tiene Tariquía, 136.277 están comprometidas para esa nociva exploración y explotación petrolera.⁴⁰

Por esos motivos, desde el 2015 los indígenas comunarios de la zona se encuentran llevando sostenida lucha en contra de esos proyectos hidrocarburíferos. El 2017 se organizó el Comité de Defensa de Tariquía conformado por 10 comunidades de Tariquía. El 2018, inspirada principalmente por lo que ocurría en Tariquía, nació la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) para “aglutinar todas las luchas y resistencias por los derechos indígenas y de la naturaleza” y que ya cuenta con más de 40 organizaciones indígenas afiliadas. (Entrevista a Alex Vilca Limaco, mayo de 2023).

38 <https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171004/indigenas-protestan-contr-exploracion-tariquia>

39 <https://www.lostiempos.com/indigenas-protestan-contr-exploracion-tariquia>

40 Campanini, citado en <https://www.lostiempos.com/indigenas-protestan-contr-exploracion-tariquia>

El 2017 y el 2018 hubo marchas de las comunidades y ambientalistas urbanos aliados desde el área protegida a las urbes más próximas como la ciudad de Tarija. A partir de entonces se multiplican acciones de apoyo por organizaciones ambientalistas de todo Bolivia. Una última movilización se realizó en Tarija en junio de 2022.

Otro aspecto interesante de esta incidencia es la alta presencia de mujeres indígenas que se han erguido como un ejemplo de defensoras ambientalistas en América Latina.⁴¹

Los gobiernos, en respuesta, han utilizado la estrategia de dividir a las comunidades y organizaciones indígenas para que existan facciones que apoyen la arremetida hidrocarburífera a nombre del “desarrollo”. El corolario es que de las diez comunidades del Comité de Defensa de Tariquía, cuatro se alinearon con los proyectos hidrocarburíferos fundando el “Comité de Desarrollo” (López y Tórrez 2018). Desde entonces los comunarios indígenas de la zona que se oponen a los proyectos son recurrentemente amedrentados, amenazados, hay un ambiente hostil en el lugar. (Campanini 2023; entrevista a Alex Vilca Limaco, mayo de 2023).

4.4. Otros casos de incidencia ambientalista indígena

Otros hechos de incursión extractivista desde el Estado contra áreas protegidas y pueblos indígenas tienen que ver con la explotación minera. Un tema reciente es la proliferación de la minería ilegal de oro en ríos amazónicos y en otros rincones de Bolivia, circunstancias en las que los pueblos indígenas son la principal “muralla” contra ese tipo de actividades (Entrevista a Alex Vilca, mayo de 2023). Entre los principales pueblos indígenas afectados está el Esse Ejja. Un estudio de 2021 reveló que las muestras de cabello de mujeres Esse Ejja entre 18 y 44 años presentaban altos contenidos de mercurio. (<https://cedla.org/>).

La incidencia indígena más destacable al respecto fue la anulación de un convenio que da pie a la explotación de oro en las áreas protegidas de La Paz gracias a la movilización de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) a fines de 2022.

Sin embargo, este 2023 la Asamblea Legislativa aprobó la “ley del oro” que permitirá al Poder Ejecutivo disponer de las reservas metálicas del Estado y comprar oro directamente a mineros que, en su mayoría, ni siquiera son legales. Por ello, la CONTIOCAP lanzó un pronunciamiento reclamando por esa ley. La dirigente indígena Ruth Alipaz manifestó que dicha ley:

41 López y Tórrez 2018; <https://www.ritimo.org/El-extractivismo-en-Bolivia-El-caso-de-la-comunidad-de-Tariquia>

Viene a sumarse a todo lo que ya se viene haciendo en contra de las áreas protegidas, en contra de los pueblos indígenas, de los territorios de los pueblos indígenas y que viene afectando ya la vida de los pueblos indígenas. Recordemos que desde 2013-14 ya se venía modificando el plan de manejo del Parque Nacional Madidi que va a ser el más afectado por esta normativa ya que es la zona donde se está explotando con mayor intensidad la minería de oro aluvial en los ríos amazónicos. (Citado en Radio Santa Cruz, 26 de abril de 2023).

Otro tema de incidencia ambiental desde las organizaciones indígenas se refiere al agronegocio o la invasión de cultivos sojeros, ganaderos y otros a sus territorios y áreas protegidas, lo que incluye quemas y desmonte de bosques para la ampliación de la frontera agrícola e inmobiliaria.

Entre 2013 y 2019 se publicaron normativas “incendiarias” que condonaron sanciones y legalizaron la ampliación de la frontera agropecuaria.⁴² Villalobos de la Fundación Solón detalló 10 normativas “incendiarias” aprobadas entre 2013-2019⁴³ y concluyó que tuvieron que ver bastante con los incendios de la Chiquitanía el 2019. (Villalobos 2020).

Frente a esto, las organizaciones y pueblos indígenas son el “obstáculo más incómodo” para los gobiernos y las empresas agronegociantes. Sus movilizaciones al respecto se incrementaron con los incendios de 2019, sumando a esas incidencias el apoyo de colectivos ambientales urbanos, fundaciones ambientales, etc. Y hoy continúan en apronte dado que “el escenario no ha cambiado y más bien se agravan vulneraciones de derechos indígenas y ambientales en Bolivia”. (Entrevista a Alex Vilca Limaco, mayo de 2023).

4.5. Logros y limitaciones de los movimientos indígenas ambientalistas

Se debe reconocer la profunda vocación ambientalista de los pueblos y organizaciones indígenas bolivianas, especialmente de tierras bajas. Efectivamente, desde la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 en Bolivia despertó una mayor conciencia ambientalista que marcó al Siglo XXI y que se imprimió constitucionalmente pero que no se cumple en la práctica por gobiernos que continuaron siendo extractivistas y desarrollistas. Igualmente, la movilización por el TIPNIS inspiró a otras movilizaciones ambientalistas indígenas en varios puntos del país, constituyéndose como vanguardia de una esforzada y coherente defensa de las

42 <https://www.laregion.bo/los-bosques-que-perdimos-los-gobiernos-detras-de-los-picos-de-deforestacion-en-latinoamerica/>

43 Ver: <https://fundacionsolon.org/2020/02/20/las-leyes-incendiarias-en-bolivia/>.

áreas protegidas bolivianas en completa desigualdad de condiciones frente a los poderes del Estado.

La mayor amenaza que sufren los movimientos ambientalistas indígenas es la desestructuración y fragmentación de sus organizaciones por parte de los aparatos de gobierno. Se han registrado organizaciones paralelas, se ha recurrido a la compra de dirigentes y pobladores con prebendas y los líderes y lideresas que se mantienen en sus posiciones sufren de amenazas, amedrentamientos, procesos judiciales, violencia sistemática. Otra limitación es el aislamiento de sus territorios que dificulta mayor apoyo tangible desde otros sectores y una mayor masificación de sus objetivos.

De todas maneras, rescatar las palabras de uno de los líderes indígenas en cuanto a su labor a favor del bien común y patrimonio ambiental de Bolivia:

Pese a estar fracturados, pese a ser movimientos locales, han tenido la capacidad de al menos contener ese avasallamiento y ese incremento del modelo económico extractivista. Es así que de alguna manera se ha ido intentando mantener estos grandes proyectos, mega proyectos extractivistas como lo hemos venido denominando nosotros, al menos han estado paralizados por cierto tiempo. (Entrevista a Alex Vilca Limaco, mayo de 2023).

5. Conclusiones tentativas

Evidentemente hay que destacar la emergencia de nuevos movimientos ambientales en Bolivia en el Siglo XXI. Esto responde a un contexto externo mundial en el que los problemas ambientales adquieren el carácter de urgente por la insostenibilidad de modelos económicos y consumo descarnadamente irresponsables y suicidas frente a la relación del ser humano con la naturaleza y otros seres vivos. En el Siglo XXI los paradigmas darwinistas sociales, positivistas y especistas están cambiando su condición de dominantes y cada vez es más cuestionado el antropocentrismo humano como base de entendimiento de y con lo que nos rodea. La aparición de nuevos movimientos ambientalistas es una característica y una urgencia del siglo.

También es importante tomar en cuenta los factores internos. Desde las movilizaciones de los indígenas de tierras bajas en la década de 1990 que se marcó un norte ambientalista y cuestionador de los paradigmas dominantes, norte que siguió la Guerra del Agua a inicios de siglo y culminó con reformas constitucionales a favor del medioambiente y de los pueblos indígenas.

Como los gobiernos del MAS no materializaron coherentemente los dictados constitucionales en ese sentido y resultaron tan o más extractivistas y desarrollistas que los regímenes anteriores, pues se erigieron nuevos movimientos ambientalistas que –con logros y contradicciones– tratan de dar continuidad a la urgente agenda ambiental pendiente en Bolivia.

Destacar que los pueblos indígenas bolivianos testarudamente prolongan la lucha ambientalista de la que fueron y son vanguardia. La defensa y resguardo del TIPNIS, Tariquía, El Madidi, Pilón Lajas y otros patrimonios naturales bolivianos prácticamente es su esforzado logro, son la mayor barrera contra las represas hidroeléctricas, las carreteras desarrollistas, la depredación hidrocarburífera y minera, el agronegocio y el avasallamiento de áreas protegidas.

Por su parte, los colectivos urbanos ambientalistas, a pesar de limitaciones y contradicciones, han puesto en agenda pública y mediática temas ambientales sustanciales que pasaban desapercibidos en el escenario e imaginario de la urbe. Han materializado el ejercicio ciudadano activo, la toma del espacio público, la acción directa por el bien común y le han dado una mayor profundidad al concepto de democracia desde la incidencia política al tratar de resolver los asuntos de interés colectivo cuestionando y prescindiendo del Estado.

En ambos casos y a diferencia de movimientos sociales de décadas anteriores, resalta un mayor localismo de los movimientos y objetivos más modestos en su incidencia. Los pueblos indígenas realizan esforzadas batallas para resguardar sus territorios en peligro, los colectivos urbanos pelean por temas básicos como árboles, áreas verdes, espacios para peatones y ciclistas, un mejor trato a los seres vivos en sus zonas de alcance.

Principalmente en el caso de los colectivos urbanos, no hay horizontes a largo plazo, su pervivencia es inestable y puede resurgir solamente ante una amenaza ambiental concreta, no se abordan otros temas sociopolíticos y menos objetivos políticos que apunten a la toma del poder. Igualmente, aunque su lucha es constante y de mayor data (posiblemente porque se juegan la sobrevivencia como comunidades muy ligadas a sus territorios), los pueblos indígenas ven con desconfianza a las instituciones estatales que siempre les terminan fallando.

Por ende, incluso en las entrevistas para esta investigación, fue difícil preguntar sobre la ideología o posición política de las organizaciones, de forma casi unánime hubo incomodidad por la vinculación de las palabras “ideología” y “posición política” con lo político partidario y lo estatal. Prefirieron contestar que su lucha

responde a los objetivos muy concretos que enuncian y que cualquier norte político partidario-estatal les forjaba profunda desconfianza.

Esta actitud de desconfianza con el Estado y los partidos políticos tiene sentido si tenemos en cuenta la histórica negligencia estatal boliviana frente a la responsabilidad ambiental, asunto que no se resolvió tampoco con los últimos gobiernos de “izquierda” y/o “pachamamistas” a pesar de los logros y esperanzas constitucionales. La actuación de movimientos ambientalistas estudiados es como si dijera “si el Estado nunca lo hace, nosotros tomamos las calles y lo hacemos de facto pero para cosas muy concretas y/o para salvar nuestros territorios y zonas de alcance”.

Otra limitación de estos movimientos es la fragmentación. Aparte de su inmediatez, los colectivos urbanos además tienden a dividirse y desunirse por las mezquindades comunes de la clase media como problemas personales, chismes, miramientos, envidias, etc. Los movimientos indígenas tienen el inconveniente de la lejanía de sus territorios. No obstante, es importante anotar que las demandas de los movimientos indígenas suelen tener apoyo de los colectivos urbanos y ya hay un lazo emergente entre ambos. Hay esperanzas de unificación estable de los movimientos indígenas (CONTIOCAP, TIM, etc.) y entre y con los colectivos urbanos. Es el caso de la Asamblea de los Bosques que pretende unir a los movimientos ambientales urbanos con los indígenas a nivel nacional, la red de colectivos del Movimiento por la Dignidad en Defensa del TIPNIS o de la plataforma Yaku Tantanaku, una red de organizaciones ambientalistas de Cochabamba en tentativa de aliarse en torno al problema del acceso al agua y su relación con el medioambiente.

Aquellos intentos de unidad son de suma importancia para la pervivencia y fortalecimiento de estos movimientos y para superar su localismo coyuntural e inmediatista, teniendo en cuenta que la disputa ambientalista con el Estado continúa siendo tremendamente desigual.

Bibliografía

Bagatin, Maurizio

2023 “¿Qué recuerdas de la Guerra del Agua?” Inmediaciones.org.

Cámara de Diputados

2023 “Diputados aprueban en maratónica sesión la ley del oro para fortalecer las reservas internacionales de Bolivia”. La Paz: Cámara de Diputados.

Campanini, Oscar

2023 “La perforación del pozo Astillero-X1 en la Reserva Nacional de Fauna y Flora de Tariquía representa una frontal agresión del Estado hacia los derechos humanos, ambientales y territoriales en Bolivia”. Cochabamba: CEDIB.

Cauthin, Marielle

2023 “Empresas que construyen carretera por el TIPNIS, en la mira de la CIDH”. Los Tiempos, 21 de abril de 2023.

CEDLA

2021 “Nueva ‘fiebre del oro’ en la Amazonía boliviana daña a poblaciones indígenas y al medio ambiente”. La Paz: CEDLA.

CEDIB

2020 “Los incendios en la Chiquitanía el 2019. Políticas devastadoras, acciones irresponsables y negligencia gubernamental”. Cochabamba: CEDIB.

Crespo, Carlos

2022 “Apuntes sobre ciclovías, arbolado y gentrificación en Cochabamba”. Cochabamba: INCISO.

Constitución Política del Estado Plurinacional. 2009. La Paz.

Estremadoiro, Rocío

2020 “Apuntes para comprender la caída del MAS más allá de la polarización.” Revista Reflexión Política. Instituto de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). No. 45, agosto.

2018 “Movimientos 21 F. Hegemonía partidaria y contrapesos”. Revista Cuarto Intermedio. No. 120.

2011 “El modelo extractivista versus el ‘vivir bien’”. Andamios. PNUD, No, 2, agosto-septiembre.

Fundación Solón

2021 “Documentos Hidroeléctrica Rositas”. La Paz: Fundación Solón.

2018 “Hidroeléctrica Rositas: Ni consulta previa y ni Acción Popular”. La Paz: Fundación Solón.

2017 “El caso del Chepete-El Bala”. La Paz: Fundación Solón.

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

2017 “Plantando árboles para la vida. Plan Maestro de Forestación y Reforestación del Municipio de Cochabamba”. Cochabamba: GAMC.

Kaplan, Marcos

1969 “Formación del Estado Nacional en América Latina”. Santiago: Editorial Universitaria.

Kruse, Thomas

2005 “La Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas”. Buenos Aires: CLACSO.

- López Claudia y Tórrez, Paloma
2018 “Tariquía de pie: una lucha campesina en Bolivia frente al extractivismo petrolero.” Cochabamba: Somos Sur.
- Mayorga, Fernando y otros
2017 “Diez años del ‘proceso de cambio’. Balance”. Instituto de investigaciones Jurídicas y Políticas, Universidad Mayor de San Simón.
- Ministerio de Obras Públicas y Vivienda
2012 “Informe final de la consulta TIPNIS”. La Paz: Ministerio de Obras Públicas.
- Movimiento Regional por la Tierra
2018 “Estudio de Caso: Por la dignidad de Tariquía: la lucha frente al despojo petrolero”. Movimiento Regional por la Tierra.
2016 “Estudio de caso: TIPNIS. Defendiendo nuestra casa grande.” Movimiento Regional por la Tierra.
- Paredes, Iván
2021 “Bolivia: incendios en el Valle de Tucabaca afectan a una reserva y atemorizan a las comunidades de la Chiquitanía”. Mongabay.
- Pauquet, Stephane
2005 “Diagnóstico del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi”. La Paz: Parks Watch Bolivia.
- Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PN-ANMI) Madidi
2005 “10 años conservando nuestro futuro”. La Paz: SERNAP.
- Subcentral TIPNIS Campaña en Defensa del TIPNIS
2010 “Foro Departamental: Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré”. Cochabamba.
- Göbel, Bárbara y otros (eds.)
2014 “Desigualdades socioambientales en América Latina”. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Villalobos, Guillermo
2020 “Las leyes incendiarias en Bolivia”. La Paz: Fundación Solón.

Entrevistas:

- Javier Bellot, Tunari Sin Fuego.
Cecilia Chacón, ex concejal de la Paz y activista ambiental.
Rocío Estremadoiro, No a la tala de árboles en Cochabamba.
Nazareth Flores, TIPNIS-TIM.
María Lohmann, Movimiento por la Dignidad en Defensa del TIPNIS, Bolivia Libre de Transgénicos, Somos Sur.

Javier Molina, Masa Crítica Kanata.

Oscar Olivera, Coordinadora del Agua y la Vida.

Eliana Torrico, Colectivo Árbol.

Alex Vilca Limaco, CONTIOCAP.

Sitios web:

Periódicos y sitios web consultados

<https://anabolivia.org/>

<https://cbe.com.bo/>

<https://cedla.org/>

<https://colectivoarbol.org/>

<https://correodelsur.com/>

<https://diputados.gob.bo/>

<https://elpais.bo/>

<https://www.ende.bo/>

<https://www.erbol.com.bo/>

<https://es.mongabay.com/>

<https://www.facebook.com/Aplabolivia.org/>

<https://www.facebook.com/MasaCriticaKanata/>

<https://www.facebook.com/groups/noalatalacochabamba>

<https://fundacionsolon.org/>

<https://www.intiwarayassi.org/es/>

<https://ipdrs.org/>

<https://www.la-razon.com/>

<https://www.laregion.bo/>

<https://www.lostiempos.com/>

<https://www.noticiasfides.com/>

<https://www.opinion.com.bo/>

<https://www.irfabolivia.org/radio-santa-cruz-fm-92-2/>

<https://www.ritmo.org/>

<https://www.somossur.net/>

<https://www.telesurtv.net/>

<https://www.vozdeamerica.com/>

